TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 039 2022 00217 01

Demandante: MARIA JANETH ACEVEDO GARZON

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por las apoderadas judiciales de Porvenir y Colpensiones contra la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2023. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta última entidad (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con Porvenir y Colpensiones, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de las accionadas, empieza a correr el traslado para la actora. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **696a511d657dd2f26e455e2f73796bfbc585ca99791b17454a92d40b83006e09**

Documento generado en 01/04/2024 12:40:31 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 002 2020 00318 01

Demandante:	EUSEBIO JOSE CUAICAL GUAYAMBUCO
Demandada:	CEMEX COLOMBIA S.A.

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de las partes contra la sentencia proferida el 23 de octubre de 2023.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 2° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días, el que comienza a correr de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:
Carlos Alberto Cortes Corredor
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f636317d2d64a51842cb8b7332830faa6759056ba54b569299c385809e3bd719**
Documento generado en 01/04/2024 12:35:32 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 016 2022 00190 01

Demandante: ANA RITA BAQUERO PARRADO

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de la demandante y Colpensiones contra la sentencia proferida el 29 de enero de 2024. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta última entidad (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la demandante y Colpensiones, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de las partes señaladas, empieza a correr el traslado para Porvenir S.A. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e5754203bad7ae4da86f3ee473b7503db6d34eb79f2383c42d98146b81d4f484**

Documento generado en 01/04/2024 12:56:15 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 030 2022 00471 01

Demandante: ANA RUTH VASQUEZ TRIANA

Demandada: COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de las partes contra la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2023.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 2° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días, que empieza a correr de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e4def2d2c973f679e67e85527924b6f1a8bc40e69f6d8ca1c721380218b1edfc**

Documento generado en 01/04/2024 12:46:53 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 038 2018 00398 01

Demandante: OMAR ARTURO LOZANO DE CASTRO

Demandada: CONDORES DE CUNDINAMARCA CLUB DEPORTIVO S.A. Y OTROS

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el Grado Jurisdiccional de Consulta frente a Omar Arturo Lozano de Castro contra la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2023 (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días, el que comienza a correr de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **677d4535fc8d3ca619821efb9b16d6e775283f928f906ff590c85e801b5b80fb**

Documento generado en 01/04/2024 12:40:32 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 039 2020 00380 02

Demandante:	NELSON MILER VEGA CASALLAS y JORGE ALEJANDRO FARFÁN TORRES
Demandada:	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Y OTRO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de la parte demandante, Avianca S.A. y Servicopava contra la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2023.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la parte demandante, Avianca y Servicopava, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo, empieza a correr el traslado para los demás intervinientes del proceso. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:
Carlos Alberto Cortes Corredor
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0d55059c5030a272eebb9ddd6a752e000f8caf7680f6fc12ea0609f9cb24eea9**
Documento generado en 01/04/2024 12:37:27 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 043 2023 00218 01

Demandante: BANCO DE LA REPUBLICA

Demandada: COLPENSIONES

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de Colpensiones contra el auto proferido el 25 de enero de 2024.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 2° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, el que empieza a correr de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5989a6e37377c88f74ec6e616247ed16fa2c348c81c49980df2c0d0d280d24d1**

Documento generado en 01/04/2024 01:03:40 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 015 2022 00532 01

Demandante: PATRICIA BELLO AMAYA

Demandada: COLPENSIONES

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora contra la sentencia proferida el 5 de febrero de 2024.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la parte actora, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de las actora, empieza a correr el traslado para Colpensiones. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7b96178da8fc26fa5e74ae3c3cc93d1bf6d7d3d946c31607acc2df06c7482825**

Documento generado en 01/04/2024 01:03:41 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 018 2021 00408 01

Demandante: ZULAY NIÑO GELVEZ

Demandada: COLPENSIONES Y OTROS

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de Colfondos y Colpensiones contra la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2023. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta última entidad (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con Colfondos y Colpensiones, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de las nombradas, empieza a correr el traslado para los demás intervinientes del proceso. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6632240761e92eab1096aef3994b47947b57f91a1f6f26d4fd85251a77fe5e4d**

Documento generado en 01/04/2024 12:40:33 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 018 2021 00412 01

Demandante: ASTRID LUCIA GONZALEZ MORALES

Demandada: COLPENSIONES Y OTROS

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por las apoderadas judiciales de Porvenir y Colpensiones contra la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2023. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta última entidad (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con Porvenir y Colpensiones, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de las nombradas, empieza a correr el traslado para los demás intervinientes del proceso. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7964772d7ba78d58389bf2475572f1c45c2403cda2ee6f0e9eda2bdda92ecd5e**

Documento generado en 01/04/2024 12:46:54 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 039 2020 00322 01

Demandante:	MIRIAM FLORES VARGAS
Demandada:	INDUPALMA LTDA Y OTRO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de Indupalma Ltda. contra el auto proferido el 16 de marzo de 2023.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 2° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días, el que empieza a correr de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:
Carlos Alberto Cortes Corredor
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **27b269b985d47e3c4b732d2f4780f6096a5c60aaa81053f14ce435226f398c34**
Documento generado en 01/04/2024 12:37:28 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 042 2023 00002 01

Demandante:	RUBEN MANUEL OCHOA CASTIBLANCO
Demandada:	COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de la parte demandante y Colfondos contra la sentencia proferida el 07 de diciembre de 2023. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con el demandante y Colfondos, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo, empieza a correr el traslado para los demás intervinientes del proceso. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:
Carlos Alberto Cortes Corredor
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ebddb4866172284183ea16ba17cfe0716c58e50568a72bda4a69b48e649708af**
Documento generado en 01/04/2024 12:35:33 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 042 2023 00161 01

Demandante: YOLANDA HORTUA HORTUA

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de Porvenir contra la sentencia proferida el 07 de febrero de 2024. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con Porvenir, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionada, empieza a correr el traslado para la actora y Colpensiones. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e157864bad009ebf8cf97964ad9cf09157e1935ad372e28549e6b1b62d765bdd**

Documento generado en 01/04/2024 12:56:16 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 001 2020 00429 01

Demandante:	YIMI RONA LESMES LEMUS
Demandada:	TRANSPORTADORA DE VALORES ATLAS LTDA

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante contra la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2023.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la demandante y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la actora, empieza a correr el traslado para la accionada. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:
Carlos Alberto Cortes Corredor
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f0233950221c366651b169c7283a2f9fef8428f0a09d934a152d9db050cdb9c5**
Documento generado en 01/04/2024 12:35:34 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 003 2022 00216 01

Demandante:	MARIA CRISTINA BERNAL GUERRERO
Demandada:	PROTECCIÓN S.A.

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada contra la sentencia proferida el 07 de diciembre de 2023.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la demandada y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionada, empieza a correr el traslado para el actor. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:
Carlos Alberto Cortes Corredor
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e8e43e9dbd48f8cb2a3865dae54690b3c02099cc683838757e7528c3e593c9e5**
Documento generado en 01/04/2024 12:37:29 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 015 2023 00255 01

Demandante: NANCY AMALIA ROMERO IZQUIERDO

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de Colpensiones contra la sentencia proferida el 14 de febrero de 2024. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta entidad (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con Colpensiones, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionada, empieza a correr el traslado para las demás partes. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **86927ed8f726a22d26f971825df9f3f3008649af0d7748d7d8b93ed619758bfb**

Documento generado en 01/04/2024 01:03:42 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 019 2020 00086 01

Demandante: DILIA JUDITH CANTILLO OLIVEROS

Demandada: ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS S.A. Y OTRO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de Estudios e Inversiones Medicas S.A. contra el auto proferido el 17 de marzo de 2022.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 2° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días, el que empieza a correr de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2e60f47b9765dbdcc3891f8632e5e843ddb5578b85f170ec31b18ee4385a3289**

Documento generado en 01/04/2024 12:46:55 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 027 2021 00420 01

Demandante: OSCAR ALFREDO OROZCO VARGAS

Demandada: GLOBAL LIFE AMBULANCIAS S.A.S.

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de Global Life Ambulancias S.A.S. contra el auto proferido el 4 de noviembre de 2022.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 2° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días, el que empieza a correr de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5bf50bea427559d25c8e04325f3cb017b1b373c55c7e5571107e9e542eb0e9b4**

Documento generado en 01/04/2024 12:40:34 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 033 2017 00195 01

Demandante: HENDRICK JOSEPH CANTILLO LLACH Y OTRO

Demandada: OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A. Y OTRO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial del Fondo Nacional del Ahorro contra la sentencia proferida el 7 de febrero de 2024. Se conoce, por esta entidad, bajo artículo 69 del CPTSS

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con el Fondo Nacional del Ahorro, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionada, empieza a correr el traslado para la parte plural demandante y Optimizar Servicios Temporales S.A. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e0edaca4c6c946b7178c539c03e90bfad54d8f81f05936fbf3856934cac99166**
Documento generado en 01/04/2024 12:56:17 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 001 2021 00159 01

Demandante: NANCY VICTORIA PINEDA RODRIGUEZ

Demandada: VENTAS & MARCAS S.A.S.

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia proferida el 05 de diciembre de 2023.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la demandante y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la actora, empieza a correr el traslado para la accionada. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:
Carlos Alberto Cortes Corredor
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6900387ef1cb9b2b431ecf41b4a3251ce9ccbd746c729d65f60321b9457ac768**
Documento generado en 01/04/2024 12:35:35 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 005 2022 00025 01

Demandante: MARIA ANTONIA MARQUEZ ZAPARDIEL y OTRA

Demandada: UGPP

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la UGPP contra la sentencia proferida el 18 de abril de 2023. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta última entidad (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la UGPP, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionada, empieza a correr el traslado para las demás partes. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **cbce705f60fa7d502e77580f01ec844a92a46e22f460fb88113bcbef4a367e1f**

Documento generado en 01/04/2024 12:56:18 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 005 2022 00450 01

Demandante: CARMEN CECILIA RIBERO ENCISO

Demandada: COLPENSIONES

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por las apoderadas judiciales de la parte demandante y Colpensiones contra la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2023. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta última entidad (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días, el que empieza a correr de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4b1ce3d988accb5fe765e609bd57737d66de59fabea42d790d52579132f0d70d**

Documento generado en 01/04/2024 01:03:43 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 016 2022 00382 01

Demandante: STELLA LONDOÑO MORENO

Demandada: UGPP

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la demandante contra el auto proferido el 3 de agosto de 2023.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 2° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días, el que empieza a correr de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **57d6502d7af0db76cd990605925ac320cf051de6126cfb09dab7aa7ee7a5e282**

Documento generado en 01/04/2024 12:40:35 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 030 2021 00463 01

Demandante: JUANA MARGARITA HOYOS RESTREPO

Demandada: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada contra la sentencia proferida el 19 de enero de 2024.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la demandada y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionada, empieza a correr el traslado para la actora. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **280a5e692dd8a4e79955d68aca112184f3e214632d5f70831cc63dabc78e2dda**

Documento generado en 01/04/2024 12:46:56 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 036 2022 00537 01

Demandante: MARIO ENCISO SARMIENTO

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de la parte demandante y Porvenir contra la sentencia proferida el 04 de diciembre de 2023. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con el demandante y Porvenir, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo, empieza a correr el traslado para los demás intervinientes de este proceso. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:
Carlos Alberto Cortes Corredor
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **857ec9e2a98cd82c4ee692938994168baff6dd09b62ca225596ce532fe856ddd**
Documento generado en 01/04/2024 12:37:30 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 002 2019 00768 01

Demandante: LISANDRO MENDEZ

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de Colpensiones contra el auto proferido el 15 de noviembre de 2023.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 2° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días, el que empieza a correr de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:
Carlos Alberto Cortes Corredor
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **338b5f5ff9a1c746f33b9909a07d5f55a735dc8ea74bb89646b3dc65cb24afd9**
Documento generado en 01/04/2024 12:37:32 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 003 2021 00475 01

Demandante: CARLOS EUGENIO PATERNINA VIVERO

Demandada: COMFACUNDI

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de Comfacundi contra la sentencia proferida el 17 de agosto de 2023.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con Comfacundi, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionada, empieza a correr el traslado para el actor. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:
Carlos Alberto Cortes Corredor
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **78a9fbfc92264c8c3992d9a09e095bab01c35e9874bd5e1ad907b64843700589**
Documento generado en 01/04/2024 01:03:38 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 007 2023 00029 01

Demandante: YOLANDA CABALLERO CASTILLO

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de Colpensiones contra la sentencia proferida el 12 de febrero de 2024. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta última entidad (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con Colpensiones, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionada, empieza a correr el traslado para Protección S.A. y la parte actora. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c8bb886247d26b37c00dd9d13d9f0d9fca879357f24cf98b434d8e1c33a09bff**
Documento generado en 01/04/2024 01:03:44 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 009 2022 00446 01

Demandante: GENNY DEL SOCORRO DAVID MURILLO

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de Colpensiones en contra la sentencia proferida el 5 de octubre de 2023. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta última entidad (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con Colpensiones, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionada, empieza a correr el traslado para la actora y Protección S.A. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **dac62b7bb3954756a5a76d4ce626e9ec38dddcc6756226acea2b69357d88c281**
Documento generado en 01/04/2024 12:56:19 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 034 2020 00362 01

Demandante:	YOJAIRA LEONOR CARABALLO HERRERA
Demandada:	COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante contra la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2023. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la demandante y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la actora, empieza a correr el traslado para las accionadas. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:
Carlos Alberto Cortes Corredor
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d0037ef807a43a3cff92ec99af6640ee2303f36e380f06fcf09c74c18d0187ea**
Documento generado en 01/04/2024 12:35:36 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 037 2022 00181 01

Demandante: LUIS JOSE ABAUNZA SEPULVEDA

Demandada: ECOPETROL S.A.

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del demandante contra la sentencia proferida el 27 de octubre de 2023.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la parte demandante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la parte actora, empieza a correr el traslado para la accionada. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ca285faf1695e79358b1cf768ab3f3a9d9fccfde453b3f98404fa2a5a77216e9**

Documento generado en 01/04/2024 12:40:36 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 001 2021 561 01

Demandante: CARMEN ROSA VILLAREAL VILLAREAL

Demandada: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES Y AFP COLFONDOS

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de la demandante y las demandadas contra la sentencia proferida el 01 de febrero de 2024. Se conoce en grado jurisdiccional de consulta frente a COLPENSIONES.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días el que comienza a correr de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **279cfa4957d96b2a9bdd4b9d431a472fa0ee7899ff125d51e98379ebe37c2f56**

Documento generado en 01/04/2024 12:46:57 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 013 2022 00109 01

Demandante: ROSALBA FONSECA MEJIA

Demandada: COLPENSIONES Y OTROS

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de Skandia S.A. contra el auto proferido el 18 de abril de 2023.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 2° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, el que empieza a correr de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d32fd97da41ecf868e7003027246764484f5d49255752a74440e418e9ed4df39**

Documento generado en 01/04/2024 01:03:45 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 023 2023 00405 01

Demandante: ESPERANZA CONTO OBREGON Y OTROS

Demandada: GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante contra el auto proferido el 13 de diciembre de 2023.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 2° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las parte(s) para alegar por escrito por el término de cinco (5) días el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1653acac79b9536e0b832a09f4f8f4cbc56d4aea3422908f30f88f31169bed2a**

Documento generado en 01/04/2024 12:56:21 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 026 2021 00418 01

Demandante:	MARIA ESPERANZA EL PILAR MALDONADO MOYA
Demandada:	COLPENSIONES Y OTROS

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de Porvenir contra la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2023. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con Porvenir, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el anterior plazo, empieza a correr el traslado para los demás intervinientes de este proceso. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:
Carlos Alberto Cortes Corredor
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **401dc1090b73ba76ee775f72d876a402b4c2372657625201f7fabd9a793afd40**
Documento generado en 01/04/2024 12:37:32 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 036 2022 00653 01

Demandante: LEONOR BARRAGAN DIAZ

Demandada: PROTECCIÓN S.A.

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de Protección S.A. contra la sentencia proferida el 18 de enero de 2024.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con Protección, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionada, empieza a correr el traslado para la actora. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bdabf232c645b047495eda74db271bc8a28673455f852237c29939f26334c5f9**

Documento generado en 01/04/2024 12:40:37 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 002 2020 00237 01

Demandante: CLAUDIA MARCELA MORENO ROCHA

Demandada: HOTELES DECAMERON S.A.S.

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada contra la sentencia proferida el 19 de enero de 2024.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la demandada y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionada, empieza a correr el traslado para la actora. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e3c1498bcf47adf3b4c851196aca98ef60699100a4921cc096dca09b9079ea63**

Documento generado en 01/04/2024 12:40:38 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110 013105 005 2023 00019 01

Demandante: ALEXANDER MURIEL RESTREPO

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de Colpensiones contra la sentencia emitida el 14 de noviembre de 2023. Asimismo, se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de la misma entidad (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la demandada y apelante Colpensiones, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionada, empieza a correr el traslado para el demandante y Colfondos. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **42a2f4863a165c54e07ac77653e22b265d6821d86c7614bef760462b77f799e7**

Documento generado en 01/04/2024 12:46:58 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 014 2021 00351 01

Demandante: ROSA MARIA OSSA CRUZ y OTRA

Demandada: COLPENSIONES

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por las apoderadas judiciales de la parte demandante, interviniente ad excludendum y Colpensiones contra la sentencia proferida el 2 de octubre de 2023. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta última entidad (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días, el que empieza a correr de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d42aad0177986f25a1ce2d54d4da1d93c12cd3c7f3d8773147c10778c8c16e07**

Documento generado en 01/04/2024 01:03:46 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 016 2022 00326 01

Demandante: RODRIGO ROJAS BETANCOURT

Demandada: COLPENSIONES Y OTROS

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de Colpensiones, Colfondos y Porvenir contra la sentencia proferida el 07 de diciembre de 2023. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con Colpensiones, Colfondos y Porvenir, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo en favor de las accionadas, empieza a correr el traslado para los demás intervinientes. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:
Carlos Alberto Cortes Corredor
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b6ffd9fad49620aaf496fa6bc244339649f9b0e943f53dc92a89a0d6a48bc04a**
Documento generado en 01/04/2024 12:37:33 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 033 2021 00573 01

Demandante: GUSTAVO ALONSO SIABATO PIRACON

Demandada: COLPENSIONES Y OTROS

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por las apoderadas judiciales de Porvenir y Colpensiones contra la sentencia proferida el 24 de enero de 2024. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta última entidad (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con Porvenir y Colpensiones, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de las señaladas, empieza a correr el traslado para el actor y para Protección S.A. El correo electrónico, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ade525b9670f96719effb885fa7d8dc7683e5b3cabd8ec8ae0babcecc57064f6**
Documento generado en 01/04/2024 12:56:22 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 010 2021 000366 01

Demandante: MARIA JANIER SANCHEZ PEREZ

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por las apoderadas judiciales de Porvenir y Colpensiones contra la sentencia proferida el 23 de enero de 2024. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta última entidad (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con Porvenir y Colpensiones, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de las accionadas, empieza a correr el traslado para la actora. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5f1e04a4164319180d9ddb61a1243adb643bc42107fdbc7f054e48a05e4a382b**

Documento generado en 01/04/2024 12:40:39 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 019 2012 00492 01

Demandante: NATTY ANDREA GORDILLO FORERO

Demandada: GEOS CONSTRUCCIONES S.A.S. Y OTROS

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante contra la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2023.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la parte demandante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la actora, empieza a correr el traslado para las demás partes. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bd802f9db7d4011d216c2450076aad24d26088432b22e14fa40284738357a12d**

Documento generado en 01/04/2024 01:03:47 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 026 2020 00330 01

Demandante: ALIX ASCENCION MACHUCA PIZA

Demandada: COLPENSIONES Y OTROS

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de Porvenir y Skandia contra la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2023. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con las apelantes, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de las señaladas, empieza a correr el traslado para las demás partes. El correo electrónico, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9a659a72f1f43a2cac4279776be95accb11cabb6abd1859bab12de9f621f8587**
Documento generado en 01/04/2024 12:56:23 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 030 2021 00521 01
Demandante: GLORIA IMELDA CARRASCO ACOSTA

Demandada: COLPENSIONES Y AFP PORVENIR S.A.

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del demandando Porvenir S.A. contra la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2023.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la demandada y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionada, empieza a correr el traslado para la accionante. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:
Carlos Alberto Cortes Corredor
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bad3e7b16cc38898ce8caa7e201b313b6ba3c339573621d5b0ceb0cfe5b46ac9**
Documento generado en 01/04/2024 12:46:59 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 038 2020 00056 01

Demandante:	ALBA VIRGINIA MARTINEZ DE GRANADOS
Demandada:	INCOGRAVAS S.A.S. y OTROS

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante contra la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2023.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la demandante y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo en favor de la actora, empieza a correr el traslado para la accionada. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:
Carlos Alberto Cortes Corredor
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5e3cecb76f8624124c8df01516217afba02482caea3a30abec7cc3e01965b98d**
Documento generado en 01/04/2024 12:37:34 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110 013105 011 2016 00333 02

Demandante: DILMA MOLINARES PRADA

Demandada: MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada contra auto emitido el 20 de OCTUBRE de 2023.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0268f96a7e4515afd2d7cb58841f39ef0a7f5041ba04626b0738dcb9dad5e135**

Documento generado en 01/04/2024 12:47:00 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 11001310501220210031001

Demandante: CARMEN LUCIA MONA MARULANDA

Demandada: SKANDIA S.A. Y OTROS

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por las apoderadas judiciales de la parte demandante y Skandia contra la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2023.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la parte demandante y Skandia, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de las partes señaladas, empieza a correr el traslado para las demás partes. El correo electrónico, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1d7360d8d3dd80a2cf5c80dab01a73a62c873f00a5c03bd7760a9bd4120bbbac**

Documento generado en 01/04/2024 12:56:23 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 026 2023 00031 01

Demandante: PEDRO JOSE ALARCON ALARCON

Demandada: COLPENSIONES

Bogotá D.C., -01 - de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial del demandante contra la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2023.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la parte demandante y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la parte actora, empieza a correr el traslado para la accionada. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6b12489328a065a5a889a731a1fa444df32bb087535b5107a0bfd8d331f7f5bd**

Documento generado en 01/04/2024 12:40:40 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 028 2021 00428 01

Demandante: MARIA DEL PILAR HERNANDEZ BULDING

Demandada: PORVENIR S.A.

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de Porvenir S.A. contra la sentencia proferida el 7 de febrero de 2024.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con Porvenir S.A., el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionada, empieza a correr el traslado para las demás partes. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **78281d1e303b5b8c82087de91a35ebca1eefc77123b612feac8b0ba1c4814c8b**

Documento generado en 01/04/2024 01:03:48 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 022 2017 00170 02

Demandante: SONIA JANETH CASTRO GOMEZ

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de Porvenir S.A. contra el auto proferido el 3 de marzo de 2021.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 2° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días, el que empieza a correr de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la parte actora, empieza a correr el traslado para la accionada. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2b58d2ba7e27c3b555568f2e52762ebaea5b59583563acd3b0ece34891b24fd4**

Documento generado en 01/04/2024 12:40:41 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 031 2022 00523 01

Demandante: AIMER LOPEZ GARCIA

Demandada: COLPENSIONES Y OTROS

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de Colfondos S.A., Porvenir S.A. y Colpensiones contra la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2023. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta entidad (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con Colfondos S.A., Porvenir S.A. y Colpensiones, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de las accionadas, empieza a correr el traslado para la parte actora. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a76f461f029e1c2234547a6f253ddb6cb42911eecac1f0e7558dbdb8f503fb91**

Documento generado en 01/04/2024 01:03:49 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 031 2023 00274 01

Demandante: VICTOR HERNAN ROCHA ROJAS

Demandada: COLPENSIONES

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de la parte demandante y Colpensiones contra la sentencia proferida el 13 de octubre de 2023. Asimismo, se conoce en Grado Jurisdiccional de Consulta frente a esta última entidad (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días, el que empieza a correr de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3b05df52299ac38f92102e57f5dc88fe00e098914a60e8c8ec4a71cc5d870ee2**

Documento generado en 01/04/2024 12:56:24 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 11001310503720200056201

Demandante: NADIA FERNANDA CARTAGENA QUIROGA

Demandado: NETBANGERS S.A.S.

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, sería el momento de manifestarse sobre la admisión de los recursos de apelación, no obstante se anexa memorial en donde por la parte actora se desiste de todas y cada una de las pretensiones de la demanda y del recurso de apelación que suscita el actual conocimiento. También la demandada a través de apoderada doctora Ana María Valdivieso Jiménez, quien reasume el poder, indica coadyuvar la anterior solicitud, como también desistir del recurso de apelación presentado en nombre de su representada contra la sentencia del 01 de febrero de 2024, previo a manifestarse sobre la anterior solicitud y a efectos de mejor proveer, conforme artículo 314 y 316 del CGP, se ordena correr traslado de la anterior solicitud -desistimiento de las pretensiones- a la demandada por el término de 3 días. Vencido este ingrese nuevamente las diligencias al presente despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **10608a431fe2d0b4019f6b2642c28c60228ea7f47ad102a1a3642faf5bc7aa09**

Documento generado en 01/04/2024 12:47:01 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 012 2022 00031 01

Demandante: JULIO ENRIQUE SANCHEZ RAMOS

Demandada: FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y OTROS

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. contra el auto proferido el 4 de agosto de 2023.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 2° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, el que empieza a correr de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fd78e295c0bd1de2b1058ec9064d0d5466b40067f3fe41f02a14410971759034**

Documento generado en 01/04/2024 12:56:25 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 024 2020 00023 01

Demandante: JUANA GERTRUDIS ARRIETA RODRIGUEZ

Demandada: COLPENSIONES Y OTROS

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de Colfondos S.A., Porvenir S.A., Skandia S.A. y Colpensiones contra la sentencia proferida el 13 de febrero de 2024. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta entidad (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con Colfondos S.A., Porvenir S.A., Skandia S.A. y Colpensiones, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de las accionadas, empieza a correr el traslado para la parte actora y para la llamada en garantía. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **da95e910b135a1f5b609523407ff19956070d5b11b746640122a2a27bb27ecc0**

Documento generado en 01/04/2024 01:03:50 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 033 2021 00331 01

Demandante: MARIA CONSUELO DEL TRANSITO NAVARRETE ACOSTA
Demandada: COLPENSIONES

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de las partes contra la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2023. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 2° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días, el que empieza a correr de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:
Carlos Alberto Cortes Corredor
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1f8840e5f32a48cf52cacfab16fc5d485449f80bfae5cfe4e59b41d8173d1231**
Documento generado en 01/04/2024 12:40:42 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 019 2022 00378 01

Demandante: MARTHA AIDEE MALDONADO MARIN

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de Colfondos S.A. contra el auto proferido el 9 de agosto de 2023.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 2° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, el que empieza a correr de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d6754e69c97656ce4498cef64599db106e38bd2ba0b9b63a50db5df6ea0a205d**

Documento generado en 01/04/2024 12:56:26 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 022 2022 00106 01

Demandante: CONCHA ILSE GUEVARA ALVAREZ

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por las apoderadas judiciales de Porvenir y Colpensiones contra la sentencia proferida el 23 de enero de 2024. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta última entidad (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con Porvenir y Colpensiones, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de las accionadas, empieza a correr el traslado para el actor. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **807c4d0089ee41b6646c8a27c3cb0707f4bfcab5fe47f06d7c4bd131b586934e**

Documento generado en 01/04/2024 12:40:44 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 029 2021 00207 02

Demandante: CLAUDIA CECILIA JIMENEZ SAMPER

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la demandante contra el auto proferido el 6 de febrero de 2024.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 2° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, el que empieza a correr de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c0759c9e602d52a077c3883ea5c617321a1973eefb8c9d071cd998c93d329685**

Documento generado en 01/04/2024 01:03:51 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 018 2020 00403 01

Demandante: ANA CELMIRA MANRIQUE MORA y OTRA

Demandada: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de Elsa Mira Rodríguez Lozano (Litis Consorte Necesario) y Colpensiones contra la sentencia proferida el 31 de enero de 2024. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta última entidad (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con Elsa Mira Rodríguez Lozano (Litis Consorte Necesario) y Colpensiones, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de las partes señaladas, empieza a correr el traslado para la parte actora. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b066348cd9e269adf379cf0363daedc651e7c7bf82126ede5d08294a0cd28818**

Documento generado en 01/04/2024 12:56:28 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 039 2021 00221 02

Demandante: LUIS BELDON RODRIGUEZ MONTENEGRO

Demandada: OLGA MARIA VALERO MORENO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte accionada contra la sentencia proferida el 7 de febrero de 2024.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la demandada, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la parte señalada, empieza a correr el traslado para la parte actora. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **64d7863907170e2310f196a8b7e097e9febaeb83ba94b40072d03b2d3adebf4c**

Documento generado en 01/04/2024 01:03:52 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 022 2020 00428 01

Demandante: GLORIA CONSUELO CASTRO TORRES

Demandada: COLPENSIONES

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el Grado Jurisdiccional de Consulta frente a Colpensiones contra la sentencia proferida el 6 de octubre de 2023 (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días, el que comienza a correr de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d228fcbefff6bcd76f01dbd5af55637434a907341aeb3123ae85f427814770e1**

Documento generado en 01/04/2024 12:56:29 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 037 2022 00120 01

Demandante: ALEJANDRO CASTAÑO JARAMILLO

Demandada: CEMEX COLOMBIA S.A.

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el Grado Jurisdiccional de Consulta frente a la parte demandante contra la sentencia proferida el 25 de enero de 2024 (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, el que empieza a correr de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **420272855689e62ce5729e5bf4fa434eec3a5b3a62227126f4e0abee157a39ef**

Documento generado en 01/04/2024 01:03:53 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 010 2021 00398 01

Demandante:	RUTH SOLEDAD MURILLO SANCHEZ
Demandada:	COLPENSIONES Y OTROS

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de Colpensiones y Colfondos contra la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2023. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con Colpensiones y Colfondos, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de las accionadas, empieza a correr el traslado para los demás intervinientes del proceso. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:
Carlos Alberto Cortes Corredor
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c5cffa363cdd7627a8558b427f144267b1ec964f2e88d9f25f66c5aa27de88d6**
Documento generado en 01/04/2024 12:35:31 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 018 2019 00684 01

Demandante: JOSE ALCIDES TORRES GARZON

Demandada: JORGE ENRIQUE CASTIBLANCO TORRES

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la Curadora Ad Litem de Jorge Enrique Castiblanco Torres contra la sentencia proferida el 25 de enero de 2024.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con el demandado y apelante, término que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor del accionado, empieza a correr el traslado para el actor. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d2c2f1f02ecc30052d2855e6f6fe9b5f79585d5e9a79735ff36598852a9dd2a9**

Documento generado en 01/04/2024 12:47:03 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 028 2022 00286 01

Demandante: MARCELA ZULUAGA CAICEDO

Demandada: COLPENSIONES Y OTROS

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de Skandia S.A. contra el auto proferido el 28 de agosto de 2023.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 2° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, el que empieza a correr de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **812bdeef5644c61c2f9ff24efff6a5a9d4f838401e543b6037c4081e55ab5f52**

Documento generado en 01/04/2024 12:56:14 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 035 2022 00256 01
Demandante: ANYI LICETH CORREA QUINTERO
Demandada: MARIA ESTHER PARRA DE ORTEGON
Bogotá D.C., -01- de abril de 2024

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora contra la sentencia proferida el 31 de enero de 2024.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con la demandante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la parte señalada, empieza a correr el traslado para la accionada. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Resultados Encontrados: 2 Obtener archivo csv

Ya Consultados	Número Proceso	Fecha Radicación	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
☑	11001310500820220005901	3/20/2024	Ordinario	LUCY STELLA VASQUEZ SARMIENTO	- ANYI LICETH CORREA QUINTERO	- MARIA ESTHER PARRA DE ORTEGON - LA PANADERIA GOURMETS
☑	11001310503520220025601	2/19/2024	Ordinario	CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR	- ANYI LICETH CORREA QUINTERO	- MARIA ESTHER PARRA DE ORTEGON

Conforme Sistema Siglo XXI se solicita a las partes aclaren sobre la existencia de radicados que enuncian similares sujetos procesales, pero con tramite proveniente de Juzgados diferentes. De forma respetuosa por Secretaria de esta Corporación, se solicita se comparta copia digital del expediente 11001310500820220005901, así como se informe del presente radicado (11001310503520220025601) al despacho de la magistrada que conoce el tramitado por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:

Carlos Alberto Cortes Corredor

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **36a0dfa30068048c9dde1b01719c5c47267b9539d786798a85318664800daef5**

Documento generado en 01/04/2024 01:03:39 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 039 2022 00066 01

Demandante:	FERNANDO RAÚL ORDÓÑEZ GARZÓN
Demandada:	COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá D.C., -01- de abril de 2024.

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por las apoderadas judiciales de Porvenir y Colpensiones contra la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2023. Asimismo, se concede el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta última entidad (Art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 junio de 2022, se ordena CORRER TRASLADO a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una, iniciando con Porvenir y Colpensiones, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de las accionadas, empieza a correr el traslado para el actor. El correo electrónico dispuesto, es: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR
Magistrado

Firmado Por:
Carlos Alberto Cortes Corredor
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **666ea9f75ee71c04768712bde01a9d205359d4568f0cbb3cac67b6835a3e6ced**
Documento generado en 01/04/2024 12:37:26 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Segunda de Decisión Laboral

DEMANDANTE:	Edna Liliana Cuellar Pineda.
DEMANDADOS:	Skandia SA, Colpensiones, Protección SA y Colfondos SA
TIPO DE PROCESO	Ordinario Laboral
DECISIÓN:	Revoca Auto
Radicado	11001310502720210024901 11001310502720210024901

En Bogotá, a los veintisiete (27) días de febrero de dos mil veinticuatro (2024), la **Sala Segunda de Decisión Laboral,** conformada por los Magistrados Luz Marina Ibáñez Hernández, Rafael Albeiro Chavarro Poveda, y **Claudia Angélica Martínez Castillo, quien actúa como ponente,** se reunió para resolver el recurso de apelación interpuesto por la administradora Skandia contra la decisión adoptada por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, en el proceso ordinario que la señora Edna Liliana Cuellar Pineda adelanta contra de las sociedades Skandia SA, Colpensiones, Protección SA y Colfondos SA**,** y al que se llamó en garantía a la aseguradora Mapfre Colombia Vida Seguros SA.

AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ANTECEDENTES

La señora Edna Liliana Cuellar Pineda promovió proceso contra Porvenir SA, para que se declare que el traslado que efectuó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida -RPMPD- al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS-, no estuvo precedido de una asesoría clara, completa y suficiente sobre las desventajas del cambio de un régimen a otro; que en consecuencia de ello se ordene su traslado al RPMPD (pdf. 1, C01).

II. TRÁMITE PROCESAL

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá DC, despacho que dispuso la admisión de la demandada y notificada, se

recibió contestación de la demandada Skandia SA, quien formuló llamamiento en garantía de la aseguradora Mapfre Colombia Vida Seguros SA, fundamentado en que:

> 6. Teniendo en cuenta que SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS., trasladó a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, los conceptos dinerarios - primas- para el cubrimiento de los riesgos de invalidez y muerte, entre otros, de los afiliados a su Fondo Obligatorio de Pensiones (entre ellos el Demandante) y que, por tanto, esta administradora no cuenta con dichos recursos dentro de su patrimonio, es necesaria la vinculación al presente trámite judicial de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., toda vez que en caso de que se condene a devolver los aportes de la Demandada a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-, junto con los gastos de administración de los que trata el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, corresponde a la aludida aseguradora el cumplimiento de esa obligación en lo que se refiere, particularmente, a la prima pagada por el seguro previsional prenotado, so pena de la configuración de un enriquecimiento sin justa causa a favor de esa compañía de seguros.

2.1. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

La primera instancia mediante proveído calendado 21 de noviembre de 2022 negó el llamamiento en razón de que *«que se trata de un asunto meramente comercial entre dos contratantes que corresponde conocer a una jurisdicción distinta y, por ende, no puede en este proceso resolverse sobre tal relación»* (pdf. 13, *idem*).

III. DEL RECURSO DE APELACIÓN.

3.1. RAZONES DEL RECURSO

Decisión que fue materia del recurso de apelación por la apoderada de Skandia SA quien argumentó (pdf. 14, *idem*) que:

> Así las cosas, lo que resulta claro es que con el auto que negó la intervención de la llamada en garantía, no sólo se pronunció en relación con la procedencia o no del llamamiento en garantía, sino que, por demás resolvió de fondo en relación a si la llamada en garantía debía o no responder una eventual condena en el proceso, situación está que debió ser resulta en el marco de la sentencia que ponga fin a la instancia y no en el auto que admite o no el llamamiento en garantía. De manera que, en criterio de este apoderada judicial, lo cierto es que el juez de instancia está pretermitiendo la oportunidad procesal pertinente y, con esta decisión se vulnerarían los derechos de mi representada, más cuando entre Skandia y la llamada en garantía existe un vínculo jurídico sustancial que implicaría una consecuencia determinada ante la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

La entidad Skandia descorre el termino para alegar, pidiendo la revocación del auto que niega la solicitud de llamamiento, asegurando para ello que:

> Así las cosas, lo que resulta claro es que el auto que negó la intervención de la llamada en garantía no sólo se pronunció en relación con la procedencia o no de este, sino que además resolvió de fondo el litigio, en relación a si la llamada en garantía debía o no responder ante una eventual condena en el proceso, situación que debió ser resuelta en el marco de la sentencia que ponga fin a la instancia y no en el auto que admite o no el llamamiento en garantía. De manera que, en criterio de esta apoderada, la Juez de instancia está pretermitiendo la oportunidad procesal pertinente y con ello está vulnerando los derechos de mi representada, más cuando entre SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS y la llamada en garantía existe un vínculo jurídico sustancial que no se discute y dado que ello eventualmente podría implicar una consecuencia sumamente gravosa con mi poderdante, ante la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

Colfondos descorre el termino de alegaciones, sin embargo, presenta alegatos contra la sentencia de primera instancia, cuando aún no se ha dictado sentencia en este proceso.

IV CONSIDERACIONES

4.1. PROBLEMA JURÍDICO

Procede la Sala a determinar si la juez se equivocó o no al negar el llamamiento en garantía que efectuó la demandada Skandia SA a Mapfre Seguros de Vida.

4.2. PRESUPUESTOS PARA LA VIABILIDAD DEL RECURSO

Tenemos que hay legitimación en la parte que recurrente porque con la decisión atacada hay mengua en sus intereses, el recurso es tempestivo, está cumplida la carga procesal de la sustentación y la providencia es susceptible de apelación.

4.3. CASO CONCRETO

4.3.1. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA A MAPFRE COLOMBIA.

El llamamiento en garantía es la figura procesal que permite vincular en un proceso judicial a un tercero, fundamentado en la existencia de un derecho derivado de una norma o un contrato, con el fin de exigirle que cubra las condenas impuestas o indemnización de perjuicios al -llamador-, dado el nexo jurídico de éste con el tercero, a quien se le extienden los efectos de la sentencia como garante de las pretensiones invocadas. Con el llamamiento en garantía lo que busca el demandado o llamador, es trasladar los efectos adversos de la decisión judicial al llamado; y se encuentra regulada en los artículos 64, 65 y 66 del CGP, aplicables al caso concreto por la remisión analógica del artículo 145 del CPTSS.

En ese sentido y para desarrollar el problema jurídico planteado en esta causa y a fin de dilucidar la figura del -tercero- en el proceso judicial y como el Código General del Proceso reorganizó a los sujetos procesales con otro criterio, como señaló el profesor Ulises Canosa Suárez (2014):

> La novedad del Código General del Proceso está en reorganizar las partes y los terceros con otro criterio: en la denominación de capítulos se utiliza el concepto de parte en sentido amplio, incluyendo como parte tanto a las iniciales, como a las sobrevinientes (antes terceros intervinientes), entre ellos el litisconsorte cuasi necesario, el interviniente excluyente, el llamado en garantía, el llamado como poseedor o tenedor, los sucesores procesales y los intervinientes para incidentes o trámites especiales, porque se involucran directamente con la pretensión[1]".

A su vez el profesor Henry Sanabria (2012) conceptuó:

> El Código General del Proceso parte de una lógica diferente, estimando que es parte no solamente quien tiene la calidad de demandante o demandado, sino también quien acude al proceso a hacer valer una pretensión propia o a procurar la solución de una controversia jurídica que se ha suscitado con una de las partes en razón de un vínculo de derecho sustancial, debiendo el juez en su sentencia pronunciarse y decidir tanto del asunto litigioso planteado entre demandante y demandado como del propuesto por los demás intervinientes[2].

En suma, puede colegirse que el mismo artículo 64 del CGP, que el llamado en garantía una vez integrado al proceso se convierte una parte circunstancial, y así lo ha reiterado la Sala de Casación Laboral, cuando en sentencia SL97222 de 2023, trajo a colación la sentencia rad. 35227 del 14 de septiembre de 2010, donde se refirió al llamado en garantía como parte circunstancial, veamos:

> Acorde con lo dicho, el criterio reiterado de la Corte ha sido que la condena contra quien es llamado en garantía debe partir por lo general, salvo algunas excepciones, de la condena impuesta al demandado principal. Así se ha expuesto entre otros fallos, CSJ SL, 15 may. 2007, Rad. 28246, reiterado en CSJ SL 14 sept.2010, rad. 35227, en el primero se dijo:
>
> > La entidad llamada en garantía **es parte circunstancial** al proceso al que se le convoque; las relaciones jurídicas que cuentan para cuando se pretende declaración de existencia del derecho a una remuneración por un contrato de mandato, y la responsabilidad principal de su pago son las habidas entre el mandante y el mandatario.
> > La responsabilidad de la convocada al proceso como llamada en garantía no es autónoma frente a quien no tiene ningún vínculo contractual; es una relación derivada de la que se ha constituido por las relaciones contractuales (…), bajo el supuesto ineludible de la existencia de una obligación entre quien es la garantizada, la entidad demandada, y el actor". (Negrillas fuera del texto).

En el caso concreto, la recurrente manifestó que para los 2007 a 2018 suscribió con Mapfre Colombia Vida Seguros SA, contrato de seguro previsional para cubrir los

---

[1] Canosa, U. (2014). *El proceso civil a partir del Código General del Proceso.* Bogotá: Editorial Universidad de los Andes.
[2] Sanabria, H. (2013). Integración del contradictorio e intervención de otras partes y terceros en el proceso arbitral.

riesgos de invalidez y muerte de los afiliados a ese fondo privado. Aduce que Skandia realizó los pagos correspondientes a primas de seguro previsional de invalidez y sobrevivientes a favor de la aseguradora. Por último, señala que la vinculación obedece a que en caso de que se ordene la devolución de primas del seguro previsional, sea la aseguradora la obligada a la devolución de dichos rubros.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, el Juez cognoscente deberá emitir una decisión donde se determine si le asiste o no responsabilidad de la entidad garante frente a lo pretendido por quien realiza el llamado. Por ello, dentro de la sentencia que resuelva de fondo el litigio, el juez le corresponde dilucidar lo atinente a la relación de carácter sustancial entre la administradora accionada y la aseguradora vinculada al proceso, además que, debe desarrollarse el punto en lo referente a la obligación de exigirle la indemnización a esta.

Así las cosas, el solo hecho de vincular a la aseguradora mencionada, no implica una decisión previa sobre la responsabilidad de la llamada, sino que le da la posibilidad al Juez, de que una vez recaudado todo el caudal probatorio determinar si les asiste o no alguna obligación de reconocimiento de rubros cancelados a esa entidad.

Por las premisas fácticas y jurídicas antecitadas la Sala concluye que no le asiste razón a la primera instancia, al no acceder al llamamiento en garantía efectuado por Skandia SA, por el contrario, al advertir que satisface los requisitos formales del artículo 82 del CGP (pdf. 18, C01), revocará la decisión; en su lugar, admitirá el llamamiento en garantía a la aseguradora Mapfre Colombia Vida Seguros SA, y ordenará que se imparta el trámite de rigor previsto en el artículo 66 CGP.

Sin costas en esta instancia dada la prosperidad de uno de los recursos impetrados.

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.**,

V. DECIDE

PRIMERO: Revocar la decisión proferida por el Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá DC, el 21 de noviembre de 2022, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por la señora Edna Liliana Cuellar Pineda contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, Protección SA; Colfondos SA,

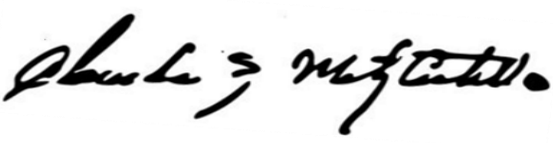
Pensiones y Cesantías; Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones; Skandia SA- Old Mutual, Pensiones y Cesantías SA; por las razones antes expuestas y en su lugar se ordena:

- ADMITIR el llamamiento en garantía a la aseguradora Mapfre Colombia Vida Seguros SA, y que se imparta el trámite de rigor ordenado en el artículo 66 CGP, correr traslado por el término de 10 días a esa entidad contados a partir de la notificación personal que se realice a dicha firma, una vez obedecido y cumplido por la primera instancia, para que ejerza su derecho de defensa frente al llamamiento en garantía invocado en su contra.

SEGUNDO: Sin costas procesales en esta instancia, por lo razonado en la parte considerativa.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** y se firma en constancia.

Los magistrados,



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO

Magistrada Ponente



LUZ MARINA IBÁÑEZ HERNÁNDEZ

Magistrada



RAFAEL ALBEIRO CHAVARRO POVEDA

Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

Magistrada Ponente: DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

PROCESO LABORAL DE AGUSTÍN GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ CONTRA COLPENSIONES Y OTRO

RAD: 2022-00517-02 (Juzgado 16)

Bogotá D.C., primero (1°) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

De conformidad con lo previsto en el artículo 65 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto respecto del auto que resolvió excepciones de fondo.

Igualmente, conforme al artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio del 2022 "*Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, y se dictan otras disposiciones*" , y teniendo en cuenta que el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 1° del Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio del 2020 levantó la suspensión de términos judiciales a partir del 1° de julio del 2020, se decide:

Correr traslado por el término de cinco (5) días hábiles a la(s) parte(s) para alegar por escrito**.**

Se informa que los escritos de alegatos serán recibidos **únicamente** en el correo electrónico **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**, en el cual se les acusara recibido.

La providencia de segunda instancia será proferido por **escrito** y será notificado por **estados**, el cual puede ser consultado en la página web de la Rama Judicial (seguir esta ruta: www.ramajudicial.gov.co , Tribunales Superiores, Bogotá, SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, ESTADOS)

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ
Magistrada

H. MAGISTRADA DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

Me permito pasar a su Despacho el expediente **N°11001-31-05-016-2018-00225-02** informándole que regresó de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala Descongestión, donde **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 30 de julio de 2021.

Bogotá D.C., veintidós (22) de marzo de 2024.

MERLY CATERINE PRADA OCAMPO
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (1°) de abril del dos mil veinticuatro (2024)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ
Magistrada Ponente

H. MAGISTRADA DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

Me permito pasar a su Despacho el expediente **N°11001-31-05-033-2018-00161-01** informándole que regresó de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala Descongestión, donde **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 28 de enero de 2021.

Bogotá D.C., veintidós (22) de marzo de 2024.

MERLY CATERINE PRADA OCAMPO
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (1°) de abril del dos mil veinticuatro (2024)

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ
Magistrada Ponente

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL

BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL.

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR MILCIADES IZQUIERDO CONTRA MYRIAM AIDEE VESGA VÁSQUEZ, MÓNICA FAJARDO VESGA y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- (RAD. 12 2018 00642 01).

Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

A U T O

Ingresan las presentes diligencias al Despacho con solicitud de aclaración o corrección que efectuara la apoderada judicial de COLPENSIONES, advirtiendo, se incurrió en la fecha anotada de la sentencia proferida por esta Corporación por cuanto en el texto de la misma se indicó «*19 de marzo del 2020*» y en el sistema de la rama judicial *«19 de marzo del 2021»* (Exp. Digital Archivo 20).

Para resolver debe precisarse, si bien en el encabezado del texto del fallo proferido en esta instancia se indicó de manera incorrecta el año en que se profirió la sentencia, lo cierto es que como bien lo señala el sistema de información de la rama judicial SIGLO XXI la sentencia fue proferida el 19 de marzo del año **2021**, debiendo advertirse el yerro cometido no puede ser objeto de corrección pues al tenor de lo dispuesto en el artículo 286 del Código General del Proceso, tal figura solo procede en «*los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella*», lo cual no sucedió en el presente asunto.

En todo caso se precisa para los efectos a que haya lugar como ya se indicó la fecha de la sentencia de segunda instancia lo fue el **19 de marzo del 2021.**

Actuaciones del Proceso

Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha Inicia Término	Fecha Finaliza Término	Fecha de Registro
25 May 2021	DEVOLUCIÓN JUZGADO ORIGEN	FECHA SALIDA:25/05/2021,OFICIO:4889 ENVIADO A: - 012 - LABORAL - CIRCUITO - BOGOTÁ D.C.			25 May 2021
25 May 2021	DEVOLUCIÓN JUZGADO ORIGEN	SE REALIZA LA DEVOLUCION DEL EXPEDIENTE CON EL OFICIO NO. 4889 AL JUZGADO DE ORIGEN -// CS			25 May 2021
25 Mar 2021	EDICTO	DAIRO			25 Mar 2021
19 Mar 2021	FALLO	CONFIRMA. DAIRO			23 Mar 2021
05 Feb 2021	RECIBO DE MEMORIALES	SE RECIBE MEMORIAL POR CORREO ELECTRONICO EN 26 FOLIOS DEL APODERADO (A) PARTE DEMANDADA COLPENSIONES - PODER - ESCRITURA PUBLICA - DOCUMENTOS DE IDENTIDAD - ALEGATOS DE CONCLUSIÓN -// SE PASA AL DESPACHO// (HABILITADA VPN) CAROLINA SIERRA			09 Feb 2021
05 Feb 2021	RECIBO DE MEMORIALES	SE RECIBE MEMORIAL POR CORREO ELECTRONICO EN 6 FOLIOS DEL APODERADO (A) PARTE DEMANDANTE - ALEGATOS DE CONCLUSIÓN -// SE PASA AL DESPACHO// (HABILITADA VPN) CAROLINA SIERRA			09 Feb 2021
29 Jan 2021	NOTIFICACIÓN POR ESTADO	ACTUACIÓN REGISTRADA EL 29/01/2021 A LAS 16:01:13.	01 Feb 2021	01 Feb 2021	29 Jan 2021
29 Jan 2021	AUTO QUE ADMITE RECURSO	ADMITE APELACION, CORRE TRASLADO A LAS PARTES, ESTADO 15 DEL 1 DE FEBRERO DE 2021. DAIRO			29 Jan 2021
22 Jan 2021	AL DESPACHO POR REPARTO				22 Jan 2021
20 Jan 2021	REPARTO DEL PROCESO	A LAS 16:34:06 REPARTIDO A:DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN	20 Jan 2021	20 Jan 2021	20 Jan 2021
20 Jan 2021	RADICACIÓN DE PROCESO	ACTUACIÓN DE RADICACIÓN DE PROCESO REALIZADA EL 20/01/2021 A LAS 13:04:46	20 Jan 2021	20 Jan 2021	20 Jan 2021

En mérito de lo anterior la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C.,

R E S U E L V E

PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de corrección elevada por COLPENSIONES, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: PRECISAR la fecha del fallo de segunda instancia corresponde al **19 de marzo del 2021**.

TERCERO: En firme el presente auto, impártasele al expediente el trámite respectivo.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN

ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. -EPS SANITAS- CONTRA LA ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-ADRES (RAD. 16 2015 00559 01).

Bogotá D.C. veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

A U T O

Mediante escrito visible en el archivo 12 – carpeta segunda instancia, la apoderada de la **ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES**, solicita la corrección de la sentencia proferida por esta Corporación el 31 de julio del 2023 (archivo 08, ibidem), en los siguientes términos:

> *"Como se observa, el Numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la Sentencia procedió a condenar a la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES -, a "reconocer y pagar en favor a la SALUD TOTAL EPS S.A. los intereses moratorios desde los **dos meses siguientes a la radicación de los 275 recobros** (...)" (Negrita y subrayado fuera del texto). Posteriormente, cuando se relaciona los recobros que condena su pago tiene como fecha para efectos de su liquidación la Fecha de Radicación de la **Factura** por parte de la IPS, entidad que prestó los servicios, ante la EPS, razón por la cual se presenta que, los dos meses se calculan desde fecha diferente de la radicación de solicitud de recobro presentado ante el ente auditor o ante la ADRES, como sí se indica en la RESOLUCIÓN DEL NUMERAL SEGUNDO de la sentencia (subrayado arriba).*
>
> *Teniendo en cuenta lo anterior, solicito se haga **corrección** respecto de la fecha que se debe tener en cuenta para la liquidación de los Intereses Moratorios, esto es que, los 2 meses que se dispuso por parte del Despacho se contabilicen desde la **radicación del recobro** (Apoyo Técnico – Hoja Detalles– Columna D), que fuera objeto de la litis, y, no desde la fecha de radicación de la factura de la IPS a la EPS, como en efecto se calculó.*
>
> *Ahora bien, si el Despacho considera que la fecha para efectos de contabilizar los Intereses Moratorios debe tenerse en cuenta la radicación de la factura de la IPS ante la EPS, solicito que se corrija en el sentido de que el cálculo efectuado en la relación detallada expuesta para el cálculo en la tabla anexa al numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia, toda vez que estos dos meses se contabilizaron*

desde la prestación del servicio, y ni si quiera desde la radicación de la factura (…).".

B. Fecha de Radicación para la Indexación

(…)

Misma apreciación debe tenerse en cuenta para la indexación, por lo cual se debe corregir en el sentido que se especifique que, para contabilizar dicha figura contable, teniéndose presente que el día de la radicación es el que se radicó el recobro para efectuar el trámite de Auditoría Integral, y no el de presentación de la factura de la IPS ante la EPS.

C. Tipo de Interés Moratorio a Liquidar

Por otro lado, respecto de la Condena de Intereses Moratorios en contra de la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES, no se especifica qué tipo de interés se debe tener en cuenta para efectos de la procedencia del reconocimiento y pago de los Intereses Moratorios a los cuales se condena esta Entidad.

Es por ello que, se debe agregar y especificar, para efectos de la liquidación para el pago de la condena impuesta, determinarse si se trata de Intereses Moratorios Comerciales o Intereses Moratorios Legales, para así poder cumplir cabalmente la orden impartida.".

En vista de lo anterior, esta Corporación observó que en la parte considerativa de la sentencia calendada 31 de julio de 2023 (archivo 08), al resolverse lo atinente a los intereses moratorios, se indicó:

"Así las cosas, procedió la Sala a verificar la información contenida en el medio magnético obrante en el expediente donde se encuentra la base de datos de los 277 recobros ordenados pagar por esta Sala (archivo 03), verificando, se presentaron los ***275*** *recobros objeto de demanda, dentro de los 6 meses siguientes a la prestación del servicio o la ocurrencia del hecho generador por lo que se ordenará el pago de los intereses moratorios* ***2 meses después desde la fecha de radicación de cada uno de los citados recobros, siendo estos****:*

56765311, 57058320, 57570469, 55581784, 55886028, 56764045, 55248560, 56507607, 55365306, 26245076. 26255096, 55697448, 55202586, 54472205, 53793599, 53915059, 56184735, 25919306, 25950097, 57571844, 57549056, 57590588, 54541033, 54542940, 54542942, 57059174, 57467971, 54194437, 55048500, 95227005, 95228297, 95224485, 95196009, 95194382, 95039061, 95252090, 95022623, 95039090, 95067467, 95037460, 95037192, 95037727, 54740823, 54541493, 54585120, 25633536, 95053632, 95067460, 95067461, 25503691, 53754077, 95037974, 25477228, 54542937, 95066855, 95224354, 95188766, 53789216, 56634237, 95224337, 56505092, 55046860, 26139143, 26258641, 95053226, 95022529, 95038635, 56626430, 56497019, 56610604, 56610602, 95039107, 54080215, 54599978, 56604509, 56320589, 56320592, 56505093, 26258360, 95038653, 55886063, 56622567, 57047403, 53636403, 25476708, 56626091, 57292044, 95054314, 54152476, 57560989, 54541048, 54542958, 55042476, 57466644, 56762031, 56202592, 54195543, 56761776, 57226189, 95037994, 53753998, 53754048, 53752983, 53638594, 25496275, 25496271, 25594847, 25573907, 25483357, 25955137, 25546856, 53754011, 53754064, 54204367, 56500838, 25880479, 56413118, 25574594, 53697998, 53698553, 53697801, 53698420, 54443385, 25594926, 25625264, 53676231, 53697710, 25547907, 54195235, 53735489, 53735488, 54131463, 53754417,

53951217, 53951233, 26258289, 57568392, 57053399, 25891090, 55515172, 57283507, 53752786, 53754085, 53753485, 53753487, 53698178, 55088184, 56415201, 54820706, 57283864, 54205670, 25547885, 95038637, 95037993, 57550367, 26037680, 53789221, 53919122, 53973206, 25485003, 25643634, 56489817, 56514352, 56489819, 56514349, 56508139, 56320587, 56495048, 56535290, 56491951, 54077171, 53692488, 54196510, 53692478, 54196571, 53942923, 95067465, 56514351, 56514347, 56491950, 56494652, 56494648, 57541207, 56497470, 56542185, 56496770, 56491650, 56491649, 56491648, 56491647, 56508273, 56508274, 56508275, 95190543, 56508276, 56491637, 56514063, 56542177, 56542178, 56508376, 95067530, 95022531, 95068372, 56504249, 56504255, 56504260, 56504276, 95023035, 56495049, 56513922, 56513918, 56500781, 56513906, 56495026, 56595267, 55886021, 56504256, 56629338, 56595239, 56513933, 56504282, 56600815, 56595275, 56495036, 56505094, 56607818, 56595274, 56505118, 25488416, 25497213, 25487455, 25497330, 25758698, 25486067, 25573936, 26152461, 95230296, 95265564, 25651296, 25496291, 25487750, 25609156, 95252652, 25547918, 95224374, 53916550, 95038636, 95022612, 25564225, 25485006, 25574576, 25487463, 25496274, 25496292, 25701615, 25581693, 25594629, 25609179, 25609308, 25623106, 25487413, 25486070, 25574595, 25485017, 25547880, 25497230, 25485024, 25574601, 25681452, 25474781, 25594870, 25472300, 25506160, 25594916 y 25564546.". (Negrilla y Subrayado fuera del texto original).

En consecuencia y de conformidad al artículo 286 del C.G.P., según el cual, "*Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto"*, disposición aplicable por analogía al proceso laboral de conformidad con el art. 145 del C.P.L., se procederá a corregir el error aritmético en la parte resolutiva ya que los 2 meses insertos (fechas) deben corresponder con la radicación del recobro, tal como se explicó en la parte considerativa anteriormente transcrita, correspondiendo a 275 ítems.

Precisando, la H. Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el concepto de error aritmético cuando expreso:

> *"Algunos connotados comentaristas del Código de los ritos conceptúan que la norma en referencia es aplicable cuando se trata de un error en el resultado de una de las cuatro operaciones aritméticas, o sea suma, resta, multiplicación o división. No parece ser éste el sentido de la norma, porque en tal hipótesis el legislador hubiese dicho "error en operación aritmética" en vez de la locución "error puramente aritmético" que, a no dudarlo, es mucho más amplia. Aritmético es lo relativo a la aritmética, es decir lo relacionado con la ciencia que estudia las propiedades elementales de los números racionales. Cualquier discordancia en un número, sea la consecuencia de una operación aritmética o una mala cita es un error aritmético". (Auto de Julio 14 de 1983 publicado en Jurisprudencia y Doctrina, Ed. Legis, t. XII, núm, 141, pág. 757- Subraya esta Sala).*

En ese orden de ideas, se entiende por error aritmético como lo estima la doctrina y la jurisprudencia, aquel que resulta de la realización de una de las cuatro

operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación o división), con exclusión de cualquier otra consideración, porque de lo contrario se producirían cambios sustanciales en el contenido de la decisión.

Así las cosas, se corregirá el yerro cometido, procediendo a la modificación del ordinal segundo del fallo proferido, en el sentido de establecer las fechas de los 2 meses siguientes a la **radicación del recobro**, obviando la casilla que se insertó, la cual corresponde a la fecha de prestación del servicio.

Por otra parte, frente al segundo pedimento de la demandada, conviene indicar, que no hay lugar a corrección alguna frente a la condena de **indexación**, toda vez que, en el proveído atacado, se dispuso de manera clara: *"Del mismo modo se confirmará la orden impartida por el a quo, relacionada con la indexación frente los recobros Nos. 26167755 y 95067549 debido a que, estos fueron presentados por fuera de los 6 meses, actualización que deberá liquidarse* ***desde la fecha de reclamación de cada uno de ellos y hasta la data de su pago.",*** entendiéndose por ello la fecha de radicado FACTURA IPS, estas son, 19/12/2012 y 28/10/2010, respectivamente.

Por último, con relación a la tasa vigente para liquidar los intereses moratorios, es de advertir a la demandada, en la sentencia proferida por esta Corporación, se relacionó la providencia CSJ SL1970-2021, la cual en uno de sus apartes, prevé: "*El incumplimiento de los plazos previstos para el pago o giro de los recursos de que trata este decreto, causará intereses moratorios a favor de quien debió recibirlos, liquidados a la tasa de interés moratorio establecida para los tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales". (Se subraya).*

De esta forma, es claro que los 275 recobros objeto de intereses moratorios deberán liquidarse atendiendo el interés moratorio establecido para los tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – **legales**- ya que los corrientes obedecen a obligaciones mercantiles que no se ventilan en este asunto.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C**. - Sala Laboral,

R E S U E L V E

PRIMERO: CORREGIR el numeral **SEGUNDO** de la sentencia proferida el 31 de julio de 2023, el cual quedará de la siguiente manera:

***"CONDENAR** a la **ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -ADRES-**, a reconocer y pagar a la **SALUD TOTAL EPS S.A.** los intereses moratorios respecto de las sumas adeudadas. Los cuales, deberán calcularse desde los dos meses siguientes a la radicación de 275 recobros, siendo estos:*

Fecha prestación del servicio	**Fecha radicación factura IPS**	**2 meses para pago**
4/11/2012	**10/12/2012**	**10/02/2013**
9/09/2013	**9/10/2013**	**10/12/2013**
2/12/2011	**13/12/2011**	**13/02/2012**
28/01/2013	**18/04/2013**	**19/06/2013**
10/12/2012	**13/12/2012**	**13/02/2013**
9/01/2013	**7/02/2013**	**10/04/2013**
6/05/2013	**5/06/2013**	**6/08/2013**
1/03/2013	**4/03/2013**	**5/05/2013**
23/04/2013	**6/06/2013**	**7/08/2013**
11/10/2013	**20/11/2013**	**21/01/2014**
2/08/2013	**21/08/2013**	**22/10/2013**
2/03/2013	**9/04/2013**	**10/06/2013**
12/07/2012	**27/12/2012**	**27/02/2013**
23/02/2012	**10/04/2012**	**11/06/2012**
10/12/2012	**21/12/2012**	**21/02/2013**
24/05/2011	**20/06/2011**	**21/08/2011**
26/10/2012	**11/12/2012**	**11/02/2013**
17/06/2013	**8/07/2013**	**8/09/2013**
18/04/2013	**10/05/2013**	**11/07/2013**
16/03/2012	**18/07/2012**	**18/09/2012**
29/02/2012	**19/05/2012**	**20/07/2012**
5/06/2012	**19/07/2012**	**19/09/2012**
21/03/2012	**9/04/2012**	**10/06/2012**
16/03/2012	**11/04/2012**	**12/06/2012**
21/03/2012	**9/04/2012**	**10/06/2012**
16/06/2013	**10/09/2013**	**11/11/2013**
18/10/2013	**8/11/2013**	**9/01/2014**

25/07/2012	**17/08/2012**	**18/10/2012**
26/04/2013	**10/05/2013**	**11/07/2013**
11/02/2011	**28/02/2011**	**1/05/2011**
5/01/2011	**26/01/2011**	**29/03/2011**
5/05/2011	**18/05/2011**	**19/07/2011**
9/02/2011	**20/02/2011**	**23/04/2011**
12/10/2010	**16/03/2011**	**17/05/2011**
19/09/2011	**31/10/2011**	**1/01/2012**
29/12/2011	**3/01/2012**	**5/03/2012**
10/01/2010	**5/02/2010**	**8/04/2010**
23/03/2011	**8/04/2011**	**9/06/2011**
7/07/2011	**28/10/2011**	**29/12/2011**
28/02/2011	**14/04/2011**	**15/06/2011**
7/03/2011	**18/04/2011**	**19/06/2011**
4/12/2010	**24/03/2011**	**25/05/2011**
6/04/2013	**8/04/2013**	**9/06/2013**
17/08/2012	**10/09/2012**	**11/11/2012**
7/03/2013	**11/03/2013**	**12/05/2013**
28/11/2012	**28/12/2012**	**28/02/2013**
2/09/2011	**20/09/2011**	**21/11/2011**
16/12/2011	**29/05/2012**	**30/07/2012**
16/12/2011	**29/05/2012**	**30/07/2012**
15/06/2011	**10/07/2011**	**10/09/2011**
18/04/2011	**15/04/2011**	**16/06/2011**
10/05/2011	**28/09/2011**	**29/11/2011**
29/11/2012	**4/01/2013**	**7/03/2013**
19/03/2012	**10/04/2012**	**11/06/2012**
31/05/2009	**4/10/2009**	**5/12/2009**
25/11/2010	**26/11/2010**	**27/01/2011**
16/02/2012	**7/03/2012**	**8/05/2012**
28/08/2012	**23/09/2012**	**24/11/2012**
12/07/2013	**20/08/2013**	**21/10/2013**
7/12/2010	**15/12/2010**	**15/02/2011**
4/09/2012	**11/10/2012**	**12/12/2012**
13/03/2013	**3/04/2013**	**4/06/2013**
8/08/2013	**5/09/2013**	**6/11/2013**
18/03/2013	**28/04/2013**	**29/06/2013**
23/02/2011	**31/03/2011**	**1/06/2011**
26/05/2011	**16/06/2011**	**17/08/2011**
10/01/2012	**31/01/2012**	**2/04/2012**
30/01/2013	**9/02/2013**	**12/04/2013**
1/02/2013	**18/03/2013**	**19/05/2013**
29/01/2013	**8/02/2013**	**11/04/2013**
23/01/2013	**8/02/2013**	**11/04/2013**
4/01/2012	**2/02/2012**	**4/04/2012**
27/07/2012	**22/01/2013**	**25/03/2013**
3/01/2013	**18/02/2013**	**21/04/2013**

7/02/2013	**1/03/2013**	**2/05/2013**
26/07/2013	**29/07/2013**	**29/09/2013**
26/07/2013	**29/07/2013**	**29/09/2013**
1/08/2012	**11/10/2012**	**12/12/2012**
9/09/2013	**11/10/2013**	**12/12/2013**
28/11/2011	**17/12/2011**	**17/02/2012**
19/03/2011	**4/05/2011**	**5/07/2011**
15/04/2013	**11/06/2013**	**12/08/2013**
29/07/2013	**1/10/2013**	**2/12/2013**
6/11/2012	**5/01/2013**	**8/03/2013**
10/03/2012	**20/03/2012**	**21/05/2012**
19/02/2013	**26/02/2013**	**29/04/2013**
27/07/2013	**7/10/2013**	**8/12/2013**
24/07/2011	**1/09/2011**	**2/11/2011**
24/10/2012	**20/11/2012**	**21/01/2013**
23/10/2013	**9/11/2013**	**10/01/2014**
24/02/2012	**9/04/2012**	**10/06/2012**
15/03/2012	**10/04/2012**	**11/06/2012**
11/05/2011	**3/08/2011**	**4/10/2011**
15/10/2013	**9/11/2013**	**10/01/2014**
3/11/2012	**26/12/2012**	**26/02/2013**
14/02/2013	**7/03/2013**	**8/05/2013**
7/12/2012	**28/12/2012**	**28/02/2013**
29/08/2013	**17/09/2013**	**18/11/2013**
6/02/2013	**11/03/2013**	**12/05/2013**
29/07/2011	**5/08/2011**	**6/10/2011**
30/03/2011	**18/04/2011**	**19/06/2011**
19/03/2011	**19/04/2011**	**20/06/2011**
3/03/2011	**19/04/2011**	**20/06/2011**
12/09/2012	**22/09/2012**	**23/11/2012**
7/12/2012	**21/12/2012**	**21/02/2013**
10/12/2012	**21/12/2012**	**21/02/2013**
23/10/2012	**13/11/2012**	**14/01/2013**
24/02/2011	**7/06/2011**	**8/08/2011**
18/09/2012	**17/10/2012**	**18/12/2012**
21/02/2013	**20/03/2013**	**21/05/2013**
8/10/2010	**27/01/2011**	**30/03/2011**
29/03/2011	**18/04/2011**	**19/06/2011**
18/03/2011	**18/04/2011**	**19/06/2011**
5/11/2010	**30/01/2011**	**2/04/2011**
15/07/2012	**24/09/2012**	**25/11/2012**
29/10/2012	**15/11/2012**	**16/01/2013**
31/07/2013	**9/08/2013**	**10/10/2013**
29/11/2010	**17/01/2011**	**20/03/2011**
17/03/2011	**29/03/2011**	**30/05/2011**
24/02/2011	**14/03/2011**	**15/05/2011**
4/03/2011	**30/03/2011**	**31/05/2011**

8/04/2011	**13/04/2011**	**14/06/2011**
31/01/2013	**11/02/2013**	**14/04/2013**
6/08/2012	**28/08/2012**	**29/10/2012**
16/01/2013	**30/01/2013**	**2/04/2013**
26/12/2012	**9/01/2013**	**12/03/2013**
9/03/2011	**7/03/2011**	**8/05/2011**
28/07/2011	**7/09/2011**	**8/11/2011**
8/04/2012	**22/05/2012**	**23/07/2012**
14/12/2012	**5/01/2013**	**8/03/2013**
14/12/2012	**5/01/2013**	**8/03/2013**
28/10/2012	**13/12/2012**	**13/02/2013**
26/02/2011	**7/03/2011**	**8/05/2011**
19/12/2012	**20/12/2012**	**20/02/2013**
17/05/2012	**14/06/2012**	**15/08/2012**
31/01/2013	**7/03/2013**	**8/05/2013**
21/10/2013	**12/11/2013**	**13/01/2014**
27/06/2013	**26/07/2013**	**26/09/2013**
19/06/2013	**20/06/2013**	**21/08/2013**
18/06/2013	**20/06/2013**	**21/08/2013**
16/11/2012	**18/01/2013**	**21/03/2013**
15/02/2011	**10/03/2011**	**11/05/2011**
18/03/2011	**17/03/2011**	**18/05/2011**
18/03/2011	**19/04/2011**	**20/06/2011**
31/03/2011	**19/04/2011**	**20/06/2011**
4/03/2011	**7/03/2011**	**8/05/2011**
18/01/2013	**15/06/2013**	**16/08/2013**
25/06/2013	**12/08/2013**	**13/10/2013**
25/02/2013	**11/04/2013**	**12/06/2013**
5/03/2013	**24/06/2013**	**25/08/2013**
17/06/2011	**18/07/2011**	**18/09/2011**
14/03/2011	**27/04/2011**	**28/06/2011**
23/12/2011	**30/12/2011**	**1/03/2012**
29/07/2011	**5/08/2011**	**6/10/2011**
6/08/2013	**7/10/2013**	**8/12/2013**
28/05/2013	**12/06/2013**	**13/08/2013**
1/09/2012	**19/09/2012**	**20/11/2012**
1/09/2012	**8/10/2012**	**9/12/2012**
17/12/2010	**28/01/2011**	**31/03/2011**
28/08/2012	**24/09/2012**	**25/11/2012**
13/04/2011	**27/04/2011**	**28/06/2011**
26/10/2012	**5/12/2012**	**5/02/2013**
18/09/2012	**26/10/2012**	**27/12/2012**
26/10/2012	**5/12/2012**	**5/02/2013**
19/09/2012	**26/10/2012**	**27/12/2012**
22/02/2013	**13/03/2013**	**14/05/2013**
27/07/2013	**29/07/2013**	**29/09/2013**
21/08/2012	**12/10/2012**	**13/12/2012**

16/07/2013	**20/08/2013**	**21/10/2013**
1/02/2013	**4/03/2013**	**5/05/2013**
28/12/2012	**11/01/2013**	**14/03/2013**
2/11/2012	**17/12/2012**	**17/02/2013**
18/07/2012	**18/07/2012**	**18/09/2012**
5/06/2012	**13/07/2012**	**13/09/2012**
5/10/2012	**18/10/2012**	**19/12/2012**
2/06/2012	**20/06/2012**	**21/08/2012**
6/07/2011	**28/10/2011**	**29/12/2011**
9/08/2012	**23/09/2012**	**24/11/2012**
14/09/2012	**23/09/2012**	**24/11/2012**
18/02/2013	**19/04/2013**	**20/06/2013**
1/04/2013	**16/05/2013**	**17/07/2013**
15/04/2013	**16/05/2013**	**17/07/2013**
28/09/2012	**5/11/2013**	**6/01/2014**
19/02/2013	**13/03/2013**	**14/05/2013**
14/08/2012	**3/10/2012**	**4/12/2012**
24/09/2012	**3/10/2012**	**4/12/2012**
26/11/2012	**17/12/2012**	**17/02/2013**
31/10/2012	**14/12/2012**	**14/02/2013**
29/10/2012	**14/12/2012**	**14/02/2013**
29/10/2012	**14/12/2012**	**14/02/2013**
21/11/2012	**14/12/2012**	**14/02/2013**
2/11/2012	**14/12/2012**	**14/02/2013**
9/11/2012	**14/12/2012**	**14/02/2013**
19/08/2011	**23/09/2011**	**24/11/2011**
16/11/2012	**14/12/2012**	**14/02/2013**
20/09/2012	**12/10/2012**	**13/12/2012**
20/02/2013	**5/03/2013**	**6/05/2013**
16/08/2012	**23/09/2012**	**24/11/2012**
3/08/2012	**23/09/2012**	**24/11/2012**
11/09/2012	**16/10/2012**	**17/12/2012**
15/04/2011	**10/05/2011**	**11/07/2011**
29/12/2010	**19/01/2011**	**22/03/2011**
27/01/2011	**28/02/2011**	**1/05/2011**
14/03/2013	**18/03/2013**	**19/05/2013**
14/03/2013	**18/03/2013**	**19/05/2013**
5/02/2013	**18/03/2013**	**19/05/2013**
8/02/2013	**18/03/2013**	**19/05/2013**
18/05/2011	**20/06/2011**	**21/08/2011**
21/11/2012	**4/12/2012**	**4/02/2013**
8/04/2013	**15/05/2013**	**16/07/2013**
29/04/2013	**15/05/2013**	**16/07/2013**
23/10/2012	**20/11/2012**	**21/01/2013**
29/04/2013	**16/05/2013**	**17/07/2013**
21/08/2012	**16/10/2012**	**17/12/2012**
9/10/2012	**5/12/2012**	**5/02/2013**

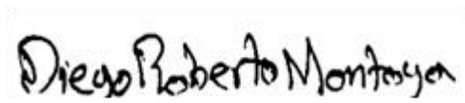
26/09/2012	**21/01/2013**	**24/03/2013**
20/02/2013	**18/03/2013**	**19/05/2013**
28/01/2013	**8/02/2013**	**11/04/2013**
4/10/2012	**4/12/2012**	**4/02/2013**
24/04/2013	**16/05/2013**	**17/07/2013**
14/02/2013	**18/03/2013**	**19/05/2013**
7/09/2012	**12/09/2012**	**13/11/2012**
6/09/2012	**11/10/2012**	**12/12/2012**
6/08/2012	**12/10/2012**	**13/12/2012**
6/09/2012	**11/10/2012**	**12/12/2012**
26/04/2013	**17/05/2013**	**18/07/2013**
10/09/2012	**11/10/2012**	**12/12/2012**
3/09/2012	**11/10/2012**	**12/12/2012**
30/03/2011	**9/04/2011**	**10/06/2011**
19/04/2011	**20/05/2011**	**21/07/2011**
10/12/2012	**21/12/2012**	**21/02/2013**
19/11/2010	**4/03/2011**	**5/05/2011**
11/03/2013	**18/03/2013**	**19/05/2013**
25/05/2012	**20/06/2012**	**21/08/2012**
2/02/2012	**10/02/2012**	**12/04/2012**
9/04/2013	**4/05/2013**	**5/07/2013**
19/07/2011	**5/08/2011**	**6/10/2011**
14/01/2011	**27/01/2011**	**30/03/2011**
18/04/2011	**16/05/2011**	**17/07/2011**
27/06/2012	**19/07/2012**	**19/09/2012**
25/09/2012	**20/10/2012**	**21/12/2012**
15/03/2011	**20/07/2011**	**20/09/2011**
12/07/2011	**20/07/2011**	**20/09/2011**
7/10/2011	**19/10/2011**	**20/12/2011**
23/08/2011	**7/09/2011**	**8/11/2011**
11/07/2012	**27/12/2012**	**27/02/2013**
20/12/2011	**17/01/2012**	**19/03/2012**
9/11/2010	**18/01/2011**	**21/03/2011**
25/09/2012	**17/10/2012**	**18/12/2012**
31/08/2012	**23/09/2012**	**24/11/2012**
29/12/2010	**17/01/2011**	**20/03/2011**
30/11/2012	**20/12/2012**	**20/02/2013**
7/12/2012	**21/12/2012**	**21/02/2013**
24/05/2012	**19/07/2012**	**19/09/2012**
8/03/2012	**3/04/2012**	**4/06/2012**
14/12/2012	**14/01/2013**	**17/03/2013**
17/11/2012	**4/01/2013**	**7/03/2013**
26/10/2012	**21/01/2013**	**24/03/2013**
18/12/2012	**14/01/2013**	**17/03/2013**
15/04/2011	**20/04/2011**	**21/06/2011**
13/09/2011	**6/10/2011**	**7/12/2011**
26/01/2012	**13/02/2012**	**15/04/2012**

7/03/2011	**12/04/2011**	**13/06/2011**
30/08/2012	**23/09/2012**	**24/11/2012**
13/07/2011	**12/08/2011**	**13/10/2011**
16/06/2011	**13/07/2011**	**13/09/2011**
12/04/2011	**18/05/2011**	**19/07/2011**
31/08/2011	**16/09/2011**	**17/11/2011**
10/01/2013	**19/02/2013**	**22/04/2013**
10/11/2012	**6/12/2012**	**6/02/2013**
27/05/2011	**8/06/2011**	**9/08/2011**
31/10/2012	**19/11/2012**	**20/01/2013**
15/09/2011	**10/10/2011**	**11/12/2011**
28/07/2012	**4/10/2012**	**5/12/2012**
4/04/2012	**20/04/2012**	**21/06/2012**

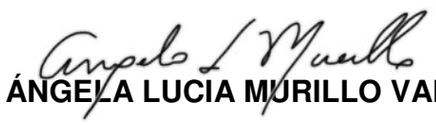
SEGUNDO: No acceder a los demás pedimentos de la demandada, conforme a lo expuesto.

TERCERO: En lo demás, la sentencia permanece incólume.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



ÁNGELA LUCIA MURILLO VARÓN



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO EJECUTIVO LABORAL PROMOVIDO POR PORVENIR S.A. CONTRA DORIS ADRIANA RAMIREZ LAVERDE (RAD. 20 2019 00389 01).

Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Vencido el término de traslado otorgado para alegar de conclusión, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el artículo 13 numeral 2º de la Ley 2213 del 13 de junio del 2022, profieren la siguiente,

P R O V I D E N C I A

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la ejecutada contra la providencia proferida por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de esta ciudad, en audiencia celebrada el 30 de octubre de 2020 (sic) (récord: 47:47, archivo 05), por medio del cual se resolvió:

> *"**PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS** por la parte ejecutada y, por lo tanto, seguir adelante la ejecución del crédito, en aplicación a los artículos 440, inciso 2 y 446 del Código General del Proceso., por lo expuesto en la parte considerativa. En esos términos practíquese la liquidación del crédito.*
>
> ***SEGUNDO. - CONDÉNESE** en costas a la parte ejecutada. Tásense por secretaría una vez se encuentre liquidado el crédito.".*

Para arribar a la anterior decisión, el Juez de primer grado consideró (archivo 05, récord 36:07):

> *"Entonces, como antecedentes tenemos que mediante auto de fecha 8 de julio del 2019 se dispuso librar mandamiento de pago a favor de la sociedad Porvenir S.A., por considerar que los documentos que sirven de base como título ejecutivo se ajustan a las disposiciones contenidas en los artículos 422 y 430 del Código General del proceso y 100 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.*

Este proveído se notificó personalmente a la ejecutada el 11 de febrero de los corrientes, según se corrobora el acta de notificación que obra folio 54 y quien, a través de apoderado judicial dentro del término de traslado, propuso excepciones contra el mandamiento de pago denominadas cobro de o no debido por capital e intereses de mora, inexistencia de la obligación que se cobre en el título ejecutivo, falta legitimación y finalmente, inexigibilidad del título judicial.

Entonces para resolver el juzgado considera lo siguiente, la Ley 100 de 1993 contempla en su artículo 24 las acciones de cobro que pueden ejercer las AFP, es decir, las administradoras de fondos de pensiones, con ocasión del incumplimiento de las obligaciones del empleador en razón al pago de aportes pensionales.

En igual sentido, como desarrollo normativo de la precitada normatividad, el Decreto 1161 y 2633 de 1994 reguló de manera específica el tema, consagrando así una prerrogativa especial con las que cuentan las entidades en mención para hacer efectivos los aportes obligatorios que deben efectuar los patronos en relación con sus empleadores. Es así como el artículo 5º de la Ley 2633 de 1994 al respecto, señala: "En desarrollo del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, las demás entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que esta disponga, con carácter general, sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la estimación de sus cuantías e interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordantes.

Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.".

Conforme lo anterior, el despacho analiza el contenido de la documental que obra folio 12 a 30, con la cual soporta la parte ejecutante su pedimento como base de título ejecutivo, y se advierte que resulta a cargo de la ejecutada una obligación clara, expresa y exigible de pagar determinada cantidad de dinero al cumplirse el presupuesto dispuesto en el artículo quinto de la Ley 2633 de 1994, es así como quedó acreditado con la certificación expedida por la empresa de mensajería, sin embargo, señala el profesional del derecho de la parte ejecutada, fundamentando su excepción de cobro de lo no debido por concepto de capital e intereses de mora, que eso representa todo una relación laboral con la afiliada por la que está cobrando en este proceso, quien trabajaba como empleada doméstica durante 3 días a la semana, desde el 1º de junio de 1999 hasta el 30 de junio del 2000, y que al final de la relación liquidó a su empleada, por lo que no siendo su trabajadora no tiene ninguna obligación con ella, para lo cual señala lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 100 de 1993.

Respecto a las obligaciones del empleador y para desatar esta instancia, recordemos que la falta de reporte de novedades, el artículo 24 de la Ley 100, preceptúa que las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantarán las respectivas acciones de cobro, en este caso, PORVENIR S.A. en el evento, que incumpla el empleador, elaborará la liquidación, la cual será el título base que prestará mérito ejecutivo, según se infiere del inciso 2º de literal h) del artículo 14 del Decreto 656 de 1994.

Como podemos observar, el Decreto 1406 de 1999, en su artículo 39, establece lo siguiente, las consecuencias derivadas de la no presentación de las declaraciones de autoliquidación de aportes o de errores u omisiones en esta que afecten el cubrimiento y operatividad del sistema de Seguridad Social integral o de los servicios que él contempla con respecto a 1 o más de los afiliados, será responsabilidad exclusiva del aportante según el literal del artículo 9º del Decreto 1406 de 1999, que reza: "contenido de la declaración de autoliquidación de aportes al sistema integral de Seguridad Social. El formulario para la declaración de autoliquidación de aporte al sistema de Seguridad Social integral deberá incluir la razón social y el NIP de la entidad administradora de la cual se presenta y deberá contener al menos la siguiente información, novedades del periodo cotizado.".

En ese orden de ideas, a la administradora no le es dable por disposición legal presumir las novedades que el empleador, por su negligencia o su mora no reporta. Como aquí la obligación es del aportante, es decir, del empleador hoy ejecutado. En el artículo 7º del mismo decreto indica que: "declaraciones de autoliquidación y pago de aporte al sistema de Seguridad Social integral. Los aportantes al sistema deberán presentar, con la periodicidad en los lugares y entre los plazos que corresponda conforme a su clasificación, una declaración de autoliquidación de los aportes correspondientes a los diferentes riesgos cubiertos por aquel por cada una de las entidades administradoras. Dicha declaración deberá estar acompañada de los aportes líquidos, bien sea que tal pago se haga conjuntamente con el formulario de autoliquidación o mediante comprobante de pago. Sin el cumplimiento a esta condición, la declaración de autoliquidación de aportes del sistema no tendrá valor alguno.".

Establece además el Decreto 1406 de 1999 lo siguiente, artículo 3º, otras definiciones, novedades, comprende todo hecho que afecta a las cotizaciones a cargo, de los aportantes o de las obligaciones económicas que estos tienen al sistema, igualmente el artículo 13 señala: "Declaraciones que se tienen por no presentadas. No se entenderá cumplido el deber de presentar la declaración de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en los siguientes casos: a) Cuando la declaración no se presente en los lugares señalados para el efecto; b) Cuando no se suministre la identificación del aportante, o se haga en forma equivocada; c) Cuando no contenga la información a que aluden los literales b) al g) del artículo 9. anterior; d) Cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar.

Parágrafo. En el Sistema General de Seguridad Social en Salud, la declaratoria de no presentada que, con fundamento en lo dispuesto en el presente artículo, se haga con relación a una determinada declaración de autoliquidación de aportes, no obstará para que se puedan efectuar las compensaciones sobre saldos no conciliados de que tratan las disposiciones especiales sobre la materia.".
Por lo expuesto y para resolver la excepción de inexistencia en la obligación que se cobra en el título ejecutivo y falta legitimación en la causa por pasiva, las cuales se declararán no probadas, toda vez que en el plenario no se evidencie lo del pago de los aportes pensionales por su afiliada y no se reportó la novedad de retiro que dio lugar al cobro que nos ocupa, tan es así que lo que allega para demostrar el retiro de la afiliada es una liquidación de prestaciones sociales y no la planilla donde se canceló o reportó el retiro, pues de lo contrario no había forma de que Porvenir tuviera conocimiento de dicha novedad.

Finalmente, en cuanto a la exigibilidad del título ejecutivo, valga recordar que los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recursos de reposición contra el mandamiento ejecutivo y no es un mandato que tiene el juzgador, como reiteradamente nos lo expone el apoderado al momento de presentar sus alegatos de conclusión, que se debe tener en extenso, volviendo a verificar nuevamente todos y cada 1 de los requisitos del título ejecutivo contrario, censo del

Código General del Proceso, dispone que a mutuo propio solo podrá discutirse mediante recurso de reposición, como reiteradamente se dijo dentro del juicio.

No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no hayan sido planteadas por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuera el caso, en consecuencia, se ordena seguir adelante la ejecución del crédito en aplicación a los artículos 440, inciso segundo y 446 del Código General del Proceso".

Inconforme con la decisión anterior, el apoderado de la parte ejecutada la apeló, solicitando su revocatoria para que, en su lugar, se acepte que en este asunto procede la inexigibilidad del título ejecutivo. En esa medida, indicó -archivo 05. récord 48:50-:

"Señoría, con el mayor de los respetos interpongo recurso de reposición contra el fallo que acaba de dar y en caso de ser procedente, recurso de apelación contra el mismo, teniendo en cuenta pues la cantidad del proceso y procedo a sustentar, si usted me lo permite mi correspondiente recurso…

usted acaba de hacer mención a los requisitos que establece el artículo 24 de la Ley 100, y que se encuentra modificada por el Decreto 2633 de 1994, artículos 2 y 5. Sin embargo, su Señoría con todo respeto, comete un error al manifestar que se demuestra a folios 12 en adelante del expediente, la notificación que debía hacer Porvenir a mi Prohijada. Sin embargo, le recuerdo su Señoría que a folio número 12 está certificación de devolución que se hace de la comunicación, entonces con todo respeto, la notificación nunca fue enviada y la certificación de devolución dice que fue devuelta el correo porque la dirección no existía, se estaba notificando en un lugar completamente distinto. Entonces la notificación no se dio y por consiguiente no se configuró el título Ejecutivo.

Y usted lo manifiesta en el fallo, y lo digo muy respetuosamente, usted no revisa muy bien el folio número 12 en donde está la certificación de devolución. Y la misma norma establece que una vez el empleador moroso, ellos tienen 15 días para pasar las notificaciones o ponerse al día, pues tampoco contó mi cliente con eso, con ese término. Entonces mal podría el juzgado en este momento hacer ojos ciegos y oídos sordos con respecto a la misma prueba que presentó la parte demandante para configurar el título y, por consiguiente, también difiero de lo de la última parte que manifiesta el juzgado, porque le recuerdo a su Señoría que ustedes los falladores judiciales, como lo reiteré fundamentándome en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, tienen una potestad de ver, es decir, tienen una obligación y tienen esa obligación para revisar los títulos ejecutivos, bien sea antes de librar el mandamiento de pago, o bien sea en el momento en que están fallando. En eso sí se está equivocando flagrantemente su Señoría al manifestar, ustedes no cuentan con esa potestad cuando efectivamente los autos irregularmente emitidos, no los atan a ustedes y tienen toda la oportunidad procesal Para poder hacer las correcciones debidas entonces, En este sentido, sus Señorías cuidando por sustentado mi recurso de reposición y en caso de que me conceda, en caso de no proceder o de o de mantener su fallo.".

Frente al recurso de reposición, el *A quo* no emitió pronunciamiento alguno, toda vez que: -archivo 05, récord: 52:19- "*Como quiera que estamos ante una sentencia en el proceso Ejecutivo, la misma no tiene recurso de reposición.".*

Para resolver se hacen las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Asume la Sala el conocimiento de este especial, en orden a desatar el recurso de apelación propuesto por la parte ejecutada, contra el auto que declaró no probada la excepción de inexigibilidad del título ejecutivo, en cumplimiento a lo estatuido en el No. 9º del artículo 65 del C.P.T. y S.S.

A efectos de resolver el recurso en análisis, pertinente resulta memorar, el artículo 422 del C.G.P. prevé que *"Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contenciosos administrativos o de policía prueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de justicia y los demás documentos que señale la ley"*.

Lo anterior y para resolver el caso de autos, al tenor de lo previsto en el artículo 5° del Decreto 2633 de 1994 –para el asunto, por tratarse de una AFP privada- que orienta las acciones de cobro contra los empleadores que han incumplido su obligación de trasladar los aportes pensionales dentro del término legal, con fundamento en los artículos 23 y 24 de la Ley 100 de 1993, así:

> *"ART. 5°—**Del cobro por vía ordinaria.** En desarrollo del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, las demás entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que esta disponga, con carácter general, sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la estimación de sus cuantías e interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordantes.*

> ***Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá****. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado****, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.***

La norma citada permite concebir el requerimiento previo como requisito de procedibilidad para poder iniciar la acción ejecutiva tendiente a efectuar el cobro de aportes al sistema de seguridad social en pensiones, de manera tal que sin la satisfacción de ese requisito no es viable la ejecución, es decir, tanto el requerimiento previo como la consiguiente liquidación efectuada por la entidad conforman un título ejecutivo complejo o compuesto.

Frente a esto último, los doctrinantes Juan Guillermo Velásquez[1] y Nelson R. Mora G.[2] han señalado que se configura título ejecutivo complejo *"cuando la obligación se deduce de dos o más documentos dependientes o conexos. En este caso el mérito ejecutivo emerge de la unidad jurídica del título, al ser integrado éste por una pluralidad de documentos ligados íntimamente"*. Luego, *"lo que se requiere en el título no es unicidad material en el documento, sino unidad jurídica del título; que de la pluralidad material de documentos se deduzca la existencia de una obligación en forma expresa, clara y exigible en favor del acreedor y a cargo del deudor, aunque algunas o varias de estas condiciones consten en uno o varios documentos, pero siempre y cuando esté plenamente acreditado que tales documentos plurales están unidos por una relación de causalidad y que tienen por causa u origen el mismo negocio jurídico".*

Así pues, no es menester que exista unidad material o física del título, sino que en verdad de los plurales documentos base de recaudo pueda desprenderse unidad jurídica, valga precisar, que se encuentren íntimamente ligados por una relación de causalidad y se originen en el mismo negocio jurídico.

Aterrizando al caso puesto en consideración de esta Sala, se define como problema jurídico el de determinar si en el presente caso, los documentos presentados por la ejecutante reúnen los requisitos para ser título ejecutivo y entre

[1] LOS PROCESOS EJECUTIVOS, novena edición.
[2] PROCESO DE EJECUCIÓN", Tomo I, quinta edición.

ellos si se agotó debidamente el requerimiento en mora exigido por la ley para poder ejercer la acción ejecutiva.

De esta manera lo primero que ha de señalar la Sala, la parte ejecutada interpuso recurso contra el auto que declaró no probada la excepción de inexigibilidad del título ejecutivo, aclarándose en este punto, pese a que la ejecutada formuló otras excepciones, las que denominó cobro de lo no debido por concepto de capital e intereses de mora, inexistencia de la obligación que se cobra en el titulo ejecutivo y falta de legitimación por pasiva – archivo 01, páginas 71 a 77-, del recurso interpuesto se extrae que solo se controvirtió - *la inexigibilidad del título ejecutivo*, por lo que esta Sala analizará únicamente tal aspecto.

Así las cosas, lo que se evidencia en primer término es que mediante proveído calendado del 08 de julio de 2019 (páginas 26, archivo 01) se libró mandamiento ejecutivo, en los siguientes términos:

> ***PRIMERO: LIBRAR*** *orden de pago por la vía ejecutiva laboral en contra de* ***DORIS ADRIANA RAMÍREZ LAVERDE*** *identificada con cedula de ciudadanía No. 52.057.260., para que pague a favor de la sociedad PORVENIR S.A., los siguientes conceptos.*
>
> *A.-) La suma de* ***($4.802.342,oo)*** *por concepto de cotizaciones pensionales obligatorias dejadas de pagar por la parte ejecutada en su calidad de empleador por los periodos de noviembre de 1999 hasta febrero del año 2008.*
>
> *B.-) Por concepto de intereses moratorios causados por cada uno de los periodos adeudados a los trabajadores mencionados y relacionados en el titulo ejecutivo base de esta acción desde la fecha en que el empleador debió cumplir con sus obligación de cotizar hasta la fecha de pago efectivo, correspondientes a las cotizaciones obligatorias y a los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional, los cuales deberán ser liquidados a la fecha del pago, de acuerdo con la tasa vigente para impuestos de renta y complementarios, según lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley 100 de 1993, 28 del Decreto 692 de 1994 y 635 del estatuto Tributario modificado por el artículo 2798 de la Ley 1819 de 2016.*
>
> *C.-) Por las costas del presente proceso, las cuales serán liquidadas en la debida oportunidad procesal.*
>
> ***SEGUNDO:*** *Notifíquese esta providencia a la parte ejecutada de manera personal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 108 del C.P.T.SS., en concordancia con los arts. 291 y 292 del C.G. del P. Y 41del CPTSS.*
>
> ***TERCERO:*** *Respecto a la solicitud de decreto de medidas cautelares, se pronunciara el Despacho, una vez la parte ejecutante preste el juramento de conformidad con lo establecido en el Art. 101 del C.P.T Y SS.*

Dentro del término legal, la ejecutada propuso como excepciones de mérito las que denominó cobro de lo no debido por concepto de capital e intereses de mora,

inexistencia de la obligación que se cobra en el titulo ejecutivo, falta de legitimación por pasiva e inexigibilidad del título ejecutivo – archivo 01, páginas 71 a 77- última ésta que, como se anunció al inicio de este proveído, se declaró por parte del juez de primera instancia no probada, y como quiera que en la alzada la recurrente insiste en su procedencia, aborda la Sala el estudio de los argumentos expuestos en la apelación en virtud del principio de consonancia.

Resulta pertinente traer a colación el pronunciamiento de la CSJ STC 2020-01072-00, donde discurrió:

> *«Es importante resaltar que los jueces tienen dentro de sus deberes el "control oficioso del título ejecutivo" presentado para el recaudo. Facultad consagrada en el derogado artículo 497 del Código de Procedimiento Civil, disposición en la cual se apoyó el juzgado denunciado para declarar la terminación del juicio, y que actualmente se encuentra prevista en el inciso 2º del artículo 430 del Código General del Proceso, la cual se debe armonizar con los cánones 4º, 11, 42-2º, 132 y 430 inciso 1º ejusdem.*
>
> *Así lo ha entendido esta Sala, cuando en la sentencia STC14164-2017, 11 sep., rad. 2017-00358-01, sostuvo que "sí es dable a los juzgadores bajo la égida del Código de Procedimiento Civil, y así también de acuerdo con el Código General del Proceso, volver, ex oficio, sobre la revisión del "título ejecutivo" a la hora de dictar sentencia (…).*
>
> *Para concluir tal cosa, recordó su propia jurisprudencia, que, en forma concreta, sobre la revisión oficiosa del título ejecutivo precisó.*
>
> *Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleológicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (artículos 228 de la Constitución Política y 11 del Código General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panorámica propia de la estructura que constituye el sistema jurídico, mas no desde la óptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada (…).*
>
> *Entre ellas, y en lo que atañe con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el título ejecutivo que se presenta ante la jurisdicción en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que, si bien el precepto 430 del Código General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que "[l]os requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso", lo cierto es que ese fragmento también debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, así como también con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia,*

> *con los cánones 4º, 11, 42-2º y 430 inciso 1º ejúsdem, amén del mandato constitucional enantes aludido (...).".*

Así las cosas, resulta palpable que todo operador judicial está habilitado para volver a estudiar, incluso ex officio y sin límite en cuanto atañe con ese preciso tópico, el **título que se presenta como soporte del recaudo**, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar la viabilidad de librar mandamiento de pago como también a la hora de emitir el fallo, siendo ese proceder del todo garantista de los derechos sustanciales de las partes trabadas en contienda, siendo además un "deber" para que se logre "la igualdad real de las partes" (artículos 4º y 42-2º del Código General del Proceso) y "la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial" (artículo 11º ibidem), por lo que esta Sala de Decisión procede a verificar si el requisito del requerimiento en mora en este caso fue cumplido, atendiendo los aspectos puntuales del recurso.

Acatando lo anterior, en el caso presente, se relacionó como dirección de notificación, carrera 66 No. 71-92, apartamento 401 de esta ciudad, observándose como causal de devolución – *Dirección Errada, No Existe"* el día 18 de marzo de 2019 (*página 17, archivo 01):*



INTER RAPIDISIMO

NIT. 800.251.569-7

CERTIFICADO DE DEVOLUCION

INTERRAPIDISIMO S.A. Con Licencia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones No 1189 y atendiendo lo establecido en la ley 1564 del 2012, se permite certificar la devolucion del envio con las siguientes caracteristicas.

NUMERO DE ENVÍO	210009068767
CIUDAD DE ORIGEN	BOGOTA\CUND\COL
CIUDAD DE DESTINO	BOGOTA\CUND\COL
FECHA Y HORA DEL ENVÍO	14/03/2019 03:25:17 a.m.
REMITENTE	PORVENIR S.A./2735/DIRECCION GESTION EMPLEADOR
IDENTIFICACION	800144331-3
DIRECCION DEL REMITENTE	CARRERA 13 NO. 26 A 65 TORRE B PISO 3
TELEFONO	3393000 EXT 75277
DESTINATARIO	RAMIREZ LAVERDE DORIS ADRIANA
IDENTIFICACION	52057260
DIRECCION DE DESTINATARIO	CRA 66 No 71 92 AP 401
TELEFONO	
CONTENIDO	REQUERIMIENTO
OBSERVACIONES	
CAUSAL DE DEVOLUCION	DIRECCION ERRADA / DIRECCION NO EXISTE
FECHA DE EXPEDICION DE LA CERTIFICACION	18/03/2019

Ello no permite tener por acreditado el requisito de requerimiento al cual hace referencia la disposición transcrita en precedencia, pues la ejecutada como persona natural no fue requerida "*para que en el término de 15 días hábiles contados a partir del envío de esta comunicación, cancele las sumas adeudadas incluyendo los intereses de mora*", pues en este caso, al tratarse de una persona natural, PORVENIR S.A. debió acreditar que la dirección en mención fue la que registró la empleadora como persona natural y ello no ocurrió.

Razones por las cuales, no puede darse por acreditado que en efecto se surtió el proceso de cobro en debida forma a la ejecutada, como quiera que ni tan siquiera se puede establecer si se le dio a conocer el monto de la obligación cobrada, por ende, es claro que con la comunicación que se aporta al expediente no se está cumpliendo con la finalidad que pretende obtenerse a través del requerimiento previo.

Así las cosas, concluye esta Sala de decisión que los documentos aportados no constituyen un título ejecutivo, al no gozar de la característica de ser exigibles, por cuanto no existe prueba de que se haya efectuado debidamente el requerimiento inicial al empleador.

Adicionalmente, revisado el expediente no encuentra la Sala que la sociedad ejecutante hubiera aportado elemento de juicio diferente al ya anotado que permita concluir la entrega de los documentos contentivos del requerimiento previo en los términos del art. 5º del Decreto 2633 de 1994 a la ejecutada, por lo que siendo así, la decisión del *a quo* no se torna acertada, debiendo revocarse la decisión apelada, por los motivos expuestos.

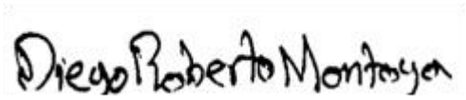
En mérito de lo expuesto **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. -SALA LABORAL**,

R E S U E L V E

PRIMERO: REVOCAR el auto dictado por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá, y en su lugar, declarar probada la excepción de inexigibilidad del título ejecutivo, conforme a lo expuesto por la Sala.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



ÁNGELA LUCIA MURILLO VARÓN



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL

BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR ZOILO MARINO DAZA CHAMORRO, JESÚS MARÍA PARRA TOVAR, ARACELY CORZO REYES, LEONOR BERNAL VIDAL, EDGARDO PORTILLO ORDOÑEZ y CARMEN BEATRIZ MOVILLA DE HOYOS CONTRA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP – (RAD. 26 2021 00153 01).

Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo dos mil veinticuatro (2024)

A U T O

Arriban las presentes diligencias a esta Sala de Decisión a efecto de resolver la solicitud elevada por el apoderado de la parte demandada **UGPP** en el cual solicita la corrección de la sentencia proferida el 31 de agosto del 2022, en relación con las fechas desde las cuales se debe pagar el retroactivo por mesadas adicionales así:

> *"Mediante sentencia proferida el 13 de mayo de 2022 este Despacho, en lo que atañe al señor EDGARDO PORTILLA ORDOÑEZ, declaró probada la excepción de prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 15 de julio de 2017, condenando así a la UGPP a pagar el retroactivo de la mesada 14 a partir del 15 de julio de 2017:*
>
> > *"TERCERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción, respecto a la mesada catorce del señor EDGARDO PORTILLA ORDOÑEZ en relación con las mesadas causadas con anterioridad al 15 de julio de 2017 y respecto a la señora CARMEN BEATRIZ MOVILLA DE HOYOS en relación con las mesadas causadas con anterioridad al 1 1 de marzo de 2017.*
> >
> > *CUARTO: CONDENA a demandada UN1DAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL — UGPP a reconocer y pagar el retroactivo pensional a que haya lugar, respecto a la mesa catorce causada desde el 15 de julio de 2017 debidamente "indexada, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia."*
>
> *Así mismo, mediante sentencia del 31 de agosto de 2022, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SALA LABORAL, adiciona, entre otros, el numeral cuarto de la sentencia del 13 de mayo de 2022, señalando que el valor del retroactivo a pagar al señor PORTILLA ORDOÑEZ es de $11.318.637,00 por las mesadas causada entre junio de 2008 y junio de 2017, así:*

> *"PRIMERO: ADICIONAR los numerales CUARTO y QUINTO de la sentencia apelada y consultada, para en su lugar establecer como retroactivo adeudado por mesadas adicionales los siguientes valores:*
>
> *a. EDGARDO PORTILLA ORDOÑEZ respecto de las mesadas adicionales causadas entre junio del 2008 y junio del 2017 la suma de $11.318.637."*

Por lo anteriormente expuesto, es claro que de acuerdo con el artículo tercero del fallo del 13 de mayo de 2022 proferido por el Juzgado 26 Laboral del Circuito de Bogota, la prescripción de las mesadas pensionales del señor PORTILLA ORDOÑEZ operó desde el 15 de julio de 2017.

Asimismo, de la lectura de la parte considerativa del fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá del 31 de agosto de 2022 se observa que la liquidación de los valores por concepto de retroactivo se efectuó a partir del 15 de julio de 2017 hasta el 1 de enero de 2022, por la suma de $11.318.637,00, sin embargo, en la parte resolutiva, de ese mismo fallo, se indica que el monto de $11.318.637 corresponde a las mesadas causadas entre junio de 2008 y junio de 2017, lo cual no es acertado, toda vez que ese monto corresponde a las mesadas que se causaron desde el 15 de julio de 2017 hasta el 1 de enero de 2022.

Conforme a lo anterior, advierte la Sala que en efecto en la providencia dictada el pasado 31 de agosto del 2022 en su parte **resolutiva**, existe una imprecisión al hacer referencia al lapso por el cual se calcula el retroactivo de mesadas adeudadas no solo del accionante EDGARDO PORTILLA ORDOÑEZ de quien se pide su corrección, sino también de la señora CARMEN BEATRIZ MOVILLA DE HOYOS, toda vez que en la parte motiva se explicó respecto de estos dos accionantes que el fenómeno prescriptivo operó de la siguiente manera:

> *EDGARDO PORTILLA ORDOÑEZ respecto de las mesadas adicionales causadas entre junio del 2008 y junio del 2017.*
>
> *CARMEN BEATRIZ MOVILLA DE HOYOS respecto de las mesadas adicionales causadas entre junio de 1994 y junio del 2016.*

Efectuando esta Corporación el cálculo del retroactivo para el señor EDGARDO PORTILLA ORDOÑEZ a partir del año **2018** que es la mesada de junio que no se encuentra prescrita y hasta la mesada del año **2022** (data en la cual se dictó la sentencia de segunda instancia)

Tabla Retroactivo Pensional					
Fecha inicial	***Fecha final***	***Incremento %***	***Valor mesada calculada***	***N°. Mesadas***	***Subtotal***
01/01/08	*31/12/08*	*5,69%*	*$ 1.417.416,05*	*PRESCRITO*	
01/01/09	*31/12/09*	*7,67%*	*$ 1.526.132,00*		
01/01/10	*31/12/10*	*2,00%*	*$ 1.556.655,00*		
01/01/11	*31/12/11*	*3,17%*	*$ 1.606.001,00*		
01/01/12	*31/12/12*	*3,73%*	*$ 1.665.905,00*		
01/01/13	*31/12/13*	*2,44%*	*$ 1.706.553,00*		
01/01/14	*31/12/14*	*1,94%*	*$ 1.739.660,00*		
01/01/15	*31/12/15*	*3,66%*	*$ 1.803.332,00*		
01/01/16	*31/12/16*	*6,77%*	*$ 1.925.418,00*		
15/07/17	*31/12/17*	*5,75%*	*$ 2.036.130,00*		
01/01/18	*31/12/18*	*4,09%*	*$ 2.119.408,00*	*1,00*	*$ 2.119.408,0*
01/01/19	*31/12/19*	*3,18%*	*$ 2.186.805,00*	*1,00*	*$ 2.186.805,0*
01/01/20	*31/12/20*	*3,80%*	*$ 2.269.904,00*	*1,00*	*$ 2.269.904,0*
01/01/21	*31/12/21*	*1,61%*	*$ 2.306.449,00*	*1,00*	*$ 2.306.449,0*
01/01/22	***31/08/22***	*5,62%*	*$ 2.436.071,00*	*1,00*	*$ 2.436.071,0*
Total retroactivo				***$ 11.318.637,00***	

Y en relación con CARMEN BEATRIZ MOVILLA DE HOYOS, se liquidaron las mesadas adicionales desde el año 2017 y hasta el 2022, dado que conforme al análisis de la prescripción, las mesadas causadas de junio de 1994 a junio del 2016 se encontraban afectadas por dicho fenómeno

Tabla Retroactivo Pensional					
Fecha inicial	***Fecha final***	***Incremento %***	***Valor mesada calculada***	***N°. Mesadas***	***Subtotal***
01/01/16	*31/12/16*	*6,77%*	*$ 1.895.158,00*	*PRESCRITO*	
11/03/17	*31/12/17*	*5,75%*	*$ 2.004.130,00*	*1,00*	*$ 2.004.130,0*
01/01/18	*31/12/18*	*4,09%*	*$ 2.086.099,00*	*1,00*	*$ 2.086.099,0*
01/01/19	*31/12/19*	*3,18%*	*$ 2.152.437,00*	*1,00*	*$ 2.152.437,0*
01/01/20	*31/12/20*	*3,80%*	*$ 2.234.230,00*	*1,00*	*$ 2.234.230,0*
01/01/21	*31/12/21*	*1,61%*	*$ 2.270.201,00*	*1,00*	*$ 2.270.201,0*
01/01/22	***31/08/22***	*5,62%*	*$ 2.397.786,00*	*1,00*	*$ 2.397.786,0*
Total retroactivo				***$ 13.144.883,00***	

No obstante, pese haberse efectuado dicho análisis de manera correcta en la parte motiva de la sentencia, por error involuntario, se anotó en la parte resolutiva las fechas respecto de las cuales se presentó la prescripción de mesadas pensionales pero con los valores de los retroactivos atrás señalados y que no son objeto de reproche, por ende como quiera que existe una discordancia en las fechas respecto de las cuales se debe pagar el retroactivo, se procederá a su corrección, precisando tal situación en manera alguna modifica las consideraciones tomadas dentro del fallo proferido en esta instancia.

En consecuencia y de conformidad con el artículo 286 del C.G.P.[1], disposición aplicable por analogía al proceso laboral de conformidad con el art. 145 del C.P.L., se procederá a enmendar el error que existió por omisión o cambio de palabras, quedando entonces el ordinal **PRIMERO** de su parte resolutiva, de la siguiente manera:

> **"PRIMERO: ADICIONAR** los numerales **CUARTO y QUINTO** de la sentencia apelada y consultada, para en su lugar establecer como retroactivo adeudado por mesadas adicionales los siguientes valores:
>
> a. EDGARDO PORTILLA ORDOÑEZ respecto de las mesadas adicionales causadas entre **junio del 2018 y junio del 2022** la suma de $11.318.637.

[1] **ARTÍCULO 286. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y OTROS.** Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto. (…). **Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.**

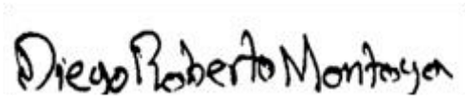
b. CARMEN BEATRIZ MOVILLA DE HOYOS respecto de las mesadas adicionales causadas entre **junio de 2017 y junio del 2022** la suma de $13.144.883.

Retroactivo que se seguirá causando hasta la fecha de inclusión en nómina y se cancelará debidamente indexado a la fecha en que se efectué el pago, de acuerdo a lo anteriormente considerado.

En lo demás, la sentencia permanece incólume.

En firme el presente proveído, remítase el expediente al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR BERTHA NANCY ESLAVA DE FUENTES CONTRA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES- Y PORVENIR S.A. (RAD. 27 2023 00083 01).

Bogotá D.C. veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

A U T O

Mediante escrito remitido por correo electrónico, el apoderado de la demandante **BERTHA NANCY ESLAVA DE FUENTES**, solicita la aclaración y/o adición de la providencia proferida por esta Corporación el 30 de noviembre de 2023 (Exp. Digital: *archivos 11 y 12*) en los siguientes términos:

> *"Con esta solicitud pretendo que el honorable Tribunal aclare cuáles son los lineamientos que debe tener en cuenta Colpensiones para el estudio de reconocimiento de la pensión más favorable para la demandante, en razón a que Colpensiones no aplica los precedentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional.*
>
> *En especial solicitamos la aclaración de la sentencia de segunda instancia en el sentido de explicar si procede la acumulación de tiempos públicos sin cotizaciones al ISS y tiempos cotizados al ISS, para acceder a la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, tal como lo han determinado la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.*
>
> *La Corte Constitucional expuso este criterio, en sentencia de unificación 769 de 2014, magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio, reiterada en sentencia T-514 de 2015; y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia SL1947-2020, radicación No. 70918, de fecha 1º de julio de 2020, magistrado ponente Lenis Gómez.*
>
> *Así mismo, el Consejo de Estado, Sección Segunda, también ordena el reconocimiento y pago de pensión de vejez con base en el Acuerdo 049 de 1990, con una tasa de reemplazo del 90%, incluso teniendo en cuenta tiempos públicos no cotizados al ISS (Hoy Colpensiones), sin tener que acudir a la Ley 71 de 1988. Estas providencias son: • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente Carmelo Perdomo Cuéter, sentencia de fecha 18 de febrero de 2021, radicado 25000-23-42-000-2017-05956-01 (2654-2019). • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente Gabriel Valbuena Hernández, sentencia de fecha 23 de abril de 2020, radicado 25000234200020160241701 (3351-2018).*
>
> *La indeterminación sobre este punto, que puede generar confusión sobre el sentido de*

> *la decisión, puede generar conflictos no solo en un eventual proceso ejecutivo, sino que incluso puede dar lugar a un nuevo proceso ordinario por ausencia de título; por lo que no solo debe aclararse la parte motiva sino adicionarse la parte resolutiva incluyendo este punto".*

Para resolver se hacen las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Inicialmente debe precisarse, en cuanto a la aclaración de providencias se refiere nuestra norma procesal aplicable al procedimiento laboral en virtud del principio de integración contemplado en el art. 145 del C.P.L., en su artículo 285 del C.G.P., preceptúa:

> *«La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.*
>
> *En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia...».*

Lo anterior significa que una providencia, bien se trate de un auto o de una sentencia, solamente puede ser objeto de aclaración cuando contenga frases o conceptos que *«ofrezcan verdadero motivo de duda»*. Sobre el tema se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, entre muchas otras en providencia del 28 de julio de 2010, expediente 11001-22-03-000-2010-00545-01, en la cual indicó:

> *«Más exactamente, para aclarar una sentencia es menester un yerro, incoherencia, inconsistencia, asimetría, anfibología, o ambigüedad, sea en su parte resolutiva, ora en la motiva con incidencia en la decisión adoptada, en particular, tratándose "de redacción ininteligible, o del alcance de un concepto o de una frase en concordancia con la parte resolutiva del fallo" (cas. civ. sentencia de 24 de junio de 1992, XLIX, 47), constitutiva de una seria incertidumbre en torno a su sentido genuino, prístino o diáfano, en cuyo caso, no sólo es deseable sino exigible la aclaración.*
>
> *Empero, la aclaración excluye la posibilidad de revocar, reformar o variar la decisión, por estar vedada al mismo juez la modificación, reforma o revocación de su propia providencia. **Tampoco, sirve al propósito de un análisis nuevo de la cuestión**, no es otra instancia o recurso, ni autoriza a los sujetos y autoridades procesales para reabrir el debate o buscar reformar el fallo, y estricto sensu debe versar sobre verdaderos motivos de duda».* (Subraya y negrillas fuera de texto).

Igualmente, en la citada sentencia del 24 de junio de 1992 se dejó sentado que:

> *«Al precisar la doctrina y la jurisprudencia los alcances del remedio de la aclaración de los fallos, ha insistido reiteradamente que los conceptos o frases que le abren paso a dicho correctivo "no son los que surjan de las dudas que las partes*

> *aleguen acerca de la oportunidad, veracidad o legalidad de las afirmaciones del sentenciador; sino aquellos provenientes de redacción ininteligible, o del alcance de un concepto de una frase en concordancia con la parte resolutiva del fallo».* (Subraya fuera del texto).

De otra parte, en cuanto a la adición de providencias se refiere, nuestra norma procesal civil aplicable al procedimiento laboral en virtud del principio de integración contemplado en el art. 145 del C.P.C., en su artículo 287 del C.G.P., preceptúa:

> ***«ARTÍCULO 287. ADICIÓN.*** *Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*
>
> *El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero sí dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.*
>
> *(...)».*

Lo anterior significa que una providencia, bien se trate de un auto o de una sentencia, solamente puede ser objeto de adición cuando «*omita la resolución de cualquiera de los extremos de la Litis*».

En este orden de ideas, analizada la solicitud efectuada por el apoderado judicial dela actora y contrastada la misma con la providencia emitida por esta Sala de Decisión el día 30 de noviembre del 2023, es claro que no resulta procedente la aclaración y/o adicion pretendida por no encuadrar la misma en ninguno de los supuestos normativos o jurisprudenciales citados y analizados previamente; por cuanto no contiene conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella, como tampoco se omitió resolver *"sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento*".

En suma, lo que se observa en el presente asunto, es que los cuestionamientos del peticionario no están dirigidos a obtener una aclaración o adición de la providencia, sino a asegurar el cumplimiento de una sentencia por parte de Colpensiones al momento de analizar el reconocimiento de la pensión ordenada por esta Corporación, sin que ello sea procedente, por lo que la solicitud elevada deberá ser denegada, precisándose al memorialista la providencia dictada por esta Corporación lo fue en consonancia con el objeto de los recursos de apelación interpuestos por la

demandante y COLPENSIONES, advirtiéndose en la providencia respecto de la cual se solicita la adición y/o aclaración las razones fácticas, jurídicas y probatorias que apoyaban la determinación de la Sala, para declarar que la demandante es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como ordenó a COLPENSIONES analizar y reconocer la pensión de vejez bajo la normatividad más favorable, en los términos previstos en la Ley 33 de 1985, Ley 71 de 1988 o Acuerdo 049 de 1990.

Puntualmente, esta Corporación indicó:

> *"Bajo tales aspectos, se observa, en este asunto, concurren entes de derecho privado (Porvenir S.A.) y de derecho público (Colpensiones), las cuales, estima la señora Bertha Nancy Eslava de Fuentes, son los llamados a responder por la inexistencia de la afiliación y la consecuente pensión de vejez, por lo que, acogiendo lo explicado por la Corte Constitucional, es claro que no se puede remitir el proceso a la jurisdicción contenciosa para que resuelva lo pertinente frente a la pensión de vejez, pues si bien, la demandante tiene la calidad de empleada pública, al dirigirse la pretensión principal a la inexistencia del traslado, es dable conocer de la prestación pensional al ser accesoria, lo que conlleva a revocar este punto y en consecuencia procederá la Sala a resolver el reconocimiento de la pensión de la señora BERTHA NANCY ESLAVA DE FUENTES, recogiendo entonces cualquier postura que en contrario se hubiere tomado en el pretérito, por lo ya expuesto.*
>
> *De manera preliminar y para dar solución al presente asunto sea del caso señalar, respecto del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe recordarse, este beneficio de acuerdo con la modificación introducida al artículo 48 de la Constitución Política, por medio del parágrafo transitorio 4º del Acto Legislativo 01 de 2005 , tiene dos límites temporales, el primero de ellos, el 31 de julio de 2010, término para que los beneficiarios del citado régimen acreditaran el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas de cotización o tiempo de servicios con miras a que tales supuestos y el monto de la pensión de vejez, fueran los establecidos en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados; y el segundo,* ***en el evento de acreditar 750 semanas de cotizaciones acumuladas a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo -29 de julio de 2005- el beneficiario del régimen de transición continuaría cobijado por el mismo hasta el año 2014.***
>
> *Conforme a lo anterior, reposa registro civil de nacimiento de la demandante (Archivo 33, pág. 01ProcesoDigitalizado.expediente digital) que da cuenta de su fecha de nacimiento el 22 de julio de 1958, ello permite concluir que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, al 30 de junio de 1995 contaba con 36 años de edad, por tanto, en principio sería beneficiaria del régimen de transición. Igualmente, la actora durante su vida laboral efectuó cotizaciones al extinto Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones desde el 17 de agosto de 1977 al 31 de agosto de 2000, para un total de 521,34 semanas (archivo 03, páginas 166 a 173, actualizado al 05 de junio de 2013), igualmente, se encontraba laborando inclusive, para el Hospital Simón Bolívar III Nivel Empresa Social del Estado desde el 14 de enero de 1994 al 16 de diciembre de 2015, por lo menos, fecha en que se expidió el certificado laboral para trámite pensional que reposa a página 3, archivo 03, carpeta 01) reuniendo un total de 1307 semanas , esto, excluyendo los tiempos simultáneos, por manera que, la demandante conservó el régimen de transición ya que la edad de los 55 años la cumplió el 22 de julio de 2013 y, al 29 de julio de 2005 contaba con más de 750 semanas (tenia a dicha data 774 semanas).*
>
> *No obstante, el análisis efectuado, con el fin de verificar la ley pensional aplicable a la señora BERTHA NANCY ESLAVA DE FUENTES de manera concreta (Ley 33 de 1985, Ley 71 de 1988 o Acuerdo 049 de 1990), se hace necesario imputar la totalidad de*

semanas cotizadas por la demandante a la fecha de proferirse este fallo junto con la novedad de retiro e IBC, pues nótese, en este asunto solo obra información pensional hasta el 16 de diciembre de 2015 sin que se encuentre actualizada la misma, habiendo transcurrido a la fecha de esta sentencia 7 años y 11 meses, debido a los antecedentes citados en precedencia, ***siendo indispensable que una vez se trasladen los aportes y demás rubros ordenados como consecuencia de la inexistencia de la afiliación por parte de PORVENIR a COLPENSIONES, de no haberse efectuado aun, COLPENSIONES proceda a convalidar la historia laboral y analizar y reconocer la pensión más favorable a la demandante en los términos de las leyes en cita****. Lo anterior, como quiera que la demandante no está llamada a sufrir las consecuencias negativas del trámite procesal de esta litis.*

(…)

R E S U E L V E

PRIMERO: REVOCAR *el numeral* ***QUINTO*** *de la sentencia proferida y en su lugar, DECLARAR que la demandante es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en consecuencia deberá* ***COLPENSIONES*** *analizar y reconocer la pensión de vejez bajo la normatividad más favorable, en los términos previstos en la Ley 33 de 1985, Ley 71 de 1988 o Acuerdo 049 de 1990, conforme a la parte motiva.".*

De modo que, es claro que Colpensiones al analizar la viabilidad del reconocimiento de la pensión de vejez de la demandante bajo el imperio del Acuerdo 049 de 1990, va inmerso el cómputo de la totalidad de semanas laboradas, lo que hace improcedente acoger la solicitud elevada.

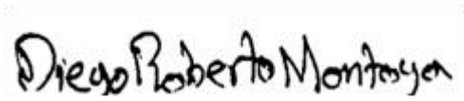
En mérito de lo anterior la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C.,

R E S U E L V E

PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de aclaración y/o adición de la providencia de fecha 30 de noviembre de 2023, conforme a lo expuesto.

SEGUNDO: En firme el presente auto, impártasele al expediente el trámite respectivo.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



ÁNGELA LUCIA MURILLO VARÓN



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL

BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR MARIA DISNEY MADARIAGA QUINTERO CONTRA LA ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-ADRES (RAD. 28 2021 00182 01).

Bogotá D.C. veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO

Arriban las presentes diligencias a esta Sala de Decisión a efecto de resolver la solicitud de aclaración elevada por la apoderada judicial de la parte demandante **MARIA DISNEY MADARIAGA QUINTERO** (carpeta 02, archivos 11) a través de la cual solicita:

> *"Como se observa, el Numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la Sentencia procedió a condenar a la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES -, a "reconocer y pagar a la demandante* ***MARIA DISNEY MADARIAGA QUINTERO****, las condenas debidamente* ***indexadas****", sin embargo, no determina de forma clara la fecha que se debe tener en cuenta para efectos de realizar dicha indexación.*
>
> *(...)*
>
> *No obstante, si se tiene que la fecha de radicación de la reclamación efectuada por la demandante MARIA DISNEY MADARIAGA QUINTERO fue el día 28 de febrero de 2019, se cumplen los dos meses para efectos de verificar y validar, a través del proceso de Auditoría Integral, el día 30 de abril de 2019, fecha que se cuenta para efectuar la comunicación de resultado del trámite administrativo, contemplado en el artículo 2.6.1.4.3.10 del Decreto 780 de 2016; empero, se cuenta con un mes, después de la fecha de cierre efectivo y certificación del proceso de auditoría, para realizar el pago efectivo a la reclamante, en virtud del artículo 2.6.1.4.3.12 de la misma normatividad.*
>
> *Así las cosas, la ADRES contaba con un plazo de 3 meses para adelantar el procedimiento administrativo de verificación de la reclamación presentada por la señora MADARIAGA QUINTERO, y, posteriormente, efectuar el pago reclamado por la demandante, en consecuencia, la fecha de cumplimiento de la obligación se cumpliría el día 31 de mayo de 2019, que, a partir del día siguiente debería ser la que entraría a calcularse para efectos de liquidar la condena que consta en el numeral segundo de la sentencia revocada parcialmente, es decir, a partir del* ***1 de junio de 2019****.*
>
> *Por lo anterior, el Honorable Magistrado debe pronunciarse en el sentido de aclarar la sentencia de segunda instancia, en el sentido que se especifique cuál es la fecha que debe tenerse en cuenta para contabilizar la indexación allí ordenada, para así poder*

establecer de forma clara y específica la obligación que permita cumplir cabalmente la orden impartida.".

Para resolver debe precisarse, en efecto en la parte resolutiva de la sentencia, numeral primero se indicó: "***REVOCAR PARCIALMENTE*** *el numeral segundo de la sentencia, en cuanto se ordenó el pago de intereses moratorios, en su lugar, se* ***CONDENA*** *a la A.D.R.E.S. a reconocer y pagar a la demandante* ***MARIA DISNEY MADARIAGA QUINTERO****, las condenas debidamente* ***indexadas****.".*

En este orden, es claro para esta Corporación que no hay lugar a realizar aclaración alguna, por cuanto en el contenido de la sentencia y en la parte resolutiva se indicó que las sumas debidas deberán ser indexadas, debiendo la demandada ADRES aplicar las normas que regulan el asunto sometido a litigio al momento de dar cumplimiento, a saber, Decreto 780 de 2016 y demás normas concordantes.

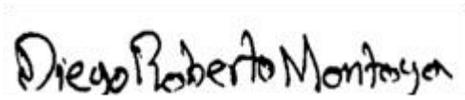
En mérito de lo anterior la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C.,

R E S U E L V E

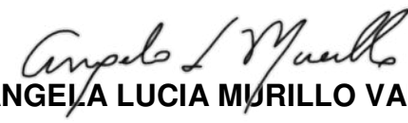
PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud elevada por la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: En firme el presente auto, impártasele al expediente el trámite respectivo.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



ÁNGELA LUCIA MURILLO VARÓN



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado ponente

Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

Procede la Sala a resolver recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante **LUIS HERNANDO REY SERRANO**[1], contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2023 y notificada por edicto de fecha cuatro (04) de diciembre de la misma anualidad, dado su resultado adverso en el proceso ordinario laboral que promovió en contra de la sociedad **FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA.**

I. ANTECEDENTES

Mediante sentencia del 30 de noviembre de 2023, la Sala de Decisión resolvió el recurso de apelación presentado por la parte demandada y el grado jurisdiccional de consulta en su favor, contra la sentencia proferida por el Juez

[1] Allegado vía correo electrónico memorial fechado veintidós (22) de enero de 2024.

Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 28 de agosto del 2023, así:

RESUELVE

> ***PRIMERO: REVOCAR*** *la sentencia proferida en primera instancia para en su lugar ABSOLVER a la demandada, FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por el señor LUIS HERNANDO REY SERRANO.*
>
> ***SEGUNDO:*** *SIN COSTAS en esta instancia. Se revocan las de primer grado, las cuales corren a cargo de la parte demandante.*

La sentencia referida fue notificada por edicto el día cuatro (04) de diciembre de 2023, y publicada en el micrositio de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá[2], mediante memorial allegado vía correo electrónico el veintidós (22) de enero de 2024, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso extraordinario de casación.

II. CONSIDERACIONES

Al respecto la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de manera reiterada ha precisado que la viabilidad del recurso de casación está supeditada a que se acrediten los siguientes presupuestos: *(i)* se instaure contra sentencias que se profieran en procesos ordinarios; ***(ii)*** **se interponga en término legal** y por quien tenga la calidad de parte y acredite la condición de abogado o, en su lugar esté debidamente representado por apoderado; y *(iii)* se acredite el interés económico para recurrir previsto en el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

En relación al segundo presupuesto fáctico, surge imperante señalar que de acuerdo a las estipulaciones

---

[2] https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-laboral/149

contenidas en el artículo 88 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el Decreto Ley 528 de 1964, artículo 62, indica que en materia civil, penal y laboral el recurso de casación puede interponerse dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la sentencia de segunda instancia.

En este orden, se reitera que la Sala profirió sentencia el 30 de noviembre de 2023, misma que fue notificada por edicto fijado y publicado el día cuatro (04) de diciembre de la misma anualidad en el micrositio de este Tribunal, como se advierte en la página (*05Edicto.pdf*) del expediente digital de la segunda instancia y en el sistema de consulta de procesos Siglo XXI.

Así las cosas, el término de 15 días para interponer el recurso extraordinario de casación en el presente proceso, vencía el 17 de enero de 2024, no obstante, el recurso extraordinario fue allegado vía correo electrónico el veintidós (22) de enero de 2024, es decir, tres (3) días después del término legal, conforme da cuenta el informe secretarial que antecede y lo ratifica el documento *10CorreoRecursoCasacion.pdf* y *11RecursoCasacion.pdf* del cuaderno digital de segunda instancia. En consecuencia, se rechazará por extemporáneo el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante.

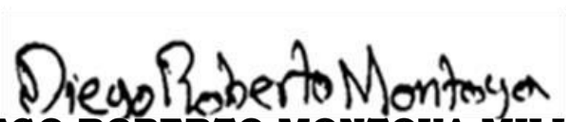
DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

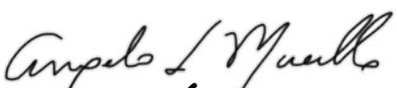
RESUELVE:

PRIMERO: RECHAZAR por extemporáneo el recurso extraordinario de casación impetrado por la parte demandante, contra la sentencia proferida en esta instancia el treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), por lo expuesto en la parte motiva de este auto.

SEGUNDO: En firme el presente proveído, continúese con el trámite correspondiente.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado



ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

En uso de permiso
ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO
Magistrado

Proyectó: DR

MAGISTRADO DR. **DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN**

Al despacho el expediente de la referencia, informándole que la parte demandante **LUIS HERNANDO REY SERRANO,** allegó de manera extemporánea memorial fechado el veintidós (22) de enero de 2024, mediante el cual interpone recurso extraordinario de casación contra el fallo de segunda instancia dictada por esta Corporación el 30 de noviembre de 2023 y notificada por edicto de fecha cuatro (04) de diciembre de la misma anualidad.

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

Daniela Rojas L.

DANIELA CAROLINA ROJAS LOZANO

Oficial Mayor

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR FRANCISCO LUIS PUMAREJO AGUIRRE CONTRA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A. (RAD. 01 2021 00403 01).

Bogotá D.C. veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO

Ingresan las presentes diligencias al despacho con solicitud de la apoderada del demandante, mediante la cual solicita se corrija el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia.

Al respecto, se advierte que en el proveído dictado el pasado 31 de octubre de 2023 (carpeta 02, archivo 11), existe una imprecisión, toda vez que por error involuntario se indicó en el numeral tercero de la parte resolutiva, que se confirmaría en lo demás la sentencia proferida por el "*Juez 2º Laboral del Circuito de Bogotá"* siendo lo propio la Juez 1º Laboral del Circuito de Bogotá, quien dictó la sentencia de primera instancia dentro del asunto y la cual fue objeto de apelación y decisión por parte de esta Sala.

En consecuencia y de conformidad con el artículo 286 del C.G.P.[1], disposición aplicable por analogía al proceso laboral de conformidad con el art. 145 del C.P.L., se procederá a enmendar el error que existió por omisión o cambio de

[1] ***ARTÍCULO 286. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y OTROS.*** *Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto. (...)*

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella."

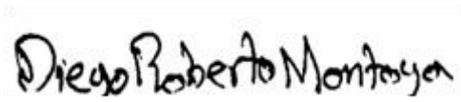
palabras, quedando entonces el ordinal tercero de su parte resolutiva, del siguiente tenor:

> *"**SEGUNDO**: **CONFIRMAR** en lo demás la sentencia proferida por la Juez 1º Laboral del Circuito de Bogotá de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia".*

En lo demás, la sentencia permanece incólume.

En firme el presente proveído, continúese con el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



ÁNGELA LUCIA MURILLO VARÓN



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL

BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR LUIS VICENTE BELTRÁN HERRERA CONTRA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES – y la vinculada como litisconsorte necesaria la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. hoy GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. (RAD. 02 2019 00848 01).

Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

A U T O

El apoderado de la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. hoy GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. solicita la adición de la sentencia proferida por esta Corporación el 30 de noviembre del 2023 (Archivo 14 expediente digital), sobre el siguiente aspecto:

> *"El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá en sentencia del 15 de agosto del 2023 y en relación con la llamada a integrar el litisconsorte necesario la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP hoy GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., resolvió:*
>
> *"SEXTO: ABSOLVER al GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. de cualquier pretensión incoada en su contra".*
>
> *El ad – quem en la sentencia del 30 de noviembre de 2023 por medio de la cual resolvió: "REVOCAR la sentencia proferida por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y, en su lugar" OMITIO pronunciarse sobre la situación jurídica de la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.*
>
> *ESP hoy GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. y por ello, debe proferir sentencia complementaria que la adiciones y resuelva la situación jurídica del litisconsorte necesario."*

Para resolver se hacen las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

En cuanto a la adición de providencias se refiere, nuestra norma procesal civil aplicable al procedimiento laboral en virtud del principio de integración contemplado en el art. 145 del C.P.C., en su artículo 287 del C.G.P., preceptúa:

> *"**ARTÍCULO 287. ADICIÓN.** Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*
>
> *El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero sí dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.*
>
> *(...)."*

Lo anterior significa que una providencia, bien se trate de un auto o de una sentencia, solamente puede ser objeto de adición cuando *"omita la resolución de cualquiera de los extremos de la Litis"*.

En este orden de ideas, se observa que en el presente asunto los cuestionamientos del peticionario están dirigidos a señalar que no hubo pronunciamiento sobre la situación jurídica de la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. hoy GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., sin embargo, revisada la sentencia cuya adición se pretende y contrastada con las pretensiones del libelo, se advierte ningún pedimento se elevó frente a dicha sociedad (*Archivo 01 expediente digital, págs. 4 y 5)*

PRETENSIONES

DECLARACIONES

PRIMERA: Se declare que, el demandante tiene derecho a que COLPENSIONES le reconozca, liquide y pague la Pensión de Vejez, aplicando la ley 33 de 1985 y demás normas concordantes, conforme a lo establecido en el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993.
SEGUNDA: Se declare que, la entidad demandada le adeuda al afiliado, el valor del retroactivo por concepto de mesadas pensionales causadas y dejadas de percibir.
TERCERA: Que, el accionante tiene derecho al pago de los intereses corrientes, que se causen hasta la fecha de pago de la mesada pensional por vejez.
CUARTA: Que, el accionante tiene derecho al pago de los intereses moratorios, que se causen hasta la fecha de pago de la mesada pensional por vejez.
QUINTA: Se declare, el reconocimiento de otros derechos laborales que el despacho considere que se le adeudan al demandante, haciendo uso de las facultades de ultra y extra petita, reguladas por el artículo 50 del C.P.T.
SEXTA: Se declare, el reconocimiento de la indexación del valor total en pesos que se le adeuda al demandante.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicito se acceda a las siguientes:

CONDENAS

PRIMERA: Se condene a la demandada a que, Reconozca, Liquide y pague la Pensión de Vejez del afiliado, conforme lo establecido por la ley 33 de 1985 y demás normas concordantes, conforme a lo establecido en el régimen de transición consagrado en la ley 100 de 1993.
SEGUNDA: Se condene al pago del valor de retroactivo pensional, por concepto de mesadas pensionales causadas y dejadas de percibir.

TERCERA: Se condene al reconocimiento y pago de los intereses corrientes, que se han causado y se lleguen a causar hasta la fecha de reconocimiento y pago de la Pensión Vejez.
CUARTA: Se condene al reconocimiento y pago de los intereses moratorios, que se han causado y se lleguen a causar hasta la fecha de reconocimiento y pago de la Pensión Vejez.
QUINTA: Se condene a la indexación de todos los dineros o valores adeudados por COLPENSIONES, al momento de realizar el respectivo pago.
SEXTA: Al pago de otros derechos que, el despacho considere que se le adeudan al demandante, haciendo uso de las facultades de ultra y extra petita.
SÉPTIMA: Se condene en costas a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, quien interviene como demandada.

La EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. hoy GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. fue vinculada a la litis en virtud de la excepción previa formulada por COLPENSIONES (Acta audiencia 25 de enero del 2022 Archivo 11 expediente digital)

Advirtiéndose si bien en el fallo de primera instancia en la parte resolutiva se indicó: *"SEXTO: ABSOLVER al GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. de cualquier pretensión incoada en su contra"*, lo cierto es que como ya se vio ninguna pretensión se formuló frente a dicha vinculada como litisconsorte, por ello fue en virtud de los argumentos de apelación de COLPENSIONES y el grado jurisdiccional de consulta que se surtió en su favor, que esta instancia revocó la sentencia de primer grado en el sentido de ordenar a esta entidad -COLPENSIONES- a reconocer la pensión de vejez del actor en virtud de la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 del 2003 y no con base en la Ley 33 de 1985 como lo había decidido el Juez de primer grado, situación que en manera alguna irroga efectos a la sociedad vinculada, precisándose pese a que la decisión de esta Corporación fue la de REVOCAR la sentencia proferida por el JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ lo que podría entenderse como también la de revocar el numeral sexto de lo decidido por el *a quo,* como ya se explicó dicha revocatoria fue respecto de las condenas que se profirieron a Colpensiones y por ende ningún pronunciamiento se hizo frente al GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. respecto de quien como ya se dijo no se elevaron pretensiones por la parte actora y en esa medida es claro que en este asunto no hubo por parte de esta instancia omisión en la resolución de uno de los extremos de la Litis.

Téngase en cuenta como ya se mencionó, el fallo dictado por esta Corporación lo fue en consonancia con el objeto del litigio y el recurso de apelación presentado por la demandada y el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES, exponiendo las razones fácticas, jurídicas y probatorias que apoyaban la determinación de la Sala, aunado a que la condena fue única y exclusivamente frente a COLPENSIONES por una prestación pensional que se encuentra a cargo del sistema general de pensiones y no de la sociedad vinculada al proceso como litisconsorte necesario.

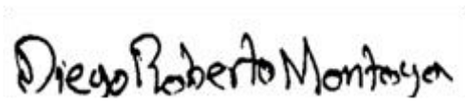
En este orden de ideas, no hay lugar a emitir un pronunciamiento adicional sobre la materia objeto de controversia.

Por lo expuesto, no hay lugar a dictar sentencia complementaria en este asunto.

R E S U E L V E

PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de adición de la sentencia elevada por el apoderado de la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. hoy GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL
BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

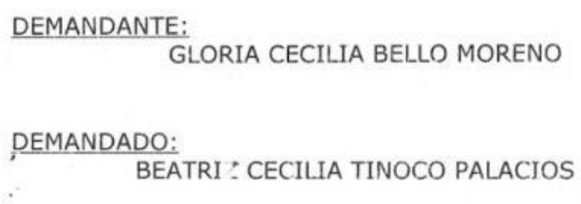
PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR GLORIA CECILIA BELLO MORENO CONTRA BEATRIZ CECILIA TINOCO DE SANTACRUZ (08 2020 00125 01).

Bogotá D.C. veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO

Arriban las presentes diligencias a esta Sala de Decisión a efecto de resolver la solicitud de aclaración elevada por la apoderada judicial de la parte demandante **GLORIA CECILIA BELLO MORENO** (carpeta 02, archivos 11 y 12) a través de la cual solicita i) Se liquide el valor de las costas a cargo de la demandada, ii) se aclare que la demandada se identifica con los dos nombres BEATRIZ CECILIA TINOCO DE SANTACRUZ y BEATRIZ CECILIA TINOCO DE PALACIO y, iii) se corrija el segundo apellido ya que es PALACIO y no PALACIOS.

Para resolver debe precisarse, si bien en el encabezado del texto del fallo proferido en esta instancia (*«09.FalloSegundaInstancia.pdf»*), se indicó «*BEATRIZ CECILIA TINOCO* ***PALACIOS***», dicho error obedeció a que, en el nombre de la carátula del expediente se relacionó el mismo (página 01, archivo 01):


DEMANDANTE:
GLORIA CECILIA BELLO MORENO

DEMANDADO:
BEATRI : CECILIA TINOCO PALACIOS

No obstante, se advierte, una vez revisado el segundo apellido de la llamada a juicio esta Sala no puede verificar que sea PALACIO, como lo asegura la memorialista. Al respecto, debe precisarse, la demanda se encuentra dirigida en contra de la señora **BEATRIZ TINOCO DE SANTACRUZ** (archivo 01, páginas 2 a 11), admitiéndose en tal sentido (archivo 01, páginas 38 y 39), se profirió fallo en primer

grado el 07 de marzo de 2023 (archivo 17) y allí se condenó a la señora **BEATRIZ CECILIA TINOCO DE SANTACRUZ.**

Igualmente, en el contenido de la sentencia proferida por esta Corporación adiada 30 de agosto de 2023 (archivo 09), se hace referencia al nombre correcto y completo de la pasiva, pues siempre se relacionó a la señora **BEATRIZ TINOCO DE SANTACRUZ** (casada), debiendo advertirse, esta solicitud no puede ser objeto de corrección pues al tenor de lo dispuesto en el artículo 286 del Código General del Proceso, tal figura solo procede en «*los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella*», lo cual no sucedió en el presente asunto, pues en la parte resolutiva quedó consignado: "***CONFIRMAR*** *la sentencia proferida por el Juzgado (8º) Laboral del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia".*

De igual manera, tampoco resulta procedente entrar a liquidar el valor de las costas ya que, en la parte resolutiva de la sentencia, numeral 2º se dispuso: *"**COSTAS** en esta instancia a cargo de la demandada"* y consecuente con ello se procedió a fijar el valor de las agencias en derecho así (ver carpeta 02, archivo 09, página 10):

AGENCIAS EN DERECHO: Se fija como valor por concepto de agencias en derecho la suma de $1.160.000 la cual deberá ser incluida en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.

Diego Roberto Montoya

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

En mérito de lo anterior la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C.,

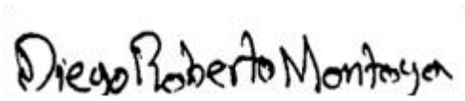
R E S U E L V E

PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de corrección de la providencia proferida el 30 de agosto de 2023, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: En firme el presente auto, impártasele al expediente el trámite respectivo.

TERCERO: En lo demás, la sentencia permanece incólume.

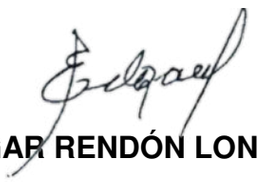
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



ÁNGELA LUCIA MURILLO VARÓN



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR JAIME ALBERTO MORENO MORA CONTRA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-. (RAD. 10 2020 00408 01).

Bogotá D.C. veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO

Ingresan las presentes diligencias al despacho con solicitud del demandante, mediante la cual solicita se corrija el nombre en la parte resolutiva de la sentencia.

Al respecto, se advierte que en el proveído dictado el pasado 30 de agosto de 2023 (carpeta 02, archivo 05), existe una imprecisión, toda vez que por error involuntario se indicó en el numeral primero de la parte resolutiva: "***MODIFICAR*** *el numeral* ***PRIMERO*** *y* ***SEGUNDO*** *del fallo de primer grado en cuanto a que COLPENSIONES debe reconocer y pagar la garantía de pensión mínima para desmovilizados al señor JAIME ALFREDO MORENO MORA.",* siendo lo propio mencionar que el nombre del actor es **JAIME ALBERTO MORENO MORA.**

En consecuencia y de conformidad con el artículo 286 del C.G.P.[1], disposición aplicable por analogía al proceso laboral de conformidad con el art. 145 del C.P.L., se procederá a enmendar el error que existió por omisión o cambio de

[1] ***ARTÍCULO 286. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y OTROS.*** *Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto. (…)*

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella."

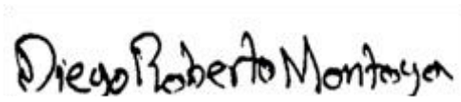
palabras, quedando entonces el ordinal primero de la parte resolutiva, del siguiente tenor:

> *"MODIFICAR el numeral PRIMERO y SEGUNDO del fallo de primer grado en cuanto a que COLPENSIONES debe reconocer y pagar la garantía de pensión mínima para desmovilizados al señor* ***JAIME ALBERTO MORENO MORA*** *a partir 06 de septiembre del 2019, precisándose, el retroactivo adeudado desde dicha data hasta el 30/03/2023 asciende a $42.904.325,53, el cual se seguirá causando hasta la inclusión en nómina, conforme a lo expuesto en precedencia.".*

En lo demás, la sentencia permanece incólume.

En firme el presente proveído, continúese con el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



ÁNGELA LUCIA MURILLO VARÓN



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	**11001310502920210017302**
CLASE DE PROCESO	**ORDINARIO LABORAL**
DEMANDANTES	**YUDI MARCELA GONZÁLEZ GONZÁLEZ**
DEMANDADO	**BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA SA**

En Bogotá D. C. a los veintiún (21) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024), el Magistrado Ponente en asocio de los demás miembros integrantes de la Sala de Decisión, en atención a lo dispuesto en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, que adoptó como legislación permanente el Decreto Legislativo 806 de 2020, procede a dictar la siguiente,

PROVIDENCIA

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto de fecha 23 de marzo de 2023, mediante el cual rechazó de plano el incidente de nulidad propuesto.

ANTECEDENTES

YUDI MARCELA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, a través de apoderado judicial presentó demanda ordinaria laboral contra el BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA SA. a fin de que se condene a dicha sociedad al reintegro a un cargo similar categoría, salarios, prestaciones, intereses, indemnizaciones, auxilios legales y extralegales, como consecuencia de la terminación ilegal del contrato de trabajo a término indefinido, el 29 de noviembre de 2021, en razón de actuaciones de acoso, persecución, violación al debido proceso y desconocimiento del fuero de salud que la cobijaba (archivo 01 de la carpeta 1ª inst. exp. Digital).

Mediante auto del 22 de junio de 2021 (archivo 03 ibid.), el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de esta ciudad inadmitió el escrito inicial, porque entre otras razones, la demandante no cumplió con la exigencia prevista en el inciso 4° del artículo 6° del entonces Decreto 806 de 2020, relacionada con la remisión de una copia de la demanda a la dirección de notificación electrónica de la parte pasiva. Con auto del 11 de marzo de 2022 (archivo 12 ibid.) el despacho judicial rechazó la demanda, en razón a que la parte actora no cumplió con dicho requisito.

La parte demandante interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación (archivo 13 ibid.), señalando que ese requisito no le era exigible, por cuanto con el escrito de subsanación de la demanda solicitó la aplicación de medidas cautelares, y en ese orden, el aludido Decreto 806, releva del cumplimiento de esa actuación extraprocesal, cuando la demanda va acompañada de este tipo de herramienta coercitiva.

El recurso horizontal fue despachado de manera desfavorable por el juzgador de primer grado, con proveído del 5 de abril de 2022, en su lugar concedió la alzada en el efecto suspensivo (archivo 14 ibid.). La apelación fue resuelta por el Tribunal, mediante auto del 21 de octubre de 2022, confirmando la providencia impugnada (archivo 01, carpeta 02SegundaInstancia, subcarpeta 02ApelacionAuto).

Así, devuelto el expediente al juzgado de origen, este emitió auto del 2 de diciembre de 2022, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Superior (archivo 18, carpeta 1ra instancia).

El 10 de febrero de 2023, la parte actora radicó memorial de incidente de nulidad, insistiendo en que el juzgador de primera instancia vulneró el debido proceso con el proveído que rechazó la demanda con el aval del Tribunal, supuestamente, porque, la excepción que hace el Decreto 806 de 2020, para no exigir el envío de la demanda a la parte pasiva, no opera para las medidas cautelares del art. 85 A del CPT y de la SS; así, precisó que con una medida cautelar solicitada no se podía rechazar la demanda, por lo que con tal actuación, se había incurrido en una irregularidad procesal de tipo constitucional que debía enmendarse (archivo 19 ibid.).

Con auto del 23 de marzo de 2023, el juzgador de primera instancia decidió rechazar de plano la nulidad solicitada, aduciendo para el efecto, que no podía pronunciarse sobre el asunto, dado que, todo lo relacionado con el rechazo de la demanda fue abordado por el Superior, y a ello debía estarse la parte actora, adicional

al hecho de que dicho litigante no señaló cuál era la causal del artículo 133 del CGP, que se consideraba infringida (archivo 20 ibid.).

El juzgado, luego de resolver el 5 de julio de 2023, de manera desfavorable una solicitud de aclaración contra dicho auto (archivo 22 ibid.), la parte actora interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación (archivo 23 ibid.), para lo cual insistió en la violación al debido proceso, tanto en la actuación del juzgado como del Tribunal, pues el hecho de que se hubiera decidido en esa forma, no implica que haya quedado zanjado el asunto, pues para dicha parte, lo resuelto va en contravía de la jurisprudencia constitucional sobre la aplicación del Decreto 806 de 2020 y la Ley 2213 de 2022, en cuanto a la exigencia del envío de la demanda a la parte pasiva. Mediante auto del 17 de agosto de 2023, el *a quo* resuelve desfavorablemente el recurso horizontal, y concede la alzada en el efecto suspensivo (archivo 24 ibid.).

Llegado el asunto a esta Corporación, se emitió proveído del 4 de octubre de 2023, a través del cual se admitió la apelación y se corrió traslado para la presentación de alegatos (archivo 03, carpeta 02SegundaInstancia, subcarpeta 03ApelacionAuto); no obstante, la parte impugnante radicó el 11 de octubre de esa anualidad, escrito de recusación contra los integrantes de la Sala de Decisión, amparado en la causal consignada en el numeral 7° del artículo 141 del CGP, relacionado con las denuncias mutuas entre dicha parte y los magistrados por cuenta de actuaciones de tutela, lo cual, en su criterio, de mantener el trámite en el despacho asignado, vulnera el principio de imparcialidad (archivo 04 ibid.).

Ante ello, la Sala conformada por los magistrados Elcy Jimena Valencia, Diana Marcela Camacho y Édgar Rendón Londoño, emitieron de manera conjunta el proveído del 13 de octubre de 2023 (archivo 05 ibid.), a través del cual declararon fundada la causal de recusación propuesta por la parte actora, al aceptar el tema relacionado con las quejas entre sí, propuestas ante las autoridades competentes, por cuenta de las actuaciones del apoderado de dicha parte. En ese orden, dispusieron separarse del conocimiento del proceso y remitir las diligencias al magistrado(a) que seguía en turno de la Sala de decisión No. 2 de este Tribunal.

El asunto le correspondió al Magistrado Dr. Marceliano Chávez Ávila quien, en compañía de las demás integrantes de la Sala de Decisión, con auto del 28 de noviembre de 2023, declaró infundada la recusación propuesta por el abogado Dr. Yeisón Andrés González, por lo que ordenó la devolución al Despacho en donde se tramita la apelación del auto que rechazó la nulidad, pues en criterio de dicha

colegiatura, no se daba los supuestos de la causal alegada, concretamente la vinculación al trámite formal de denuncia o queja entre los investigados. Dijo allí la Sala (archivo 06 ibid.):

> *(…) En este orden de ideas, es claro que, para que el funcionario judicial se encuentre incurso en la citada causal de recusación o impedimento, no solo debe haberse promovido la denuncia penal o disciplinaria en su contra, sino que concomitante a ello, debe estar legal y jurídicamente vinculado a la investigación, esto es, para el proceso disciplinario, con la apertura formal de la investigación debidamente notificada.*
>
> *Al tenor de lo normado en el citado numeral de cara al registro de las actuaciones consultadas, se advierte que si bien se tiene conocimiento de la existencia de la queja disciplinaria con radicado No. 2022-967, que el ahora recusante promovió contra los magistrados DIANA MARCELA CAMACHO FERNANDEZ, ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLON y ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO, a las que hizo referencia y en las que basó la recusación, no se acreditó la vinculación legal de los recusados a dichas investigaciones, motivo por el cual no se cumplen los requisitos de dicha causal, máxime que era el mencionado abogado quien tenía la carga de la prueba, pues conforme a lo establecido el artículo 143, ibídem, para la formulación y el trámite de la recusación "Si la causal alegada es la del numeral 7 del artículo 141, deberá acompañarse la prueba correspondiente" lo que brilla por su ausencia ante tal carga procesal.*
>
> *De acuerdo con lo anterior, es claro para la Sala que los mencionados magistrados, quienes conforman la Sala de Decisión Primera de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá que actúa como juez de segunda instancia al interior del proceso con radicado 1100131050 21 2021 00173 02, no se encuentran incursos en la causal 7° del artículo 141 CGP, por lo que de conformidad con el último inciso del artículo 142 ibídem, habrá de declararse infundada la misma.*

El recusante solicitó mediante varios mecanismos procesales (aclaración y nulidad), alegando que ante el resultado negativo, el tramite a seguir era la remisión de las diligencias a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como superior jerárquico, para que resolviera de manera definitiva la legalidad de la recusación, lo cual fue descartado por esa Sala de decisión, con auto del 12 de diciembre de 2023 (archivo 11 ibid.), negando la nulidad y rechazando la solicitud del apoderado, tendiente a remitir las diligencias al Superior, con base en los argumentos expuestos en proveído CSJ ATL326-2023, sobre la improcedencia de que esa Corporación se pronuncie ante lo resuelto por un Tribunal en materia de recusaciones.

Finalmente, de manera equivocada, el expediente regresó al Juzgado de origen, quien lo devolvió con auto del 1° de marzo de 2024 (archivo 26, carpeta de primera instancia), para resolver el recurso de apelación pendiente.

CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta que se encuentra en firme la providencia emitida por la Sala de Decisión No. 2 de esta Corporación que declaró infundada la causal de recusación

alegada por el apoderado de la parte actora, en estricta consonancia con el recurso interpuesto y de conformidad con el numeral 6° del artículo 65 del CPTSS, procede la Sala a establecer si hay lugar a declarar o no fundado el incidente de nulidad propuesto por dicho litigante.

La promotora del litigio formuló incidente de nulidad de todo lo actuado con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política, alegando que se ha violado el debido proceso, pues el Decreto 806 de 2020, hoy Ley 2213 de 2022, no plantea ninguna excepción de la jurisdicción laboral frente a la solicitud de medidas cautelares para no enviar la demanda al extremo pasivo; que el hecho de que el Tribunal hubiera confirmado el auto que rechazó la demanda *"no significa absolutamente nada"* porque una decisión de ese tipo va en contravía de lo señalado por la jurisprudencia constitucional sobre dichas normas, en especial sobre la razonabilidad de que la parte actora cuando solicita medidas cautelares, por obvias razones no está en la obligación de enviar copia del libelo, previo al inicio de la acción.

Sostuvo dicha parte, que las irregularidades procesales cometidas son de tal envergadura, que comenzando por el juzgado y luego por el Tribunal, se inadmitió la demanda y, posteriormente, se rechazó, desconociendo que una medida cautelar debe resolverse primero, y luego referirse al escrito inicial, lo cual nunca se dio, y si más bien se le castigó con una medida amparada en un desconocimiento de las exigencias de una norma en materia de notificación y actuaciones previas a la acción.

Como quedó reseñado en los antecedentes, el *a quo* rechazó de plano la nulidad, aduciendo por un lado, que la solicitud no se refería a una causal de las previstas en el artículo 133 del CGP, aplicable por remisión del artículo 145 del CPT y de la SS, y por el otro, porque la discusión sobre el rechazo de la demanda ante el incumplimiento de la remisión de una copia del libelo, antes de la radicación formal ante la oficina de reparto, como lo previa el Decreto 806 de 2020, ya había sido definida por el Superior, por tanto, resultaba inviable entrar a reabrir ese debate, por contar con sello de cosa juzgada.

Ante ello, y como quiera que en el recurso de apelación el impugnante insistió en idénticos argumentos de la solicitud de nulidad, de entrada, debe anunciarse que dicha providencia se confirmará, conforme a las razones que se exponen a continuación.

En primer lugar, debe recordarse que en materia de nulidades procesales, en el procedimiento laboral no existe norma expresa y específica que regule esta institución

procesal; de ahí que, en virtud del artículo 145 del estatuto adjetivo laboral debemos remitirnos al canon 133 del CGP.

Sobre ellas hay que recordar que tanto la doctrina como la jurisprudencia reiteradamente ha señalado que obedecen a principios como el de **especificidad**, que hace referencia a la consagración positiva o criterio taxativo, según el cual no se estructura irregularidad alguna sino existe ley que la establezca; también el principio de **protección**, en el entendido que se debe proteger a la parte que resulta afectada con el vicio que la genera, pues pueden resultar lesionados sus derechos en litigio, y finalmente el principio de **convalidación**, según el cual se sanea el vicio que afecte el procedimiento con la aceptación expresa o implícita de la parte afectada, salvo algunas excepciones que por su naturaleza riñen o afectan de manera contundente la posibilidad de que se continúe con el trámite, en todo caso esa convalidación se precisa en aras de corresponder con la celeridad de la actuación.

Acorde con lo anterior, otro de los requisitos para proponer la invalidez procesal de algún acto dentro de la actuación y que guarda estrecha relación con el principio de protección que gobierna el régimen de las nulidades, es que quien alega la nulidad tenga interés jurídico para proponerla, esto es, que exista un perjuicio para el sujeto procesal con el vicio o irregularidad advertida.

Debe recodarse igualmente, que el juzgador previo a otorgarle el trámite correspondiente a la petición de nulidad, debe examinar por lo menos el cumplimiento mínimo de los requisitos antes mencionados, esto es, que la irregularidad alegada guarde cierta relación con los presupuestos para que se configure la invalidez del o los actos procesales; de ahí que, el operador debe verificar si se encuentra enlistada la causal de nulidad respectiva y su relación con los hechos que la fundamentan, además, si se trata de una causal saneable, verificar que esta no haya sido convalidada por la actuación expresa o tácita de la parte que supuestamente se vio afectada con la irregularidad procesal advertida.

Si los anteriores presupuestos no se cumplen al momento en el que se propone la nulidad, el operador judicial debe rechazarla de plano por así disponerlo el inciso cuarto del artículo 135 del CGP. Ello se informa, porque el incidente propuesto por el apoderado de la parte demandante, con el fin de que se declare la nulidad de la actuación, carece de los requisitos que se requieren para viabilizar su estudio y, por ende, llevar a su prosperidad.

En efecto, en el memorial del incidente de nulidad, la parte actora no refirió causal alguna de las previstas en la norma procesal antes referida, simplemente, reseñó al artículo 29 de la C.P. sobre el respeto al debido proceso, desconociendo que precisamente, la consagración del régimen de las nulidades tiene como objetivo la garantía de ese derecho fundamental, a partir de unas particulares situaciones, que buscan sanear aquellas irregularidades, que son de tal envergadura que afectan el derecho de defensa y contradicción de la parte afectada, por ello, la limitación en su proporción por el mismo legislador, dado que, no cualquier irregularidad, vacío, inconformidad o queja se erige en invalidez procesal.

Es cierto, que puede alegarse una especie de nulidad constitucional con fundamento en el citado artículo 29 de la CP, pero dicha irregularidad no se evidencia en manera alguna en este asunto, en tanto que lo aducido por la parte inconforme consiste en revivir una discusión en materia del rechazo de la demanda, lo cual, como lo sostuvo el juzgador de primer grado, este Tribunal definió el asunto en el auto emitido el 21 de octubre de 2022, que consideró que la exigencia del inciso 4° del artículo 6° del Decreto 806 de 2020, relacionada con el envío de una copia de la demanda previo a la acción tenía un propósito loable, atendiendo a la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid 19, lo cual permitía que el demandado conociera de antemano la convocatoria y pudiera preparar de mejor manera la defensa, acorde con el estudio que realizó la Corte Constitucional sobre dicho decreto en la sentencia C-420 de 2020.

Así mismo, allí se explicó que la excepción para no obligar a la parte actora a cumplir esa exigencia tenía que ver con el desconocimiento real de las direcciones del extremo pasivo, y cuando se tratara de medicas cautelares, pero debido a la naturaleza especial de las previstas en el artículo 85 A del CPTSS, no era aplicable esa excepción, en cuanto el régimen de estas herramientas en el procedimiento del trabajo, implicaba un debate con participación del demandado, y no en forma previa, como sí ocurre en la especialidad civil.

Entonces, para esta Sala es evidente que la argumentación de la parte actora corresponde a su opinión disidente respecto de lo decidido por esta Corporación, con lo cual busca crear una nueva oportunidad para obtener un resultado favorable a su situación, algo diametralmente opuesto a la finalidad de la institución procesal de la nulidad.

Debe recordarse que las providencias una vez emitidas y en firme, obligan tanto al juez que las emite como a las partes, a las autoridades públicas y a los particulares sin que les sea dable a ninguno de ellos desconocerlas, y obligan desde el momento en que se profieren, no pudiendo tampoco el funcionario que las emite revocarlas o modificarlas, o mucho menos anularlas. Así, como inveteradamente lo han sostenido la doctrina y la jurisprudencia, la expedición de la respectiva providencia que estudia un asunto marca el fin de la competencia del juez para decidir acerca del litigio, incluso al emitir un auto interlocutorio. Por consiguiente, emitida esta, conserva su obligatoriedad hasta tanto sea anulada, revocada o reformada por otra autoridad judicial, que en este caso ello no ha ocurrido, por ende, tiene el sello de cosa juzgada, por más que el recurrente insista en una supuesta ilegalidad o desconocimiento del ordenamiento jurídico.

Según lo anterior, es claro que debe confirmarse el rechazo de la nulidad propuesta por la demandante, pues no se basa en ninguna de las causales del artículo 133 del CGP y, de igual modo, los hechos en que se fundamenta tampoco encuadran en la causal de nulidad constitucional prevista en el artículo 29 de la CP.

COSTAS

Sin costas en esta instancia, dado que no se a trabado a litis.

En mérito de lo expuesto **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C.**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha 23 de marzo de 2023, proferido por el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá, que rechazó de plano la nulidad propuesta por la parte demandante, de conformidad con la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO: Sin COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO
Magistrado Ponente

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

República de Colombia

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503520220041601
CLASE DE PROCESO	EJECUTIVO LABORAL
DEMANDANTE	ISMAEL ESTUPIÑÁN ESTUPIÑÁN
DEMANDADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

En Bogotá D. C. a los veintiún (21) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024), el Magistrado Ponente en asocio de los demás miembros integrantes de la Sala de Decisión, en atención a lo dispuesto en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, que adoptó como legislación permanente el Decreto Legislativo 806 de 2020, procede a dictar la siguiente,

PROVIDENCIA

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra el auto de fecha 25 de abril de 2023, mediante el cual el *A quo* se abstuvo de librar mandamiento de pago por el valor indicado inicialmente en la petición ejecutiva, en cambio, lo hizo acorde con su propia liquidación (archivo 04, carp 1ª Instancia, carp ejecución, exp. Digital).

ANTECEDENTES

El Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá mediante sentencia proferida el 27 de junio de 2018, resolvió:

SOLICITUD CONSULTATORIA

RESUELVE:

PRIMERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, a reconocer y pagar a ISMAEL ESTUPIÑÁN ESTUPIÑÁN, una pensión de vejez a partir del 01 de agosto de 2017, en cuantía inicial de ochocientos dos mil quinientos quince pesos ($802.515), realizando los reajustes anuales pertinentes conforme a la variación del IPC.

SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, a reconocer y pagar a ISMAEL ESTUPIÑÁN ESTUPIÑÁN, la suma de **nueve millones ochocientos veintisiete mil cincuenta pesos ($9.827.050)**, por concepto de retroactivo de las mesadas pensionales dejadas de cancelar, causado a partir del 01 de agosto de 2017 y hasta el 30 de junio de 2018, según la parte considerativa de esta decisión.

TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones planteadas por la demandada, acorde a lo motivado.

CUARTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, a reconocer y pagar a ISMAEL ESTUPIÑÁN ESTUPIÑÁN, los intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente desde el momento en que cada una de las mesadas reconocidas en esta providencia se hizo exigible y hasta que se efectúe el pago, según lo señalado en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

QUINTO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra.

SEXTO: CONDENAR EN COSTAS al demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, por lo tanto, se señalan como agencias en derecho a su cargo la suma de doscientos mil pesos ($200.000), suma que se incluirá en la respectiva liquidación de costas.

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2020, al desatar el recurso de apelación interpuesto por las partes, resolvió:

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR EL ORDINAL SEGUNDO de la sentencia apelada, en el sentido de actualizar el valor del retroactivo pensional del 1° de agosto de 2017 al 30 de septiembre de 2020, en la suma de $34.931.096, que corresponde a 6 mesadas para el año 2017 incluida la adicional de diciembre, por valor de $802.515 cada una, 13 mesadas para 2018 y 2019 en la suma de $835.338 y $861.902 cada una, respectivamente y 9 mesadas para 2020 por valor de $894.654 cada una, sin perjuicio de las mesadas que se sigan causando hasta que se haga efectivo el pago de la prestación.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el proveído impugnado.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

En firme la decisión, el 3 de agosto de 2022 (archivo 12, ibid.), la parte demandante presentó demanda ejecutiva laboral en contra de COLPENSIONES, con el fin de que se librara mandamiento de pago por las siguientes sumas de dinero:

1- Sírvase librar mandamiento de pago a favor de mi representado por un valor de UN MILLON CUATROSCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CINCO PESOS ($1.416.005) por concepto de diferencias sobre las mesadas pagadas al 31 de marzo de 2022.

2- Sírvase librar mandamiento de pago a favor de mi representado por un valor de NUEVE MILLONES DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($9.016.246) por concepto de intereses pagados al 31 de marzo de 2022

3- Sírvase librar mandamiento de pago a favor de mi representado por un valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($142.834) por concepto de diferencias sobre las mesadas pagadas a partir del 1 de abril de 2022 hasta el 31 de agosto de 2022 y las diferencias de las mesadas que se sigan causando.

4- Sírvase librar mandamiento de pago el valor que el despacho liquide por costas dentro del proceso ordinario.

5- Sírvase condenar en costas del proceso ejecutivo a la Entidad Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

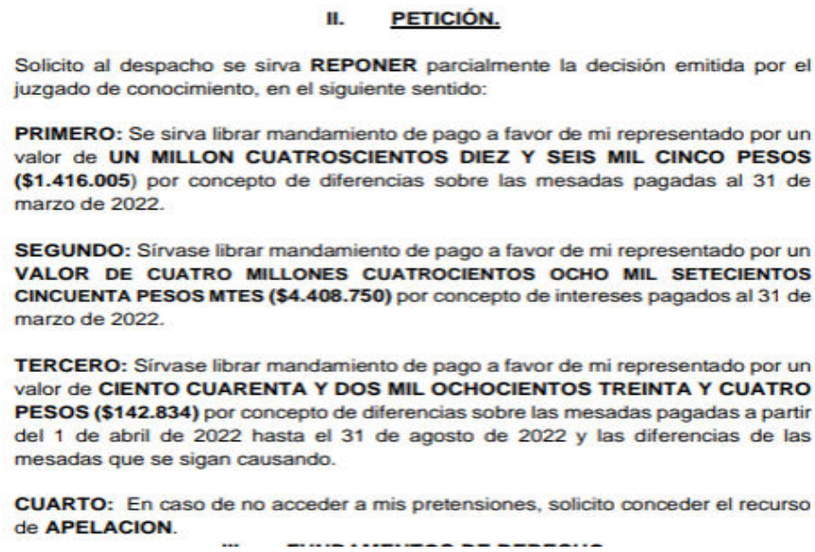
Mediante auto del 7 de diciembre de 2022 (archivo 02 de la carpeta ejecutivo) el juzgado requirió a la ejecutante para que precisara y fundamentara el valor de la mesada pensional en cada uno de los años pertinentes, lo mismo que, con respecto a los intereses moratorios, más la inclusión de las costas del proceso ordinario.

Frente a ello, se pronunció la accionante (archivo 03 ibid.), para lo cual adujo que, efectivamente incurrió en error al calcular la mesada, por lo que, al efectuar una nueva liquidación, debía librarse mandamiento de pago por la suma de $6.056.945, que corresponde exclusivamente a la diferencia por los intereses moratorios reconocidos en la sentencia y lo pagado por la entidad; así mismo, ese valor debía librarse con nuevos intereses y los que se causen a la fecha efectiva del pago.

A través de auto del 25 de abril de 2023 (archivo 04 ibid.), el juzgador de primera instancia libró mandamiento de pagó por la diferencia en los intereses moratorios, en cuantía de $465.477 y negó los intereses legales.

Contra la anterior decisión la parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Para ello argumentó que, por un lado, el juzgado libró mandamiento de pago, acorde con su propia liquidación, pero de forma equivocada, en cuanto, para obtener la diferencia por intereses moratorios, no tuvo en cuenta la mesada

adicional, y por la otra, desconoció el verdadero valor de la prestación. En ese orden, solicitó que se librara mandamiento de pago por los siguientes valores (archivo 05 ibid.):



II. PETICIÓN.

Solicito al despacho se sirva **REPONER** parcialmente la decisión emitida por el juzgado de conocimiento, en el siguiente sentido:

PRIMERO: Se sirva librar mandamiento de pago a favor de mi representado por un valor de **UN MILLON CUATROSCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CINCO PESOS ($1.416.005**) por concepto de diferencias sobre las mesadas pagadas al 31 de marzo de 2022.

SEGUNDO: Sírvase librar mandamiento de pago a favor de mi representado por un **VALOR DE CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MTES ($4.408.750)** por concepto de intereses pagados al 31 de marzo de 2022.

TERCERO: Sírvase librar mandamiento de pago a favor de mi representado por un valor de **CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($142.834)** por concepto de diferencias sobre las mesadas pagadas a partir del 1 de abril de 2022 hasta el 31 de agosto de 2022 y las diferencias de las mesadas que se sigan causando.

CUARTO: En caso de no acceder a mis pretensiones, solicito conceder el recurso de **APELACION**.

El juzgador de primer grado emitió auto del 24 de octubre de 2023 (archivo 07 ibid.), despachando desfavorablemente el recurso horizontal, para lo cual adujo que la recurrente se le olvidaba que previo a librar mandamiento de pago se requirió a la parte actora para que acreditara el soporte a través del cual se estableció el valor de las mesadas pensionales de los años 2021 y 2022 e igualmente realizara los ajustes respecto a los intereses requeridos, y por cuenta de ello, la accionante respondió que, efectivamente el valor de las mesadas era el mismo de la Resolución SUB63512 del 04 de marzo del 2022, por lo que la única diferencia era el tema de los intereses moratorios, por ende, no podía, posteriormente venir a cuestionar el tema de las aludidas mesadas; y en todo caso, el valor de la deuda liquidada en armonía con el título ejecutivo correspondía $465.477, monto sobre el cual se libró mandamiento de pago. Al final, concedió la alzada en el efecto suspensivo.

CONSIDERACIONES

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra el auto de fecha 25 de abril de 2023, ello en virtud de lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 65 del CPTSS, única y exclusivamente sobre si se debe o no librar mandamiento de pago por los valores solicitados por la recurrente y no los fijados por el juzgador de primer grado.

De entrada, se estima necesario rememorar que el artículo 422 del Código General del Proceso (aplicable por remisión en materia laboral en virtud del artículo 145 del CPTSS), establece que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y **exigibles** que emanen de una sentencia condenatoria proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción. Frente a tales condiciones, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL435-2021 precisó que:

> *Al respecto, es importante mencionar que para que se considere una obligación como clara, expresa y exigible, debe reunir, justamente, tales atributos. Así, en lo que respecta a la claridad, implica que no se admita ninguna duda en su existencia e inteligibilidad; en cuanto al segundo atributo, debe contener un crédito cuyo contenido esté expresamente declarado, en el monto y en la forma de pago y, por último,* ***en lo que concierne a su exigibilidad, que no esté sujeta a un plazo o condición o, en caso de estarlo, que dicho plazo o condición ya se haya vencido o acaecido respectivamente****. (negrilla y subrayado fuera del texto original)*

De igual manera, ante cualquier actuación previa de las partes, esto es, antes de que formalmente se dé inicio al trámite ejecutivo, el juzgador debe sopesarlo y verificar si se configuran los requisitos del título, y en todo caso, dar aplicación al art. 430 del CGP, que establece, que se librará el mandamiento ejecutivo en la forma pedida por el ejecutante, si fuere procedente, o en la que se considere legal, sin que esto quiera significar un desconocimiento al derecho de crédito cuya satisfacción se reclama o una anticipación a discusiones que corresponda proponer al deudor demandado, sino una verificación al saldo reclamado que se ajuste a la información que emana del título ejecutivo, cuya actuación del juzgador, con los medios respectivos ejercitados por el obligado, incluso, en la etapa de liquidación del crédito también se podrá controlar.

Visto lo anterior, se tiene que en el caso que nos ocupa existe una decisión judicial ejecutoriada conformada por las sentencias de primera y segunda instancia que contiene una obligación a cargo de la demandada COLPENSIONES, quien debe pagar a satisfacción una pensión de vejez a la demandante, a partir del 01 de agosto de 2017, en cuantía inicial de $802.515; para el 01 de enero de 2018, en la suma de $835.338; para el 01 de enero de 2019, en la cuantía de $861.902, y, finalmente, para enero de 2020, en la suma de $894.654.

Por su parte, COLPENSIONES emitió la Resolución SUB 63512 del 4 de marzo de 2022 (páginas 61 a 68 del archivo 12, carpeta ejecutivo) con la cual pretendió satisfacer el crédito pensional reconocido judicialmente, en donde se observa que, ciertamente, adoptó como valor de la mesada por esas anualidad los valores aducidos por la sentencia del Tribunal, para obtener por concepto de retroactivo pensional por mesadas ordinarias la suma de $15.592.658; mesadas adicionales $1.803.712 e intereses moratorios, la cifra de $27.705.366.

Tal como lo explicó el juzgador de primera instancia, la ejecutante radicó un primer escrito de solicitud de mandamiento de pago, en el cual, a partir de enero de 2021, ésta fijó como valor de la mesada la suma de $934.466 y en 2022, la cifra de $1.028.566,84 en contraste con las operaciones de COLPENSIONES, que para esos mismos años fijó la mesada pensional en $909.058 y $1.000.000, respectivamente, lo que generaba unas diferencias pensionales en favor de la titular del derecho pensional; no obstante, el juzgador requirió a la ejecutante para que precisara la causa o motivo por el cual existía esa diferencia en la liquidación con respecto a la entidad, ante lo cual, la actora radicó nuevo escrito, en el que descartó la existencia de las aludidas diferencias y se concentró en los intereses moratorios, para solicitar que frente a ellos sí existía una diferencia, para lo cual debía librarse mandamiento de pago, solo que para la accionante ese valor ascendía a $6.056.945, dado que COLPENSIONES solo pagó $27.705.366 y su liquidación arrojó por ese concepto $33.762.311.

Ante esa manifestación, en el auto impugnado, el juzgador consideró que la liquidación que había presentado la ejecutante, algunas mesadas pensionales no correspondían a la cuantía plasmada en la sentencia, por lo que realizadas las operaciones matemáticas respectivas, conforme al reconocimiento realizado por la ejecutada en el acto administrativo SUB63512 del 04 de marzo del 2022, concluyó que la diferencia sobre la cual se pretende la ejecución correspondía realmente a $465.477 y sobre dicho monto libró el mandamiento de pago solicitado.

Para la Sala tal actuación del juzgador fue acertada, porque, por un lado, la ejecutante se equivoca al insistir en que la mesada pensional para el 2021 es de $934.466 y para el 2022, en $1.028.566, máxime que como lo reseñó la primera instancia, dicha parte fue consciente de su error al pretender la liquidación de la mesada pensional en esas anualidades con ese valor, por el contrario, tal como lo hizo COLPENSIONES, para 2021 y 2022, la mesada corresponde a $909.058 y $1.000.000, respectivamente, en razón a que, acorde con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, el reajuste anual de las pensiones cuando es superior al mínimo, se realiza con el porcentaje del IPC del año inmediatamente anterior, como ocurrió en este caso con la mesada del 2020, que para la accionante era superior al smmlv de esa anualidad, ya que era de $894.654 y dicho mínimo era de $877.803, por lo que el reajuste de la mesada para 2021 era tan solo del 1.61% para fijarla su prestación en $909.058.

Y como ese valor fue superior al salario mínimo de 2021 ($908.526), en principio, el reajuste de la mesada para el 2022 se le aplicaría el porcentaje del IPC, pero resulta que para ese año fue del 5.62%, lo que significa que para dicha calenda, la pensión se incrementaría a la suma de $960.147, lo que arrojaría un valor inferior al salario mínimo

del 2022 que fue de $1.000.000; y como nadie puede devengar una pensión inferior al mínimo legal, es evidente que para ese año, en el caso de la actora tenía que ajustarse la mesada a dicha cantidad, tal como lo liquidó COLPENSIONES.

Entonces, lo único que habría que revisar es si el juzgado acertó en la liquidación de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que acorde con la sentencia de primera instancia confirmada en ese punto por la del Tribunal, señaló que dichos moratorios corrían a partir del 1° de agosto de 2017 y hasta que se efectúe el pago de las mesadas adeudadas, que en este caso ello tuvo ocurrencia el 31 de marzo de 2022.

El cuadro arroja el siguiente resultado:

Tabla Liquidación de Intereses Moratorios con					***Fecha de Corte***		***31/03/2022***
Mesada Causada	***Fecha Inicial***	***Fecha Final***	***Número de días en mora***	***Interés moratorio anual***	***Tasa de interés de mora diario***	***Capital***	***Subtotal Interés***
ago-17	*01/08/17*	*31/03/22*	*1704*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 802.515,00*	*$ 857.504,00*
sep-17	*01/09/17*	*31/03/22*	*1673*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 802.515,00*	*$ 841.904,00*
oct-17	*01/10/17*	*31/03/22*	*1643*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 802.515,00*	*$ 826.807,00*
nov-17	*01/11/17*	*31/03/22*	*1612*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 802.515,00*	*$ 811.207,00*
dic-17	*01/12/17*	*31/03/22*	*1582*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 1.605.030,00*	*$ 1.592.220,00*
ene-18	*01/01/18*	*31/03/22*	*1551*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 835.338,00*	*$ 812.433,00*
feb-18	*01/02/18*	*31/03/22*	*1520*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 835.338,00*	*$ 796.195,00*
mar-18	*01/03/18*	*31/03/22*	*1492*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 835.338,00*	*$ 781.528,00*
abr-18	*01/04/18*	*31/03/22*	*1461*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 835.338,00*	*$ 765.290,00*
may-18	*01/05/18*	*31/03/22*	*1431*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 835.338,00*	*$ 749.575,00*
jun-18	*01/06/18*	*31/03/22*	*1400*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 835.338,00*	*$ 733.337,00*
jul-18	*01/07/18*	*31/03/22*	*1370*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 835.338,00*	*$ 717.623,00*
ago-18	*01/08/18*	*31/03/22*	*1339*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 835.338,00*	*$ 701.385,00*
sep-18	*01/09/18*	*31/03/22*	*1308*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 835.338,00*	*$ 685.147,00*
oct-18	*01/10/18*	*31/03/22*	*1278*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 835.338,00*	*$ 669.432,00*
nov-18	*01/11/18*	*31/03/22*	*1247*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 835.338,00*	*$ 653.194,00*
dic-18	*01/12/18*	*31/03/22*	*1217*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 1.670.676,00*	*$ 1.274.959,00*
ene-19	*01/01/19*	*31/03/22*	*1186*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 861.902,00*	*$ 640.997,00*
feb-19	*01/02/19*	*31/03/22*	*1155*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 861.902,00*	*$ 624.243,00*
mar-19	*01/03/19*	*31/03/22*	*1127*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 861.902,00*	*$ 609.109,00*
abr-19	*01/04/19*	*31/03/22*	*1096*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 861.902,00*	*$ 592.355,00*
may-19	*01/05/19*	*31/03/22*	*1066*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 861.902,00*	*$ 576.141,00*
jun-19	*01/06/19*	*31/03/22*	*1035*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 861.902,00*	*$ 559.386,00*
jul-19	*01/07/19*	*31/03/22*	*1005*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 861.902,00*	*$ 543.172,00*
ago-19	*01/08/19*	*31/03/22*	*974*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 861.902,00*	*$ 526.418,00*
sep-19	*01/09/19*	*31/03/22*	*943*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 861.902,00*	*$ 509.663,00*
oct-19	*01/10/19*	*31/03/22*	*913*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 861.902,00*	*$ 493.449,00*
nov-19	*01/11/19*	*31/03/22*	*882*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 861.902,00*	*$ 476.694,00*
dic-19	*01/12/19*	*31/03/22*	*852*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 1.723.804,00*	*$ 920.960,00*
ene-20	*01/01/20*	*31/03/22*	*821*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 894.654,00*	*$ 460.587,00*

feb-20	*01/02/20*	*31/03/22*	*790*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 894.654,00*	*$ 443.196,00*
mar-20	*01/03/20*	*31/03/22*	*761*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 894.654,00*	*$ 426.927,00*
abr-20	*01/04/20*	*31/03/22*	*730*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 894.654,00*	*$ 409.535,00*
may-20	*01/05/20*	*31/03/22*	*700*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 894.654,00*	*$ 392.705,00*
jun-20	*01/06/20*	*31/03/22*	*669*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 894.654,00*	*$ 375.314,00*
jul-20	*01/07/20*	*31/03/22*	*639*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 894.654,00*	*$ 358.484,00*
ago-20	*01/08/20*	*31/03/22*	*608*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 894.654,00*	*$ 341.093,00*
sep-20	*01/09/20*	*31/03/22*	*577*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 894.654,00*	*$ 323.701,00*
oct-20	*01/10/20*	*31/03/22*	*547*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 894.654,00*	*$ 306.871,00*
nov-20	*01/11/20*	*31/03/22*	*516*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 894.654,00*	*$ 289.480,00*
dic-20	*01/12/20*	*31/03/22*	*486*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 1.789.308,00*	*$ 545.299,00*
ene-21	*01/01/21*	*31/03/22*	*455*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 909.058,00*	*$ 259.368,00*
feb-21	*01/02/21*	*31/03/22*	*424*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 909.058,00*	*$ 241.697,00*
mar-21	*01/03/21*	*31/03/22*	*396*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 909.058,00*	*$ 225.736,00*
abr-21	*01/04/21*	*31/03/22*	*365*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 909.058,00*	*$ 208.064,00*
may-21	*01/05/21*	*31/03/22*	*335*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 909.058,00*	*$ 190.963,00*
jun-21	*01/06/21*	*31/03/22*	*304*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 909.058,00*	*$ 173.292,00*
jul-21	*01/07/21*	*31/03/22*	*274*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 909.058,00*	*$ 156.191,00*
ago-21	*01/08/21*	*31/03/22*	*243*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 909.058,00*	*$ 138.520,00*
sep-21	*01/09/21*	*31/03/22*	*212*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 909.058,00*	*$ 120.848,00*
oct-21	*01/10/21*	*31/03/22*	*182*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 909.058,00*	*$ 103.747,00*
nov-21	*01/11/21*	*31/03/22*	*151*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 909.058,00*	*$ 86.076,00*
dic-21	*01/12/21*	*31/03/22*	*121*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 1.818.116,00*	*$ 137.950,00*
ene-22	*01/01/22*	*31/03/22*	*90*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 1.000.000,00*	*$ 56.436,00*
feb-22	*01/02/22*	*31/03/22*	*59*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 1.000.000,00*	*$ 36.997,00*
mar-22	*01/03/22*	*31/03/22*	*31*	*25,71%*	*0,0627%*	*$ 1.000.000,00*	*$ 0,00*
				Total intereses moratorios			***$ 28.151.404,00***

Cabe agregar, que la tasa de intereses que se utilizó es la certificada por la Superintendencia Financiera, que, para marzo de 2022, fecha del pago efectivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, en concordancia con lo señalado en los artículos 11.2.5.1.2 y 11.2.5.1.3 del Decreto 2555 de 2010, los intereses remuneratorios y moratorios no podrán exceder 1.5 veces el Interés Bancario Corriente, es decir, 25.71%, el mismo que utilizó el juzgador de primera instancia para ordenar el mandamiento de pago. Así mismo, aquí se tuvo en cuenta la mesada adicional de diciembre, en la misma forma que lo realizó el despacho de primer grado, pues basta con remitirse a las operaciones del auto impugnado para verificar que esa prestación sí fue incluida para calcular los moratorios, y no como erróneamente lo manifestó la impugnante.

En ese orden, se tiene que los intereses moratorios ascienden a $28.151.404 y lo pagado por COLPENSIONES fue $27.705.366, arrojando una diferencia de $446.038; y como el juzgador de primera instancia, libró mandamiento por $465.477, se evidencia el

error aritmético cometido, por lo que al tratarse de una obligación clara, expresa y exigible, se dispondrá el apremio por el valor aquí calculado.

COSTAS

Dado el resultado del estudio, no se impondrán costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C.**

RESUELVE:

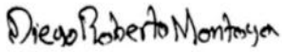
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero del auto proferido el 25 de abril de 2023, por el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, en el sentido de librar mandamiento de pago por la suma de $446.038, equivalente a la diferencia en los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

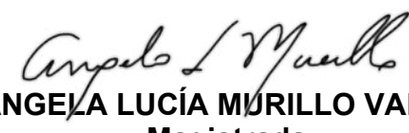
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO
Magistrado Ponente



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado



ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	**11001310503720220016301**
CLASE DE PROCESO	**ORDINARIO LABORAL**
DEMANDANTE	**JOAQUÍN EMILIO PADIERNA**
DEMANDANDO	**ECOPETROL S.A. Y OTROS**

En Bogotá D. C. a los veintiún (21) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024), el Magistrado Ponente en asocio de los demás miembros integrantes de la Sala de Decisión, en atención a lo dispuesto en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, que adoptó como legislación permanente el Decreto Legislativo 806 de 2020, procede a dictar la siguiente,

PROVIDENCIA:

Decide el Tribunal los recursos de apelación interpuestos por Morelco S.A.S., Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., Ecopetrol S.A. y Compañía Aseguradora de Finanzas S.A. Confianza contra el auto de fecha 21 de septiembre de 2023 (archivo 24 y 25 carpeta 1ª inst, exp. digital), mediante el cual el *a quo* declaró no probadas las excepciones previas de ineptitud de demanda por indebida acumulación de pretensiones, falta de competencia y falta de reclamación administrativa.

I. ANTECEDENTES

El señor **Joaquín Emilio Padierna Padierna** presentó demanda contra Ecopetrol S.A., Morelco S.A.S., y Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. encaminada a que se declarare la existencia de una relación laboral entre él y Morelco S.A.S., y se tuvieran como obligados solidarios a Ecopetrol S.A. y a Cenit S.A.S. (archivo 01 carpeta 1ª inst, exp. Digital).

El Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá mediante auto del 13 de junio de 2022, admitió la presente acción y ordenó notificar a las demandadas (archivo 03 carpeta 1ª inst, exp. Digital).

Morelco S.A.S. contestó (archivo 05 carpeta 1ª inst. exp. Digital) oponiéndose a las pretensiones de la demanda. Propuso como excepción previa la de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, argumentando que la parte actora en la petición subsidiaria no indicó de manera clara qué tipo de contrato buscaba declarar y agregó que en una sola pretensión había acumulado múltiples peticiones excluyentes entre sí.

Ecopetrol S.A. contestó (archivo 07 carpeta 1ª inst. exp. Digital), oponiéndose a las pretensiones de la demanda. Propuso como excepción previa la de falta de competencia por carencia del requisito de procedibilidad de agotamiento de reclamación administrativa. Al respecto, señaló que la parte demandante había elevado reclamación administrativa sin referirse a la totalidad de los hechos y pretensiones del escrito introductorio; por lo tanto, indicó que no era posible considerar integralmente agotada la reclamación.

Cenit S.A.S. contestó la demanda (archivo 13 carpeta 1ª inst. exp. Digital), oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones. Formuló como excepciones previas las de falta de requisitos formales por indebida acumulación de pretensiones y falta de competencia funcional. Frente a la primera arguyó que las peticiones formuladas por el demandante en «*la pretensión sexta declarativa se excluyen con la dieciocho declarativa*

y de la diez a la doce condenatoria, como quiera que en la pretensión sexta declarativa solicita el reconocimiento de una sola relación laboral, y en las pretensiones dieciocho declarativa y de la diez a la doce condenatoria, solicita el pago de salarios y prestaciones entre un contrato y otro, dejando ver que existieron en realidad varios contratos de trabajo con MORELCO S.A.S.»

Añadió que, también hubo una indebida acumulación de pretensiones, respecto de la tercera declarativa, de cara a las peticiones declarativas y de condena en las que se solicitaba el reconocimiento de la solidaridad. Al respecto, explicó que *«la pretensión tercera declarativa solicita se declare que el demandante prestó servicios a la parte demandada de manera general, situación que se contradice y se yuxtapone (sic), por una parte porque los extremos subjetivos del contrato de trabajo son, por definición legal, unipersonales en otras palabras, en un contrato de trabajo solo puede haber un trabajador y un empleador, y segundo, no puede declararse a la vez la existencia de un contrato de trabajo con la "parte demandada" y la solidaridad entre las codemandadas».*

Respecto de la excepción de falta de competencia funcional, refirió que la pretensión primera declarativa correspondía a una solicitud que debía ser conocida por la jurisdicción ordinaria especialidad civil, comoquiera que el Juez laboral solo estaba habilitado para pronunciarse sobre los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato laboral.

En otro memorial Cenit S.A solicitó el llamamiento en garantía a Morelco S.A.S. y de la aseguradora Fianzas S.A Seguros Confianza. Asimismo, formuló Ecopetrol el llamamiento de esta última (archivo 08 y 13 carpeta 1ª inst. exp. Digital).

Mediante auto del 14 de diciembre de 2022, se tuvo por contestada la demanda de todas las accionadas, se admitieron los llamamientos en garantía, se ordenó notificar y correr traslado a las mismas (archivo 10 carpeta 1ª inst. exp. digital).

La **Compañía Aseguradora de Fianzas S.A**., en adelante Confianza, contestó la demanda y llamamiento en garantía (archivo 16 carpeta 1ª inst. exp. digital), solicitando que se denegaran todas las pretensiones de la demanda y también del

llamamiento. Formuló como excepciones previas frente a la demanda las de falta de jurisdicción y competencia e ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones. Sobre esta última arguyó que se formularon pretensiones que no podían ser conocidas por el despacho al carecer de jurisdicción y competencia, específicamente sobre las declarativas primera y segunda formuladas en el escrito de demanda, debido a que le compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo al tratarse de contratos estatales.

Frente al llamamiento en garantía formulado por Cenit S.A.S., Confianza S.A. propuso como excepción previa la de falta de jurisdicción y competencia, por las mismas razones.

En providencia del 25 de abril de 2023 el juzgado de origen citó a audiencia del artículo 77 del CPTSS (archivo 17 carpeta 1ª inst. exp. digital).

En audiencia obligatoria de que trata el artículo 77 del CPTSS celebrada el 21 de diciembre de 2023 (archivo 24 y 25 carpeta 1ª inst. exp. digital), el Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá, resolvió declarar no probada las excepciones previas de ineptitud de demanda por indebida acumulación de pretensiones y falta de competencia, propuestas por Morelco S.A.S., Ecopetrol S.A., Cenit S.A.S. y la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.

Respecto de la **excepción previa de indebida acumulación de pretensiones**, el *a quo* explicó que de la lectura del escrito genitor se colegía de manera clara que lo solicitado en la pretensión sexta declarativa era la determinación de la existencia de una relación laboral sin solución de continuidad del 1 de enero de 2007, al 8 de febrero de 2019; que en este sentido no había una contradicción con la pretensión declarativa dieciocho, debido a que en ella justamente se solicitaba el pago de los períodos cortos de desvinculación que a su criterio fueron ilegales, por tratarse realmente de una única relación contractual sin interrupciones. En igual sentido, señaló que no había incompatibilidad en las pretensiones de condena de la diez a la doce de la demanda, toda vez que, lo que se buscaba era el pago de los períodos de interrupción irregular de

la relación laboral, lo que se atemperaba con la solicitud de declaración de un único contrato de trabajo sin solución de continuidad.

Con respecto a la excepción de **falta de competencia funcional** para conocer de la pretensión declarativa primera, propuesta por Cenit S.A.S. y de Confianza, el Juzgado de origen consideró que si bien la especialidad laboral no tenía competencia para el estudio de la celebración y ejecución de los contratos estatales, lo cierto era que ese pedimento debía ser estudiado en consonancia con las demás pretensiones y supuestos fácticos, lo que permitía concluir que lo que realmente se debatía era la existencia de la solidaridad en los términos de las normas sustantivas laborales. Reiteró su competencia y aclaró que, en uso de sus facultades para interpretar la demanda, no realizaría pronunciamiento frente a la ejecución de dicho contrato público, sino que solo se realizaría su estudio para determinar si, de resultar las pretensiones favorables, habría lugar a la solidaridad pretendida (archivo 24 carpeta 1ª inst. exp. digital).

Sobre la **falta de competencia formulada por Ecopetrol S.A**., por no haberse acreditado el requisito de la reclamación administrativa en los términos del artículo 6 del CPTSS, el *a quo* señaló que efectivamente hubo una reclamación y esta se acreditó con el documento del 7 de febrero de 2022, por medio del cual la empresa dio respuesta a la comunicación elevada, sosteniendo que sí se cumplió con la finalidad contemplada en el artículo citado, advirtiendo que el principio y fundamento de dicha obligación era dar a conocer la posible demanda a presentar, o la reclamación específica que tenía el demandante para acudir a la jurisdicción, cuestión que a su criterio se cumplió en el proceso, debido a que la demandada tuvo pleno conocimiento de las circunstancias fácticas que dieron lugar a las pretensiones invocadas (archivo 24 carpeta 1ª inst. exp. digital).

II. RECURSOS

Morelco S.A.S., **interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación** indicando que la parte demandante en la pretensión subsidiaria solicitó diferentes declaraciones y condenas que resultaban contradictorias; que las pretensiones

principales partieron de la unidad contractual, contrario a las condenatorias que partían de la existencia de relaciones labores independientes; que las pretensiones subsidiarias debieron hacerse por separado, debido a que la demanda contenía 20 pretensiones declarativas y 19 condenatorias y en tal sentido no era posible que a través de una única pretensión subsidiaria, se declararan de manera conjunta 39 pretensiones para cada una de las relaciones laborales. Agregó que, lo procedente era revocar la decisión proferida y requerir al demandante a que reformara o subsanara lo teniente a las pretensiones subsidiarias, para que las demandadas pudieran dar contestación en los términos o finalidad pretendidos por la parte actora, y así no se violara el derecho de defensa y contradicción (archivo 24 carpeta 1ª inst. exp. digital).

Ecopetrol S.A. impetró recurso de reposición y en subsidio apelación argumentando que no se agotó la reclamación administrativa, como quiera que en tal requerimiento formulado por el actor se solicitó el pago de acreencias laborales derivada de una supuesta relación laboral directa con Ecopetrol S.A.S. y ahora en esta acción, se pretende su vinculación como obligada solidaria (archivo 24 carpeta 1ª inst. exp. digital).

Cenit S.A.S. formuló recurso de reposición y en subsidio apelación, con respecto a la ineptitud de la demanda por la indebida acumulación de pretensiones y la falta de competencia funcional. Sobre la primera indicó que las pretensiones formuladas se excluían entre sí, citó la pretensión sexta declarativa, dieciocho y de la diez a la doce condenatoria, e indicó que eran excluyentes debido a que en una se solicitaba la existencia de un único contrato de trabajo, y en las condenatorias presuponía la existencia de distintas relaciones laborales. Explicó que, si el juez declaraba la existencia de un único vínculo, esto deshabilitaba el estudio de los demás contratos laborales que se solicitaban de forma condenatoria; sobre la segunda reiteró que el despacho de origen no tenía competencia para pronunciarse sobre el contrato estatal y podría darse una sentencia inhibitoria (archivo 24 carpeta 1ª inst. exp. digital).

La llamada en garantía, **Confianza**, **impetró solicitud de adición sobre las excepciones previas propuestas conforme al llamamiento en garantía formulado**

por Cenit S.A., en particular sobre la denominada falta de jurisdicción y competencia. Arguyó que el llamamiento no pudo ser conocido por el despacho, debido a que versaba asuntos que correspondían a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De manera concomitante, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, al respecto indicó que, la pretensión declarativa de existencia de un contrato civil-comercial no era competencia de la jurisdicción ordinaria laboral y que lo procedente no era reinterpretar la demanda, sino declarar probada la excepción previa y rechazar dicha pretensión en el litigio (archivo 24 carpeta 1ª inst. exp. digital).

El ***a quo*****,** en primera medida se pronunció sobre la adición propuesta, indicó que la excepción previa denominada falta de jurisdicción y competencia frente al llamamiento en garantía formulado por **Cenit** S.A.S., debía ser desestimada, toda vez lo que en este caso se debatía era la existencia de una relación laboral y de la solidaridad de los presuntos beneficiarios; que en ese sentido, esta jurisdicción estaba facultada para el estudio de las pretensiones invocadas y también para el estudio del llamamiento en garantía frente a las pólizas suscritas, debido a que la responsabilidad a definir se pretendía de la ejecución de las relaciones laborales en virtud del contrato celebrado por Morelco S.A.S.; que no se consideraba violado el debido proceso por la resolución y aceptación del llamamiento en garantía, debido a que las obligaciones surgieron de la naturaleza contractual privada laboral con Morelco S.A.S. (archivo 25 carpeta 1ª inst. exp. digital).

Confianza S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación frente lo adoptado, solicitó que sea revocada dicha decisión, insistiendo que el despacho no era competente para conocer del llamamiento en garantía como fue formulado, toda vez que era una pretensión genérica que vinculaba a esta entidad por seis pólizas de cumplimiento, contentivas de distintos amparos. Explicó que, las pólizas de cumplimiento no tenían la naturaleza de proteger ante condenas laborales, sino por los perjuicios causados por el incumplimiento del contratista; que las pólizas de cumplimiento contenían un amparo de calidad del servicio y que, al no haberse realizado una precisión en la pretensión, ni en el auto que admitió el llamamiento, esta entidad fue vinculada por amparos que no podía conocer el despacho, debido a que estos últimos

cubrían la responsabilidad contractual, lo que implicaría la declaración de la misma, cosa que no es objeto de estudio (archivo 25 carpeta 1ª inst. exp. digital).

El *a quo*, de forma conjunta no repuso, insistiendo en los argumentos que expuso inicialmente y concedió los recursos de apelación interpuestos por las partes demandadas y la llamada en garantía, en efecto suspensivo (archivo 25 carpeta 1ª inst. exp. digital).

III. CONSIDERACIONES

En estricta consonancia con el recurso interpuesto y de conformidad con el numeral 3º del artículo 65 del CPTSS, procede la Sala a establecer si hay lugar o no a declarar probada la excepción previa de indebida acumulación de pretensiones, falta de competencia, y si se agotó o no la reclamación administrativa.

I. DE LA INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES FORMULADA POR MORELCO S.A.S Y CENIT S.A.S.

En primera medida, procede esta Sala a pronunciarse con respecto a la excepción previa de indebida acumulación de pretensiones formulada por Morelco S.A.S y Cenit S.A.S. Ante ello, resulta importante traer a colación las pretensiones que, a su criterio, resultan contradictorias, correspondientes a las declarativas tercera, sexta y dieciocho y a las de condena diez y doce, a saber:

PRETENSIONES DECLARATIVAS

[…]

3. *Declarar que el demandante prestó sus servicios personales a la parte demandada, en la ejecución los contratos 5202201, 5206679 y MA-0032888 con su Adicional Nro. 1 celebrados entre MORELCO S.A.S. y CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. y ECOPETROL S.A*
   […]
6. *Declarar que existió una sola relación laboral sin solución de continuidad que inició el 01 de enero de 2007y finalizó el 08 de febrero de 2019.*
   […]

18 Declarar que la demandada no pagó al demandante, los salarios, bonificaciones y prestaciones legales y extralegales, dejados de percibir durante los días que, por decisión unilateral del empleador, este, no prestaba sus servicios, y debía esperar suscribir un nuevo contrato, permaneciendo en disponibilidad absoluta.

[…]

PRETENSIONES CONDENATORIAS
[…]

10. Condenar a MORELCO S.A.S. y solidariamente ECOPETROL S.A. y CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. al pago de los salarios causados durante los "supuestos" periodos de interrupción entre contrato y contrato.

11. Condenar a MORELCO S.A.S. y solidariamente ECOPETROL S.A. y CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROSS.A.S. al pago de las prestaciones sociales legales causadas durante los "supuestos" periodos de interrupción entre contrato y contrato.

12. Condenar a MORELCO S.A.S. y solidariamente ECOPETROL S.A. y CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROSS.A.S. al pago de las prestaciones extralegales y las bonificaciones derivadas de la convención colectiva de trabajo, causados durante los "supuestos" periodos de interrupción entre contrato y contrato.

Visto lo anterior, a criterio de esta Sala, ninguna de las pretensiones previamente citadas resulta excluyente, pues contrario a lo referido por las recurrentes, lo que se pretende con ellas no es la declaratoria de relaciones laborales independientes con las demandadas, sino una única con Morelco S.A.S. y a su vez la declaración de solidaridad entre las demás convocadas a juicio frente a las acreencias laborales. Asimismo, se observa que también se pretende la declaratoria de una relación laboral sin solución de continuidad; de ahí que, tampoco resulte errado que se busque como condena el pago de los periodos de las presuntas interrupciones irregulares, lo que tendría base justamente en la solicitud de declaración de prestación del servicio sin solución de continuidad.

Ahora, respecto a lo argumentado por Morelco S.A.S. relacionado con la necesidad de que la pretensión subsidiaria tenga el mismo número de ítems que las pretensiones principales, se indica que en materia laboral no hay norma que haga tal exigencia y que obligue al demandante a plantear las pretensiones subsidiarias en igual

estructura que las principales, por lo que se despachara desfavorablemente esta solicitud.

Conforme lo anterior, se confirma lo resuelto por el *a quo* sobre este asunto.

II. DE LA EXCEPCIÓN PREVIA DE FALTA DE COMPETENCIA POR CARENCIA DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE AGOTAMIENTO DE RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA FORMULADA POR ECOPETROL

En otro orden, con relación a la reclamación administrativa, debe tenerse en cuenta el artículo 6 del CPTSS que señala:

> *ARTICULO 6o. RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible. Artículo modificado por el artículo 4o. de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta.*
>
> *Mientras esté pendiente el agotamiento de la reclamación administrativa se suspende el término de prescripción de la respectiva acción.*
>
> *Cuando la ley exija la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad, ésta reemplazará la reclamación administrativa de que trata el presente artículo.*

Entonces, teniendo en cuenta que Ecopetrol S.A. es una Sociedad de Economía Mixta, de carácter comercial, organizada bajo la forma de sociedad anónima, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con lo establecido en la Ley 1118 de 2006, frente a ella se debe agotar la reclamación administrativa.

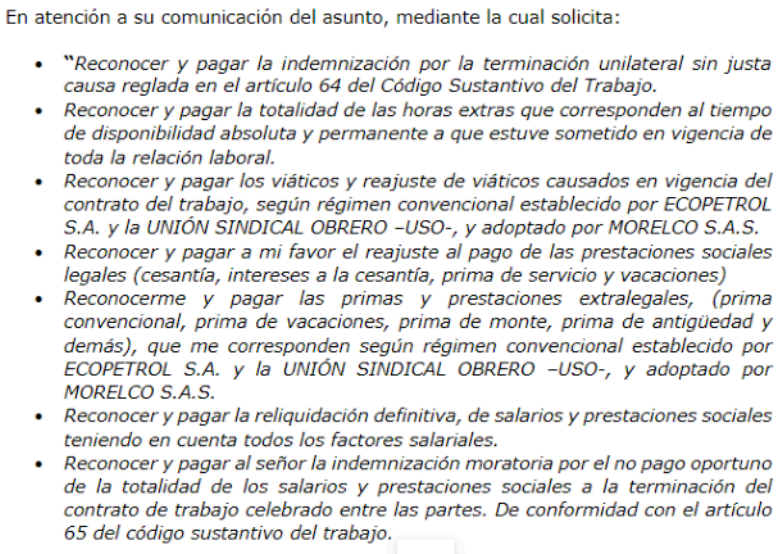
La citada reclamación constituye una oportunidad que se les ha dado a las entidades de derecho público para que, con antelación a la presentación de la demanda, se les permita revisar las presuntas diferencias que reclama o va a reclamar el trabajador en juicio. Además, dicha reclamación también es un factor de competencia, toda vez

que una vez acreditado o probado este en los casos exigidos, puede el juez admitir la demanda y disponer su trámite legal, pero ante la ausencia de esta se puede generar la inadmisión de la demanda y/o su eventual rechazo.

En ese mismo sentido, la reclamación administrativa se entiende agotada en dos situaciones: *i)* una vez se haya decidido; o *ii)* cuando transcurrido un mes de su presentación, no haya sido resuelta, en este evento el trabajador puede acudir a la jurisdicción o esperar la respuesta, en este último caso el término de prescripción se suspenderá hasta que la misma sea emitida.

Ahora bien, el artículo 6 del CPTSS es claro en señalar que la referida reclamación consiste en un simple reclamo por escrito del trabajador sobre el derecho que pretenda, es decir, que lo que peticione en la acción ordinaria para este caso, debe estar debidamente incluido en la reclamación, so pena de entenderse no agotado dicho requisito respecto de las peticiones que allí no están incluidas.

Bajo los anteriores presupuestos se advierte si bien la parte actora no allegó el escrito de la reclamación administrativa realizada a Ecopetrol, lo cierto es que se evidencia que en respuesta brindada por esta última del 07 de febrero de 2022 (f.° 146-148 archivo 01 carpeta 1ª inst. exp. Digital), se encuentran citada la reclamación que permiten constatar lo que el actor requirió, en los siguientes términos:



En atención a su comunicación del asunto, mediante la cual solicita:

- *"Reconocer y pagar la indemnización por la terminación unilateral sin justa causa reglada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.*
- *Reconocer y pagar la totalidad de las horas extras que corresponden al tiempo de disponibilidad absoluta y permanente a que estuve sometido en vigencia de toda la relación laboral.*
- *Reconocer y pagar los viáticos y reajuste de viáticos causados en vigencia del contrato del trabajo, según régimen convencional establecido por ECOPETROL S.A. y la UNIÓN SINDICAL OBRERO –USO-, y adoptado por MORELCO S.A.S.*
- *Reconocer y pagar a mi favor el reajuste al pago de las prestaciones sociales legales (cesantía, intereses a la cesantía, prima de servicio y vacaciones)*
- *Reconocerme y pagar las primas y prestaciones extralegales, (prima convencional, prima de vacaciones, prima de monte, prima de antigüedad y demás), que me corresponden según régimen convencional establecido por ECOPETROL S.A. y la UNIÓN SINDICAL OBRERO –USO-, y adoptado por MORELCO S.A.S.*
- *Reconocer y pagar la reliquidación definitiva, de salarios y prestaciones sociales teniendo en cuenta todos los factores salariales.*
- *Reconocer y pagar al señor la indemnización moratoria por el no pago oportuno de la totalidad de los salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo celebrado entre las partes. De conformidad con el artículo 65 del código sustantivo del trabajo.*

De lo anterior se desprende que, lo que se reclama a esta entidad son las obligaciones económicas derivadas de una relación de trabajo, en los términos en se pretenden en el proceso judicial que nos ocupa. Aunque no se desconoce que en el referido requerimiento no se hizo referencia a la vinculación solidaria de Ecopetrol S.A.S., ello se deriva de las pretensiones relacionadas con el reconocimiento y pago de las acreencias laborales que ante ella impetró en la referida reclamación administrativa, declaración de solidaridad que en todo caso le corresponde a determinar al juez de conocimiento conforme a los elementos de juicio arrimados al informativo.

Conforme lo anterior, se confirmará la decisión del Juez de primera instancia con relación a este punto.

III. EXCEPCIÓN PREVIA DE FALTA DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

En lo que concierne a la excepción previa «*falta de competencia*», formulada por Cenit S.A.S y la llamada en garantía, la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A Confianza, con respecto a la imposibilidad de pronunciamiento de esta jurisdicción frente a la pretensión primera del escrito inaugural, relacionada con la declaratoria de la existencia de una relación contractual entre Morelco S.A.S. y Ecopetrol S.A., para esta Sala resulta evidente que lo que se busca en este juicio es el análisis de una presunta relación laboral y de la eventual solidaridad derivada de su ejecución, más no el estudio de la existencia, ejecución o cumplimiento de un contrato estatal, por lo cual no se hallan razones para considerar que el Juez Laboral carece de competencia para conocer del asunto.

No puede pasarse por alto la facultad que tiene el juzgador de interpretación del escrito de demanda y de sus pretensiones, las cuales, vistas en conjunto, denotan que el objeto del litigio sin lugar a dudas en este caso, corresponde al análisis de la existencia de una presunta relación laboral y que la mención respecto de los contratos estatales está encaminada exclusivamente a que se esclarezca si en este asunto hay lugar a declarar solidaridad entre las demandadas, sin que se pretenda que se haga análisis

alguno respecto del cumplimiento o ejecución de un contrato estatal, como lo afirman los recurrentes.

De otro lado, respecto a la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia formulada por Confianza con base en la cual alega que el despacho no era competente para conocer del llamamiento en garantía por cuanto este se basaba en pólizas de cumplimiento que no cubren obligaciones laborales, se indica que tal asunto corresponde a una alegación sustancial respecto de las coberturas de las pólizas, que no es dable debatir o ventilar vía excepción previa, sino que debe ser objeto de análisis por parte de la autoridad judicial, una vez realice el estudio de fondo de las coberturas de las mismas y de las condiciones y amparos de los contratos de seguros con base en los que fue vinculada la aseguradora. Aunado a ello, lo que en este caso determina la competencia del Juez Laboral, no corresponde a los llamamientos que eventualmente se realicen, sino al contenido de los hechos y pretensiones de la demanda inaugural, para el que claramente sí tiene competencia, conforme se indicó previamente.

Así las cosas, por lo expuesto, sobre este punto se confirmará la decisión recurrida.

COSTAS

Costas en esta instancia a cargo de Ecopetrol S.A., Morelco S.A.S., Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. y Compañía Aseguradora de Finanzas S.A.S. y Confianza S.A. como quiera que su recurso de alzada no prosperó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley**,**

R E S U E L V E:

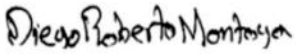
PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Treinta y Siete del Circuito de Bogotá, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de Ecopetrol S.A., Morelco S.A.S., Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. y Compañía Aseguradora de Finanzas S.A. Confianza.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO
Magistrado



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado



ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

AUTO DEL PONENTE:

Se fijan como agencias en derecho en esta instancia a cargo de cada una de las demandadas vencidas la suma de $650.000.



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO
Magistrado

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501720200029O-02
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	ANDY KAREN MOLINA BONILLA
DEMANDANDO	ESTUDIOS E INVERSIONES MÉDICAS ESIMED SAS Y OTROS

En Bogotá D. C. a los veintiún (21) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024), el Magistrado Ponente en asocio de los demás miembros integrantes de la Sala de Decisión, en atención a lo dispuesto en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, que adoptó como legislación permanente el Decreto Legislativo 806 de 2020, procede a dictar la siguiente,

PROVIDENCIA

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de fecha 3 de octubre de 2023 (archivos 31 y 32 carpeta 1ra instancia, cuaderno principal. exp. Digital), mediante el cual el *a quo* negó la medida cautelar prevista en el artículo 85 A del CPT y de la SS.

ANTECEDENTES

ANDY KARIN MOLINA BONILLA, accionó contra ESTUDIOS E INVERSIONES MÉDICAS SA, PRESTMED SAS y SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN, previa declaratoria de unidad de empresa entre ellas, con el propósito que se declare la existencia

del contrato de trabajo a término indefinido, a partir del 10 de diciembre de 2007, y como consecuencia, se condene al reconocimiento y pago de salarios y prestaciones adeudadas, vacaciones, aportes al sistema de seguridad social, indemnización moratoria del artículo 65 del CST, indexación de las sumas adeudadas, la condena solidaria frente a todas, lo que resulte de la aplicación de las facultades extra y ultra petita y las costas del proceso.

Como fundamento de las pretensiones, en síntesis, sostuvo que celebró un contrato de trabajo en modalidad de término indefinido con la sociedad CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP CUNDINAMARCA, el 10 de septiembre de 2007, para desempeñar el cargo de “Terapeuta Respiratorio”; que el 15 de octubre de 2015, dicha sociedad celebró una cesión del contrato individual de trabajo con efectos de sustitución patronal con la sociedad ESTUDIOS E INVERSIONES MÉDICAS S.A. – ESIMED SA., pese a ello, a partir del 16 de octubre de 2018, esta último dejó de cumplir sus obligaciones laborales en temas como el pago del salario, las vacaciones, primas de servicios, cesantías e intereses de las cesantías, tampoco los aportes al sistema integral de seguridad social integral; que pese a que el contrato sigue vigente y desde el 23 de noviembre de 2018, dicha sociedad le informó que podía desarrollar su labor desde casa, continúa el incumplimiento en todas las acreencias laborales.

En el mismo escrito solicitó aplicación de medida cautelar consagrada en el artículo 85 A del CPTSS (página 11 ibid.), argumentando que tanto SALUDCOOP EPS OC en liquidación como sociedad matriz, así como PRESTMED SAS., han tenido investigaciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio por no cumplir las obligaciones tanto para los beneficiarios del servicio de salud, como la de su planta de personal; que ESTUDIOS E INVERSIONES MÉDICAS S.A – ESIMED SA., tiene registrado dentro de su certificado de cámara y comercio más de 115 medidas cautelares por el incumplimiento de sus obligaciones comerciales y laborales, lo que en su criterio, implica un posible incumplimiento en caso de tener una sentencia favorable, con el agravante de que, en plena vigencia del vínculo, ésta última no ha ejecutado algún acto con miras a cumplir con el pago de salarios y prestaciones sociales causados.

El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, inicialmente, mediante auto del 22 de septiembre de 2020 (archivo 03 ibid.), además de admitir la demanda, negó la medida cautelar; sin embargo, por interposición del recurso de apelación por parte de la demandante, esta Sala, mediante proveído del 30 de septiembre de 2021(archivo 03, carpeta segunda instancia, C02ApelaciónAuto), dejó sin valor y efecto dicha decisión del juzgador de primera instancia, al haber desconocido que la solicitud de medida cautelar se tramita en audiencia, previa valoración del material probatorio.

En virtud de dicha orden, la actuación se llevó a cabo en audiencia del 3 de octubre de 2023, en donde el juzgador de primer grado negó nuevamente la petición de medida cautelar, para lo cual adujo que, si bien la parte actora informó que aparecían registradas o inscritas en los certificados de existencia y representación legal de las demandadas, varios procesos que cursan en su contra, esa situación no configura alguna situación de la cual pueda concluirse que, en efecto, dichas personas se encuentran ejecutando actos o maniobras tendientes a insolentarse, o que eventualmente impidan el cumplimiento de sus obligaciones, pues no se evidenciaba que las accionadas se encontraran adelantando actuaciones tendientes a despojarse de sus bienes o que estuvieran disponiendo de sus activos, o que se encontraran cancelado sus cuentas bancarias u otra situación que permita determinar que en efecto se encontraran inmersas o abocadas a un posible estado de liquidez, circunstancias que permitían concluir que no se demostró el estado de insolvencia que se atribuía al extremo pasivo.

Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, argumentando que dicha providencias se apartaba de la esencia del artículo 85 A del CPTSS, porque contrario a lo señalado por el juzgador, se había acreditado que las entidades demandadas actualmente no cuentan con la liquidez suficiente para cumplir con el pago ante una sentencia favorable.

Así, expuso que la pasiva ESTUDIOS E INVERSIONES MÉDICAS, tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal de la entidad al momento en que se presentó la demanda, en el 2020, existían alrededor de 115 demandas presentadas por embargo y secuestro; así mismo, desde el 2018, esa entidad dejó de cumplir con los pagos que en favor de la trabajadora, sin que a la fecha hubiere demostrado acto tendiente

a cumplir con sus obligaciones; que acorde con la información que reposa en la auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la República a MEDIMAS EPS SAS, fue posible evidenciar que la entidad demandada tiene unas condenas y pasivos de más de 200.000 millones de pesos, y mediante auto de fecha 26 de abril del 2021, el Juzgado 51 Civil del Circuito de Bogotá profirió fallo a favor de MEDIMAS EPS SAS, respecto de la demanda radicada con el No. 2020-30000, ordenando ESTUDIOS E INVERSIONES MÉDICAS cancelar el valor de 129.000 millones; que según el certificado de existencia y representación legal, la entidad tiene un capital autorizado de dos mil millones de pesos y el suscrito y pagado es algo más de mil doscientos millones, lo que significa que con esas condenas impuestas a la pasiva, existe un pasivo por mas de 125.000 millones de pesos, lo cual demuestra la imposibilidad de pago de la demandada.

Añadió que, existe un laudo arbitral del 25 de mayo de 2021, en el cual condena a MEDIMAS EPS SAS, PRESTMED SAS y otros a pagar a CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN la suma de 482.000 millones de pesos, aproximadamente, que al compararse con el capital que tiene la pasiva PRESTMED SAS, tiene un autorizado de 100.000 millones de pesos y un suscrito y pagado por valor de 1060 millones de pesos, lo cual demuestra que esta entidad tampoco cuenta con un patrimonio suficiente para cumplir una eventual condena en este proceso; que ESTUDIOS E INVERSIONES MÉDICAS S.A – ESIMED SA entró en liquidación forzosa debido a la malversación de los dineros y el incumplimiento a sus obligaciones con sus trabajadores, lo que permite concluir la necesidad de aplicar la medida cautelar solicitada.

El juzgado de conocimiento concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo.

CONSIDERACIONES

En estricta consonancia con el recurso interpuesto y de conformidad con el numeral 7º del artículo 65 del CPTSS, procede la Sala a establecer si hay lugar o no a decretar la medida cautelar de que trata el artículo 85 A del CPTSS.

El artículo 85 A del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social establece las medidas cautelares que el Juez puede adoptar en el curso de un proceso ordinario, con el fin de que no se hagan ilusorias las resultas de este; medidas, que consisten en una caución que debe asegurar entre el 30% y 50% de las pretensiones de la demanda.

Según esta disposición procesal, las medidas cautelares al interior del proceso ordinario laboral proceden en tres eventos: *i)* cuando el demandado efectúe actos tendientes a insolventarse; *ii)* cuando ejecute actos tendientes a impedir la efectividad de la sentencia –estos dos al interior de proceso-; y *iii)* cuando el Juez considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades que comprometen el cumplimiento de las obligaciones.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia C-379 de 2004, señaló:

Por su naturaleza, la caución sirve para el resarcimiento de perjuicios a favor del demandante hasta un monto determinado, que en el caso de la norma acusada el legislador señaló que debe oscilar entre el 30% y 50 % del valor de la pretensión al momento de decretarse la medida cautelar. Al respecto, en sentencia C-316 de 2002, la Corte afirmó que "en términos generales, el sistema jurídico reconoce que las cauciones son garantías suscritas por los sujetos procesales destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por éstos durante el proceso, así como a garantizar el pago de los perjuicios que sus actuaciones procesales pudieran generar a la parte contra la cual se dirigen. Así entonces, mediante el compromiso personal o económico que se deriva de la suscripción de una caución, el individuo involucrado en un procedimiento determinado (1) manifiesta su voluntad de cumplir con los deberes impuestos en el trámite de las diligencias y, además (2) garantiza el pago de los perjuicios que algunas de sus actuaciones procesales pudieran ocasionar a la contraparte. Las cauciones operan entonces como mecanismo de seguridad e indemnización dentro del proceso".

(…)

Por tanto, la razón de ser de la medida es precisamente evitar el desconocimiento de la sentencia, pues cuando el demandado efectúe actos tendientes a insolventarse, podrá el juez imponer la caución, garantizando el cumplimiento de la misma. Aquí no se desconoce el derecho de acceso a la administración de justicia, pues como se ve, la decisión se toma después de una valoración y un análisis de las pruebas y sólo cuando el juez considere que las resultas del proceso pueden ser desconocidas, previsión que se justifica en favor del trabajador.

La carga procesal que se impone al demandado no agrava su situación, simplemente cuando el juez considere que se encuentra en serias dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones, y en aras de proteger al trabajador decreta la medida, con el fin de hacer efectiva la orden dada en la sentencia.

> *Ahora bien, no oír al demandado a quien se le solicitó que prestará caución y no lo ha hecho, tampoco vulnera ningún derecho fundamental, pues precisamente lo que la norma quiere asegurar es que quien es demandado, cumpla a cabalidad con las resultas del proceso, y si, después de valorar las pruebas, el juez estima procedente decretar la medida cautelar, necesario es, que efectivamente se preste, pues de lo contrario, la sentencia podría quedar en el vacío, y no tiene sentido que quien se somete a un largo procedimiento con el fin de que se le reconozcan sus derechos prestacionales, no pueda finalmente ver materializada su pretensión, pues quien tiene que cumplir con la sentencia realiza actos tendientes a insolventarse, de manera tal, que simplemente si es ejecutado no tendrá con qué acatar el fallo proferido en su contra. Además, debe tenerse en cuenta que el mismo artículo le da al demandado la posibilidad de apelar la decisión del juez de imponer o no la medida cautelar, en caso de que la considere injusta.*

Conforme a la anterior disposición, para que proceda la medida cautelar allí consagrada es necesario que aparezca demostrado que el demandado está realizando actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, o que se evidencie que el accionado se encuentre en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. Aunado a ello, se debe precisar que la carga de la prueba tendiente a demostrar los actos de defraudación y grave dificultad económica, recae en el interesado, es decir, en quien alega esa situación, dado que, aquí no existe ninguna presunción en favor de la parte que lo aduce, lo que significa que no basta con indicarle al juez que el demandado se encuentra incurso en esas causales, para inmediatamente darle aplicación a sus consecuencias jurídicas, ya que la imposición de medidas cautelares, que implican una limitación a la propiedad; incluso, el ejercicio del derecho de defensa y contradicción, no pueden tomarse a la ligera o con las simples manifestaciones de quien cree que se están dando, pues el ordenamiento exige acreditación de esos supuestos, y eso solo se da con la propia actividad de quien lo alega.

De manera que la parte que cuestiona la actividad del demandado, tiene a su disposición los diversos medios de prueba que prevé el ordenamiento con el propósito de acreditar esas dificultades económicas o de ocultación y, eventualmente, dependiendo de esa carga procesal que cumple el interesado, es posible que el juzgador, dentro del margen de apreciación y como director del proceso, pueda exigir pruebas adicionales que se encuentren en poder del demandado, o que resultan de mejor obtención por éste, pero eso solo emerge de la inicial actividad probatoria del interesado y no por simple sugerencia o manifestación del demandante.

Dicho lo anterior, procede la Sala a analizar si se dan los requisitos para decretar la medida, sobre todo, si las demandadas ESTUDIOS E INVERSIONES MÉDICAS S.A – ESIMED SA y PRESTMED SAS, se encuentran en graves dificultades económicas por cuenta de condenas judiciales y el déficit patrimonial que reportan al público, aunado a los continuos incumplimientos en las obligaciones con sus trabajadores, lo cual, ante una eventual condena en su favor, puede frustrar la satisfacción de sus acreencias laborales.

Frente a ello, la parte actora aportó el certificado de existencia y representación legal de dichas personas jurídicas del año 2020 (carpeta primera instancia, archivo 02, páginas 86 a 301, exp. Digital), en donde se observa que, por ejemplo, es cierto que, con respecto a ESTUDIOS E INVERSIONES MÉDICAS S.A – ESIMED SA, existe un sinnúmero de medidas cautelares sobre todos sus establecimientos de comercio, sucursales y agencias; igualmente, un informe de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA de junio de 2021 (archivo 16, páginas 67 a 254), en la que reporta que mediante auto de fecha del 26 de abril de 2021, el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogotá, profirió fallo a favor de MEDIMÁS EPS S.A.S. respecto a la demanda radicada bajo el número 11001310305120200030000, ordenando a ESIMED a cancelar el valor $129.185.704.388; y que ese mismo certificado de existencia y representación legal da cuenta que la sociedad tiene un capital suscrito de $2.000.000.000,00, un suscrito por $1.204.043.631,00 y uno pagado por ese mismo valor.

Con tal evidencia, en principio podría decirse que la sociedad demandada tiene dificultades económicas para atender las obligaciones frente a una posible condena judicial laboral de la trabajadora, bajo el entendido que sus establecimientos de comercio, prácticamente todos, de los cuales dependen los ingresos económicos, se encuentran con medidas cautelares en un gran número de acciones judiciales, aunado a una condena cuantiosa que supera el capital pagado de la sociedad, pero, ello no resultaría suficiente y en sí mismo, para establecer que la pasiva se encuentre en graves y serias dificultades económicas que hagan imposible el cumplimiento oportuno de las obligaciones que se puedan derivar de la sentencia que ponga fin al proceso, resaltando que no es cualquier dificultad, sino aquella de tal envergadura, que va a ocurrir o que existe un porcentaje alto de

que se va a presentar, por cuanto, como lo aseveró la impugnante, si la sociedad se encuentra en estado de liquidación, allí emerge una oportunidad importante para hacer valer el crédito laboral litigioso, sin que la demandante hubiera acreditado su aspiración en ese escenario; pero sobre todo, porque si se encuentra en ese trámite, se requiere la verificación del verdadero y completo pasivo de la entidad y los activos reales de los cuales dispone actualmente, para así establecer el déficit o posible incumplimiento de sus compromisos, en cuanto no basta con resaltar el capital suscrito y pagado de la sociedad y compararlo con ciertas condenas judiciales, ya que eso solo demuestra una parte del patrimonio neto de la compañía, pero no su verdadero estado financiero; con mayor razón si la persona jurídica se encuentra en estado de liquidación, en donde se requiere como premisa general, un inventario del patrimonio social, que aquí no se aportó para verificar, como se dijo, sus pasivos consolidados y no una parte de ellos, en contraste con la información que presentó la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, verbigracia, sobre la EPS MEDIMÁS (entidad que aquí no es demandada), en este mismo reporte de que se valió la demandante, en donde al final de esa información (páginas 245 a 254, archivo 16 ibid.), ese ente de control, por ejemplo, trajo a colación los estados financieros de esa sociedad para presentar los hallazgos fiscales y ordenar un plan de mejoramiento, es decir, que partió de una base sólida para mostrar las dificultades económicas y de diverso tipo para adecuarlas a un mejor desenvolvimiento ante la sociedad, dado el servicio público que prestaba ese organismo.

Con respecto a la demandada PRESTMED SAS, también es cierto que el informe de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA dio cuenta que un Tribunal de Arbitramento profirió Laudo Arbitral de fecha 25 de mayo de 2021 (página 70 y ss, archivo 16 ibid.), el cual negó unas pretensiones solicitadas por MEDIMAS EPS, PRESTNEWCO SAS y PRESTMED SAS, y los condenó a pagar a CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN, la suma de $482.775.089.282; y que el certificado de existencia y representación legal de la sociedad demandada da cuenta que el capital suscrito es de $100.000.000.000, el suscrito es de $1.060.000.000 y el pagado es por este último valor; pero en igual sentido que analizado frente a la otra accionada, esa información no resulta suficiente para establecer la grave dificultad económica de la sociedad, en cuanto, si bien ese dato inscrito en el certificado de existencia y representación legal, da cuenta de su capital, realmente es su situación financiera, la que en forma clasificada, resumida y consistente en determinado período, ojalá el del año inmediatamente anterior, la que revela la totalidad de sus bienes,

derechos y obligaciones, y la situación del patrimonio, además de ser la consulta obligada del público a efectos de posibles inversiones.

En ese orden, no resulta determinante o exhaustivo la conformación del capital social, sino, se repite, su situación financiera, y ello no fue acreditado por la parte actora, a efectos de establecer cómo se encuentra en la actualidad esa sociedad, y si, por ejemplo, esa condena judicial puede infligir a la compañía un peso sobresaliente en sus pasivos que prácticamente la hagan inviable financieramente, y de ello se pueda establecer su imposibilidad de asumir otras cargas económicas frente a terceros.

Por su puesto que la información aducida por la actora es relevante, relacionada con esas condenas e incumplimientos en otras esferas, incluso, la actualidad laboral con ella misma, que en nada puede despreciarse, al punto que si se analiza de forma conjunta puede dar lugar a establecer el propósito de la trabajadora, pero se insiste, no es la única que permite establecer esa gravedad económica de la parte pasiva, en cuanto se requiere verificar cómo está su situación financiera real y actualizada, máxime que se trata de sociedades comerciales debidamente constituidas, que deben reportar información verídica a las autoridades competentes, y así demostrar al público su viabilidad, con mayor razón, si hoy por hoy, esa información puede ser develada a los interesados en conocerla (arts. 37 y 41 de la L. 222 de 1995 y art. 150 del D.L 019 de 2012).

De lo hasta aquí referido, considera la Sala que no se acreditó la causal alegada por la parte actora, a efectos de dar aval a la medida cautelar solicitada del art. 85 A del CPT y de la SS, por lo que se confirmará el auto apelado. Las costas de esta instancia se imponen a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del CGP.

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

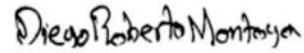
PRIMERO: CONFIRMAR la providencia apelada de fecha el 30 de septiembre de 2022 proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, por las razones anteriormente expuestas.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo la parte apelante.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO
Magistrado



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado



ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

AUTO DEL PONENTE:

Se fijan como agencias en derecho en esta instancia de la parte demandante, la suma de medio smmlv.



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO
Magistrado Ponente

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	**11001310502520230028401**
CLASE DE PROCESO	**EJECUTIVO LABORAL**
EJECUTANTE	**COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**
EJECUTADA	**P O P IMPRESOS EU – EN LIQUIDACIÓN**

En Bogotá D. C. a los veintiún (21) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024), el Magistrado Ponente en asocio de los demás miembros integrantes de la Sala de Decisión, en atención a lo dispuesto en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, que adoptó como legislación permanente el Decreto Legislativo 806 de 2020, procede a dictar el siguiente,

AUTO

ANTECEDENTES

Pretende **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS,** que se libre mandamiento de pago en contra de P O P IMPRESOS EU- EN LIQUIDACIÓN por la suma de $5.942.072, por concepto de capital de la obligación a cargo del empleador por los aportes de pensión obligatoria y la suma de $24.457.000, por concepto de intereses causados y no pagados por aportes a pensión obligatoria y al pago de costas, y agencias en derecho (f° 1 y 2, archivo 01 de la carpeta 1ª inst. exp. Digital).

El a *quo* mediante auto del 22 de agosto de 2023, se abstuvo de librar mandamiento de pago. Para **fundamentar su decisión**, señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 2633 de 1994, el título ejecutivo dentro del proceso para el cobro de aportes obligatorias de pensiones, estaría constituido, de una parte, por la liquidación de lo adeudado por el empleador moroso, la cual debía ser elaborada por el respectivo fondo de pensiones, conteniendo los mismos montos y períodos que se dieron a conocer al empleador al momento de requerirlo.

Adujo que, en el presente asunto se tenía que la empresa P O P IMPRESOS EU-EN LIQUIDACIÓN se encontraba domiciliada en Bogotá, cuyas direcciones de notificación según certificado de existencia y representación allegado por la parte ejecutante, era la carrera 32 No. 71 A-16 y correo electrónico linaresaleyda@hotmail.com; que la parte demandante en procura por cumplir con el requisito previo para constituir el título ejecutivo base de recaudo, había remitido dicha comunicación el 29 de enero de 2021, y posteriormente el 31 de marzo de la misma anualidad, junto con el estado de cuenta, sin haber obtenido respuesta por parte del empleador.

Recalcó que, existía dentro del plenario una liquidación elaborada por la AFP ejecutante, luego de haberse cumplido los 15 días hábiles en la que la demandada presuntamente había recibido el requerimiento previo, esto teniendo en cuenta que se aportaba como prueba era una guía con una firma, más no una certificación expedida por la empresa de correos en el cual se detallara la fecha de entrega y quien había recibido la correspondencia.

Añadió que, si bien en la certificación del 8 de julio de 2022, se indicaba que estaría acompañada de una liquidación anexa, la misma no había sido arrimada al proceso; por consiguiente, no podría pretender la parte ejecutante que la liquidación o la relación de montos adeudados por el moroso había acompañado la comunicación del 31 de marzo de 2021, ya que la norma era clara en que la elaboración de la liquidación se debía realizar una vez transcurriera los 15 días en que la parte ejecutada hubiera recibido el requerimiento previo. En esa medida, no estaba plenamente constituido el título ejecutivo, ya que solo se había allegado al plenario una certificación en la cual no se indicaba claramente que contara con anexos (liquidación).

RECURSO DE APELACIÓN

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la anterior decisión, señalando que para llevar a cabo la entrega del requerimiento de constitución en mora se había puesto en conocimiento al despacho la constancia de certificación de entrega emitida por la empresa CADENA COURRIER donde se certificaba la entrega de los documentos exigidos por la ley (requerimiento y estado de cuenta de aportes pensionales adeudados).

Adicionalmente, debía tenerse en cuenta que al momento en que la accionada se constituyó en mora de los aportes pensionales se encontraba en vigencia la Resolución 2082 de 2016, pero la misma había perdido vigencia el día 29 de junio de 2022, con la entrada en vigor de la nueva normativa contenida en la Resolución 1702 de 2021, la cual

en virtud del principio de ultraactividad de la ley se podía aplicar al presente caso, aún más ante la falta de voluntad de pago por parte del ejecutado, quien a pesar de tener pleno conocimiento de la obligación en mora había persistido en la deuda.

Sostuvo que, la UGPP era la entidad encargada de vigilar que los fondos de pensiones adelantaran el proceso de cobro en contra de los empleadores que incumplieran con la obligación; que en función de dicha vigilancia había adelantado el procedimiento de cobro mediante la resolución 1702 de 2021; que en el capítulo 3, literales c) y e) del artículo 3.3.2, se implementó algunas excepciones para realizar acciones persuasivas, así:

"(…) ***Capítulo 3: ESTÁNDAR DE ACCIONES DE COBRO***

(…) ***3.3.2. Excepción para realizar acciones persuasivas***

Se exceptuarán de realizar las acciones persuasivas cuando no han localizado al aportante deudor, dejando constancia de las gestiones adelantadas para su ubicación sin éxito y, las obligaciones en mora presenten ***riesgo de incobrabilidad****. En este caso, procederán en forma directa al cobro judicial o coactivo, según corresponda.*

Se considera que existe este riesgo cuando se presenten las siguientes condiciones:

a.) La cartera tiene una antigüedad que puede afectar la exigibilidad de la obligación.
b) El aportante se encuentra adelantando un proceso de naturaleza concursal, de liquidación o de sucesión para el caso de personas naturales.
c) El aportante no tiene voluntad de pago, de acuerdo con la manifestación expresa que haga en este sentido a la Administradora por cualquier medio que permita su posterior verificación.
d) Cursa otro proceso de cobro judicial o coactivo, ante cualquier autoridad.
e) La obligación supera el monto definido por las administradoras para dar prioridad a las acciones de cobro judicial o coactivo. Cada administradora deberá definir y documentar esta regla en su proceso de cobro o en documento formal correspondiente. (…)"

Refirió que, había emitido la liquidación, tal y como lo autorizaba el precitado artículo; que vencido los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas, por lo cual solicita se libre el respectivo mandamiento de pago.

El Juez de primera instancia a través de auto del 10 de octubre de 2023, resolvió el recurso de reposición, manteniéndose en lo resuelto en el auto objeto de recurso, en su lugar concedió el recurso de apelación (archivo 05 de la carpeta 1ª inst. exp. Digital).

CONSIDERACIONES

En estricta consonancia con el recurso interpuesto (art. 66 A CPTSS), y de conformidad con el numeral 8 del artículo 65 del CPTSS, procede la Sala de Decisión a resolver la apelación presentada por Colfondos contra la providencia a través de la cual el *a quo* resolvió negar el mandamiento de pago solicitado por la parte ejecutante.

De entrada, esta Sala estima necesario rememorar que el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, consagra que las liquidaciones realizadas por las administradoras respecto de los aportes cuyo pago se encuentre en mora, prestan mérito ejecutivo en contra de los empleadores, a saber:

> *ARTÍCULO 24. ACCIONES DE COBRO. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo.*

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el artículo 5 del Decreto 2633 de 1994, establece como requisito previo para la elaboración de la liquidación prenombrada, que la administradora remita al empleador un requerimiento de pago, pues sólo pasados quince días sin que exista pronunciamiento de parte de éste, aquella estará facultada para realizar la mentada liquidación:

> *Artículo 5° Del cobro por vía ordinaria. En desarrollo del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, las demás entidades Administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que esta disponga, con carácter general; sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la estimación de sus cuantías e interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordantes.*
>
> ***Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993***. (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

De lo expuesto, se desprende que, en estos casos el mérito ejecutivo de la liquidación elaborada por la administradora se encuentra condicionado ***i)*** a que esta hubiese remitido un requerimiento de pago al empleador respecto de lo adeudado, y ***ii)*** a que hubiesen transcurrido 15 días a partir del envío de la comunicación, sin que el moroso hubiese realizado pronunciamiento alguno. A su vez, no está por demás indicar que, como es lógico, el carácter ejecutivo de la liquidación estará supeditado también a que contenga obligaciones claras, expresas y exigibles, en los términos del artículo 422 del CGP.

La norma citada permite concebir el requerimiento previo como requisito de procedibilidad para poder iniciar la acción ejecutiva tendiente a efectuar el cobro de aportes al sistema de seguridad social en pensiones, de manera tal que sin la satisfacción de ese requisito no es viable la ejecución, es decir, tanto el requerimiento previo como la

consiguiente liquidación efectuada por la entidad, conforman un título ejecutivo complejo o compuesto.

Dilucidado lo anterior, se tiene que en este caso, la parte ejecutante aportó como soporte del mencionado requerimiento, el envío de fecha 29 de enero de 2021, a la dirección carrera 32 No. 71 A-16, el cual fue devuelto por dirección errada, tal y como aparece registrado en la parte inferior de esa misiva. Posteriormente, se realizó el 31 de marzo de esa misma anualidad, el cual refiere que fue entregado a la señora Amparo Cortez el día 7 de abril de 2021, en la carrera 28B No. 71B-16 (f° 15 y 20, archivo 01, carpeta 1 instancia, exp. Digital), como se puede ver a continuación:



Colfondos del grupo HABITAT

Bogotá D.C., 29 de enero de 2021
COB - IQ - CM - 41198

cadena courrier 29-1-2021 COPIA COTEJADA

Señor (es):
P O P IMPRESOS EU - EN LIQUIDACION
NIT 830125596
Dir: CR 32 # 71A - 016
Tel 5427563
BOGOTA D.C - BOGOTA D.C
4072 1187 1/3

Referencia: Constitución en Mora.

Estimados señores:

Colfondos S.A le informa que una vez validado nuestro sistema de información, encontramos que su empresa P O P IMPRESOS EU - EN LIQUIDACION identificada con NIT 830125596, reporta mora en el pago de las cotizaciones de pensiones obligatorias hasta el 29 de Enero de 2021, por los siguientes conceptos: Por aportes pensionales equivalentes a la suma de $5.942.072; importante aclarar que estos valores corresponden únicamente a capital, los intereses de mora los podrá ver reflejados en el estado de cuenta adjunto.

Lo anterior, a pesar de que le hemos requerido en anteriores oportunidades para que cancele las cotizaciones adeudadas más los respectivos intereses de mora, o en caso contrario, adelante el proceso de depuración de deudas por existir novedades pendientes de aplicar, sin que a la fecha hayamos obtenido respuesta alguna de su parte.

Así las cosas, Colfondos S.A., inicia la etapa de cobro Pre-jurídico, **requiriéndole nuevamente para que en el término de 15 días hábiles, contados a partir del envío de esta comunicación, cancele las sumas adeudadas incluyendo los intereses de mora, o adelante el proceso de reporte de novedades que depure la misma**; esto en cumplimiento a lo señalado en el artículo 2 del Decreto 2633 de 1994 , en caso de no recibir respuesta en los tiempos antes indicados, daremos inicio al proceso de cobro jurídico.

Si va a realizar el pago de la deuda reportada más su respectivo interés de mora, lo puede hacer a través de transferencia electrónica a la cuenta de ahorros del Banco Colpatria No. 4522164351, remitiendo soporte de la transferencia y el detalle del número de planilla y periodos que está cancelando, al correo electrónico: normalizacióndeaportesColfondos@iq-online.com

Finalmente, le recordamos que puede contactarse con nuestro proveedor SERVIEFECTIVO al 4824899 ext 2137, ubicado en la CLL 63 No 28A-62 de la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico colfondos@serviefectivo.com.co, en donde nuestros asesores estarán prestos a ofrecerle la alternativa que más se ajuste a la situación actual de su empresa.

Cordialmente,

CAROLINA GALVIS CASTELLANOS
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A.



15 / 130 100%



Información general

Búsqueda básica | Búsqueda avanzada | Ayuda | Regresar

P O P IMPRESOS EU - EN LIQUIDACION

Tipo de identificación:	NIT	**Número de identificación:**	8301255966
Matrícula mercantil:	01298075	**Municipio:**	BOGOTA D.C.
Dirección:	CR 32 # 71A - 016	**Tipo Organización:**	Empresa unipersonal
Categoría:	Principal	**Estado:**	Activa
Proponente:	No tiene	**Esal:**	No
Importa/Exporta:	No tiene	**Cámara / Origen Datos:**	Bogotá
Lista Clinton:	No Reportado	**Contraloría:**	No Reportado



Detalle distribución

Destinatario: P O P IMPRESOS EU - EN LIQUIDACION
Distribuidor: Lecta Bogota
Producto: Cobranzas-ConstitucionEnMora
Fecha de ciclo: 29/01/2021
Consecutivo:
Prioridad: Ciudad Tipo A
Orden Producción: 454610
Orden Cliente:
Orden Distribución: 454610
Dirección: CR 32 # 71A - 016
Destino: BOGOTÁ, D.C., BOGOTA D.C
Teléfono: 5427563
Zona: NOZON9

REGISTRAR RECLAMO
REENVIAR POR EMAIL

2161231914536

Devuelto

29/01/2021 13:56:00 — Procesamiento
01/02/2021 19:15:00 — Transporte
02/02/2021 00:00:00 — En proceso distribución
05/02/2021 00:00:00 — Devuelto
Dirección errada

sico... | 04Recurso.pdf | 01Demanda (2).pdf ×

16 / 130 — 75%

Colfondos
del grupo HABITAT

Bogotá D.C., 31 de marzo de 2021
COB - IQ - CM - 50672

cadena courrier
31-3-2021
COPIA COTEJADA

Señor (es):
P O P IMPRESOS EU - EN LIQUIDACION
NIT 830125596
Dir: CRA 28B 71B 16
Tel 5427563
BOGOTA D.C - BOGOTA D.C
2429 635 1/3

Referencia: Constitución en Mora.

Estimados señores:

Colfondos S.A le informa que una vez validado nuestro sistema de información, encontramos que su empresa P O P IMPRESOS EU - EN LIQUIDACION identificada con NIT 830125596, reporta mora en el pago de las cotizaciones de pensiones obligatorias hasta el 31 de Marzo 2021, por los siguientes conceptos: Por aportes pensionales equivalentes a la suma de $5.942.072; importante aclarar que estos valores corresponden únicamente a capital, los intereses de mora los podrá ver reflejados en el estado de cuenta adjunto.

Lo anterior, a pesar de que le hemos requerido en anteriores oportunidades para que cancele las cotizaciones adeudadas más los respectivos intereses de mora, o en caso contrario, adelante el proceso de depuración de deudas por existir novedades pendientes de aplicar, sin que a la fecha hayamos obtenido respuesta alguna de su parte.

Así las cosas, Colfondos S.A., inicia la etapa de cobro Pre-jurídico, **requiriéndole nuevamente para que en el término de 15 días hábiles, contados a partir del envío de esta comunicación, cancele las sumas adeudadas incluyendo los intereses de mora, o adelante el proceso de reporte de novedades que depure la misma**; esto en cumplimiento a lo señalado en el artículo 2 del Decreto 2633 de 1994 , en caso de no recibir respuesta en los tiempos antes indicados, daremos inicio al proceso de cobro jurídico.

Si va a realizar el pago de la deuda reportada más su respectivo interés de mora, lo puede hacer a través de transferencia electrónica a la cuenta de ahorros del Banco Colpatria No. 4522164351, remitiendo soporte de la transferencia y el detalle del número de planilla y periodos que está cancelando, al correo electrónico: normalizaciondeaportesColfondos@iq-online.com

Finalmente, le recordamos que puede contactarse con nuestro proveedor SERVIEFECTIVO al 4824899 ext 2137, ubicado en la CLL 63 No 28A-62 de la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico colfondos@serviefectivo.com.co, en donde nuestros asesores estarán prestos a ofrecerle la alternativa que más se ajuste a la situación actual de su empresa.

Cordialmente,

CAROLINA GALVIS CASTELLANOS
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A.

cadena courrier
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS
8.001494-962

2161232627273

ZONA N-7-2B

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Destinatario:
P O P IMPRESOS EU - EN LIQUIDACION
CRA 28B 71B 16
ALCAZARES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
5427563

O.P. 460985
Planta Origen: BOGOTA
Fecha Ciclo: 31/03/2021 14:47
CP: 111221
Número de guía:2161232627273
Nombre portería:
LECTA BOGOTA

Reclamo: Incongruencia:
Dev Recur.: Portería:

V.I.P.

Producto: 362-06

506

NOMBRE O FIRMA DE QUIEN RECIBE
Amparo Cortez
Telefono:
Cedula quien recibe:

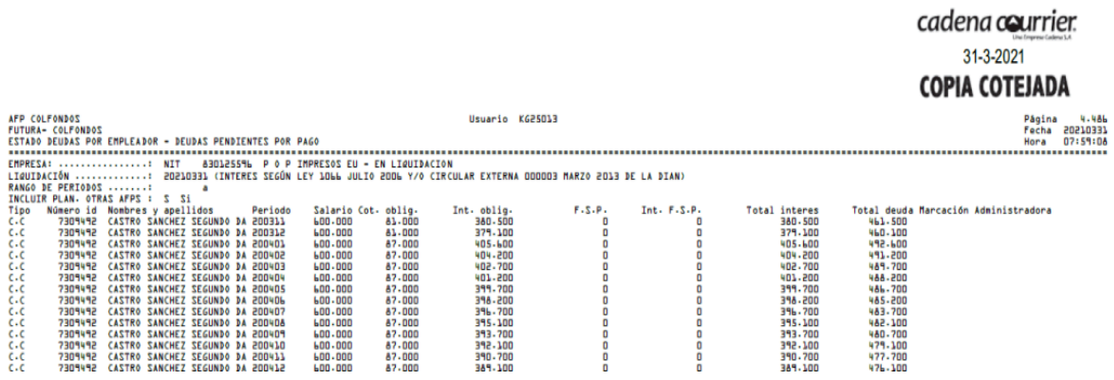
NO PERMITE BAJO PUERTA

120gr Quien Entrega

Estado de Entrega
No hay quien reciba
No Reside
Rehusado
Dir. Incompleta
Dir. Errada
Otros (Difícil acceso)
Desconocido

Cadena s.a. Tel.:(57)(1)378 66 66 - www.cadena.com.co - Licencia mintic 68 del 9 de Septiembre de 2011

Asimismo, se observa del informativo que se aportó la liquidación con sello de copia cotejada por parte de la empresa de envíos CADENA COURRIER, lo cual se entiende que sí acompañó el requerimiento, como se puede apreciarse del siguiente pantallazo:



cadena courrier
31-3-2021
COPIA COTEJADA

AFP COLFONDOS Usuario KG25013 Página 4.486
FUTURA- COLFONDOS Fecha 20210331
ESTADO DEUDAS POR EMPLEADOR - DEUDAS PENDIENTES POR PAGO Hora 07:59:08

EMPRESA: .....: NIT 830125596 P O P IMPRESOS EU - EN LIQUIDACION
LIQUIDACIÓN .....: 20210331 (INTERES SEGÚN LEY 1066 JULIO 2006 Y/O CIRCULAR EXTERNA 000003 MARZO 2013 DE LA DIAN)
RANGO DE PERIODOS .....: a
INCLUIR PLAN. OTRAS AFPS : S Si

Tipo	Número id	Nombres y apellidos	Periodo	Salario Cot.	oblig.	Int. oblig.	F.S.P.	Int. F.S.P.	Total interes	Total deuda	Marcación Administradora
C.C	7309492	CASTRO SANCHEZ SEGUNDO DA	200311	400.000	81.000	380.500	0	0	380.500	461.500	
C.C	7309492	CASTRO SANCHEZ SEGUNDO DA	200312	400.000	81.000	379.100	0	0	379.100	460.100	
C.C	7309492	CASTRO SANCHEZ SEGUNDO DA	200401	400.000	87.000	405.600	0	0	405.600	492.600	
C.C	7309492	CASTRO SANCHEZ SEGUNDO DA	200402	400.000	87.000	404.200	0	0	404.200	491.200	
C.C	7309492	CASTRO SANCHEZ SEGUNDO DA	200403	400.000	87.000	402.700	0	0	402.700	489.700	
C.C	7309492	CASTRO SANCHEZ SEGUNDO DA	200404	400.000	87.000	401.200	0	0	401.200	488.200	
C.C	7309492	CASTRO SANCHEZ SEGUNDO DA	200405	400.000	87.000	399.700	0	0	399.700	486.700	
C.C	7309492	CASTRO SANCHEZ SEGUNDO DA	200406	400.000	87.000	398.200	0	0	398.200	485.200	
C.C	7309492	CASTRO SANCHEZ SEGUNDO DA	200407	400.000	87.000	396.700	0	0	396.700	483.700	
C.C	7309492	CASTRO SANCHEZ SEGUNDO DA	200408	400.000	87.000	395.100	0	0	395.100	482.100	
C.C	7309492	CASTRO SANCHEZ SEGUNDO DA	200409	400.000	87.000	393.700	0	0	393.700	480.700	
C.C	7309492	CASTRO SANCHEZ SEGUNDO DA	200410	400.000	87.000	392.100	0	0	392.100	479.100	
C.C	7309492	CASTRO SANCHEZ SEGUNDO DA	200411	400.000	87.000	390.700	0	0	390.700	477.700	
C.C	7309492	CASTRO SANCHEZ SEGUNDO DA	200412	400.000	87.000	389.100	0	0	389.100	476.100	

No obstante, dicho proceder no cumple con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5 del Decreto 2633 de 1994, pues allí claramente dispone que después de enviarse el requerimiento al empleador moroso y este guarda silencio, dentro de los quince (15) días siguientes, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, término que no se surtió en este caso, pues el ejecutante procedió a elaborar la liquidación el mismo día en que fue requerido al empleador, de suerte que, la comunicación que se aporta al expediente no cumple con la finalidad que pretende obtenerse a través del requerimiento previo.

Por ello, estima la Sala que en este caso la ejecutante no cumplió con las exigencias que establece el artículo 5 del Decreto 2633 de 1994, que es la norma que regula la situación en particular, sin que sea dable dar aplicación a resoluciones internas de acciones de cobro entre las AFP a los aportantes morosos obligados por el pago de contribuciones parafiscales de la Protección Social. Así las cosas, concluye esta Sala de decisión que los documentos aportados no constituyen un título ejecutivo, al no gozar de la característica de ser exigibles, por cuanto no existe prueba de que se haya efectuado debidamente el requerimiento inicial al empleador.

Por lo tanto, se confirmará la decisión de primera instancia.

COSTAS

Costas en esta instancia a cargo del recurrente de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1, artículo 365 del CGP.

En mérito de lo expuesto **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C.**

RESUELVE:

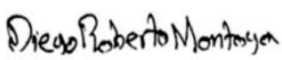
PRIMERO: CONFIRMAR el auto apelado, proferido por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte ejecutante.

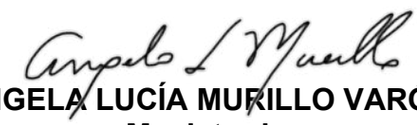
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO
Magistrado Ponente



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado



ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Magistrada

AUTO DEL PONENTE:

Se fijan como agencias en derecho en esta instancia a cargo de la parte ejecutante en la suma de $325.000.



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

Magistrado Ponente

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO:	Ordinario Laboral
RADICADO:	11001-31-05-023-2023-00286-01
DEMANDANTE:	MÓNICA MÉNDEZ MOLINA
DEMANDADO:	CORPORACIÓN NUESTRA IPS
ASUNTO:	Apelación Auto del 23 de octubre de 2023
JUZGADO:	Juzgado Veintitrés (23) Laboral del Circuito de Bogotá
TEMA:	Rechaza demanda
DECISIÓN:	REVOCA

Hoy, veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, **SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA** por los Magistrados **LORENZO TORRES RUSSY, GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA** y como Ponente, **ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN**, se procede a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte DEMANDANTE en contra del Auto del 23 de octubre de 2023, proferido por el Juzgado Veintitrés (23) Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por **MÓNICA MÉNDEZ MOLINA** contra la **CORPORACIÓN NUESTRA IPS**, con radicado No. **11001-31-05-023-2023-00286-01.**

ANTECEDENTES

Mediante apoderado judicial, la señora MÓNICA MÉNDEZ MOLINA formuló demanda ordinaria laboral contra la CORPORACIÓN NUESTRA IPS, con miras a que se declare que existió un despido indirecto por parte de la demandada, quien además se encuentra en mora de pagar los salarios y prestaciones sociales causadas a su favor; como consecuencia de ello, se condene a la CORPORACIÓN NUESTRA IPS a reconocer y pagar salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, vacaciones, aportes a pensión, causados durante la vigencia de la relación laboral, hasta el 9 de enero de 2020, data en que terminó el contrato

de trabajo, junto con la indemnización por despido sin justa causa, indemnización moratoria, sanción por falta de consignación de las cesantías, la indexación, lo que resulte probado *ultra y extra petita*, costas y agencias en derecho[1].

A través de Providencia del 25 de septiembre de 2023, el Juzgado de conocimiento resolvió inadmitir la demanda, al considerar que:

> "1. *Se presenta* ***insuficiencia de poder, frente a las pretensiones, las cuales no se encuentran relacionadas ni detalladas en el poder anexo a la demanda****, conforme lo preceptúa el artículo 77 del C.G.P., por cuanto solicita sin estar facultada para ello, que reza, (...) El apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime convenientes para beneficio del poderdante (...).*
> *2. Deberá allegar el Certificado de Existencia y Representación Legal de la demandada.*
> *3. Deberá dar cumplimiento al Inciso 5° del Artículo 6° de la Ley 2213 de 2022, esto es, demostrar el envío de la demanda y de sus anexos a los demandados…*"[2].

PROVIDENCIA APELADA

El Juzgado Veintitrés (23) Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 23 de octubre de 2023, rechazó la demanda, dado que no se allegó con el escrito subsanatorio de la demanda, el certificado de existencia y representación legal de la sociedad que se pretende demandar, conforme se requirió en Auto anterior[3].

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la parte DEMANDANTE presentó recurso de apelación argumentando que procedió a subsanar la demanda, allegado ante el Despacho poder otorgado por medios electrónicos por parte de la demandante, conforme a los requerimientos que le fueron efectuados; además, sobre el Certificado de Existencia y Representación Legal de la demandada, puso de presente que no tenía el documento actualizado, por lo que se anexaba uno de fecha anterior, resaltando que se había radicado derecho de petición el día 28 de septiembre de 2023 al Ministerio de Salud y Protección Social, solicitando copia del certificado en mención. a efectos de allegarlo al proceso tan pronto fuere remitido por esa entidad

[1] Páginas 1 a 7 Archivo 01 Expediente Digital
[2] Archivo 04 Expediente Digital
[3] Archivo 07 Expediente Digital

Agregó que efectuó el envío simultáneo de la demanda, en atención a lo establecido en el Inciso 5° del artículo 6º de la Ley 2213 de 2022, el día 23 de Agosto de 2023 a la dirección de correo electrónico dcmorales@nuestraips.com.co, la cual fue encontrada para la recepción de las notificaciones judiciales por parte de la entidad demandada.

Por tanto, sostuvo que el Auto apelado está llamado a ser revocado, toda vez que subsanó la demanda, de conformidad con los requerimientos que fueron solicitados por el Despacho y atendiendo la oportunidad procesal para ello[4].

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de los términos procesales previstos se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Cabe anotar que los alegatos de conclusión no constituyen una nueva oportunidad para complementar el recurso de apelación interpuesto en primera instancia.

Surtido el trámite que corresponde a esta instancia procede la Sala de Decisión a dictar la providencia que corresponde.

PROBLEMA JURÍDICO

Conforme al recurso interpuesto, el problema jurídico a resolver se centra en determinar si es o no procedente rechazar la demanda.

CONSIDERACIONES

La Sala resolverá el recurso siguiendo los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPL**,** es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

Dispone el artículo 26 del C.P.T. y S.S., sobre los anexos de la demanda:

> "***ARTICULO 26. ANEXOS DE LA DEMANDA.*** *<Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> La demanda deberá ir acompañada de los siguientes anexos:*
>
> *1. El poder.*
>
> *2. Las copias de la demanda para efecto del traslado, tantas cuantos sean los demandados.*

[4] Archivo 10 Expediente Digital

3. Las pruebas documentales y las anticipadas que se encuentren en poder del demandante.

4. La prueba de la existencia y representación legal, si es una persona jurídica de derecho privado que actúa como demandante o demandado.

5. La prueba del agotamiento de la reclamación administrativa si fuere el caso.

6. La prueba del agotamiento del requisito de procedibilidad de que trata la Ley 640 de 2001, cuando ella lo exija.

***PARÁGRAFO.** Ante la imposibilidad de acompañar la prueba de la existencia y representación legal del demandado, se afirmará tal circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. Esta circunstancia no será causal de devolución. El Juez tomará las medidas conducentes para su obtención*." (Subraya fuera de texto).

Conforme a la norma en referencia, constituye un anexo de la demanda la prueba de la existencia y representación legal, cuando es una persona jurídica de derecho privado quien actúa como demandante o demandada, lo cual tiene como finalidad individualizar e identificar a la parte, así como verificar el presupuesto de capacidad para ser parte y capacidad para comparecer.

En el presente caso, se advierte que el motivo por el cual se rechazó la demanda formulada, se relaciona con la falta de presentación del certificado de existencia y representación legal de la parte demandada.

Sobre el punto, se tiene que con el escrito de demanda radicado el 17 de agosto de 2023 (Archivo 02 del ED), la parte actora allegó certificado de existencia y representación de la demandada, emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social de fecha 3 de septiembre de 2021 (páginas 38 a 39 archivo 01 del ED), como autoridad competente para el reconocimiento de personería jurídica de la encartada, conforme al artículo 18 del Decreto 1088 de 1991[5], sin embargo, sobre dicho documento el Juzgado de Conocimiento no efectuó ningún pronunciamiento en el Auto de fecha 25 de septiembre de 2023, mediante el cual ordenó la devolución de la demanda para su subsanación.

Pese a ello, la parte accionante con el escrito de subsanación, allegó derecho de petición formulado el 28 de septiembre de 2023, ante el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante el cual solicitó copia del certificado de existencia y representación legal de la encartada, argumentando que al ingresar al portal web

[5] *"**Artículo 18.-** De la competencia en el nivel Nacional. La función de reconocer personería jurídica a las fundaciones o instituciones de utilidad común y asociaciones o corporaciones sin ánimo de lucro que tengan por finalidad el fomento, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud, dentro de la jurisdicción de más de un departamento, o intendencia, o comisaría o en todo el territorio nacional, corresponde al Ministro de Salud".*

dispuesto por la cartera ministerial para el efecto, no había sido posible su generación (página 1 y 5 archivo 06 del ED).

Conforme a ello, se tiene que la parte actora, contario a lo aducido por el Juzgado de Conocimiento, sí allegó el certificado de existencia y representación legal de la encartada, expedido por la autoridad competente, sin embargo, el desatino radica en que dicha documental se encuentra desactualizada, toda vez que data del mes de septiembre de 2021, cuando la demanda fue radicada en agosto de 2023, por lo que debió la parte actora anexar un certificado más actualizado, lo cual en efecto pretendió cumplir en el presente asunto, pues como se dijo, elevó derecho de petición ante el Ministerio de Salud y Protección Social para su consecución, ya que en el portal web que se encuentra dispuesto por la entidad parta el efecto, el mismo no se puede obtener, como en efecto verificó la Sala de Decisión al consultar la dirección electrónica referenciada en el escrito de subsanación de la demanda (**https://tramites.minsalud.gov.co/Certificados/SolicitarCertificaciones.aspx**.)

Bajo tal contexto, se tiene que el Juzgado de Conocimiento debió abstenerse de disponer el rechazo de la demanda formulada, pues ante la imposibilidad de obtener la prueba de la existencia y representación legal del demandado, como se puso de presente en el derecho de petición anexo al escrito de subsanación de la demanda, el A quo debió tomar las medidas conducentes para su obtención, como así lo prevé el Parágrafo del artículo 26 del CPT y de la SS, citado con anterioridad, máxime que la parte actora hizo las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Salud y Protección Social, quien se insiste, es el llamado a reconocer personería jurídica a la demandada, en los términos del artículo 18 del Decreto 1088 de 1991; a más que, al efectuarse por el Colegiado consulta en la página del Registro Único Empresarial (RUES) con el NIT de la demandada (830128856), no es posible obtener resultado de registro sobre la institución llamada a la acción.

Por lo anterior, se revocará la decisión opugnada, para en su lugar, ordenar al fallador de primer grado que proceda a admitir la demanda formulada por la señora Mónica Méndez Molina y, para que a su vez, asuma las medidas a que hubiere lugar, a fin de obtener la prueba de existencia y representación legal de la demandada. Sin Costas en esta instancia por no aparecer causadas al no haberse trabado la Litis.

Por lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

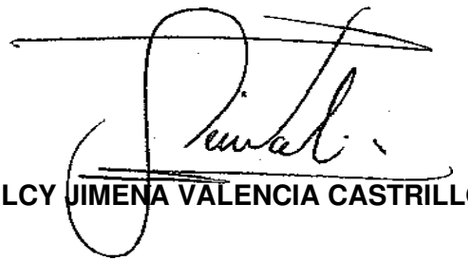
RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el Auto del 23 de octubre de 2023, proferido por el Juzgado Veintitrés (23) Laboral del Circuito de Bogotá, para que, en su lugar, el A quo disponga la admisión de la demanda, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin **COSTAS** en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN



LORENZO TORRES RUSSY



GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO:	Ordinario Laboral
RADICADO:	11001-31-05-025-2022-00142-01
DEMANDANTE:	RAÚL ALFONSO NARVÁEZ SÁENZ.
DEMANDADO:	ECOPETROL S.A.
ASUNTO:	Apelación Auto del 13 de febrero de 2024.
JUZGADO:	Juzgado 25 Laboral del Circuito de Bogotá
TEMA:	Previa – "FALTA DE COMPETENCIA POR FALTA DE RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA"
DECISIÓN:	CONFIRMA

Hoy, veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, **SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA** por los Magistrados **LORENZO TORRES RUSSY, GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA** y como Ponente**, ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN**, se procede a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada ECOPETROL S.A. en contra del Auto del 13 de febrero de 2024, proferido por el Juzgado Veinticinco (25) Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por **RAÚL ALFONSO NARVÁEZ SÁENZ** contra **ECOPETROL S.A.**, con radicado No. **11001-31-05-025-2022-00142-01.**

ANTECEDENTES

El promotor del proceso propuso demanda[1] ordinaria laboral con miras a que se declare las siguientes pretensiones; **i)** que se declare que el demandante, en su condición de ex trabajador de la empresa Ecopetrol S.A., es beneficiario del régimen de seguridad social previsto en el Decreto 807 de 1994, **ii)** que se declare que la normatividad aplicable al demandante para el reconocimiento de su pensión de jubilación, es la prevista en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, **iii)**

[1] Págs. 1-11 archivo 01 del ED.

que se declare que cumple con los requisitos legales para que el empleador Ecopetrol S.A., le reconozca la pensión de jubilación, con el carácter de compartida hasta cuando la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones le reconozca la pensión de vejez, **iv)** que se declare que Ecopetrol S.A., está en la obligación legal de reconocer al demandante, la pensión de jubilación con el carácter de compartida hasta cuando Colpensiones reconozca a su favor la pensión de vejez, **v)** que se declare que una vez la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones reconozca la pensión de vejez al demandante, la empresa demandada deberá reconocer la mayor diferencia entre la pagada por el empleador y la reconocida por Colpensiones, **vi)** que se condene a ECOPETROL S.A. a pagar al demandante la pensión de jubilación con el carácter de compartida, hasta cuando la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones asuma la pensión de vejez, la cual se liquidará con el 75% del salario devengado en el último año de servicio, **vii)** que se condene a ECOPETROL S.A. a pagar al demandante la mayor diferencia de la pensión de jubilación, a partir del momento en que la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones reconozca la pensión de vejez, **viii)** que se condene a ECOPETROL S.A. a reconocer intereses moratorios sobre las sumas de dinero que deba recibir el demandante por concepto de su pensión de vejez, **ix)** que se condene a ECOPETROL S.A. a pagar a favor del demandante la sanción prevista en el artículo 8º de la Ley 10 de 1972, a partir del momento en que nació el derecho de la pensión de jubilación, y **x)** el pago de costas procesales.

Como fundamento de sus pretensiones, el demandante manifestó que laboró para la empresa ECOPETROL S.A., por espacio de 30 años, 5 meses y 26 días, que durante el periodo del 15 de enero de 1990 al 14 de enero de 1992 prestó sus servicios como aprendiz para la empresa ECOPETROL S.A., y posteriormente se vinculó mediante contrato a término indefinido, desde el 17 de enero de 1992 hasta el 31 de julio de 2020.

Refirió, que el último cargo desempeñado fue el de ingeniero integral de operaciones A, con una asignación mensual de $10.054.150. Que, mediante acta de transacción celebrada el 30 de julio de 2020, dieron por terminado el contrato de trabajo a partir del 31 de julio del mismo año. Expuso, que solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, siendo negada mediante comunicación del 16 de noviembre de 2020.

Admitida la demanda y corrido el traslado de ley, la demandada **ECOPETROL S.A.,** al contestar[2] el escritor introductorio, se opuso a todas y cada una de las pretensiones, bajo el argumento que, para el reconocimiento de la pensión a cargo de la empleadora, el demandante debía acreditar 20 años o más al servicio de Ecopetrol S.A. y 55 años de edad antes del 31 de julio de 2010. Sin embargo, el ex trabajador cumplió con el tiempo de servicios, pero no con la edad. Adujo, que el actor no tiene el estatus de pensionado y por tanto no hay lugar a la compartibilidad señalada con COLPENSIONES.

Como excepciones previas propuso las de; **"*Falta de competencia por falta de reclamación administrativa*",** señaló que de conformidad con el artículo 6 del CPT y S.S. modificado por el artículo 4° de la Ley 712 de 2001, las acciones contra cualquier entidad de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Que en el *sub examine,* la parte actora no elevó reclamación respecto de las pretensiones; 3, 4 5, 6 ,7 ,8 y 9. "***Cosa Juzgada**",* argumentó que la excepción se encuentra probada mediante el Acta de Transacción suscrita con el ex trabajador hoy demandante, en ella se acordó que el plan de retiro correspondía al pago de cotizaciones a la seguridad social hasta cuando el actor cumpliese 62 años, por tanto, no hay lugar a la pensión pretendida. Y por último la exceptiva de **"*Integración de Litis Consorcio Necesario y Cuasinecesario*",** adujo que COLPENSIONES debe intervenir en el proceso, pues a partir del 1° de agosto de 2010, el demandante fue afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida para el riesgo de vejez. En ese sentido, la administradora deberá emitir un bono pensional, en el evento que la patronal sea condenada al pago de la pensión solicitada.

PROVIDENCIA APELADA

El Juzgado Veinticinco (25) Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 13 de febrero de 2024, declaró **probada parcialmente** la excepción de "Falta de competencia por falta de reclamación administrativa", y **no probadas** las de "Cosa Juzgada" e "Integración de Litis Consorcio Necesario y Cuasinecesario".

Como fundamento de su decisión, la *A quo* inició por citar el artículo 6° del C.P.L modificado por el artículo 4 de la Ley 712 de 2001, que señala que las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquier otra

[2] Págs. 1-39 archivo 05 del expediente digital.

entidad de la administración pública solo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa, la cual consiste en un simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda.

Adujo que la demandada solicita se excluyan las pretensiones enumeradas 3, 4, 5, 6 ,7 ,8 y 9, pues considera que con la reclamación de fecha 31 de octubre de 2020, no se agotó con dicho requisito. En ese sentido, estimó el *A quo*, que una vez auscultada la reclamación obrante a folios 55 y 56 del archivo 01 del cartapacio digital, le asiste razón a la encartada únicamente en lo relativo a la pretensión 9°, pues en efecto el actor en la reclamación no se pronunció acerca de la sanción prevista en el artículo 8 de la Ley 10 de 1972. Frente a las demás pretensiones explicó, que si cumplen con el requisito previsto en el artículo 6 del estatuto procedimental laboral.

Frente a la excepción de Cosa Juzgada, la desestimó bajo el argumento que una vez revisada el acta de transacción celebrada el 30 de julio de 2020, visible a folios 42 a 54 del archivo 01 del expediente, se advierte que las partes en contienda de común acuerdo pactaron una renta mensual de $9.427.098 a partir de la terminación del contrato hasta que el señor Narváez Sáenz cumpla la edad de 62 años. De ahí que, como no se pactó el reconocimiento de una pensión de jubilación como se solicita en la demanda, no existe identidad de objeto ni causa pretendí que permita establecer la configuración del instituto jurídico de cosa juzgado previsto en el artículo 303 del CGP.

Finalmente, en lo relativo a la excepción previa de “Integración de Litis Consorcio Necesario y Cuasinecesario”, indicó que no es necesario llamar a COLPENSIONES, pues en el hipotético caso de salir avante las pretensiones de reconocimiento de pensión de jubilación y una posible compartibilidad, la administradora estaría encaminada eventualmente a pagar el mayor valor que resulte entre la pensión que se ordenará y la que liquide la AFP.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada **ECOPETROL S.A.** insiste que, si bien la reclamación administrativa no tiene solemnidades, la misma sí debe ser clara y precisa en lo que solicita. Por tanto, la reclamación elevada por el accionante no cumple con dicho requisito pues no solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación con el carácter de compartida.

Frente, a la exceptiva de Cosa Juzgada, aduce que contrario a lo manifestado por el *A quo*, la renta mensual que acordaron las partes que debía asumir la ex

empleadora desde la terminación del contrato hasta la edad de 62 años, es con ocasión que el actor no cumpla con los requisitos convencionales para acceder a la pensión de jubilación, pues al 31 de julio de 2010 no reunía la totalidad de los requisitos para hacerse acreedor a dicha prestación.

Por último, el mandatario judicial ruega que se revoque la decisión de no vincular a Colpensiones, toda vez, que como administradora del Régimen de Prima Media ha venido recibiendo los aportes en pensión del demandante desde la fecha de su afiliación, y en caso de acceder al pago de la pensión de jubilación debe responder con bono pensional.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de los términos procesales previstos se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Cabe anotar que los alegatos de conclusión no constituyen una nueva oportunidad para complementar el recurso de apelación si este fue interpuesto en primera instancia.

Surtido el trámite que corresponde a esta instancia procede la Sala de Decisión a dictar la providencia que corresponde.

PROBLEMA JURÍDICO

Vista la inconformidad del apelante, el primer problema jurídico se circunscribe a determinar si erró la juez de instancia al declarar no probada la excepción previa de falta de reclamación administrativa frente a las pretensiones enumeradas 3, 4, 5, 6 ,7 ,8, o si, por el contrario, sus intelecciones guardan pleno respaldo jurídico. Como segundo problema jurídico si acertó el Juez primigenio en declarar no probadas las excepciones de Cosa Juzgada e Integración de Litis Consorcio Necesario y Cuasinecesario.

CONSIDERACIONES

La Sala resolverá el recurso siguiendo los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPL**,** es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

1. Reclamación administrativa.

Dispone el artículo 6 del C.P.T. y S.S., modificado por el artículo 4 de la Ley 712 de 2001, lo siguiente:

> *"Las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta.".*

La previsión anterior tiene como finalidad que las entidades de derecho público con antelación al planteamiento de una controversia ante la jurisdicción ordinaria laboral, tengan la oportunidad de establecer, previo el estudio fáctico y jurídico que sea del caso, la procedencia de la aspiración planteada por el peticionario, y que de ajustarse a la ley la respectiva reclamación, la misma sea reconocida directamente por el ente obligado, logrando así, sin la intervención de un funcionario judicial, la solución de un conflicto en ciernes.

De ahí que se haya dicho por la doctrina que a través del instituto de la reclamación administrativa se le da a dichas entidades de derecho público, la oportunidad de ejercer una especie de justicia interna, pues la misma ley les permite conocer de manera primigenia las inconformidades de orden laboral o de seguridad social, para que sean aquellas, quienes actuando como juez de sus propias decisiones, las que sometan a escrutinio su viabilidad y puedan así corregir cualquier error en que hayan podido incurrir en torno a las actuaciones que originaron tales desavenencias y evitar de esta manera las vicisitudes propias de un proceso judicial.

Así lo dejó saber la Corte Constitucional en sentencia C-792 de 2006, en la cual señaló lo siguiente:

> *"La necesidad de agotar la vía gubernativa como presupuesto para acudir a la jurisdicción constituye un privilegio de la Administración, derivado del principio de autotutela administrativa y por virtud del cual debe brindarse a los entes públicos la oportunidad de pronunciarse sobre sus propios actos antes de que las controversias que hayan surgido en torno a ellos sean planteadas ante los tribunales."*
>
> *(…)*
>
> *"En el artículo 6º del C.P.L.S.S. se adoptó una modalidad especial de aseguramiento de la oportunidad para la autotutela administrativa, porque al señalarse que la reclamación administrativa cuyo agotamiento es presupuesto para ocurrir ante la justicia ordinaria laboral, consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, la sustrae del ámbito del agotamiento de la vía gubernativa previsto en el C.C.A. como requisito para que los particulares puedan acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa a demandar los actos administrativos unilaterales y definitivos de carácter particular y concreto, para someterla a una regulación más general y sencilla, conforme a la cual, en todos los eventos en que se pretenda demandar a una entidad pública ante la justicia ordinaria laboral, un presupuesto de procedibilidad de la acción es esa previa reclamación administrativa.*".

En cuanto a la naturaleza jurídica de la exigencia de reclamación en el procedimiento laboral, la jurisprudencia patria ha determinado que la misma constituye un **factor de competencia** para el Juez Laboral, pues conforme se desprende del contenido del citado artículo 6 del C.P.T. y S.S., mientras este procedimiento pre-procesal no se lleve a cabo, al cognoscente le está vedado aprehender el conocimiento de la disputa planteada; razón por la cual la exigencia en comento se erige como un **presupuesto procesal** y por ende debe encontrarse satisfecha en el momento de la admisión de la demanda.

En el presente caso, se observa que el demandante elevó reclamación administrativa ante la encartada el 31 de octubre de 2020 (fs. 55-57 archivo 01 ED), de dicho documento se observa que solicitó lo siguiente:

> "Me permito solicitarle a ECOPETROL S.A. el reconocimiento y pago de la PENSION DE JUBILACION contemplada en el Decreto 807 de abril 21 de 1994 en concordancia con el artículo 7 de la Ley 1118 de 2.006 , y el artículo 106 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente en ECOPETROL S.A de la cual soy beneficiario por haber estado afiliado al sindicato ADECO al momento de mi retiro, más los reajustes e incrementos de los factores salariales base de liquidación de la pensión devengados en el último año de servicios prestados con anterioridad a la fecha de reconocimiento de la pensión de jubilación y más los puntos porcentuales por cada año de servicios o de edad prestados o cumplidos por encima de los 20 años de servicios prestados a la empresa ECOPETROL S.A. y/o cotizaciones que me dan derecho a obtener el beneficio de la pensión legal de jubilación a cargo de ECOPETROL S.A., con sus mesadas pensionales y adicionales de junio y diciembre de cada anualidad y reajustes anuales de ley debidamente Indexados y en Subsidio establecida en el artículo 260 del C. S. del T. con vigencia ultra activa en virtud del art. 279 de la Ley 100 de 1993 De acuerdo en lo previsto en los artículos 1º 3º y 5º del Decreto 807 de abril 21 del Decreto 807 de 1994 Por el cual se reglamentó parcialmente el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, con efectividad a partir de la fecha en que se me comunique el Acto Administrativo de inclusión en nómina para el pago de la primera mesada Pensional indexada por parte de mi empleador ECOPETROL S.A. Para lo cual deberá ECOPETROL S.A. Solicitar y tramitar ante COLPENSIONES el traslado y retorno de los Aportes por el riesgo de Pensión de Vejez que he venido cotizando desde la afiliación forzosa dispuesta unilateralmente por ECOPETROL S.A. Sin mi consentimiento expreso desde el primero de agosto de 2010, para cubrir y aprovisionar el pasivo pensional del cálculo actuarial de mi pensión legal vitalicia de Jubilación a cargo de ECOPETROL S.A. por ser beneficiario de la Convención colectiva de trabajo vigente en ECOPETROL S.A en armonía con el parágrafo cuarto 4o del artículo 48 de la Constitución Política y el Decreto 807 de abril 21 de 1994 y el artículo 7º de la Ley 1118 de 2.006".

Ahora, revisadas minuciosamente las pretensiones 3, 4, 5, 6 ,7 ,8, del escrito introductorio se advierte que lo pretendido por el actor es que se declare **que tiene**

derecho al reconocimiento y pago de su pensión de jubilación a cargo de la empleadora al reunir los requisitos del artículo 106 de la Convención Colectiva de Trabajo en concordancia con el artículo 260 del Código Sustantivo de Trabajo, y que en el evento en que tenga derecho a dicha prestación a cargo del empleador se ordene la compartibilidad pensional con Colpensiones. De ahí que, para que se configure la mentada figura implica primero que se ordene el reconocimiento de la pensión de jubilación (convencional o legal) a cargo de Ecopetrol S.A. y de esa manera que el Juez cognoscente en la oportunidad procesal pertinente entre a determinar si procede o no la compartibilidad pensional alegada.

Así las cosas, no existe yerro alguno que endilgar al Juez primigenio al señalar que la parte activa dio cumplimiento a la exigencia de reclamación ante la administración, pues la misma consta por escrito y expresa de manera clara el objeto de su reclamación. De ahí que, por el solo hecho que en el escrito de reclamación no se hizo referencia a la figura de compartibilidad pensional no significa que el actor no hubiere reclamado en sede administrativa **el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación (convencional o legal).** Por otro lado, la jurisprudencia patria ha sido pacifica en señalar que la compartibilidad pensional, como figura propia de la seguridad social que subroga total o parcialmente la obligación del empleador en pagar una pensión de carácter convencional, **opera por ministerio de Ley, sin que se requiera declaración judicial alguna**, y que puede ser aplicada por las administradoras encargadas del pago de las obligaciones pensionales. A cita de ejemplo, consúltese las sentencias SL2576-2021, CSJ SL4335-2021, CSJ SL1145-2023 y CSJ SL1481-2023.

En consecuencia, no erró el Juzgado de primera instancia en declarar probaba parcialmente la excepción, pues como se demostró el actor elevó reclamación administrativa a la empleadora solicitando el pago y reconocimiento de su pensión de jubilación (convencional o legal), sin que la omisión de señalar la figura de compatibilidad pensional sea óbice para el estudio de la demanda, pues se trata de una figura que opera por ministerio de Ley y no necesita declaración judicial alguna.

2. Falta de Integración del litis consorcio necesario.

Así las cosas, justo resulta indicar que la integración del litis consorcio está contemplada bien a petición de parte o de oficio por el Juez de conocimiento, pues la omisión de integrar el contradictorio, puede generar una nulidad o puede conducir a una sentencia inhibitoria, según la instancia en que se encuentre, como lo ha

resaltado la Jurisprudencia de la Sala de Casación Civil y Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia.

Esta figura procesal, fue estatuida por el legislador en el artículo 61 del Código General del Proceso, aplicable por reenvío a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, al determinar que si el funcionario judicial o la parte pasiva, evidencia que el proceso versa sobre relaciones o actos jurídicos, donde resulta indispensable la comparecencia de otras personas que sean sujeto de estas relaciones, se debe proceder entonces a integrar el litis consorcio necesario, tal como ha sido planteado por la H. Corte Suprema de Justicia en diversos pronunciamientos.

Debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia ha señalado, con respecto al litisconsorcio que no es cosa diferente a la situación en que se hallan distintas personas que, conjuntamente, actúan en un proceso como actores contra un solo demandado (litisconsorcio activo), como demandadas por un solo demandante (litisconsorcio pasivo) u ocupando ambas posturas (eventualidad que la doctrina suele calificar de Litis consorcio necesario mixto); luego constituye la situación descrita una de las formas que puede presentar el proceso acumulativo por razones subjetivas y, como es bien sabido, desde el punto de vista de su origen, vale decir de las circunstancias antecedentes que determinan su ocurrencia, se la clasifica en litisconsorcio facultativo voluntario cuando las diversas personas que se encuentran en condiciones de crear tal situación la producen libremente, demandando todas en conjunto, o cuanto la persona o personas que están en condiciones de producir la pluralidad por pasiva, también intervienen a voluntad de una o varios sujetos. Y el litis consorcio necesario cuando la situación jurídica sustancial o la pretensión deducida no puede ser materia de decisión eficaz, si en el respectivo proceso no están presentes todos los litisconsortes, caso que se da cuando dicha relación, por su propia índole o por mandato de la ley, es de tal entidad que, para recibir pronunciamiento de mérito, requiere la obligada comparecencia de todos aquellos a quienes vincula.

Se puede decir, entonces, que hay litisconsorcio necesario cuando la relación jurídica material discutida es una sola y por tanto indivisible, teniendo a más de un titular en la parte demandante, o en la demandada, o en ambas, y como lo exponen los doctrinantes en el derecho del trabajo los litisconsorcios necesarios son de escasísima ocurrencia, puesto que la mayoría de las obligaciones a cargo de pluralidad de sujetos, por lo general, son divisibles.

En el caso, el demandante solicitó frente **ECOPETROL S.A.**, a quien señaló como el responsable del pago de la pensión de jubilación (convencional o legal); lo anterior implica que ninguna necesidad existe de llamar al proceso por pasiva a COLPENSIONES, porque la pretensión de pago de la pensión de jubilación se dirige única y exclusivamente en contra de ECOPETROL S.A., **y solo de ella afirma la condición de obligada a responder por ello**. Por lo anterior, no es posible pasar por alto que es el demandante el que con la demanda le indica al juez los límites en que hace operar el derecho que depreca, y es en esos precisos límites en que el operador judicial debe desplegar su función de director del proceso, sin perjuicio, desde luego, de la eventual absolución del demandado en caso de que se concluya que no está obligado al pago de la prestación que frente a él se pide en la demanda.

Por lo anterior, la claridad de la demanda introductoria del proceso en la que el actor depreca el reconocimiento de la pensión de jubilación (Convencional o legal) la dirige contra la Estatal Petrolera como empleador. De ahí que, no se hace indispensable la integración de litisconsorcio necesario con COLPENSIONES; máxime como se viene diciendo en el evento que proceda la figura de compartibilidad pensional la misma procedería por ministerio de Ley sin necesidad de la intervención de autoridades judiciales, motivo por el cual se confirmará la negativa de prosperidad de la excepción previa de Falta de Integración del litis consorcio necesario o cuasi necesario.

3. Cosa Juzgada.

Inicialmente, para claridad de las partes procesales, es menester de esta Sala indicar que la cosa juzgada es una característica especial que la ley le asigna a ciertas providencias judiciales en virtud del poder de jurisdicción del Estado. Cuando a una sentencia se le otorga el valor de cosa juzgada, no es posible revisar su decisión, ni pronunciarse sobre su contenido, en proceso posterior. La cosa juzgada tiene por objeto alcanzar la certeza de lo resuelto en el litigio, definir completamente las situaciones de derecho, hacer definitivas las decisiones jurisdiccionales y evitar que las controversias se reabran indefinidamente con perjuicio de la seguridad jurídica de las personas y del orden social del Estado, por lo que el Juez, cuando se le propone la excepción de cosa juzgada o si la encuentra probada en el proceso, de oficio, debe en primer término pronunciarse sobre ella.

Al tenor del artículo 303 del C.G.P., aplicable por analogía al procedimiento laboral, se tiene que para que exista cosa juzgada es preciso que, (i) se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia dictada; (ii) que el nuevo proceso sea entre unas mismas partes, habiendo identidad jurídica entre ellas; (iii) que verse sobre el mismo objeto, y (iv) que se adelante por la misma causa del anterior.

Sobre estos presupuestos, para que se configure la cosa juzgada, se pronunció la H. Corte Constitucional en Sentencia C-774 de 2001, en la cual sostuvo:

> *"Para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere: Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente. Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa. Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada."*

Adicionalmente, es oportuno indicar que el objeto de un proceso se encuentra definido tanto por las declaraciones que, en concreto, se solicitan de la administración de justicia, como por el pronunciamiento específico del órgano judicial en la parte resolutiva de la respectiva sentencia. Y es que, en términos de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL972-2021, Magistrado Ponente Jorge Luis Quiroz Alemán:

> *"(…) para determinar si existe identidad de objeto, el juez debe estudiar si con su resolución contradice una decisión anterior, estimando un derecho ya negado o desestimando un derecho afirmado por la decisión precedente. El respectivo análisis no sólo debe precisar si existe identidad entre los planteamientos y pretensiones ventiladas en los procesos, también debe comprender que cuestiones {que} ya fueron objeto de resolución y se encuentran excluidas de pronunciamiento para no generar el desconocimiento del bien jurídico reconocido de manera precedente"*. (Resalta la Sala).

En relación con la causa petendi o causa de pedir, las mismas fuentes señalan que esta hace referencia a las razones que sustentan las peticiones del demandante ante el Juez. **Es así como la causa petendi contiene, por una parte, un componente fáctico constituido por una serie de hechos concretos y, de otro lado, un componente jurídico, formado por las normas jurídicas a las cuales se deben adecuar los hechos planteados y el proceso argumentativo que sustenta la anotada adecuación**.

En el *sub judice*, a fin de determinar si el contrato de transacción suscrito el 30 de julio de 2020, implicó un estudio o no, de la pensión de jubilación deprecada por el convocante, recuérdese que, conforme a la jurisprudencia anteriormente referenciada, existe identidad de objeto como componente de la cosa juzgada, no solo cuando el promotor persigue las mismas pretensiones, sino también cuando existe un acuerdo sobre las cuestiones debatidas en el nuevo litigio.

Situación esta última que no se puede constatar con el material probatorio obrante en el expediente digital, pues, aunque obre el contrato de transacción celebrado entre las partes que acordaron el pago de una renta mensual pagadera hasta que el actor cumpla la edad de pensión, la anterior prueba no es suficiente para determinar si lo acordado por las partes era el equivalente al pago de la pensión de jubilación convencional, lo cual resulta de la mayor relevancia a fin de estudiar la excepción previa propuesta, por tratarse de la pretensión principal que se ventila en el actual proceso. véase:

a) **RENTA MENSUAL:** Consiste en el pago de una prestación periódica equivalente a la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA Y OCHO pesos M/cte. ($9427098). Esta suma será pagadera a partir de la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo y hasta que el (la) señor (a) RAUL ALFONSO NARVAEZ SAENZ cumpla la edad establecida en la Ley para acceder a la pensión de vejez en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida del Sistema General de Pensiones; mensualidad ésta última que será reconocida en su totalidad, sin que haya lugar a pago fraccionado o proporcional.

El valor de la RENTA MENSUAL será actualizado anualmente a partir del 1º de enero de cada año, de conformidad con la inflación causada (Variación IPC) en el año inmediatamente anterior – 12 meses.

El pago de la RENTA MENSUAL lo realizará el Fondo de Pensiones Protección S.A. el último día hábil de cada mes, a partir del mes siguiente a aquel en que se firma la presente transacción. La primera RENTA corresponderá al mes (30 días) en que se efectúa el pago y la fracción a que haya lugar del mes anterior en el cual se llevó a cabo la terminación del contrato por mutuo acuerdo, según la fecha de desvinculación.

En todo caso, el reconocimiento de la RENTA MENSUAL cesará antes del cumplimiento de la edad señalada anteriormente, según se trate de hombre o mujer, en cualquiera de los siguientes eventos:

- Cuando al (la) señor (a) RAUL ALFONSO NARVAEZ SAENZ le sea reconocida una pensión de jubilación, vejez o invalidez por riesgo común o riesgo laboral o una pensión anticipada conforme a las reglas que rigen el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad del Sistema General de Pensiones de Colombia.

- Cuando ocurra el fallecimiento del (la) señor (a) RAUL ALFONSO NARVAEZ SAENZ. En este caso el Fondo de Pensiones Protección S.A. reconocerá en un

En ese orden, se considera que el Juzgado de Conocimiento debió postergar el estudio del mentado medio exceptivo al momento en que se emita la sentencia que ponga fin a la primera instancia, a efectos que en la etapa de práctica de pruebas se determine si el valor recibido fue en contraprestación por una pensión de jubilación dada por el empleador.

Así las cosas, la providencia recurrida será revocada parcialmente, para en su lugar ordenar el estudio de la referida excepción en la sentencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

Por lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA**,

RESUELVE:

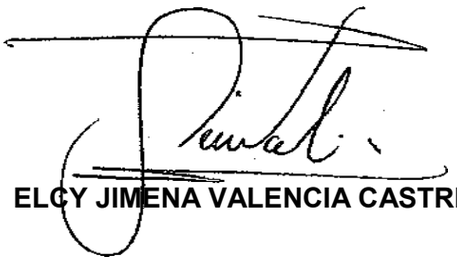
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el Auto del 13 de febrero de 2024, proferido por el Juzgado Veinticinco (25) Laboral del Circuito de Bogotá,

que declaró no probada la excepción de cosa juzgada, para en su lugar ordenar el estudio de la referida excepción en la sentencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS ante la prosperidad parcial del recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

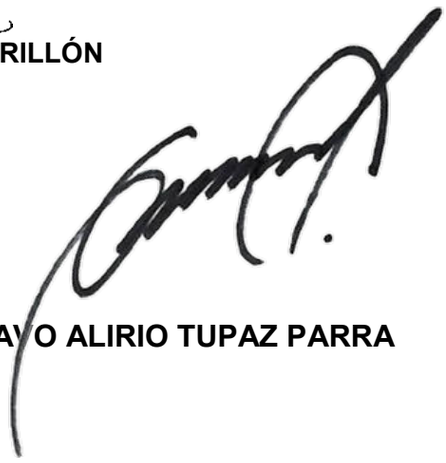
Las Magistradas,



ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN



LORENZO TORRES RUSSY



GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO:	Ordinario Laboral
RADICADO:	11001-31-05-035-2023-00131-01
DEMANDANTE:	CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ RAMÍREZ
DEMANDADO:	CEMEX COLOMBIA S.A.
ASUNTO:	Apelación Auto del 24 de enero de 2024
JUZGADO:	Juzgado Treinta y Cinco (35) Laboral del Circuito de Bogotá
TEMA:	Excepción Previa – Falta de integración de litis consorcio necesario
DECISIÓN:	CONFIRMA

Hoy, veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, **SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA** por los Magistrados **LORENZO TORRES RUSSY, GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA** y como Ponente, **ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN**, se procede a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte DEMANDADA en contra del Auto del 24 de enero de 2024, proferido por el Juzgado Treinta y Cinco (35) Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por **CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ RAMÍREZ** contra **CEMEX COLOMBIA S.A.,** con radicado No. **11001-31-05-035-2023-00131-01.**

ANTECEDENTES

Mediante apoderada judicial, el promotor formuló demanda ordinaria laboral con miras a que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido desde el 18 de abril de 1.979 hasta el 31 de agosto de 1.985, al igual que la demandada debe responder por los aportes no realizados al régimen de seguridad social en pensiones; en consecuencia,

se condene a Cemex Colombia S.A. a trasladar el título, bono o cálculo actuarial, actualizado ante el operador pensional competente, esto es, AFP Porvenir S.A., en un plazo no mayor a 30 días, por las semanas laboradas y no cotizadas por el empleador al Sistema de Seguridad Social, durante los extremos del contrato de trabajo, junto con el valor de los intereses moratorios, la indexación, lo que resulte probado *ultra y extra petita*, costas y agencias en derecho[1].

Admitida la demanda y corrido el traslado de ley, la demandada, al contestar el escritor genitor, se opuso a todas y cada una de las pretensiones y como excepción previa propuso la falta de integración de todos los litisconsorcios necesarios, sustentada en que dentro de los hechos y pretensiones de la demanda se realizan una serie de aseveraciones acerca de la historia laboral reportada por COLPENSIONES y la AFP PORVENIR S.A., las cuales solo pueden ser constatadas por dichas entidades, a quienes además, se les requiere para que efectúen el cálculo actuarial de los aportes a pensión, supuestamente dejados de realizar. Por tanto, resaltó que la sentencia que decida sobre el presente asunto, deberá hacer un pronunciamiento expreso sobre la procedencia de la realización del mencionado cálculo, y en esa medida deben ser llamadas al presente proceso las administradoras de pensiones a las que ha estado afiliado el demandante, o en su defecto, a la AFP Porvenir S.A., a la cual se encontraría este vinculado[2].

PROVIDENCIA APELADA

El Juzgado Treinta y Cinco (35) Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 24 de enero de 2024, declaró no probada la excepción previa interpuesta por la demandada.

Como fundamento de su decisión, la A quo manifestó que la totalidad de las pretensiones formuladas en la demanda se encuentran dirigidas a la aquí demandada, y si bien en las pretensiones condenatorias 1ª y 2ª se hace alusión al pago del cálculo actuarial junto con sus intereses moratorios al

[1] Páginas 3 a 18 Archivo 04 del Expediente Digital
[2] Páginas 2 a 17 Archivo 07 del Expediente Digital

operador pensional competente, lo cierto es que de imponerse condena en relación con el reconocimiento y pago de dichos ítems, no genera la obligatoriedad de la comparecencia de las administradoras de pensiones, toda vez que la eventual condena solo recaería sobre la accionada, quien por ello tendría que realizar todos los trámites pertinentes ante la administradora del actor, en este caso Porvenir S.A., para que elabore el cálculo y posterior a ello, proceda la empleadora a su respectivo pago. Acotó que, conforme a los hechos de la demanda, el actor se trasladó de Colpensiones al RAIS, circunstancia que refuerza la tesis relativa a que esta última entidad no tiene la calidad de litis consorcio necesario. Por tanto, concluyó que la no comparecencia de las administradoras de pensiones en mención, no impide dictar sentencia, toda vez que las mismas no conforman la relación jurídica sustancial controvertida en el proceso, y en caso de existir una condena, su eficacia no se verá afectada.

RECURSOS DE REPOSICÓN Y DE APELACIÓN

El apoderado de la parte DEMANDADA presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, argumentando que de la pretensión segunda condenatoria, se observa que la parte actora, persigue que se ordene a Cemex el pago del cálculo actuarial, el cual debe recibir el fondo de pensiones al que se encuentre afiliado el extremo activo, luego entonces, en caso de llegar a prosperar dicha pretensión, se requeriría la intervención de un tercero, como lo es Porvenir S.A., quien deberá eventualmente definir el valor del cálculo y además, recibir el pago del mismo. Es así que para proferir la sentencia, sí se requiere la intervención de este tercero, en caso de ser condenada la demandada, siendo claro que tiene la condición de litis consorcio necesario.

ACTUCIÓN DE INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Cinco (35) Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 24 de enero de 2024, negó la reposición formulada por la parte demandada, concediendo el recurso de apelación elevado en el efecto suspensivo.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de los términos procesales previstos se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Cabe anotar que los alegatos de conclusión no constituyen una nueva oportunidad para complementar el recurso de apelación interpuesto en primera instancia.

Surtido el trámite que corresponde a esta instancia procede la Sala de Decisión a dictar la providencia que corresponde.

PROBLEMA JURÍDICO

Conforme al recurso interpuesto, el problema jurídico a resolver se centra en determinar si es procedente declarar probada la excepción previa de falta de integración de todos los litisconsorcios necesarios formulada por la accionada, y en tal sentido si se debe vincular a PORVENIR S.A al presente trámite.

CONSIDERACIONES

La Sala resolverá el recurso siguiendo los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPL**,** es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

Debe en primer término tenerse en cuenta que la jurisprudencia ha señalado, con respecto al litisconsorcio que no es cosa diferente a la situación en que se hallan distintas personas que, conjuntamente, actúan en un proceso como actores contra un solo demandado (litisconsorcio activo), como demandadas por un solo demandante (litisconsorcio pasivo) u ocupando ambas posturas (eventualidad que la doctrina suele calificar de Litis consorcio necesario mixto); luego constituye la situación descrita una de las formas que puede presentar el proceso civil acumulativo por razones subjetivas y, como es bien sabido, desde el punto de vista de su origen, vale decir de las circunstancias antecedentes que determinan su ocurrencia, se la clasifica en litisconsorcio facultativo voluntario cuando las diversas personas que se encuentran en condiciones de crear tal situación la producen libremente, demandando todas en conjunto, o cuando la persona o personas que están en condiciones de producir la pluralidad por pasiva demandan también a voluntad a varios sujetos, y el litis consorcio necesario cuando la situación jurídica sustancial o la pretensión deducida no puede ser materia de decisión eficaz,

si en el respectivo proceso no están presentes todos los litisconsortes, caso que se da cuando dicha relación, por su propia índole o por mandato de la ley, es de tal entidad que para recibir pronunciamiento de mérito, requiere la obligada comparecencia de todos aquellos a quienes vincula y la omisión de integrar el contradictorio, puede generar una nulidad o puede conducir a una sentencia inhibitoria, según la instancia en que se encuentre, como lo ha resaltado la Jurisprudencia de la Sala de Casación Civil y Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia.

En otras palabras, surge esta última clase de litisconsorcio cuando sea preciso que recaiga una resolución jurisdiccional uniforme para todos los litisconsortes en el proceso para hacer posible el juzgamiento de fondo sobre la demanda entablada, configurándose así un supuesto de legitimación forzosamente conjunta respecto de los titulares de la relación jurídica controvertida en juicio.

Se debe resaltar que esta figura procesal, fue estatuida por el legislador en el artículo 61 del Código General del Proceso, aplicable por reenvío a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, al determinar que si el funcionario judicial o la parte pasiva, evidencia que el proceso versa sobre relaciones o actos jurídicos, donde resulta indispensable la comparecencia de otras personas que sean sujeto de estas relaciones, se debe proceder entonces a integrar el litis consorcio necesario, tal como ha sido planteado por la H. Corte Suprema de Justicia en diversos pronunciamientos.

Así las cosas, justo resulta indicar que la integración del litis consorcio está contemplada bien a petición de parte o de oficio por el Juez de conocimiento.

Para resolver el motivo de inconformidad sobre ese tópico, ha de indicarse que de una lectura del *petitum demandatorio* no se deriva reclamo alguno que implique llamar al proceso a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA de FONDO de PENSIONES y CESANTÍAS PORVENIR S.A. Ello es así, porque la parte demandante peticiona en primer lugar, la declaratoria de existencia de un contrato de trabajo con Cemex Colombia S.A. y, consecuencialmente, el reconocimiento y pago del cálculo actuarial por los extremos presuntamente laborados, junto con los intereses moratorios, por parte de su empleador y ante

la entidad de pensiones a la que se encuentre afiliado; de suerte que en el planteamiento de su demanda solo persigue el reconocimiento de declaraciones y condenas respecto de Cemex Colombia S.A., denotando que el pronunciamiento del Juzgado solo debe centrarse en la procedencia o no de tales reclamos, siendo Porvenir S.A. simplemente una presunta destinataria de los valores que el empleador tendría que asumir ante una eventual condena, previa liquidación del cálculo actuarial que el mismo patrono tendría que gestionar directamente ante la AFP.

En ese orden, se evidencia que resulta inane el llamado de la administradora del RAIS, porque para definir la existencia del contrato y la obligación de pagar o no el cálculo actuarial reclamado, no se requiere de su comparecencia al proceso.

Recuérdese que se encuentra facultado quien inicia una acción jurisdiccional, en concretar el deudor, lo debido y, bajo ese escenario, posterior al devenir procesal, le corresponde resolver al funcionario judicial, el acierto en las pretensiones de la demanda, sin que obre limitante en el *examine* para zanjar el debate. Además, la sola mención de Porvenir S.A. en los hechos de la demanda como entidad a la que se trasladó el convocante desde el año de 1999, carece de fuerza para materializar la premisa del art. 61 del CGP, a saber, la resolución uniforme de *«relaciones o actos jurídicos (…) por su naturaleza o por disposición legal»*, en tanto, lo propio es verificar si existió o no dicha vinculación, de acuerdo con los medios probatorios traídos al proceso. Careciendo entonces de justificación y soporte la petición de integración del contradictorio.

Así las cosas, la decisión de instancia será confirmada. Las Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandada por no haber prosperado su recurso de apelación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de un SMMLV al momento de su pago.

Por lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto del 24 de enero de 2024, proferido por el Juzgado Treinta y Cinco (35) Laboral del Circuito de Bogotá, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: COSTAS de esta instancia a cargo de la parte demandada, inclúyanse como agencias en derecho la suma de un SMMLV al momento de su pago.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN



LORENZO TORRES RUSSY



GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO:	Ordinario Laboral
RADICADO:	11001-31-05-045-2023-0141-01.
DEMANDANTE:	MARTHA ISABEL NAVARRETE RODRÍGUEZ.
DEMANDADO:	COLPENSIONES y OTROS.
ASUNTO:	Apelación Auto 31 de octubre de 2023.
JUZGADO:	Juzgado Cuarenta y Cinco (45) Laboral del Circuito de Bogotá
TEMA:	Llamamiento en garantía
DECISIÓN:	CONFIRMA

Hoy, veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, **SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA** por los Magistrados **LORENZO TORRES RUSSY, GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA** y como Ponente, **ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN,**, se procede a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada SKANDIA S.A. en contra del Auto del 31 de octubre de 2023, proferido por el Juzgado Cuarenta y Cinco (45) Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por **MARTHA ISABEL NAVARRETE RODRÍGUEZ** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES, SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** con radicado No**. 11001-31-05-045-2023-00141-01.**

ANTECEDENTES

La promotora de la acción, pretende se declare la ineficacia de traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por falta de información efectuado a PROTECCIÓN S.A., en el mes de mayo de 1997. Que, como consecuencia de lo anterior se ordene a la AFP privada a la que actualmente se encuentra afiliada a trasladar a COLPENSIONES, el valor de los dineros por concepto de cotizaciones, aportes, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos, intereses, rendimientos financieros que se hubieren causado y cuotas o gastos de administración, debidamente indexados y que reposan en la Cuenta de Ahorro Individual del demandante, que se condene a Colpensiones aceptar el traslado y todo lo anterior aparejado con costas procesales.

El Juzgado Cuarenta y Cinco (45) Laboral del Circuito de Bogotá, el 7 de julio de 2023[1], admitió la demanda interpuesta por MARTHA ISABEL NAVARRETE RODRÍGUEZ contra SKANDIA S.A., PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES.

Notificada SKANDIA S.A. y una vez contestada la demanda, se procedió mediante Auto[2] del 31 de octubre de 2023, a tener por contestada la demanda SKANDIA S.A. y negar el llamamiento en garantía a efectos que se convoque al juicio a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., con fundamento que no es procedente el llamado en garantía, por cuanto la responsabilidad de eventuales condenas se encuentra exclusivamente a cargo de las Administradoras de Fondo de Pensiones demandadas y las controversias respecto de pólizas no es asunto del presente proceso.

---

[1] Archivo 03 del ED.
[2] Archivo 13 del ED.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandada SKANDIA S.A. presentó recurso de apelación contra el Auto del 31 de octubre de 2023, con el fin de que se revoque de manera parcial el mencionado Auto, respecto del llamamiento en garantía que fue negado.

Como argumentos de su apelación manifestó que, atendiendo que en cumplimiento de su obligación (artículo 20 de la Ley 100 de 1993), celebró con MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. un contrato de seguro previsional destinado a amparar los riesgos de invalidez y muerte de los afiliados a su Fondo Obligatorio de Pensiones (entre ellos el del demandante), siendo evidente que en caso de que en la sentencia que ponga fin al proceso se condene a devolver la prima pagada como contraprestación legal por ese seguro y la entidad llamada a realizar esa devolución es la aseguradora MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de los términos procesales previstos se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Cabe anotar que los alegatos de conclusión no constituyen una nueva oportunidad para complementar el recurso de apelación interpuesto en primera instancia.

Surtido el trámite que corresponde a esta instancia procede la Sala de Decisión a dictar la providencia que corresponde.

PROBLEMA JURÍDICO

Conforme al recurso interpuesto, el problema jurídico a resolver se centra en determinar si es o no procedente acceder al llamamiento en garantía solicitado por la demandada SKANDIA S.A.

CONSIDERACIONES

La Sala resolverá el recurso siguiendo los lineamientos trazados por el Artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación. Conforme al recurso interpuesto, el problema jurídico a resolver, se centra en determinar si es o no procedente el llamamiento en garantía que hace la demandada SKANDIA S.A. a la sociedad MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

Pues bien, para resolver la controversia jurídica que se suscita en este estadio, relativa al llamamiento en garantía que efectúa la convocada a juicio SKANDIA S.A. a la aseguradora MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., se debe tener en cuenta que el artículo 64 del Código General del Proceso, aplicable por remisión directa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, dispone lo siguiente:

> *"Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación".*

Frente al anterior instituto jurídico, el tratadista Hernán Fabio López Blanco, en su obra Código General del Proceso Parte General, págs. 371-374, instruyó lo siguiente:

> *"Como característica general del proceso civil hasta principios del siglo XX se tenía, entre otras, que la controversia solo se planteaba entre la parte demandante y la parte demandada, sin que nadie distinto de ellas pudiera intervenir, no obstante que en muchos casos el resultado de la sentencia influía de manera importante frente a relaciones jurídicas diferentes a la debatida en el proceso pero relacionadas con otros sujetos procesales, pues las bases para derivar derechos en su favor u obligaciones a su cargo se concretaban precisamente en ese fallo judicial al que eran ajenos por completo, siendo poco lo que posteriormente podía hacerse atendiendo el precedente establecido en la se sentencia repercutía indirectamente respecto de ellas.(..)* ***El artículo 64 del CGP permite hacer la citación en***

> ***garantía para todos los casos en los que existe obligación legal o contractual de garantizar la indemnización de un perjuicio o reembolso del pago que debiera efectuarse, para que, si hay necesidad de realizar el pago o indemnizar, se resuelva la relación jurídica existente entre garante y garantizado en el mismo proceso, lo que evidencia que el pronunciamiento que se realiza en la sentencia respecto de la relación jurídica inicial entre demandante y demando, caso de que su sentido afecte la que determino el llamamiento, es lo que permite entrar a decidir respecto de la segunda****. (Énfasis de la Sala).”*

Ahora, la juzgadora de primer grado consideró que no era procedente el llamamiento en garantía a la aseguradora, pues el seguro previsional a que hace mención la demandada SKANDIA S.A., fue adquirido para el eventual reconocimiento de una pensión de invalidez o sobrevivencia, más no una posible devolución por conceptos de gastos previsionales.

Al respecto, considera la Sala que no le asiste razón a la recurrente en llamar en garantía a la aseguradora MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. por las siguientes razones, veamos: La pretensión principal es la ineficacia del traslado de régimen pensional efectuado por la parte demandante, que es un acto jurídico en el cual no participó la aseguradora que se llama en garantía, ni tampoco como consecuencia de la declaratoria de ineficacia se condena a esta última a devolver los aportes efectuados por la actora, pues en el caso hipotético en que se llegase a declarar la ineficacia del traslado las cosas vuelven a su estado anterior, lo cual implica para la Administradora de Fondo de Pensiones la devolución a su cargo y de sus propios recursos de los aportes a pensión, rendimientos financieros y los gastos de administración, incluidos los valores destinados a cubrir los seguros de invalidez y sobrevivencia, la garantía de pensión mínima, todo debidamente indexado, a cita de ejemplo véase las sentencias SL1549-2022, SL916-2022, SL1125-2022 y la SL4992-2021.

De igual forma, se advierte, que si bien en virtud de las pólizas de seguro previsional que se suscribió desde el 1 de mayo de 2008 a 1 de febrero de 2011 y del 1 de septiembre de 2015 a 31 de diciembre de 2018, las cuales fueron aportadas como prueba dentro del escrito llamamiento (Archivo digital No.09 de la carpeta denominada 01PrimeraInstancia), para el caso de autos no se debate el reconocimiento de las prestaciones de invalidez o sobrevivencia, ni tampoco existe un derecho en cabeza de la actora a cargo de la aseguradora, pues a la fecha no se ha reconocido prestación alguna a la demandante.

Es decir, en este caso, el derecho legal que alega la entidad llamante en garantía, surge de la relación contractual que existió con la entidad llamada, siendo entonces la relación jurídico procesal, el vínculo que se genera cuando la A.F.P. contratante que deba devolver los dineros que pagó a la Aseguradora contratada, sin embargo, conforme a la jurisprudencia reseñada, la devolución de los gastos de administración y los seguros previsionales estará a cargo de la administradora de fondo de pensiones, en este caso, la recurrente que deberá, si así lo desea, adelantar las acciones administrativas contra las entidades intervinientes para el respectivo rembolso, pues el mismo órgano de cierre ha definido como una obligación en cabeza de la AFP ante el incumplimiento de sus deberes para con el usuario al momento de la afiliación, pues como ya se indicó el efecto es el retorno de las cosas a su estado inicial, esto es, no tener por suscrita la afiliación al RAIS por parte del asegurado.

> *"(…)*
>
> *Lo anterior por cuanto al declararse la ineficacia del traslado las cosas vuelven a su estado anterior, de manera que las administradoras tiene que asumir los deterioros del bien administrado, pues la ineficacia se declara como consecuencia de la conducta del fondo, al haber incurrido en la omisión de brindar la información adecuada, oportuna y suficiente al afiliado, quien tenía derecho a recibirla, no de forma gratuita, sino con cargo a la comisión de administración de aportes obligatorios y comisiones por buen desempeño que se descuentan de*

la cotización y de su ahorro, deducción autorizada por el artículo 104 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el artículo 53 de la Ley 1328 de 2009 y que permite el literal q) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, al disponer: Los costos de administración del sistema general de pensiones permitirán una comisión razonable a las administradoras y se determinarán en la forma prevista en la presente Ley.

Por tal razón, esa declaratoria obliga a las entidades del RAIS a devolver todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual del titular, ya que los mismos serán utilizados para la financiación de la prestación pensional a que tenga derecho el afiliado en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones del saldo de la cuenta individual, sus rendimientos y los bonos pensionales, los valores cobrados por los fondos privados a título de gastos de administración y comisiones, incluidos los aportes para el fondo de garantía de pensión mínima y las primas de los seguros previsionales, sumas debidamente indexadas, pues, desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al RPMPD administrado por Colpensiones (CSJ SL2877-2020).

En ese sentido, se confirmará la decisión objeto de censura, a través de la cual se rechazó el llamamiento en garantía, y en consecuencia se condena en costas a la AFP recurrente de conformidad con las previsiones del artículo 365 numeral 1° del CGP, se tasa como agencias en derecho en esta instancia la suma de medio SMLMV.

Por lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

RESUELVE:

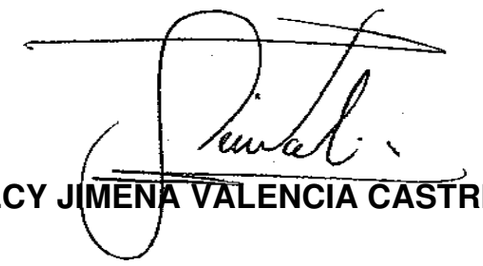
PRIMERO: CONFIRMAR el Auto del 31 de octubre de 2023, proferido por el Juzgado Cuarenta y Cinco (45) Laboral del Circuito de Bogotá D.C. conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: COSTAS de esta instancia a cargo de la parte

demandada SKANDIA S.A. Inclúyanse como agencias en derecho la suma de medio SMLMV.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

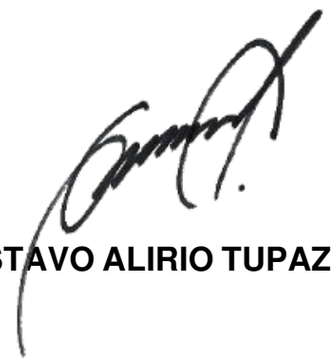
Las Magistradas,



ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN



LORENZO TORRES RUSSY



GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO:	Ordinario Laboral
RADICADO:	11001-31-05-047-2023-00237-01
DEMANDANTE:	LEIDY NAYIBE AVENDAÑO BARACALDO.
DEMANDADO:	SERVICIO Y ATENCION EN SALUD - SANAS IPS SAS hoy SANAS TRANSACCIONES - SANAS SAS.
ASUNTO:	Apelación Auto del 14 de noviembre de 2023
JUZGADO:	Juzgado Cuarenta y Siete (47) Laboral del Circuito de Bogotá
TEMA:	Rechaza demanda
DECISIÓN:	REVOCA

Hoy, veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, **SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA** por los Magistrados **LORENZO TORRES RUSSY, GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA** y como Ponente, **ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN**, se procede a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra del Auto del 14 de noviembre de 2023, proferido por el Juzgado Cuarenta y Siete (47) Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por **LEIDY NAYIBE AVENDAÑO BARACALDO** contra **SERVICIO** y **ATENCION EN SALUD - SANAS IPS SAS hoy SANAS TRANSACCIONES - SANAS SAS.** con radicado No**. 11001-31-05-047-2023-00237-01.**

ANTECEDENTES

Mediante apoderado judicial, **LEIDY NAYIBE AVENDAÑO BARACALDO**, formuló demanda[1] ordinaria laboral contra **SANAS IPS**

[1] Archivo 04 del expediente digital.

S.A.S., con el fin de que se declare la existencia de un contrato de trabajo a partir del 15 de enero de 2016, hasta el 9 de junio de 2021, relación que terminó por incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de su empleador. Como consecuencia de lo anterior, se condene al pago de prestaciones sociales, vacaciones, salarios, viáticos, indemnización por despido sin justa causa, a la sanción por no consignación de las cesantías de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al pago de perjuicios morales, que se falle extra y ultra pettita, aparejado con costas procesales.

Mediante providencia[2] del 31 de agosto de 2023, el Juez a quo refirió que la demanda no cumplía con los parámetros establecidos en el artículo 25 del C.S.T., concediéndole el término de cinco días para que subsanara las falencias enrostradas por el Despacho, esto es, el certificado de existencia y representación legal de la sociedad demandada.

EL AUTO APELADO

Mediante Auto[3] del 14 de noviembre de 2024., el Juzgado Cuarenta y Siete (47) Laboral del Circuito de Bogotá, **RECHAZÓ** la demanda, argumentando que la parte activa aportó un certificado de existencia y representación de SANAS TRANSACCIONES – SANAS S.A.S., sociedad distinta a SANAS IPS S.A.S.

EL RECURSO[4]

Contra lo así decidido, la demandante a través de apoderado judicial, interpuso recurso de apelación, con la finalidad de que sea revocado el Auto y se acceda a admitir la demanda, indicando que no se tratan de dos sociedades distintas, sino que obedecen a una misma sociedad que ha cambiado su razón social, tal como aparece registrado en el mismo certificado de existencia y representación que el Juez inadvirtió.

[2] Archivo 06 del expediente digital.
[3] Archivo 08 del expediente digital.
[4] Archivo 09 del expediente digital.

CONSIDERACIONES

El problema jurídico que en esta oportunidad corresponde resolver a la Sala, se contrae a establecer si la juez de primer grado acertó al rechazar la demanda como consecuencia de considerar que la parte actora no dio cumplimiento al requisito sine qua non establecido en el numeral 4° del artículo 26 del C.P.T y S.S.

Conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 65 del CPTSS, modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001, es procedente el recurso de apelación, respecto del auto que *rechace la demanda o su reforma*, de manera que tiene esta Sala la competencia para resolver el recurso interpuesto por el apoderado de la parte demandante, conforme a lo preceptuado por el artículo 66A *ibídem*, teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad.

Para resolver, se tiene que la decisión materia de alzada, se fundamentó en lo dispuesto en el núm. 4° del art. 26 del CPTSS, que señala que la demanda deberá acompañarse, entre otros anexos, del certificado de existencia y representación legal si es una persona jurídica de derecho privado que actúa como demandada.

No obstante lo anterior, considera está Sala que dicha determinación desconoce los presupuestos del art. 85 del CGP, aplicable por expresa remisión del art. 145 del estatuto adjetivo laboral y del Parágrafo 1° del art. 26 del CPTSS, pues la primera normativa prevé que la prueba de la existencia y representación de las personas jurídicas de derecho privado solo podrá exigirse cuando dicha información no conste en las bases de datos de las entidades públicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla y que cuando la información esté disponible por este medio, no será necesario certificado alguno.

Y por su parte, la segunda preceptiva contempla que «*Ante la imposibilidad de acompañar la prueba de la existencia y representación legal del demandado, se afirmará tal circunstancia bajo juramento que se*

entenderá prestado con la presentación de la demanda. Esta circunstancia no será causal de devolución. El juez tomará las medidas conducentes para su obtención».

En este caso particular, le asiste razón a la parte demandante al señalar que de acuerdo al acápite denominado *"reformas especiales*" del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de fecha 6 de septiembre de 2023, la sociedad encartada cambió su denominación o razón social de SERVICIO Y ATENCIÓN EN SALUD-SANAS IPS S.A.S. a SANAS TRANSACCIONES SANAS S.A.S. Tal como se ilustra a continuación:

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 24 del 18 de enero de 2021 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de enero de 2021, con el No. 02653812 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de CENTRO DE EXPERTOS PARA LA ATENCION INTEGRAL IPS SAS a SERVICIO Y ATENCION EN SALUD - SANAS IPS SAS.

Por Acta No. 29 del 16 de febrero de 2022 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de febrero de 2022, con el No. 02794386 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SERVICIO Y ATENCION EN SALUD - SANAS IPS SAS a SANAS TRANSACCIONES - SANAS SAS.

En ese orden, al ojear el certificado aportado se advierte que en efecto la sociedad SANAS IPS S.A.S, por Acta No. 29 del 16 de febrero de 2022 cambió su denominación o razón social a **SANAS TRANSACCIONES – SANAS S.A.S.,** tratándose de la misma sociedad con número de identificación 900772053-7. De ahí que, no hay razón para rechazar la demanda pues no se tratan de dos sociedades distintas sino de la misma que cambió su denominación o razón social, pero sigue siendo la misma persona jurídica bajo el mismo número de identificación. En consecuencia, las obligaciones que tenga la sociedad no se afectan por el cambio de la razón social, así lo establece el artículo 158 del Código de Comercio.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se REVOCARÁ el Auto apelado, para en su lugar, ordenar al *A quo* que proceda a admitir la demanda presentada, teniendo en cuenta lo aquí considerado y que en el Auto de fecha 14 de noviembre de 2023, no se formularon causales de devolución distintas a la aquí estudiada.

Sin costas en esta instancia ante su no causación.

Por lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el Auto proferido el 14 de noviembre de 2023, por el Juzgado 47 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., para en su lugar, **ordenar al Juez que proceda a admitir la demanda presentada e impartirle el trámite correspondiente**, conforme a lo esbozado en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Sin **costas,** devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

LORENZO TORRES RUSSY

GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO:	Ordinario Laboral
RADICADO:	11001-31-05-08-2022-00541-01
DEMANDANTE:	ÁLVARO VÍCTOR BENAVIDES CUJAR
DEMANDADO:	INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MÉXICO S.A.S.
ASUNTO:	Apelación Auto del 23 de febrero de 2024
JUZGADO:	Juzgado Octavo (8°) Laboral del Circuito de Bogotá
TEMA:	Decreto de pruebas
DECISIÓN:	CONFIRMA

Hoy, veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, **SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA** por los Magistrados **LORENZO TORRES RUSSY, GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA** y como Ponente, **ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN**, se procede a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte DEMANDANTE en contra del Auto del 23 de febrero de 2024, proferido por el Juzgado Octavo (8°) Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por **ÁLVARO VÍCTOR BENAVIDES CUJAR** contra **INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MÉXICO S.A.S.**, con radicado No. **11001-31-05-008-2022-00541-01.**

ANTECEDENTES

Mediante apoderado judicial, el señor ÁLVARO VÍCTOR BENAVIDES CUJAR formuló demanda ordinaria laboral contra INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MÉXICO S.A.S., con miras a que se declare que entre las partes existieron 3 contratos de trabajo del 8 de julio de 1.975 al 12 de marzo de 1.980, del 17 de agosto de 1.981 al 24 de agosto de 1.986 y del 11 de febrero de 1.991 al 22 de marzo de 1.992; asimismo, se declare que la demandada omitió su deber de afiliar al actor al Sistema Integral de Seguridad Social en pensiones durante los períodos de ejecución de cada contrato de trabajo; en consecuencia, se condene a

la encartada a realizar los aportes pensionales al sistema o a pagar el cálculo actuarial , junto con los intereses moratorios, la indexación, lo que resulte probado *ultra y extra petita*, costas y agencias en derecho. Subsidiariamente, solicita que se condene a la demandada al mayor valor que le corresponde al actor por la pensión, si hubiere pagado la cotización en debida forma, según lo determine el Juzgado, como puede ser un valor mensual durante la vida del convocante y en el futuro si hay beneficiarios de la pensión o, un valor calculando su vida probable que incluya la diferencia entre la pensión devengada y la que hubiere recibido sí su empleador hubiere pagado los aportes en pensiones en debida forma, junto con los intereses moratorios y la indexación[1].

PROVIDENCIA APELADA

El Juzgado Octavo (8°) Laboral del Circuito de Bogotá, dentro de la Audiencia obligatoria dispuesta en el Art. 77 del C.P.T. y S.S., celebrada el 23 de febrero de 2024, en la etapa de decreto de pruebas, decidió no decretar la inspección judicial y la exhibición de documentos en poder de la demandada, que fueron pedidas por el actor en su escrito de demanda.

Como fundamento de su decisión, la A quo manifestó que la inspección judicial no es conducente ni pertinente para probar los hechos objeto de la demanda, menos aun cuando el litigio se centra en determinar si entre los extremos procesales existió o no una relación laboral, la cual ha sido negada por la parte demandada desde la contestación de la demanda. Frente a la solicitud de documentos que se encuentran en poder de la demandada, particularmente los pagos de nómina de salarios del convocante, generados durante la vigencia del contrato de trabajo, documentos de la empresa y registros contables que incluyan el desarrollo de los proyectos Chingaza e Hidroeléctrica del Guavio, adujo que la convocada no allegó los mismos, porque como se dijo, desde su contestación ha negado la existencia de los contratos de trabajo, por tanto, no se puede obligar a la parte a lo imposible y, partiendo de la lealtad procesal de los comparecientes, mal haría el Juzgado en requerir una prueba que la misma demandada ha indicado que no existe; empero, aclaró que de constatarse en el transcurso del proceso que en efecto tales documentos sí existen, se hará el requerimiento en su debida oportunidad.

[1] Páginas 1 a 12 Archivo 02 Expediente Digital

RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN

El apoderado de la parte DEMANDANTE recurrió la decisión argumentando, en síntesis, que en este caso la demandada está negando la existencia de la contratación laboral, por manera que uno de los mecanismos probatorios que podrían permitir la demostración de la relación de trabajo, es precisamente la inspección judicial.

Añadió que con la demanda se solicitó que la accionada aporte documentos de la relación laboral alegada, resaltando que la manifestación de la convocada no puede servir de excusa para que no aporte dichas pruebas, porque precisamente la discusión veras sobre la prestación del servicio por parte del convocante, de suerte que la falladora como directora del proceso debe tratar por todos los medios posibles llegar a la *"verdad verdadera"*.

DECISIÓN DE INSTANCIA

La A quo resolvió no reponer la decisión controvertida y concedió el recurso de apelación promovido por el convocante.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de los términos procesales previstos se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Cabe anotar que los alegatos de conclusión no constituyen una nueva oportunidad para complementar el recurso de apelación interpuesto en primera instancia.

Surtido el trámite que corresponde a esta instancia procede la Sala de decisión a dictar la providencia que corresponde.

PROBLEMA JURÍDICO

Conforme al recurso interpuesto, el problema jurídico a resolver se centra en determinar si es o no procedente decretar la inspección judicial y la exhibición de documentos por parte de la accionada, conforme a la solicitud de pruebas planteada por el actor.

CONSIDERACIONES

La Sala resolverá el recurso siguiendo los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPL**,** es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

Para resolver el problema jurídico planteado, hay que tener en cuenta que el artículo 51 del C.P.T. y S.S., establece que en materia laboral: "*Son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley*…". Sin embargo, debe advertirse que el derecho de contradicción de las partes, en cuanto a la solicitud de medios de prueba, está circunscrito a unos determinados requisitos establecidos por el legislador con el fin de garantizar al máximo el debido proceso. En ese sentido, los distintos medios de prueba aportados y solicitados por las partes y decretadas por el Juez dentro del proceso, deben satisfacer los requisitos de utilidad, conducencia y pertinencia, y además de ello, cumplir con las exigencias impuestas para cada uno de estos.

Lo anterior, tiene fundamento jurídico en lo dispuesto por el artículo 53 del C.P.T. y S.S, modificado por el artículo 8 de la Ley 1149 de 2007, el cual dispone que: "*El juez podrá, en providencia motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito*". Por lo que, para determinar si procede el decreto de las pruebas solicitadas por las partes, el juez debe analizar si éstas cumplen con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad.

Ahora, el artículo 55 del CPT y de la SS dispone sobre la inspección judicial, lo siguiente:

> ***"ARTICULO 55. DILIGENCIA DE INSPECCION JUDICIAL.*** *Cuando se presenten graves y fundados motivos o para aclarar hechos dudosos, el Juez podrá decretar inspección judicial, siempre que tal diligencia pueda cumplirse sin grave daño para las partes o los terceros, y sin obligarlos a violar secretos profesionales, comerciales o artísticos.*
>
> *Para lograr la verificación de la prueba el Juez podrá valerse de los apremios legales".*

A su turno, el artículo 54B en lo que se refiere a la exhibición de documentos expresa lo siguiente: *"Las partes podrán pedir la exhibición de documentos en forma conjunta o separada de la inspección judicial."* Dicha norma, además, debe analizarse por vía de remisión analógica, en conjunto con el artículo 265 del CGP, el cual establece en qué consiste la exhibición de documentos, a saber: *"La parte que*

pretenda utilizar documentos o cosas muebles que se hallen en poder de otra parte o de un tercero, deberá solicitar, en la oportunidad para pedir pruebas, que se ordene su exhibición".

En el presente caso, se tiene que el demandante desde su *libelo genitor* solicitó la exhibición de documentos que se encuentran en poder de la demandada, tales como soportes de nómina, documentos y registros contables que incluyan el desarrollo de los proyectos Chingaza e hidroeléctrica del Guavio y, en caso tal de que la convocada no exhiba los mismos, se decrete una inspección judicial a las instalaciones de la empresa con exhibición de documentos para demostrar los pagos realizados al demandante, mes a mes por las labores ejecutadas (página 11 Archivo 02 del ED), lo cual se reitera en el recurso de alzada formulado por el convocante.

Sobre el particular, se impone advertir por parte de la Sala de Decisión que se comparte la determinación que sobre la exhibición de documentos adoptó el Juzgado de Conocimiento, pues aunque el demandante alegó en su escrito de demanda que las documentales pedidas se encuentran en poder de la encartada, lo cierto es que la accionada en ejercicio legítimo de su derecho de defensa y contradicción indicó en su escrito contestación de la demanda que el actor nunca prestó sus servicios a favor de Ingenieros Civiles Asociados México S.A.S., como se constata en el Archivo 05 del expediente digital, por lo que mal haría la Sala en exigir de la encartada la exhibición de unas documentales que a la luz de su contestación, es posible inferir que no se encuentran en su poder, lo cual no puede ser desechado por esta Colegiatura, en la medida que es deber de la partes y sus apoderados proceder con lealtad y buena de en todos sus actos procesales. Por manera que, acertó el Juzgado de Conocimiento al negar el decreto de la prueba en mención.

En punto a la inspección judicial con exhibición de documentos reclamada por el extremo activo, a fin de demostrar los pagos realizados al demandante mes a mes por las labores realizadas, ha de decirse que, tal medio de convicción según la norma que regenta el caso, es facultativa del juez, siempre que dicha autoridad según su criterio, determine si se presentan graves y fundados motivos o hechos dudosos que deban ser aclarados, lo cual no es posible definir en la etapa en la que actualmente se encuentra el proceso, pues aún no ha tenido lugar el debate probatorio a través del que sea posible dilucidar la concurrencia de dichos presupuestos. Con todo, es la falladora de primer grado quien, conforme a su raciocinio, debe establecer la necesidad de la prueba, al tener, se insiste, el carácter

de facultativa y excepcional, no pudiendo por tanto la Sala imponerle la obligación de echar mano de dicho medio de convicción.

Puestas así las cosas, considera la Sala de Decisión que la determinación de instancia debe ser confirmada. Sin Costas en esta instancia por considerarlas no causadas.

Por lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

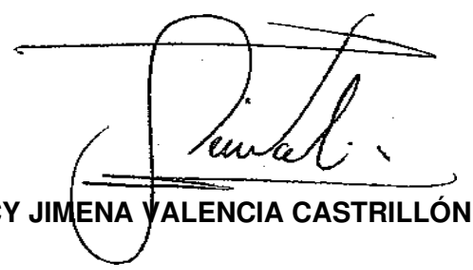
RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto del 23 de febrero de 2024, proferido por el Juzgado Octavo (8°) Laboral del Circuito de Bogotá, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin **COSTAS** en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN



LORENZO TORRES RUSSY



GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO:	Ordinario Laboral
RADICADO:	11001-31-05-009-2020-00095-01
DEMANDANTE:	LOUIS MAURICIO LONGAS GÓMEZ.
DEMANDADO:	COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A.
ASUNTO:	Apelación Auto 13 de febrero de 2024.
JUZGADO:	Juzgado Noveno (9) Laboral del Circuito de Bogotá
TEMA:	Niega prueba de oficio
DECISIÓN:	CONFIRMA

Hoy, veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, **SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA** por los Magistrados **LORENZO TORRES RUSSY, GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA** y como Ponente**, ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN**, se procede a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra del Auto del trece (13) de febrero de 2024, proferido por el Juzgado Noveno (9) Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por **LOUIS MAURICIO LONGAS GÓMEZ** contra **COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A.,** con radicado No**. 11001-31-05-009-2020-00095-01.**

ANTECEDENTES

Mediante apoderado judicial, el actor formuló demanda[1] ordinaria laboral contra la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A. con

[1] Archivo 02 del expediente digital.

miras a que se declare que tiene derecho al reintegro en las mismas condiciones que tenía en el momento de ser despedido, por encontrarse amparado por el fuero circunstancial y encontrarse afiliado a la organización sindical SINTRACOMUNICACIONES. Como consecuencia de lo anterior, se condene a la encartada al pago de salarios desde el 19 de diciembre de 2019 hasta el momento que se haga efectivo el reintegro, aparejado con costas procesales.

Para lo que interesa del recurso, la parte actora en el acápite de pruebas solicita: ***i)*** que se oficie al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Comunicaciones afines y de transporte SINTRACOMUNICACIONES, para que se sirva comunicar la fecha de presentación del pliego de peticiones del Sindicato a COMCEL S.A. y si al momento del despido estaba en el marco de negociación colectiva y nuevamente reitere la afiliación del trabajador ahora demandante ***ii)*** que se sirva oficiar a la encartada para que allegue los desprendibles de nómina sobre los pagos efectuados al actor y demostrar los valores de la remuneración variable.

La demandada **COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A[2]., s**e opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, bajo el argumento que el contrato finalizó por justa causa atribuirle al trabajador por las graves faltas cometidas. De igual forma no goza del denominado fuero circunstancial.

Formuló las excepciones de fondo que denominó; inexistencia de las obligaciones, cobro de lo no debido, compensación, pago, buena fe, y prescripción.

PROVIDENCIA APELADA

El Juzgado Noveno (9) Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 13 de febrero de 2024, encontrándose en audiencia de que

[2] Archivo 16 del expediente digital.

trata el artículo 77 del CPT y SS, negó la solicitud de oficiar al Sindicato SINTRACOMUNICACIONES bajo el argumento que conforme al artículo 173 del C.G.P. el juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte activa.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte **DEMANDANTE** presentó recurso de apelación argumentando que, erró la *A quo* al no ordenar la prueba solicitada, pues dicha información es necesaria para establecer la existencia del fuero circunstancial alegado.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de los términos procesales previstos se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Cabe anotar que los alegatos de conclusión no constituyen una nueva oportunidad para complementar el recurso de apelación si este fue interpuesto en primera instancia.

Surtido el trámite que corresponde a esta instancia procede la Sala de Decisión a dictar la providencia que corresponde.

PROBLEMA JURÍDICO

Conforme al recurso interpuesto, encuentra la Sala que el problema jurídico a dilucidar se contrae a determinar si erró la Juez de primer nivel al abstenerse de decretar la prueba a oficiar peticionada por la actora en su escrito introductorio.

CONSIDERACIONES

La Sala resolverá el recurso siguiendo los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPL**,** es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

Inicialmente, para claridad de las partes procesales, es de recordar que el artículo 53 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, prevé que el juez podrá mediante decisión debidamente motivada, rechazar la práctica de pruebas inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito, es así, que para que una prueba pueda ser decretada ésta debe tener conexidad con los hechos objeto de controversia dentro del proceso.

A su turno, el artículo 168 del Código General del Proceso aplicable al trámite laboral por el principio de integración normativa dispuesto en el art. 145 del CPTSS dispone que: *"El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles".*

Por otro lado, el artículo 173 del C.G.P en su inciso 2°, aplicable por remisión analógica del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, señala lo siguiente:

> *"**El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite**, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente." (Énfasis de la Sala).*

Bajo tales lineamientos normativos, la sola afirmación de la necesidad del procurado medio de prueba dirigido al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de las Comunicaciones afines y del transporte SINTRACOMUNICACIONES en el cual solicita se comunique la fecha de presentación del pliego de peticiones del Sindicato a la encartada y si al momento de despido estaba en marcha la negociación colectiva, no es argumento válido para que se ordene por la Juez, pues dicha petición debió estar acompañada de prueba siquiera sumaria que permitiera inferir que la recurrente solicitó los documentos en mención mediante derecho de petición, salvo que la petición no hubiere sido atendida, lo que debe ser acreditado, hipótesis que no ocurrió o al menos no lo demostró.

Ahora, es de señalar que la prueba a oficiar negada por la ***A quo***, la parte activa la pudo obtener por medio de su ex empleadora o a través del Ministerio de Trabajo, pues al tratarse de un conflicto colectivo necesariamente involucra al representante de los trabajadores y al empleador. En cualquier caso, la actividad probatoria de quien demanda se centra en demostrarle al estrado judicial ante el que se tramita el proceso que adelanta, su derecho acorde con los requisitos de ley para que salgan avante sus pretensiones y el Juez como director del proceso puede abstenerse de decretar aquellas pruebas que pudieron ser solicitadas por la parte demandante mediante derecho de petición.

En los anteriores términos la determinación de negar el decreto del mencionado medio de prueba se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico. En consecuencia, no queda otro camino a la Sala que confirmar la decisión impugnada, por encontrarse conforme a derecho. Las Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandante por no haber prosperado su recurso de apelación, inclúyanse como agencias en derecho la suma medio salario mínimo mensual legal vigente al momento de su pago.

Por lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto del trece (13) de febrero de 2024, proferido por el Juzgado Noveno (9) Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia correrán a cargo de la parte demandante por no haber prosperado su recurso de apelación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de medio SMMLV al momento de su pago.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

LORENZO TORRES RUSSY

GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO:	Ordinario Laboral
RADICADO:	11001-31-05-11-2023-00196-01
DEMANDANTE:	MERY IRENE GÓMEZ BERNAL
DEMANDADO:	COLPENSIONES y OTRO
ASUNTO:	Apelación Auto del 13 de febrero de 2024
JUZGADO:	Juzgado Once (11) Laboral del Circuito de Bogotá
TEMA:	Decreto de pruebas
DECISIÓN:	CONFIRMA

Hoy, veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, **SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA** por los Magistrados **LORENZO TORRES RUSSY, GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA** y como Ponente, **ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN**, se procede a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte DEMANDANTE en contra del Auto del 13 de febrero de 2024, proferido por el Juzgado Once (11) Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por **MERY IRENE GÓMEZ BERNAL** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** y la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**, con radicado No. **11001-31-05-011-2023-00196-01.**

ANTECEDENTES

Mediante apoderado judicial, la señora **MERY IRENE GÓMEZ BERNAL** formuló demanda ordinaria laboral contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** y la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**, con miras a que se declare la nulidad o invalidez del traslado realizado del RPM al RAIS, desde marzo de 1.996; como consecuencia, se ordene a la AFP PROTECCIÓN S.A. transferir la

totalidad del saldo de su cuenta de ahorro individual a Colpensiones, incluyendo los rendimientos financieros, el porcentaje destinado a gastos de administración y el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, así como trasladar a dicha entidad su historia laboral con detalle de cotizaciones realizadas al RAIS; ordenar a Colpensiones reactivar y aceptar su afiliación sin solución de continuidad, con todos los derechos pensionales que gozaba antes del traslado al RAIS; ordenar a Colpensiones registrar de forma detallada su historia laboral, con las cotizaciones que transfiera la AFP convocada[1].

PROVIDENCIA APELADA

El Juzgado Once (11) Laboral del Circuito de Bogotá, dentro de la Audiencia obligatoria dispuesta en el Art. 77 del C.P.T. y S.S., celebrada el 13 de febrero de 2024, en la etapa de decreto de pruebas, decidió no decretar el interrogatorio de parte a la AFP Protección S.A. y la declaración de parte de la demandante, que fueron pedidas en el *libelo genitor*.

Como fundamento de su decisión, el A quo manifestó que el interrogatorio de parte del representante legal de la demandada Protección es inconducente, conforme a lo definido en estos procesos por la CSJ, aunado a que quien representa los intereses de la mencionada demandada, es su propio apoderado, quien poco o nada relevante podría ofrecer al proceso sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el acto del traslado. Sobre la declaración de parte de la demandante, adujo que no es aplicable en materia laboral, y en todo caso, se decretará el interrogatorio de parte de dicho extremo a instancia de Colpensiones y Protección; finalmente, dijo que la propia parte no puede servir de testigo al proceso.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la parte DEMANDANTE recurrió la decisión argumentando, en síntesis, que es procedente decretar el interrogatorio de parte al representante legal de la AFP Protección S.A., teniendo en cuenta que en el proceso lo que se busca conocer corresponde a las circunstancias en las cuales se hizo la afiliación de la señora Mary Gómez, máxime que extrañamente se decretaron los interrogatorios de parte solicitados por las demandadas, por manera que en virtud

[1] Páginas 11 a 39 Archivo 01 Expediente Digital

del derecho al debido proceso y la igualdad de armas de las partes, debe accederse al decreto de dicho medio de convicción.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de los términos procesales previstos se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Cabe anotar que los alegatos de conclusión no constituyen una nueva oportunidad para complementar el recurso de apelación interpuesto en primera instancia.

Surtido el trámite que corresponde a esta instancia procede la Sala de decisión a dictar la providencia que corresponde.

PROBLEMA JURÍDICO

Conforme al recurso interpuesto, el problema jurídico a resolver se centra en determinar si es o no procedente decretar el interrogatorio de parte del representante legal de la demandada AFP Protección S.A., conforme a la solicitud de pruebas planteada por el actor.

CONSIDERACIONES

La Sala resolverá el recurso siguiendo los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPL**,** es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

Para resolver el problema jurídico planteado, hay que tener en cuenta que el artículo 51 del C.P.T. y S.S., establece que en materia laboral: "*Son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley*…". Sin embargo, debe advertirse que el derecho de contradicción de las partes, en cuanto a la solicitud de medios de prueba, está circunscrito a unos determinados requisitos establecidos por el legislador con el fin de garantizar al máximo el debido proceso. En ese sentido, los distintos medios de prueba aportados y solicitados por las partes y decretadas por el Juez dentro del proceso, deben satisfacer los requisitos de utilidad, conducencia y pertinencia, y además de ello, cumplir con las exigencias impuestas para cada uno de estos.

Lo anterior, tiene fundamento jurídico en lo dispuesto por el artículo 53 del C.P.T. y S.S, modificado por el artículo 8 de la Ley 1149 de 2007, el cual dispone

que: "*El juez podrá, en providencia motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito*". Por lo que, para determinar si procede el decreto de las pruebas solicitadas por las partes, el juez debe analizar si éstas cumplen con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad.

En el presente caso, se tiene que el demandante desde su *libelo genitor* solicitó el interrogatorio del representante legal de la AFP Protección (página 38 Archivo 01 del ED), el cual fue negado por el Jugado de Conocimiento por inconducente.

Sobre el particular, se impone advertir desde ya por parte de la Sala de Decisión que se comparte la determinación adoptada por el cognoscente sobre dicho medio de convicción, en primer lugar, porque desde el escrito inicial la parte actora aduce que su traslado al RAIS se encuentra viciado de nulidad, en tanto no fue debidamente asesorado por la AFP demandada para la celebración de dicho acto, lo cual lo releva de la carga de probar en los términos del artículo 167 del CGP, aunado a que no se considera necesario el pretendido medio de convicción, toda vez que con las pruebas decretadas por el A quo, en particular, el interrogatorio de parte de la demandante a instancia de Colpensiones, es suficiente para la verificación o esclarecimiento de los hechos objeto de controversia, al ser aptos para la resolución de las peticiones de la demanda.

Recuérdese que la práctica de otras pruebas resulta necesaria cuando el objeto compete en lo debatido incide en lo pretendido, siempre que no existan dentro del proceso elementos que permitan al Juzgador proferir el fallo que en derecho corresponda. De ahí que, el juzgador se encuentra facultado para dirigir el proceso y en tal forma rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito, previniendo un gasto inútil de tiempo y trabajo, como bien se hizo en este asunto específico.

Puestas así las cosas, considera la Sala de Decisión que la determinación de instancia debe ser confirmada. Sin Costas en esta instancia por considerarlas no causadas.

Por lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

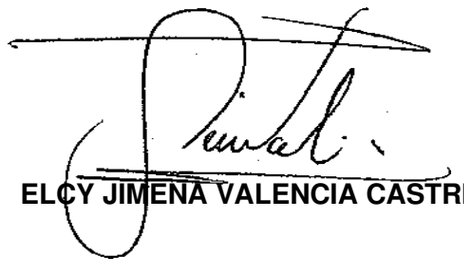
RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto del 13 de febrero de 2024, proferido por el Juzgado Once (11) Laboral del Circuito de Bogotá, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin **COSTAS** en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

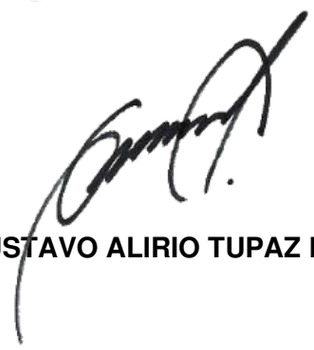
Los Magistrados,



ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN



LORENZO TORRES RUSSY



GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO:	Ordinario Laboral
RADICADO:	11001-31-05-017-2022-00030-01
DEMANDANTE:	JHON JAIRO PEDREROS RIVERA
DEMANDADO:	COLPENSIONES y OTROS
ASUNTO:	Apelación Auto 11 de octubre de 2023
JUZGADO:	Juzgado Diecisiete (17) Laboral del Circuito de Bogotá
TEMA:	CONTESTACIÓN DEMANDA
DECISIÓN:	REVOCA

Hoy, veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, **SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA** por los Magistrados **LORENZO TORRES RUSSY, GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA** y como Ponente, **ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN**, se procede a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada COLPENSIONES en contra del Auto del 11 de octubre de 2023, proferido por el Juzgado Diecisiete (17) Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por **JHON JAIRO PEDREROS RIVERA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES** y **CESANTÍAS PORVENIR S.A., SKANDIA PENSIONES** y **CESANTÍAS S.A.** y **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES** y **CESANTÍAS PROTECCIÓN** con radicado No**. 11001-31-05-017-2022-00030-01.**

ANTECEDENTES

El Juzgado Diecisiete (17) Laboral del Circuito de Bogotá, el 23 de marzo de 2022 admitió la demanda interpuesta por JHON JAIRO PEDREROS RIVERA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. y la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES y CESANTÍAS PROTECCIÓN[1], mediante la cual el actor pretende se declare la ineficacia del traslado de régimen efectuado del RPM al RAIS y se ordene el traslado de los dineros recibidos por las AFP demandadas a COLPENSIONES.

AUTO APELADO

Mediante Auto del 11 de octubre de 2023, el Juzgado de Conocimiento tuvo por no contestada la demanda por parte de COLPENSIONES, al considerar que todas las demandadas fueron notificadas el 25 de marzo de 2022, por manera que el traslado común corrió del 30 de marzo al 19 de abril de 2022, sin embargo, COLPENSIONES allegó contestación de manera extemporánea, esto es, el 22 de abril de símil año.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la demandada COLPENSIONES presentó recurso de apelación contra la anterior determinación, con el fin de que se tenga por contestada la demanda por parte de la entidad.

Como argumentos de su apelación, manifestó que la fecha de notificación tenida en cuenta por el Juzgado de Conocimiento, esto es, el 25 de marzo de 2022, no tiene ningún efecto para la entidad, toda vez que no fue realizada con apego a la normatividad aplicable al caso, porque el correo electrónico remitido en dicha data no contenía el traslado de la demanda

[1] Archivo 03 del ED.

acompañada del auto admisorio de la misma, como requisito *sine qua non* para que se entienda legalmente surtida la notificación.

Agregó que la notificación del Auto admisorio de la demanda fue recibida solo hasta el 25 de abril de 2022, pese a ello, la entidad radicó la contestación de la demanda el 22 de abril de 2022, por lo que en realidad contestó dentro del término legal, pues en esta fecha se notificó de la demanda por conducta concluyente, aportando la contestación de la misma y adjuntando los documentos que la soportan.

Agregó que es potestad del administrador de justicia determinar si es procedente tener como contestada la demanda o, correr el término nuevamente y evitar que se presente más adelante una nulidad procesal que invalide lo actuado, lo cual encuentra sustento en lo dispuesto en el Art. 129 de la Constitución Política y lo manifestado por la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-025 de 2018[2].

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de los términos procesales previstos se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Cabe anotar que los alegatos de conclusión no constituyen una nueva oportunidad para complementar el recurso de apelación, si este fue interpuesto en primera instancia.

Surtido el trámite que corresponde a esta instancia procede la Sala de Decisión a dictar la providencia que corresponde.

PROBLEMA JURÍDICO

Conforme al recurso interpuesto, el problema jurídico a resolver se centra en determinar si fue acertada o no la decisión del A quo de tener por no contestada la demanda por parte de COLPENSIONES.

[2] Archivo 13 del ED.

CONSIDERACIONES

. La Sala resolverá el recurso siguiendo los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPT y de la SS, es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

Para el efecto ha de rememorarse que, conforme a la norma aplicable al caso, esto es, el artículo 8º del Decreto 806 de 2020, se dispone en lo que interesa al presente asunto, lo siguiente:

*"**ARTÍCULO 8. Notificaciones personales**. Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.*

El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.

Para los fines de esta norma se podrán Implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos.

Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso. (…)".

De la lectura desprevenida del precepto normativo en cita, se tiene que el legislador extraordinario de forma expresa dispuso que la notificación se entiende realizada dos días hábiles después de haberse recibido el mensaje de datos y que el término para contestar la demanda inicia un día después, es decir, al tercer día. Lo anterior, teniendo en cuenta igualmente la exequibilidad condicionada que dio a la norma la Corte Constitucional, a través de la

sentencia C-420 de 2020, en tanto es necesario que se acredite que el mensaje de datos fue recibido por la persona a notificar.

Por su parte, de conformidad con el artículo 74 del Estatuto Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, admitida la demanda, el juez ordenará que se dé traslado de ella a los demandados, para que la contesten y al Agente del Ministerio Público si fuere el caso, por un término común de 10 días. Dicha norma se acompasa con lo dispuesto en el artículo 118 del C.G.P., mediante la cual se dispone que, si el término fuere común a varias partes, comenzará a correr a partir del día siguiente al de la notificación a todas.

Ahora, es menester señalar que en efecto la vinculación del demandado al proceso es un asunto de particular importancia dentro del trámite procesal y, por ende, su notificación implica que esté rodeado de todas las formalidades prescritas por la ley, debiendo realizarse en debida forma, dado que la finalidad de esta es darle a conocer la actuación en su contra, en aplicación del principio de publicidad, lo que supone poner en su conocimiento el proceso, para que ejerza su derecho a la defensa contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política.

Teniendo en cuenta los parámetros normativos, mismos que sirven para orientar esta decisión, ha de advertirse que, de la revisión del expediente se tiene que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto 806 de 2020, vigente para la época, la apoderada de la parte actora remitió el 25 de marzo de 2022 mensaje de datos a las direcciones electrónicas de las demandadas, pretendiendo notificar el auto admisorio de la demanda, anunciando además, que se remitía notificación personal, demanda y anexos, tal y como puede observarse en el correo enviado particularmente a Colpensiones[3]:

[3] Archivo 04 del ED.



e-entrega
Acta de envío y entrega de correo electrónico

e-entrega Certifica que ha realizado el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.

Según lo consignado los registros de e-entrega el mensaje de datos presenta la siguiente información:

Resumen del mensaje

Id Mensaje	298338
Emisor	paola.patino@legaljuridico.com
Destinatario	notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co - COLPENSIONES
Asunto	Notificacion 291 - 11001310501720220003000 - JOHN JAIRO PEDREROS RIVERA
Fecha Envio	2022-03-25 12:23
Estado Actual	Mensaje enviado con estampa de tiempo

Trazabilidad de notificación electrónica

Evento	Fecha Evento	Detalle
Mensaje enviado con estampa de tiempo	2022/03/25 12:28:18	**Tiempo de firmado:** Mar 25 17:28:18 2022 GMT **Política:** 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.1.6.



e-entrega
Acta de envío y entrega de correo electrónico

Contenido del Mensaje

Notificacion 291 - 11001310501720220003000 - JOHN JAIRO PEDREROS RIVERA

Señores

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

Cordial saludo,

Adjunto se encuentra citación para notificación personal, auto admisorio, demanda y anexos, del proceso con radicado 11001310501720220003000 demandante JOHN JAIRO PEDREROS RIVERA, donde usted se encuentra como demandado, para que remita su contestación al juzgado con copia al apoderado de la parte demandante.

Agradecemos confirmar recibido.

Adjuntos

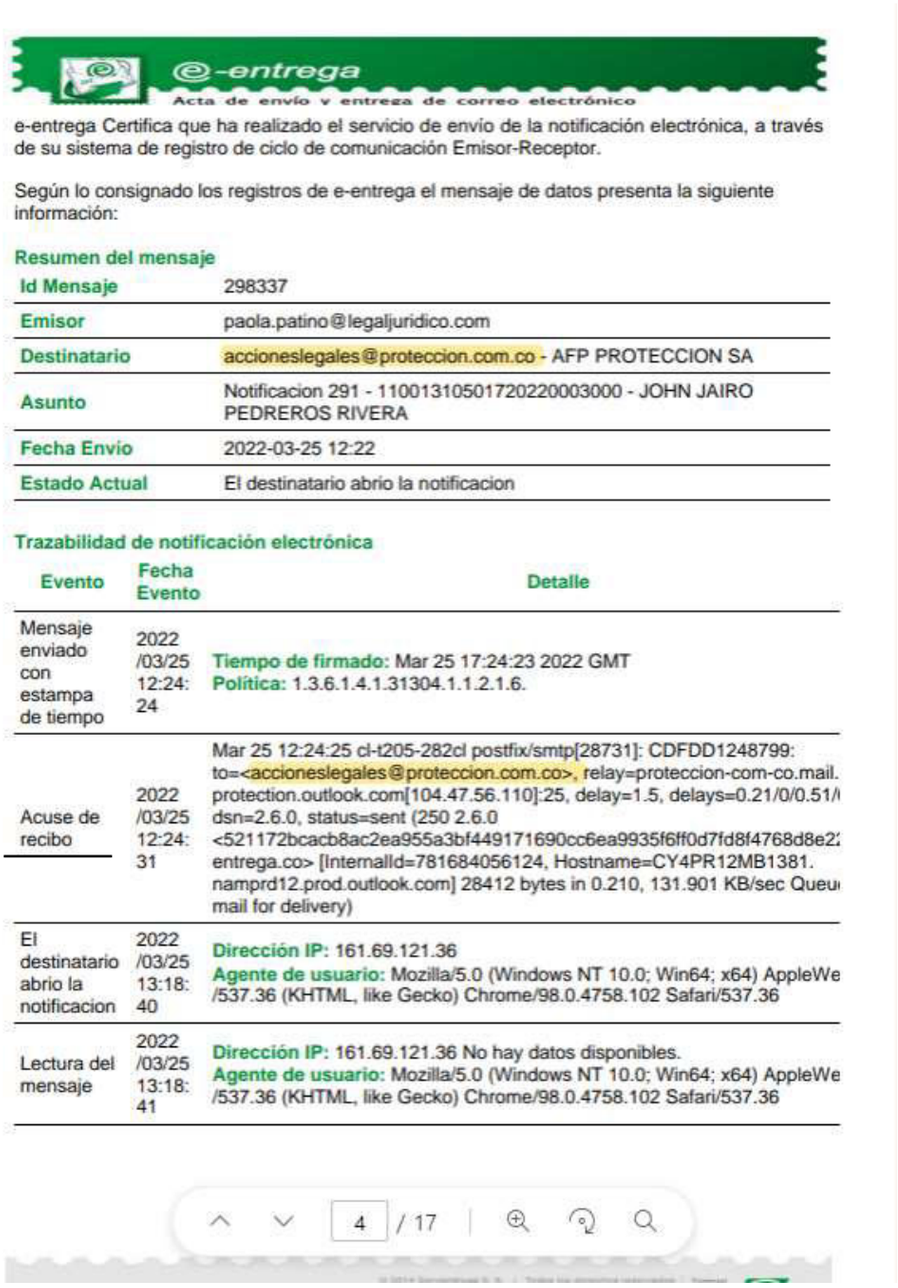
Notificacion_291__COLPENSIONES.pdf
Demanda__JHON_PEDREROS.pdf
AUTO_JHON_JAIRO_PEDREROS_RIVERA.pdf

Descargas

--

No obstante, revisado con detenimiento el estado del envío del mensaje, se observa de la documental en referencia, que la misma solo certifica *"Mensaje enviado con estampa de tiempo"*, sin especificar si el correo electrónico remitido particularmente a COLPENSIONES, fue efectivamente entregado a la entidad a su dirección electrónica, como sí aconteció con las

demandadas, pues nótese por ejemplo, que en el caso de Protección sí se certificó entrega e incluso acuse de recibo, como se observa a continuación[4]:



e-entrega

Acta de envío y entrega de correo electrónico

e-entrega Certifica que ha realizado el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.

Según lo consignado los registros de e-entrega el mensaje de datos presenta la siguiente información:

Resumen del mensaje

Id Mensaje	298337
Emisor	paola.patino@legaljuridico.com
Destinatario	accioneslegales@proteccion.com.co - AFP PROTECCION SA
Asunto	Notificacion 291 - 11001310501720220003000 - JOHN JAIRO PEDREROS RIVERA
Fecha Envio	2022-03-25 12:22
Estado Actual	El destinatario abrio la notificacion

Trazabilidad de notificación electrónica

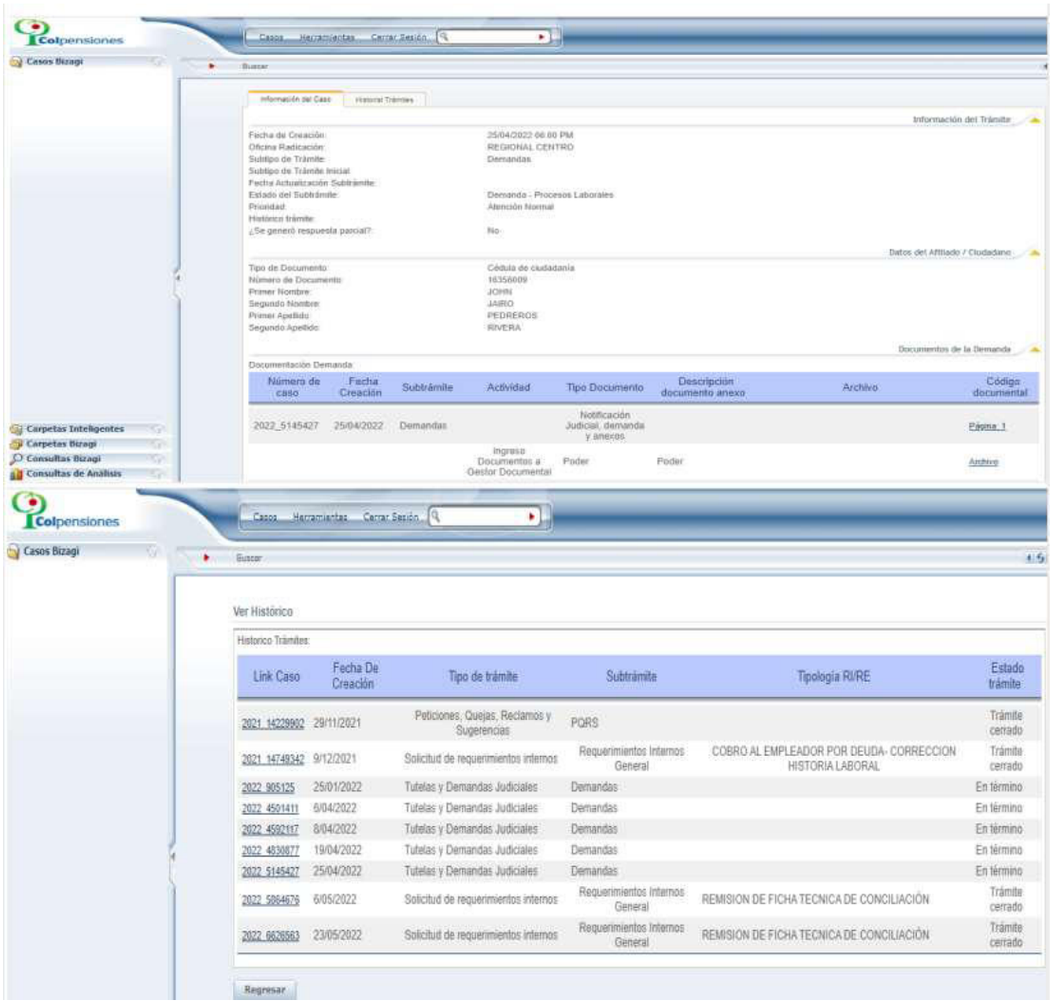
Evento	Fecha Evento	Detalle
Mensaje enviado con estampa de tiempo	2022/03/25 12:24:24	**Tiempo de firmado:** Mar 25 17:24:23 2022 GMT **Política:** 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.1.6.
Acuse de recibo	2022/03/25 12:24:31	Mar 25 12:24:25 cl-t205-282cl postfix/smtp[28731]: CDFDD1248799: to=<accioneslegales@proteccion.com.co>, relay=proteccion-com-co.mail.protection.outlook.com[104.47.56.110]:25, delay=1.5, delays=0.21/0/0.51/ dsn=2.6.0, status=sent (250 2.6.0 <521172bcacb8ac2ea955a3bf449171690cc6ea9935f6ff0d7fd8f4768d8e2 entrega.co> [InternalId=781684056124, Hostname=CY4PR12MB1381. namprd12.prod.outlook.com] 28412 bytes in 0.210, 131.901 KB/sec Queu mail for delivery)
El destinatario abrio la notificacion	2022/03/25 13:18:40	**Dirección IP:** 161.69.121.36 **Agente de usuario:** Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWe /537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36
Lectura del mensaje	2022/03/25 13:18:41	**Dirección IP:** 161.69.121.36 No hay datos disponibles. **Agente de usuario:** Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWe /537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36

4 / 17

De manera que, tal y como se advierte en la alzada, en el presente caso no se puede tener por acreditado que la demandada COLPENSIONES fue notificada en debida forma del auto admisorio de la demanda desde el 25 de marzo de 2022, para efectos de establecer si la entidad procedió a dar contestación a la misma dentro del término legal de 10 días, lo cual se reafirma

[4] Archivo 04 del ED.

además, con la documental allegada por COLPENSIONES a través de su apelación, pues en esta se hace una relación de mensajes recibidos por la entidad, empero ninguno de ellos, corresponde al enviado el 25 de marzo de 2022[5]:



De lo anterior, se advierte que cuando COLPENSIONES radicó la contestación de la demanda el 22 de abril de 2022 (archivo 08 del ED), aún no había sido notificada en debida forma, por lo que el Juzgado de Conocimiento con la presentación de tal escrito debió tenerla por notificada por conducta concluyente, en los términos del artículo 301 del CGP, y a su vez, tener por contestada la demanda por parte de la encartada.

[5] Archivo 13 del ED.

En consecuencia, se revocará el Auto apelado en su numeral cuarto, para en su lugar, tener por notificada a la demandada COLPENSIONES por conducta concluyente con la radicación de la contestación de la demanda y, en consecuencia, tener por contestado el *libelo geni*tor por parte de dicha entidad. Sin costas en esta instancia, ante la prosperidad del recurso.

Por lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

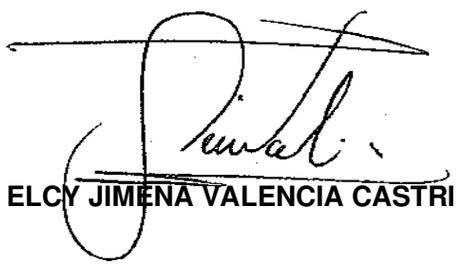
RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el numeral **CUARTO** del Auto del 11 de octubre de 2023, proferido por el Juzgado Diecisiete (17) Laboral del Circuito de Bogotá, para en su lugar, tener por notificada a la demandada COLPENSIONES por conducta concluyente con la radicación de la contestación de la demanda y, en consecuencia, tener por contestado el *libelo genitor* por parte de dicha entidad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia, ante la prosperidad del recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

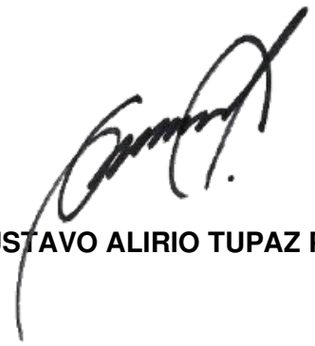
Los Magistrados,



ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN



LORENZO TORRES RUSSY



GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO:	Ordinario Laboral
RADICADO:	11001-31-05-018-2020-00117-01
DEMANDANTE:	ROSA MARÍA URBANO GERÓNIMO
DEMANDADO:	INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS S.A. – INCOLTAPAS S.A.
ASUNTO:	Apelación Auto 7 de diciembre de 2022
JUZGADO:	Juzgado Dieciocho (18) Laboral del Circuito de Bogotá
TEMA:	CONTESTACIÓN DEMANDA
DECISIÓN:	CONFIRMA

Hoy, veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, **SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA** por los Magistrados **LORENZO TORRES RUSSY, GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA** y como Ponente, **ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN**, se procede a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra del Auto del 7 de diciembre de 2022, proferido por el Juzgado Dieciocho (18) Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por **ROSA MARÍA URBANO GERÓNIMO** contra la **INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS S.A. – INCOLTAPAS S.A.** con radicado No**. 11001-31-05-018-2022-00117-01.**

AUTO

Atendiendo el impedimento presentado por el Dr. GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA por conocer previamente y realizar actuaciones como Juez

Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del presente proceso, el mismo se ACEPTA, de conformidad al numeral 2° del artículo 141 del CGP.

ANTECEDENTES

El Juzgado Dieciocho (18) Laboral del Circuito de Bogotá, el 30 de agosto de 2021, admitió la demanda interpuesta por ROSA MARÍA URBANO GERÓNIMO en contra de la INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS S.A. – INCOLTAPAS S.A.[1], mediante la cual la actora pretende se declare que la renuncia irrevocable presentada a su cargo de operaria el 17 de marzo de 2014 es ineficaz, al efectuarse por un vicio del consentimiento producido por engaños y falsas motivaciones por parte del entonces gerente y los supervisores de la encartada; como consecuencia de ello, se ordene su reintegro a un cargo de igual o mayor jerarquía dentro de la empresa demandada, junto con el pago de los aportes a pensión y salud, con sus intereses moratorios e indexación, así como al reconocimiento y pago de la indemnización correspondiente a 180 días de salario, conforme al artículo 26 de la Ley 361 de 1.997, lo que resulte probado *ultra y extra petita,* costas y agencias en derecho. De manera subsidiaria, solicita el pago de daños y perjuicios generados por el empleador, por acción u omisión en cuanto a la eventual pérdida de la capacidad laboral.

AUTO APELADO

Mediante Auto del 7 de diciembre de 2022, el Juzgado de Conocimiento tuvo por no contestada la demanda por parte de la INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS S.A. – INCOLTAPAS S.A., al considerar que la sociedad en mención fue notificada en debida forma el 6 de septiembre de 2021, sin embargo, no allegó escrito de contestación dentro del término legal[2].

RECURSOS DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN

[1] Archivo 05 del ED.
[2] Archivo 08 del ED.

El apoderado de la DEMANDADA presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la anterior determinación, aduciendo que no ha sido notificada del auto admisorio de la demanda, por manera que desconoce tal texto, sus pruebas y anexos. Agregó que tras una revisión exhaustiva del correo contabilidad@incoltapas.com.co, no se logró evidenciar que se haya realizado notificación alguna, como así da fe la certificación del 12 de diciembre de 2.022, aunado a que no existe ningún soporte que haya recepcionado *"acuse de recibido"* y leyó el mensaje de datos.

Añadió que no se cumplió con el requisito previsto en el artículo 8º del Decreto 806 de 2020, esto es, no acreditó la actora, la forma en que obtuvo el correo electrónico del demandado, ni allegó las evidencias correspondientes, menos aún prestó el juramento exigido en la mencionada norma.

Finalmente, dijo que el Juzgado de Conocimiento podía solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio, Superintendencias, entidades públicas o privadas y, sin embargo, no hizo uso de esa facultad.

Por lo anterior, solicitó la revocatoria de la decisión opugnada, para que en su lugar, se ordene la notificación de la encartada[3].

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

Mediante Auto del 24 de noviembre de 2023, el Juzgado de Conocimiento resolvió no reponer el auto discutido y concedió el recurso de apelación formulado por la encartada.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de los términos procesales previstos se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Cabe anotar que los alegatos de conclusión no constituyen una nueva oportunidad para complementar el recurso de apelación interpuesto en primera instancia.

[3] Archivo 09 del ED.

Surtido el trámite que corresponde a esta instancia procede la Sala de Decisión a dictar la providencia que corresponde.

PROBLEMA JURÍDICO

Conforme al recurso interpuesto, el problema jurídico a resolver se centra en determinar si fue acertada o no la decisión del A quo de tener por no contestada la demanda por parte de INCOLTAPAS S.A.

CONSIDERACIONES

. La Sala resolverá el recurso siguiendo los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPT y de la SS, es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

Para el efecto ha de rememorarse que, conforme a la norma aplicable al caso, esto es, el artículo 8º del Decreto 806 de 2020, se dispone en lo que interesa al presente asunto, lo siguiente:

*"**ARTÍCULO 8. Notificaciones personales**. Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.*

El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.

Para los fines de esta norma se podrán Implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos.

Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso.

(…)

***PARÁGRAFO 2.** La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas Web o en redes sociales.".*

De la lectura desprevenida del precepto normativo en cita, se tiene que el legislador extraordinario de forma expresa dispuso que la notificación se entiende realizada dos días hábiles después de haberse recibido el mensaje de datos y que el término para contestar la demanda inicia un día después, es decir, al tercer día. Lo anterior, teniendo en cuenta igualmente la exequibilidad condicionada que dio a la norma la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-420 de 2020, en tanto es necesario que se acredite que el mensaje de datos fue recibido por la persona a notificar.

Por su parte, de conformidad con el artículo 74 del Estatuto Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, admitida la demanda, el juez ordenará que se dé traslado de ella a los demandados, para que la contesten y al Agente del Ministerio Público si fuere el caso, por un término común de 10 días. Dicha norma se acompasa con lo dispuesto en el artículo 118 del C.G.P., mediante la cual se dispone que, si el término fuere común a varias partes, comenzará a correr a partir del día siguiente al de la notificación a todas.

Ahora, es menester señalar que en efecto la vinculación del demandado al proceso es un asunto de particular importancia dentro del trámite procesal y, por ende, su notificación implica que esté rodeado de todas las formalidades prescritas por la ley, debiendo realizarse en debida forma, dado que la finalidad de esta es darle a conocer la actuación en su contra, en aplicación del principio de publicidad, lo que supone poner en su conocimiento el proceso, para que

ejerza su derecho a la defensa contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política.

Teniendo en cuenta los parámetros normativos, mismos que sirven para orientar esta decisión, ha de advertirse que, de la revisión del expediente se tiene que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto 806 de 2020, vigente para la época, la parte actora remitió el 6 de septiembre de 2021 mensaje de datos a la dirección electrónica de la demandada, pretendiendo notificar el auto admisorio de la demanda, anunciando además, que se remitía citatorio, demanda y auto admisorio, tal y como puede observarse a continuación[4]:



Urbanex

Gmail — Notificacion Judicial Urbanex

NOTIFICACIÓN JUZGADO DECRETO 806 DEL 2020 ART. 8 - GUÍA N. 7680510468
2 mensajes

Notificacion Judicial Urbanex — 6 de septiembre de 2021, 16:10
Para: contabilidad@incoltapas.com.co

Señor(a)

INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS "INCOLTAPAS SA" a traves de su Representante Legal MYRIAM YOLANDA SUAREZ ISAZA a quien haga sus veces por medio del presente le Informamos que el JUZGADO 18 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA ubicado en la CALLE 12 # 7-36 de BOGOTA Email: jlato18@cendoj.ramajudicial.gov.co ha dispuesto citario para que se notifique del AUTO ADMISORIO librado el 30 de AGOSTO del 2021 en el Proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA # 2020-0117 promovido por ROSA MARIA URBANO GERONIMO contra INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS "INCOLTAPAS SA".

Se anexa en archivo adjunto copia del Citatorio diligenciado,Demanda y Auto Admisorio.

Por lo anterior se le informa que en su contra se inició el proceso arriba descrito, por lo cual y dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 806 del 2020 Artículo 8. Se le advierte al demandado que la presente notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío de la presente comunicación y los términos comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. La contestación de la demanda deberá enviarla al correo electrónico del Juzgado en formato PDF.

NOTA IMPORTANTE: Debe comunicarse directamente con el Juzgado o con el interesado y/o usuario, por que solo somos el operador postal elegido para realizar el envió como iniciadores de la comunicación de citaciones y notificaciones electrónicas.

Cordialmente,

Urbanex

Departamento de Notificaciones Judiciales

7680510468.pdf
8622K

[4] Archivo 06 del ED.

Del mensaje de datos en referencia, se puede advertir con claridad, que el mismo fue enviado a la dirección electrónica contabilidad@incoltapas.com.co, la cual corresponde a la demandada, conforme se observa en su certificado de existencia y representación legal que obra a páginas 2 a 12 archivo 04 del expediente. Por tanto, aunque como se indica en la alzada, en la demanda no se manifestó bajo la gravedad de juramento que esa era la dirección de la encartada, pues allí se hizo referencia a otra distinta, lo cierto es que esa sola circunstancia no hace nugatoria la notificación, toda vez que el mensaje de datos fue remitido al correo dispuesto para tal fin, el cual no sólo se encuentra consignado en su certificado de existencia y representación legal, sino que además, se advierte aceptado por la propia empresa, en la certificación allegada con el recurso de apelación, en la cual esta indicó:



INCOLTAPAS S.A.

ISO 9001: 2015 BUREAU VERITAS Certification

CEG-391

LA SUSCRITA JEFE DE CONTABILIDAD

C E R T I F I C A

Por medio de la presente me permito informar que, junto con el área de Tecnología, se realizó una revisión exhaustiva en el dominio de: contabilidad@incoltapas.com.co, en las fechas especificas 06 de septiembre de 2021, sin embargo, No se logró evidenciar que en dicho dominio se hubiese recibido algún tipo de notificación electrónica dentro del proceso DDA INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS P 2022-117 Ddante ROSA MARIA URBANO GEROMINO.

Lo anterior, de conformidad con las verificaciones hechas bajo los lineamientos de los sistemas de seguridad de la información implementados en la compañía.

Se expide esta certificación como constancia, para el JUZGADO 18 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

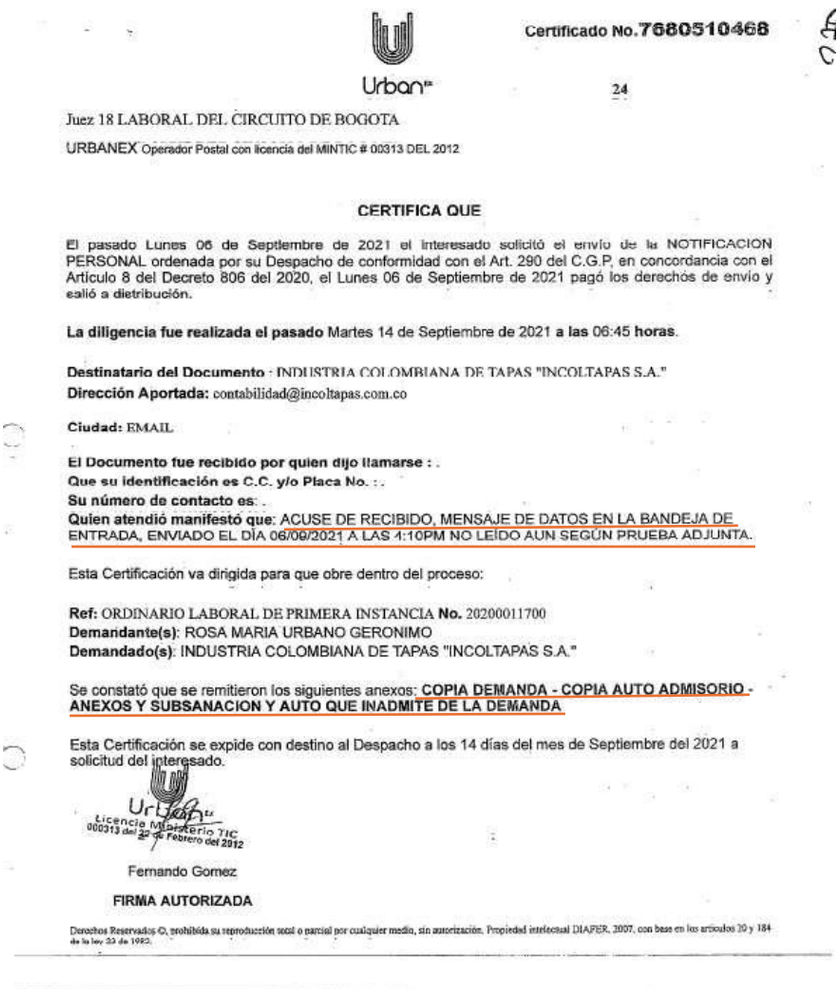
Cordialmente,

Industria Colombiana de Tapas S.A
INCOLTAPAS S.A
Nit. 860.027.917-6

Gladys Soraya Roncancio Parra
Jefe de Contabilidad

En ese orden, lo que debe constatarse por parte de la Sala de Decisión, es si la demandada en efecto recibió el mensaje de datos que le fue remitido para surtir el trámite de notificación del auto admisorio de la demanda, ya que en su alzada indica que este no llegó a su bandeja de correo, lo cual pretende demostrar con la certificación en referencia.

Sobre el punto, encuentra la Sala que, en contraste con la certificación aportada por la demandada, la parte actora anexó certificaciones de entrega efectiva del mensaje de datos datado el 6 de septiembre de 2021, en las que además, se da cuenta del estado del correo y de todos los anexos que fueron remitidos, como se observa a continuación[5]:



Certificado No.7680510468

Urbanex

24

Juez 18 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA

URBANEX Operador Postal con licencia del MINTIC # 00313 DEL 2012

CERTIFICA QUE

El pasado Lunes 06 de Septiembre de 2021 el interesado solicitó el envío de la NOTIFICACION PERSONAL ordenada por su Despacho de conformidad con el Art. 290 del C.G.P, en concordancia con el Artículo 8 del Decreto 806 del 2020, el Lunes 06 de Septiembre de 2021 pagó los derechos de envío y salió a distribución.

La diligencia fue realizada el pasado Martes 14 de Septiembre de 2021 **a las** 06:45 **horas**.

Destinatario del Documento - INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS "INCOLTAPAS S.A."
Dirección Aportada: contabilidad@incoltapas.com.co

Ciudad: EMAIL

El Documento fue recibido por quien dijo llamarse : .
Que su identificación es C.C. y/o Placa No. : .
Su número de contacto es: .
Quien atendió manifestó que: ACUSE DE RECIBIDO, MENSAJE DE DATOS EN LA BANDEJA DE ENTRADA, ENVIADO EL DÍA 06/09/2021 A LAS 1:10PM NO LEÍDO AUN SEGÚN PRUEBA ADJUNTA.

Esta Certificación va dirigida para que obre dentro del proceso:

Ref: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA **No.** 20200011700
Demandante(s): ROSA MARIA URBANO GERONIMO
Demandado(s): INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS "INCOLTAPAS S.A."

Se constató que se remitieron los siguientes anexos: **COPIA DEMANDA - COPIA AUTO ADMISORIO - ANEXOS Y SUBSANACION Y AUTO QUE INADMITE DE LA DEMANDA**

Esta Certificación se expide con destino al Despacho a los 14 días del mes de Septiembre del 2021 a solicitud del interesado.

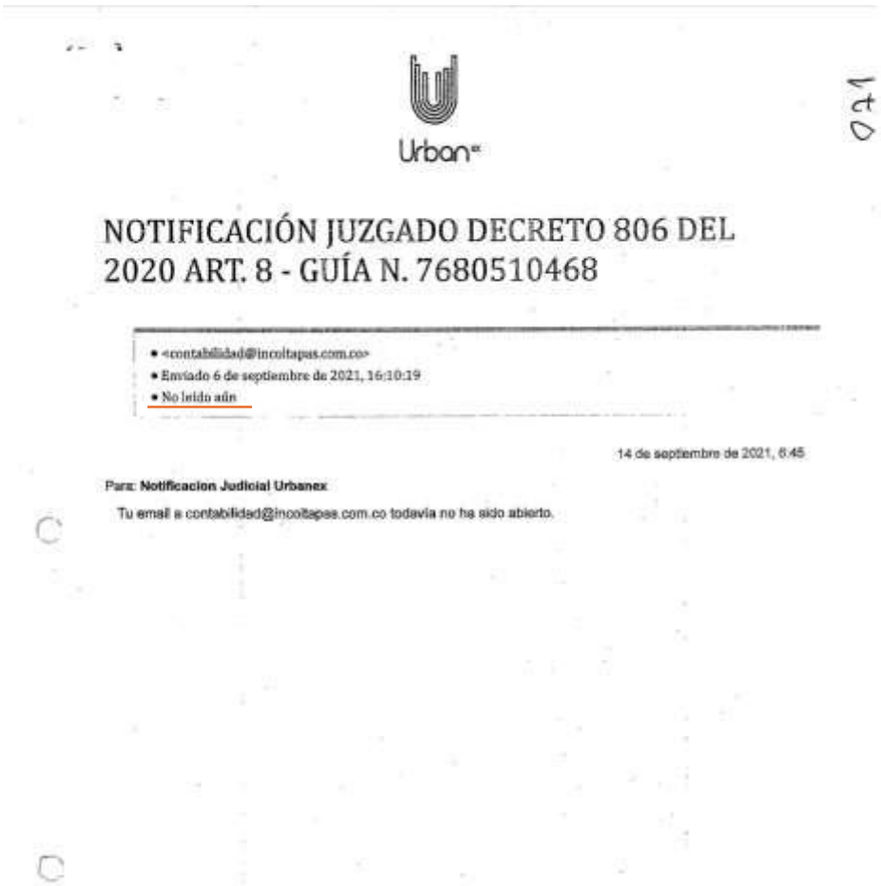
Urbanex
Licencia Ministerio TIC 000313 del 22 de Febrero del 2012

Fernando Gomez

FIRMA AUTORIZADA

Derechos Reservados ©, prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio, sin autorización. Propiedad intelectual DIAPER, 2007, con base en los artículos 20 y 184 de la ley 23 de 1982.

[5] Archivo 06 del ED.



Urbanex

041

NOTIFICACIÓN JUZGADO DECRETO 806 DEL 2020 ART. 8 - GUÍA N. 7680510468

- <contabilidad@incoltapas.com.co>
- Enviado 6 de septiembre de 2021, 16:10:19
- No leído aún

14 de septiembre de 2021, 6:45

Para: **Notificacion Judicial Urbanex**

Tu email a contabilidad@incoltapas.com.co todavía no ha sido abierto.

Así las cosas, analizando en conjunto las certificaciones aportadas por ambas partes, concluye la Sala de Decisión que las arrimadas por la parte demandante son las que merecen mayor credibilidad, toda vez que provienen de un tercero ajeno al proceso, como lo es el operador Postal Urbanex, que cuenta con licencia del Ministerio de las Telecomuncaciones, aunado a que las mismas indican en detalle lo acaecido con el correo de fecha 6 de septiembre de 2021, enviado a la demandada a las 16;10 de la tarde, el cual no solo fue recibido por esta en su bandeja de entrada, sino también, que al 14 de septiembre de símil año, aun no había procedido a leer tal mensaje de datos.

A lo anterior se suma que, la certificación aportada por la demandada, proviene del mismo extremo procesal, y si bien en ella se indica que se hizo la revisión del correo electrónico junto con el Área de Tecnología, no evidenciando el recibo de la notificación que se viene debatiendo, lo cierto es

que tal información no se encuentra respaldada por esa Área de Tecnología, y en todo caso resulta ser muy genérica la afirmación que allí se realiza, pues no se indica cómo se efectuó la búsqueda del mensaje de datos que la demandada echa de menos y en qué fecha se llevó a cabo esa constatación, a efectos de brindar mayor ilustración al Colegiado sobre lo que implicó la revisión exhaustiva del dominio contabilidad@incoltapas.com.co.

Es por ello que, la certificación adosada por la demandada no tiene la virtud de derruir la que fuera expedida por la empresa Postal Urbanex, en la que se da fe del recibido del mensaje de datos contentivo de la notificación personal del auto admisorio de la demanda por parte de Incoltapas S.A. en su respectiva dirección electrónica, lo cual denota que dicha sociedad debe tenerse como debidamente notificada pasados dos días después de recepcionado dicho mensaje, esto es, el 8 de septiembre de 2021 y, como quiera que no radicó dentro del término de traslado el escrito de contestación de la demanda, es claro que debió tenérsele por no contestado el escrito inicial, como efecto resolvió el Juez a quo.

En consecuencia, resulta procedente confirmar el auto apelado. Sin costas en esta instancia, al no constatarse su causación.

Por lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto del 7 de diciembre de 2022, proferido por el Juzgado Dieciocho (18) Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia, al no constatarse su causación**.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

LOREZO TORRES RUSSY

GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO:	Ejecutivo Laboral
RADICADO:	11001-31-05-022-2021-00628-03
DEMANDANTE:	PORVENIR S.A.
DEMANDADO:	OSDOKSALUD SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD E.U.
ASUNTO:	Apelación Auto del 5 de diciembre de 2023.
JUZGADO:	Juzgado 22 Laboral del Circuito de Bogotá
TEMA:	Mandamiento de pago
DECISIÓN:	CONFIRMA.

Hoy, veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, **SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA** por los Magistrados **LORENZO TORRES RUSSY, GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA** y como Ponente, **ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN**, se procede a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante en contra del Auto del 5 de diciembre de 2023 proferido por el Juzgado Veintidós (22) Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del Proceso Ejecutivo promovido por **PORVENIR S.A.** contra **OSDOKSALUD SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD E.U.** con radicado No. **11001-31-05-022-2021-00628-02.**

ANTECEDENTES

La sociedad promotora de la acción presentó solicitud de ejecución por la suma de $8.448.529 por concepto de cotizaciones pensionales obligatorias dejadas de pagar por la parte ejecutada en su calidad de empleadora, entre los ciclos de noviembre de 2002 y agosto de 2016, conforme a la liquidación de aportes pensionales que le fue remitida, así como por las sumas que se generen por concepto de cotizaciones obligatorias con posterioridad a la presentación de la

demanda, junto con los intereses moratorios causados por cada uno de los períodos adeudados, desde la fecha en que el empleador debió cumplir con su obligación de cotizar hasta la fecha de pago efectivo, liquidados de acuerdo con la tasa vigente para impuestos de renta y complementarios, de conformidad con los artículos 23 de la Ley 100 de 1993 y 28 del Decreto 692 de 1994, los intereses que se causen en virtud de la cesación del pago de las sumas que se generen con posterioridad a la presentación de la demanda, las costas y agencias en derecho.[1]

PROVIDENCIA APELADA

El Juzgado Veintidós (22) Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 5 de diciembre de 2023, libró mandamiento de pago por los siguientes conceptos[2]:

SEGUNDO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO solicitado por la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A**, contra **OSDOKSALUD SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD E.U**, por los siguientes valores y conceptos de pago de cotizaciones morosas:

a) La suma de **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS (8.448.529)**, por concepto de capital de aportes pensionales obligatorios.

b) La suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($36.179.200)**, por concepto de intereses de mora causados y no pagados hasta el 15 de octubre de 2021.

c) La suma de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($ 5.411.283**), por concepto de intereses de mora causados y no pagados desde el 16 de octubre del 2021 al 31 de octubre de 2023.

d) Por concepto de costas y agencias en derecho del presente proceso, los cuales se fijarán en su oportunidad procesal.

[1] Páginas 5 a 11 Archivo 01 Expediente Digital
[2] Archivo 10 del ED.

En igual sentido, el Juzgado de Conocimiento manifestó que, sobre el capital y los intereses que aún no se causan, no es procedente librar mandamiento de pago, por cuanto esta no es una obligación clara ni actualmente exigible, de acuerdo con lo establecido en el artículo 422 del C.G.P.

RECURSOS DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN

La parte **EJECUTANTE** formuló recurso de reposición y en subsidio apelación, argumentando que en el mandamiento de pago se debió integrar los intereses moratorios futuros, alegando que fueron solicitados en el escrito de demanda, desde el momento en que se hizo exigible en cada una de las obligaciones por las que se libra orden de pago, es decir, al momento en que se causó cada periodo y el empleador dejo de realizar el aporte al sistema general de seguridad social y hasta la fecha en que se haga efectivo el pago y **no** desde el momento en que se expide el título ejecutivo base de ejecución.

Mediante providencia del 7 de febrero de 2024, la Juez de instancia resolvió no reponer el Auto que libro mandamiento de pago, bajo el argumento que liquidó los intereses hasta la fecha en que se libró el mandamiento ejecutivo por valor de $5.411.283.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de los términos procesales previstos se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Cabe anotar que los alegatos de conclusión no constituyen una nueva oportunidad para complementar el recurso de apelación si este fue interpuesto en primera instancia.

Surtido el trámite que corresponde a esta instancia procede la Sala de Decisión a dictar la providencia que corresponde.

PROBLEMA JURÍDICO

Conforme al recurso interpuesto, el problema jurídico a resolver se centra en determinar si acertó la Juez de instancia en liquidar los intereses moratorios hasta la fecha en que se libró el mandamiento ejecutivo por valor de $5.411.283, o debe hacerlo como lo infiere la parte activa hasta la fecha en que se haga efectivo el pago.

CONSIDERACIONES

La Sala resolverá el recurso siguiendo los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPL**,** es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

Sea lo primero indicar que, en la solicitud de mandamiento de pago elevada por la parte ejecutante, rogó el pago de intereses moratorios desde la fecha en que el empleador debió cumplir con su obligación de cotizar hasta l**a fecha de pago efectivo,** correspondientes a las cotizaciones obligatorias en pensión.

En ese orden, la Juez primigenio libró mandamiento de pago por la suma de $8.448.529 por concepto de capital de aportes pensionales obligatorios, junto con el pago de intereses moratorios desde el 15 de octubre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2023. En su entender, solo es posible liquidar los intereses hasta la fecha que se libró mandamiento, pues la expresión *"hasta la cancelación de la deuda",* es incierta y por tanto no es una obligación clara ni exigible, de acuerdo con el art. 422 del C.G.P. Así lo manifestó la *A quo* al resolver el recurso de reposición, véase:

> Que, una vez revisado el expediente digital, se observa, que el Despacho no liquidó los intereses moratorios de los aportes adeudados desde el momento en que se expide el título ejecutivo, en los términos señalados por el apoderado en un recurso, contrario a ello, se evidencia que, se tuvo en cuenta los intereses moratorios liquidados por la ejecutante en el título ejecutivo (Pag. 10 del Doc. 01 de la carpeta 1 del Exp. digital), por valor de $36.179.200, además el Despacho liquidó los intereses hasta la fecha en que se libró el mandamiento ejecutivo por valor de $5.411.283.

> Ahora bien, el Despacho manifestó en el Auto recurrido que, sobre el capital **y los intereses** que aún no se causan, no era procedente librar mandamiento de pago, por cuanto esta no es una obligación clara ni actualmente exigible, de acuerdo con lo establecido en el Art. 422 del C.G.P, afirmación que el Juzgado considera que es ajustada a derecho, por lo que **no se repondrá** la decisión tomada en el Auto del día 05 de diciembre de 2023.

Por tanto, procede la Sala a resolver el punto de debate relativo a la fecha en que se deben liquidar los intereses legales que fueron ordenados a través del mandamiento ejecutivo en cuestión. Así, téngase en cuenta, que el artículo 1617 del Código Civil, señala que:

> "*Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes*
> *:*
> *1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos.*
>
> *El interés legal se fija en seis por ciento anual.*
>
> *2a.) El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del retardo.*
>
> *3a.) Los intereses atrasados no producen interés.*
>
> *4a.) La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas." (Subrayas fuera de texto original).*

Así mismo, dicho estatuto dispone en su artículo 2511, que: **"*Los intereses correrán hasta la extinción de la deuda****, y se cubrirán con la preferencia que corresponda a sus respectivos capitales*".

Por su parte, el artículo 431 del C.G.P., dispone que**:** "*Si la obligación versa sobre una cantidad líquida de dinero, se ordenará su pago en el término de cinco (5) días,* ***con los intereses desde que se hicieron exigibles hasta la cancelación de la deuda****. Cuando se trate de obligaciones pactadas en moneda extranjera, cuyo pago deba realizarse en moneda legal colombiana a la tasa vigente al momento del pago, el juez dictará el mandamiento ejecutivo en la divisa acordada*." (Subraya la Sala).

Al respecto, la H. Corte Constitucional en la sentencia C-604 de 2012, manifestó lo siguiente:

> *"Los intereses moratorios son aquellos que se pagan para el resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida. La mora genera que se hagan correr en contra del deudor los daños y perjuicios llamados moratorios que representan el perjuicio causado al acreedor por el retraso en la ejecución de la obligación.".*

Por su parte, en la sentencia con Rad. 16476 del 21 de noviembre de 2001 de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, se señaló: *"(…) de acuerdo a lo dispuesto por el art. 1617 del C.C., el interés legal cubre la indemnización de perjuicios por la mora cuando estos no han sido pactados (…) (…) De tal manera que la disposición transcrita consagra un régimen resarcitorio específico que gobierna las*

consecuencias del incumplimiento de obligaciones pecuniarias civiles de estirpe contractual, consistentes en el pago de sumas de dinero determinadas, conforme al cual acreditado en juicio el retardo del deudor, que proceden ipso jure, a menos que las partes hayan estipulado un interés superior, como mínimo, a título indemnizatorio de los referidos intereses moratorios, avaluado".

En esos términos, al tenor de las normas y la jurisprudencia en cita, los intereses corren por el simple retardo en el cumplimiento de la obligación de pago de sumas liquidas de dinero, como lo es en este caso, pues de acuerdo al artículo 1617 del Código Civil, al no existir convenio entre las partes sobre la tasa de intereses aplicable, esta corresponde al 6 % anual, **ya que ese es el interés legal que resarce el perjuicio por el retardo en el pago de la obligación**.

En el presente asunto, como se anotó, se equivocó la Juez de instancia a librar mandamiento de pago por los intereses moratorios desde el 15 de octubre de 2021 hasta la fecha en que libró mandamiento ejecutivo, toda vez, que desconoce los preceptos legales que regula la materia, en especial lo mandado por el artículo 431 del CGP en aplicación analógica del artículo 145 del CPT y SS, que refiere que si la obligación versa sobre una cantidad liquida de dinero, se ordenará su pago con los intereses hasta la fecha en que se pague la deuda. De ahí que, los intereses moratorios se deben pagar desde que se hicieron exigibles **hasta la cancelación de la deuda,** y no hasta la fecha en que se libró el mandamiento de pago.

En consecuencia, se revocará el ordinal "C" del numeral segundo del Auto de fecha del 5 de diciembre de 2023, para en su lugar, ordenar a la *A quo* que libre mandamiento de pago por los intereses legales generados sobre las *"cotizaciones pensiónales obligatorias dejadas de pagar por la parte demandada en su calidad de empleador por los periodos de 200211 hasta 201608",* **hasta la fecha en que se cancele la deuda.**

Sin Costas en esta instancia por haber prosperado parcialmente el recurso de apelación.

Por lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

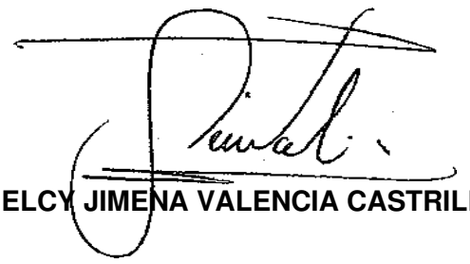
RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el **LITERAL c)** del **NUMERAL SEGUNDO** del Auto del 5 de diciembre de 2023, proferido por el Juzgado Veintidós (22) Laboral del Circuito de Bogotá, para en su lugar **ORDENAR** a la *A quo* que proceda a librar mandamiento de pago por los intereses legales generados sobre el capital de aportes pensionales obligatorios **hasta la fecha que se cancele la deuda.**

SEGUNDO: Sin **COSTAS** por no aparecer causadas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

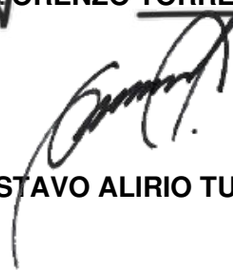
Los Magistrados,



ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN



LORENZO TORRES RUSSY



GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA, D.C.

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:	**GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA**
Clase de Proceso	Ordinario – Apelación Auto
Radicación No.	11001310502820210059601
Demandante:	**RAMIRO JOSÉ MORALES SANCHEZ.**
Demandado:	**ATENCOM S.A.S. E INDEGA S.A.**

Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Sería del caso adentrarse en el estudio de los argumentos del recurso de apelación elevado por la apoderada de ATENCOM S.A.S., frente al auto que emitió el 28 de febrero del 2024 el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, sino fuera porque la Sala advierte que no se reúnen los requisitos fácticos y jurídicos para activar la segunda instancia, pues el auto objeto de impugnación no se encuentra enlistado en el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., ni en el artículo 161 C.G.P.

En efecto, el juez de primera instancia, mediante el mencionado auto negó la suspensión del proceso; decisión que fue recurrida por la apoderada de ATENCOM S.A.S., quien interpuso los recursos de reposición y de apelación, el primero fue resuelto por el *a quo* y no repuso su decisión por lo que concedió el segundo. No obstante, conforme lo dispuesto en el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., no se observa que el auto que niega la suspensión de un proceso sea susceptible de recurso de apelación.

Al punto, la norma en comento señala lo siguiente:

> **“ARTICULO 65. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION.** <Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:
> 1. El que rechace la demanda o su reforma y el que las dé por no contestada.
> 2. El que rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros.
> 3. El que decida sobre excepciones previas.
> 4. El que niegue el decreto o la práctica de una prueba.
> 5. El que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida.

6. El que decida sobre nulidades procesales.
7. El que decida sobre medidas cautelares.
8. El que decida sobre el mandamiento de pago.
9. El que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo.
10. El que resuelva sobre la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo.
11. El que resuelva la objeción a la liquidación de las costas respecto de las agencias en derecho.
12. Los demás que señale la ley."

Por otra parte, y en virtud de dispuesto en el numeral 12° del artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., la Sala acudió a los artículos 161 a163 del C.G.P., sin embargo, dichas normas tampoco contienen que el auto en estudio sea objeto de impugnación. Los aludidos artículos establecen:

"ART. 161 – SUSPENSIÓN DEL PROCESO. El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso en los siguientes casos:

1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención. El proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso declarativo iniciado antes o después de aquel, que verse sobre la validez o la autenticidad del título ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como excepción.

2. Cuando las partes la pidan de común acuerdo, por tiempo determinado. La presentación verbal o escrita de la solicitud suspende inmediatamente el proceso, salvo que las partes hayan convenido otra cosa.

PARÁGRAFO. Si la suspensión recae solamente sobre uno de los procesos acumulados, aquel será excluido de la acumulación para continuar el trámite de los demás.

También se suspenderá el trámite principal del proceso en los demás casos previstos en este código o en disposiciones especiales, sin necesidad de decreto del juez."

"**ARTÍCULO 162. DECRETO DE LA SUSPENSIÓN Y SUS EFECTOS.** Corresponderá al juez que conoce del proceso resolver sobre la procedencia de la suspensión.

La suspensión a que se refiere el numeral 1 del artículo precedente solo se decretará mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o de única instancia.

La suspensión del proceso producirá los mismos efectos de la interrupción a partir de la ejecutoria del auto que la decrete.

> El curso de los incidentes no se afectará si la suspensión recae únicamente sobre el trámite principal".
>
> "**ARTÍCULO 163. REANUDACIÓN DEL PROCESO.** La suspensión del proceso por prejudicialidad durará hasta que el juez decrete su reanudación, para lo cual deberá presentarse copia de la providencia ejecutoriada que puso fin al proceso que le dio origen; con todo, si dicha prueba no se aduce dentro de dos (2) años siguientes a la fecha en que empezó la suspensión, el juez de oficio o a petición de parte, decretará la reanudación del proceso, por auto que se notificará por aviso.
>
> Vencido el término de la suspensión solicitada por las partes se reanudará de oficio el proceso. También se reanudará cuando las partes de común acuerdo lo soliciten.
>
> La suspensión del proceso ejecutivo por secuestro del ejecutado operará por el tiempo en que permanezca secuestrado más un periodo adicional igual a este. En todo caso la suspensión no podrá extenderse más allá del término de un (1) año contado a partir de la fecha en que el ejecutado recuperé su libertad".

Teniendo en cuenta las normas citadas, la Sala concluye que el recurso impetrado por la parte demandada ATENCOM S.A.S contra el auto que NIEGA LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO no se encuentra enlistado en el artículo 65 del C.P.T y de la S.S ni en el artículo 161 y ss del C.G.P, como un asunto o decisión susceptible de apelación.

Así las cosas, se impone **DECLARAR INADMISIBLE** el recurso de apelación interpuesto contra el auto referido.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C., SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE

PRIMERO. - DECLARAR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de ATENCOM S.A.S contra el auto del 28 de febrero de 2024, dictado por la Juez Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, por no ser susceptible del recurso de apelación.

SEGUNDO. - En firme la presente providencia, remítase de forma inmediata y perentoria el expediente al Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Los Magistrados,

GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

LORENZO TORRES RUSSY

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado Ponente

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR **OLGA CONSTANZA GONZALEZ CHAVARRO** CONTRA **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A. Y ADMINSITRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.**

RADICADO: 11001 3105 012 2016 00624 02

Bogotá D. C., Veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

PROVIDENCIA

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, procede a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte actora contra la providencia emitida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 5 de agosto de 2022, en donde se

impartió aprobación a la liquidación de costas por valor de $1.562.484

El recurso de apelación tiene por objeto la modificación en la liquidación de costas en tanto considera que la misma no se efectuó conforme a los criterios del Acuerdo PSA 16554 de agosto de 2016.

I. ANTECEDENTES

Para lo que interesa al recurso de apelación, en síntesis, debe indicarse que la parte actora promovió proceso ordinario laboral en contra de Protección S.A. y Colpensiones, a efectos de obtener la ineficacia del traslado efectuado con Protección S.A. al RAIS.

Tramitado el proceso, se advierte que en sentencia expedida el 11 de abril de 2018, se resolvió lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR la ineficacia por inexistencia de la relación jurídica de afiliación y/o cotización de la demandante **OLGA CONSTANZA GONZÁLEZ CHAVARRO** al régimen de ahorro individual con solidaridad, celebrada en su momento con la **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS ING hoy PROTECIÓN S.A.** según formulario de afiliación calendado 15 de septiembre de 2011, así como también la ineficacia por inexistencia de actos posteriores a dicha afiliación.

SEGUNDO: CONDENAR a **PROTECCIÓN S.A.** a realizar el traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima media con prestación definida, tanto de la relación jurídica de afiliación, como del valor de saldos, aportes y rendimientos, que se hayan consignado en la cuenta de ahorro individual de la demandante.

TERCERO: CONDENAR a **COLPENSIONES** a aceptar el traslado de la señora **OLGA CONSTANZA GONZÁLEZ CHAVARRO,** y a recibir el monto de aportes, saldos pensionales y rendimientos, sin que ello implique reconocimiento o beneficio del régimen de transición al no tener derecho alguno sobre el particular.

CUARTO: DECLARAR no probadas las excepciones formuladas por **PROTECCIÓN S.A.** y **COLPENSIONES,** de acuerdo la parte motiva de la presente decisión.

QUINTO: SIN COSTAS, en la instancia.

SEXTO: En caso de no ser apelado el presente fallo, súrtase el grado jurisdiccional de **CONSULTA** para que sea resuelto por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C..

No obstante, el Tribunal Superior de Bogotá en sala de decisión laboral, en providencia expedida el 28 de agosto de 2018, al analizar la decisión de primera instancia en grado jurisdiccional de consulta revoco la misma y declaró probada la excepción de prescripción respecto de la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional con la absolución de las demandadas y no generó condena en costas.

Posteriormente, ante el recurso de casación presentado por la parte actora, la Corte Suprema de Justicia en sentencia expedida el 2 de junio de 2021, casó la sentencia expedida por el Tribunal y resolvió adicionar el numeral segundo de la sentencia proferida el 11 de abril de 2018 por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, en cuanto a que PROTECCIÓN S.A. deberá trasladar a COLPENSIONES, además de lo consignado en la cuenta de ahorro individual y los rendimientos, los bonos pensionales, las comisiones, los aportes al fondo de garantía de pensión mínima, y lo recaudado por cuotas de administración durante todo el tiempo que OLGA CONSTANZA GONZÁLEZ CHAVARRO permaneció en el RAIS, asimismo, puntualizó que las costas de la primera instancia serían a cargo de ambas demandadas, sin lugar a ellas en el grado jurisdiccional de consulta.

Mediante auto del 5 de agosto de 2022, notificado por estado el día 8 del mismo mes y año, se le impartió aprobación a la siguiente liquidación de costas:

"(…)

De otro lado, la Corte Suprema de Justicia CASO la sentencia del Tribunal, dejando incólume la proferida en esta instancia.

Así mismo, con fundamento en los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, pongo a consideración del Despacho la liquidación de costas y agencias en derecho las cuales se encuentran a cargo de las entidades demandadas de la siguiente manera:

COSTAS A CARGO DE PROTECCIÓN S.A.

CONCEPTO	VALOR
Agencias en derecho en primera instancia	$ 781.242
Agencias en derecho en segunda instancia	$0
Agencias en derecho en casación	$0
Otros gastos	$0
TOTAL	$781.242

COSTAS A CARGO DE COLPENSIONES

CONCEPTO	VALOR
Agencias en derecho en primera instancia	$781.242
Agencias en derecho en segunda instancia	$0
Agencias en derecho en casación	$0
Otros gastos	$0
TOTAL	$781.242

(…)”

Ante la anterior decisión, el apoderado de la parte actora presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación por cuanto no se tuvieron en cuenta las reglas del estatuto procesal y las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo No. PSAA16-10554 sin que se efectuara un análisis conforme a la naturaleza del proceso, duración, cuantía y otras circunstancias especiales del proceso, siendo que el valor aprobado no se encuentra en SMMLV conforme a la tasación prevista para los procesos de primera y segunda instancias conforme al art. 5 de los procesos declarativos en general, destacando que el juez erró aprobar una liquidación de agencias en derecho inferior a los 5 SMMLV.

El juzgado de conocimiento señaló que no accedería a reponer la decisión ya que las pretensiones formuladas carecen de cuantía, dado que no se tiene certeza de los valores que deberá trasladar Protección a Colpensiones, por la declaratoria de ineficacia del traslado, razones por las que las tarifas fijadas por el despacho se hicieron conforme al SMMLV para el año en que se profirió la sentencia, ajustándose así al rango establecido en el acuerdo referenciado, acto seguido, concedió el recurso de apelación.

II. CONSIDERACIONES

En primer lugar, debe precisarse que el auto que decida sobre la objeción a la liquidación de las costas en tratándose de las agencias en derecho, es recurrible, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 11° del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Para resolver, conviene recordar que el artículo 10 del C.G.P. aplicable por remisión analógica del artículo 145 del C.P.T. Y S.S, establece lo siguiente:

> *"**ARTÍCULO 10. GRATUIDAD.** El servicio de justicia que presta el Estado será gratuito, **sin perjuicio del arancel judicial y de las costas procesales**." Subrayas y negrita fuera de texto.*

A su turno, el artículo 365 del CGP, contempla que en la condena en costas en procesos y actuaciones en los que haya controversia, se seguirá la siguiente regla *"1**. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación**,*

casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código."

Finalmente, el artículo 366 ibídem, regula lo relacionado con la liquidación de costas en los siguientes términos:

> *"**ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN**. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:*
>
> *1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.*
>
> *(…)*
>
> *4. **Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.** Subrayas y negrita fuera de texto.*
>
> *5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo.*
>
> *(…)".*

En ese orden de ideas y de conformidad con la normatividad antes citada, se tiene que la fijación de costas incluidas las agencias en derecho obedecen a aspectos objetivos y atienden a lineamientos legales, así pues, se tiene que el acuerdo No PSAA16-10554 de 2016, contempla las tarifas de agencias en derecho vigentes, estableciendo en el numeral 1° del artículo 5, los porcentajes y/o salario base para los *procesos declarativos en general,* así:

1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.

En única instancia.	a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V.
En primera instancia.	a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.
En segunda instancia.	Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.

Como se observa, se tiene que la tasación realizada por el juzgado se enmarca dentro de los rangos establecidos en el acuerdo vigente y aplicable al asunto *-PSAA16-10554 de 2016-* y teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y la duración de la gestión realizada, debiéndose en este punto destacar que el asunto aquí tramitado obedeció a una solicitud de ineficacia o nulidad de traslado del régimen pensional, pretensión que por su naturaleza no es susceptible de fijación de cuantía y por tanto le era aplicable el literal b de los rangos establecidos para la primera instancia.

Bajo las anteriores consideraciones, se procederá a confirmar la decisión del a quo.

Sin costas en esta instancia

DECISIÓN:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá D.C., de fecha 5 de agosto de 2022, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

LORENZO TORRES RUSSY

GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado Ponente

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR **MARIA ESPERANZA AYALA MENDEZ** CONTRA **AGUAS DE BOGOTA SA ESP** Y **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP.**

RADICADO: 11001 3105 027 2021 00033 01

Bogotá D. C., Veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

PROVIDENCIA

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, procede a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte actora contra la providencia proferida por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 2 de febrero de 2023, en donde se declaró probada la excepción previa de falta de competencia por no agotamiento de la reclamación

administrativa presentada por Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., se rechazó la demanda y se dispuso el archivo de las diligencias.

El recurso de apelación tiene por objeto que se revoque tal decisión y en su lugar se continúe con el trámite del proceso.

I. ANTECEDENTES

Para lo que interesa al recurso de apelación, en síntesis, debe indicarse que la parte actora promovió proceso ordinario laboral en contra de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. y solidariamente respecto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P., a efectos que se declare la existencia de un contrato de trabajo por duración de la obra o por la naturaleza de la labor determinada entre la demandante y la primera empresa aludida, el cual finalizó de manera unilateral por el empleador a pesar de la estabilidad laboral reforzada que presentaba la demandante y se determinara la solidaridad de la empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P., en consecuencia se condenara a ambas demandadas al pago de la indemnización que contempla el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, al reintegro de la actora y demás pretensiones reclamadas derivadas de ello.

En el escrito de contestación de demanda allegado por Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., tal demandada propuso la excepción previa de falta de competencia por falta de reclamación administrativa, señalando que en este asunto debía tenerse en cuenta que su representada era una empresa

de servicios públicos de capital mixto y naturaleza especial, constituida como sociedad comercial por acciones, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal que ejercía sus actividades dentro del marco de la ley 142 de 1994; donde su composición accionaria, conforme a los estatutos de esta indicaban que su capital público era superior al 95%, por cuanto el accionista con esta cantidad porcentual de acciones era la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (empresa industrial y comercial del distrito capital), en esa medida dada la naturaleza jurídica de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. como entidad pública resultaba necesario agotar el requisito contemplado en el artículo 6 del C.P.T. y S.S., lo cual en este caso no se había efectuado.

En audiencia adelantada el 2 de febrero de 2023, se resolvió la excepción previa propuesta, indicándose que atendiendo lo señalando en el artículo 6 del CPT y S.S. y atendiendo la naturaleza jurídica de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., conforme lo expuesto en la escritura pública de su creación y posterior modificación de su razón social siéndole aplicables las disposiciones contenidas en el Numeral 14.6 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, se trataba de una empresa de servicios públicos domiciliarios cuyos aportes eran público privados, en consecuencia, se trataba de una empresa de servicios públicos mixta que pertenecía a la rama ejecutiva del poder público descentralizado por servicios del nivel distrital, especialmente cuando su porcentaje de participación de capital público era del 92.2%, luego entonces al hacer parte de la administración pública por estar constituida como una empresa prestadora de servicios públicos cuyo régimen

jurídico se establecía en el numeral sexto del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, estaba obligada a agotar la reclamación administrativa de que trata el aludido Canal Sexto del Código procesal del trabajo y de la Seguridad Social, sin que ello se hubiere efectuado.

Así concluyó que al ser aguas de Bogotá SA ESP, la demandada principal respecto de quien se solicitaba que se declarara la existencia de la relación laboral que sustentaba la totalidad de las pretensiones de la demanda y con quien no se llevó a cabo el trámite de la reclamación administrativa, se declararía probada la excepción de falta de competencia por falta de agotamiento de la reclamación administrativa ya el juzgado no tenía competencia para analizar ninguna de las pretensiones incoadas contra ninguna de las demandadas, pues la responsabilidad solidaria de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP, dependía de la declaratoria de la existencia del vínculo laboral con aguas de Bogotá SA E.S.P., igualmente, dispuso el rechazo de la demanda y ordenó el archivo de las diligencias.

Ante la anterior decisión la apoderada del parte actora presentó recurso de apelación en los siguientes términos *"(…) interpongo el recurso de apelación, en el sentido de que si bien la señora María esperanza directamente no se dirigió a empresa Aguas de Bogotá, sí lo hizo con referencia a la empresa de acueducto; en cuanto a la empresa Aguas de Bogotá, no lo hizo directamente pero sí hubo un trámite administrativo del Ministerio de trabajo oportuno en el cual se le reconocieron los derechos a ella como empleada aforada por*

salud, entonces si bien ella no lo hizo directamente, sí el Ministerio de Trabajo por queja de todos los trabajadores que se sintieron afectados recurrieron y por ese motivo se hizo el trámite, se hizo la investigación y ahí está la Resolución 4605 de 2019, que da cuenta de lo que le estoy mencionando, entonces en este orden de ideas, habiendo intervenido el Ministerio, la empresa tenía conocimiento de la reclamación y de mirar de qué manera se realizaba la parte del despido de estos trabajadores, especialmente en mi caso, representando a doña María esperanza, el Ministerio hizo la debida reclamación y efectivamente fue condenada a la empresa por este motivo, entonces yo pido que en ese término se tenga en cuenta este trámite administrativo donde se establecían los derechos vulnerados de los trabajadores y que tenía un este fuero de salud su señoría en esos términos el recurso (…)".

Acto seguido, se concedió el recurso de apelación.

II. CONSIDERACIONES

En primer lugar, es preciso señalar que el auto que rechace la demanda o su reforma es recurrible, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y en consecuencia se procede a su estudio.

Se tiene entonces, que el artículo 6º del C. P.T y S.S. modificado por la Ley 712 de 2001 artículo 4, establece: "*Las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades*

territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta".

De otra parte, el artículo 26 del Código Procesal del Trabajo, en su numeral 5°, establece como anexo de la demanda prueba del agotamiento de la reclamación administrativa si fuere el caso.

Las normas que regulan la reclamación administrativa permiten concluir, no solo que es una exigencia previa a la interposición de la demanda laboral, sino que debe acreditarse con ésta, ya que constituye un presupuesto procesal para el ejercicio de la acción y factor de competencia para que el juez que la conoce pueda adelantar su trámite; de ahí que estando facultado para verificar los presupuestos procesales de la demanda en forma, pueda admitirla o rechazarla de acreditarse o no ese presupuesto; ya que lo que con ella se busca es que la entidad administrativa revise sus propias decisiones, y tiene por objeto que una vez efectuado el estudio fáctico que sustenta la reclamación, reconozca o no el derecho sin necesidad de acudir a la intervención del juez laboral.

En este caso conforme al argumento expuesto por la recurrente se pretende que se tenga en cuenta como reclamación administrativa el trámite de un proceso

administrativo sancionatorio iniciado por el Ministerio de Trabajo a la Empresa Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., el cual fue iniciado de oficio por la aludida autoridad conforme se extracta de la Resolución No. 4605 de 2019, que en primer lugar obedece a un trámite completamente diferente al que aquí se adelanta y que en todo caso no se enmarca dentro de los presupuestos que exige el artículo 6 del CPT y S.A., pues se requiere reclamó escrito del trabajador sobre el derecho que se pretende.

En vista de lo anterior desde luego, no desconoce la Sala que las normas adjetivas laborales frente a este aspecto de la reclamación administrativa no exigen ritualidades especiales, pero esto no es óbice para que, en una aplicación lógica y coherente de las mismas, se pueda variar su contenido, para no exigir ese requisito, como lo establece la ley procesal

Es evidente que el referido trámite de procedibilidad no se surtió respecto de lo pretendido en la demanda que ha dado lugar a este proceso, luego el documento referido por la apoderada de la demandante no tiene la virtualidad de corresponder a una reclamación administrativa, conforme lo considerado por la *a quo*, y aunque se reprocha que no se allegó reclamación frente a las pretensiones del presente asunto, lo cierto es, que, para poder llegar a validar su sustento se necesitaría pronunciamiento previo frente a las situaciones fácticas de la actora y dado que la existencia de la relación laboral, se predica respecto de quien no se agotó la reclamación administrativa no sería factible continuar el tramite respecto de la demandad Empresa de Acueducto y

Alcantarillado de Bogotá E.S.P. ya que su responsabilidad solidaria depende del vínculo con la empresa Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Por las razones anteriores, se procederá a confirmar la decisión de primera instancia.

Sin costas en esta instancia.

DECISIÓN:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia proferida por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá D.C., de fecha 2 de febrero de 2023, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



LORENZO TORRES RUSSY

GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado Ponente

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR **SALATIEL RUBIANO PEDRAZA** CONTRA **INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y DE GAS INOCENCIO LÓPEZ.**

RADICADO: 11001 3105 038 2022 00224 01

Bogotá D. C., Veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

PROVIDENCIA

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, procede a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte actora contra el auto proferido por el Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 31 de enero de 2023, en el que se rechazó la demanda por cuanto no se subsanó la acreditación del cumplimiento de lo previsto en el Inciso 5 del

Artículo 6 de la Ley 2213 de 2022. El recurso de apelación tiene por objeto se revoque la decisión y se admita la demanda.

I. ANTECEDENTES

El demandante presentó demanda ordinaria laboral a efectos que se declarara la existencia de un contrato de trabajo con la empresa Instalaciones Hidráulicas entre el 9 de febrero de 2009 y el 9 de abril de 2018, el cual finalizó por decisión del empleador, en consecuencia, se condenara a la demandada al pago de las acreencias e indemnizaciones reclamadas.

Mediante auto del 2 de diciembre de 2022, notificado por estado del 5 del mismo mes y año, el juzgado inadmitió la demanda y concedió el terminó de 5 días hábiles para que se subsanaran las deficiencias que continuación se exponen, so pena de rechazo:

> Atendiendo el informe secretarial que antecede y revisada la demanda, encuentra el Despacho que la misma no puede ser admitida, por cuanto presenta los siguientes defectos:
>
> - ✓ En el acápite de "fácticos", los numerales 1 y 4 contienen más de una situación fáctica, debiendo relacionarse los hechos debidamente numerados e individualizados, en los términos del Numeral 7, Artículo 25 del C.P.T y la S.S
> - ✓ No se acreditó el envío por medio electrónico a la parte demandada del escrito de demanda, en los términos del inciso 5 del Artículo 6 de la Ley 2213 de 2022

Posteriormente y si bien se allegó escrito contentivo de la subsanación por el apoderado no se acreditó el cumplimiento de la remisión del correo electrónico a la parte demandada conforme a lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 6 de la Ley

2213 de 2022, razones por las cuales, mediante proveído del 31 de enero de 2023, se dispuso el rechazo de la demanda y se ordenó el archivo de las diligencias.

Ante la anterior decisión, el apoderado de la parte actora mediante correo electrónico remitido el 6 de febrero de 2023, presentó recurso de apelación fundamentado en lo siguiente:

"(…)

Constituyen argumentos que sustentan el recurso de apelación, los siguientes

Primero: La dimensión negativa se configura, cuando el señor juez, niega la prueba de manera arbitraria y caprichosa en razón valedera en dar por no probado el escrito del encabezamiento de la Subsanación con fecha 7 de Diciembre de 2022, envida a su despacho el día nueve (9) de Diciembre de la misma anualidad.

Segundo: Defecto Fáctico, el juez carece del apoyo probatorio al dar aplicación al supuesto legal en el que se sustenta la (Decisión) al desconocer la prueba del (escrito del encabezamiento) de la subsanación donde el demandante hace conocer a su despacho el cumplimiento de la notificación de la subsanación a la demandada tal como el despacho lo ordenó.

Tercero: Los argumentos probatorios y jurídicos que dejo expuestos ameritan suficiencia para proceder de conformidad con lo requerido, artículo 65 C.P.L

Cuarto: **Anexo**, como prueba del lleno del requisito exigido por su despacho y que dio lugar a la decisión contraria en el auto impugnado. (escrito de encabezamiento de la subsanación) de fecha 7 de Diciembre, enviada a su despacho el dia 9 de Diciembre de 2022).

(…)"

En providencia del 9 de febrero de 2023, el juzgado de conocimiento concedió el recurso de apelación.

II. CONSIDERACIONES

En primer lugar, se tiene que el auto que rechace la demanda, es recurrible de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

En cuanto al punto de discusión, conviene recordar que en forma previa a la situación de emergencia generada por el Covid-19, la práctica de la notificación personal se llevaba a cabo conforme a las reglas establecidas en el artículo 291 (notificación personal) y 292 (notificación por aviso) del CGP, sin embargo, debe precisarse que aunque ya se contemplaba el uso de las tecnologías de la información en las actuaciones judiciales conforme se colige de lo dispuesto en el artículo 103 del CGP, se tiene que ello se vio potenciado con la coyuntura generada con el Covid-19, lo que propició la expedición del Decreto 806 del 4 de junio de 2020 hoy convertido en legislación permanente mediante la Ley 2213 de 2022.

Igualmente, debe resaltarse que la Ley 2213 de 2022, contempló que cuando se usaran las tecnologías de la información y comunicaciones para el trámite de las actuaciones judiciales las partes debían cumplir con unas nuevas cargas, entre estas, se encontraba que al presentarse la demanda, la parte actora debía enviar simultáneamente por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados so pena de inadmisión, conforme se extracta de lo señalado en el artículo 6 de la mencionada Ley[1], de manera

[1] *"**ARTÍCULO 6o. DEMANDA.** La demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. No obstante, en caso que el demandante desconozca el canal digital donde deben ser notificados los peritos, testigos o cualquier tercero que deba ser citado al proceso, podrá indicarlo así en la demanda sin que ello implique su inadmisión.*

Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda.

Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos, a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto, cuando haya lugar a este.

De las demandas y sus anexos no será necesario acompañar copias físicas, ni electrónicas para el archivo del juzgado, ni para el traslado.

***En cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales,** salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deberá*

que tal exigencia se encuentra ajustada a la previsiones legales.

Ahora bien, se alude por el recurrente que con el escrito de subsanación allegado, se puso en conocimiento del juzgado el cumplimiento de la notificación como se ordenó, no obstante, verificada la subsanación y el recurso de apelación formulado, no se observa que dentro de los documentos allegados se hubiese aportado el soporte del correo electrónico o mensaje de datos enviado a la demandada informando sobre la demanda presentada y contentivo del libelo de demanda y sus anexos, conforme a las exigencias contempladas en el artículo 6 de la Ley 2213 de 2022.

En esa medida y como en este caso no se allegó ningún elemento probatorio que permitiera acreditar el envío de la copia de la demanda y de sus anexos a la demandada, tales razones resultan suficientes a juicio de esta sala para confirmar la decisión de primera instancia.

Sin costas en esta instancia.

DECISIÓN:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia proferida por el Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá D.C.,

---

proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.

En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado."

de fecha 18 de marzo de 2022, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

LORENZO TORRES RUSSY

GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado Ponente

CONFLICTO DE COMPETENCIA NEGATIVO SUSCITADO ENTRE EL **JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.** Y EL **JUZGADO CUARENTA Y CINCO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.** DENTRO DEL **PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO** POR **SALUD TOTAL EPS** CONTRA **LA NACIÓN - MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y OTROS.**

RADICADO: 11001 2205 000 2024 00247 01

Bogotá D. C., Veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

PROVIDENCIA

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, procede a resolver el conflicto negativo de competencia propuesto por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá D.C. frente al Juzgado

Cuarenta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mediante auto del 30 de enero de 2024.

I. ANTECEDENTES

Por reparto el proceso correspondió al Juzgado Sexto Laboral del Circuito, quien mediante providencia del 25 de abril de 2023, dispuso la remisión del proceso al Juzgado Cuarenta y Cinco Laboral del Circuito, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo 1 del Acuerdo No. CSJBTA23-15 del 22 de marzo de 2023, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

Realizada la remisión del expediente al Juzgado Cuarenta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el mencionado despacho mediante auto del 5 de diciembre de 2023, dispuso no admitir el conocimiento del proceso por cuanto el mismo no cumplía con los criterios establecidos en el acuerdo citado, dado que el 9 de febrero de 2022, se había adelantado la audiencia de que trata el artículo 77 del CPT y S.S. y el archivo “01ExpedienteDigitalizado” no cumplía con el protocolo PCSJA20-11567, aspecto que fue informado al Juzgado de origen mediante oficio N° 640 del 14 de septiembre de 2023, no obstante, aduce que el referido juzgado solicitó la emisión del auto correspondiente con el fin de continuar el trámite procesal, razones por las cuales se dispuso no asumir el conocimiento del proceso ya que no se cumplía con lo dispuesto en el acuerdo PCSJA22-122028 del 19 de diciembre de 2022.

Por su parte, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá D.C., en providencia del 24 de enero de 2024, señaló que el Acuerdo CSJBTA23-15 del 22 de marzo de 2023, reguló la implementación del acuerdo PCSJA22-122028 del 19 de diciembre de 2022, mediante el cual se crearon cargos permanentes en la jurisdicción ordinaria en el territorio nacional para el mejoramiento de la prestación del servicio de justicia de la rama judicial, puntualizando que en el Acuerdo CSJBTA23-15 del 22 de marzo de 2023, dispuso en su parte considerativa que los juzgados 42, 43, 44, 45, 46 y 47 debían recibir 589 procesos que tuvieran contestación de la demanda incluida la calificación conforme al artículo 31 del CPT y S.S., y estén para la celebración de la primera audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio de que trata el artículo 77 del CPT sin limitar o establecer exegéticamente que la realización de alguna de tales etapas limitaría o impediría la remisión del proceso, por lo que el hecho de que en el proceso se hubiere surtido la etapa de conciliación y excepciones previas no permitía entender que el proceso quedó excluido, razones por las cuales propuso conflicto negativo de competencia.

Por las razones anteriores concluyó, que el competente era el juez remitente y suscitó la colisión de competencia negativa, ordenando enviar la actuación a esta Corporación para que se resolviera el conflicto.

II. CONSIDERACIONES

De conformidad con lo previsto en el numeral 5º del literal b) del artículo 15 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 10 de la Ley 712 de 2001, corresponde a las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, dirimir el conflicto de competencia que se presente entre dos juzgados del mismo distrito judicial.

Para resolver, debe tenerse en cuenta que mediante Acuerdo No. CSJBTA23-15 del 22 de marzo de 2023, se ordenó la redistribución de procesos a los 6 Juzgados Laborales de Bogotá, creados por el literal e del artículo 24 del Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022.

En los artículos 64 y 65 del Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022, se puntualizó que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, efectuaría la redistribución de procesos de modo tal que se garantice el equilibrio de las cargas laborales entre los despachos judiciales existentes y los creados Juzgados.

Asimismo, se tiene que analizado el contenido del Acuerdo No. CSJBTA23-15 del 22 de marzo de 2023, se observa que en sus artículos 1 y 2, se estipuló lo siguiente:

> *"**ARTÍCULO 1º**.- Cada uno de los Juzgados 042, 043, 044, 045, 046 y 047 Laborales del Circuito, recibirán de los Juzgados existentes, 589 procesos que tengan contestación de la demanda (incluida su calificación conforme al artículo 31 del CPL y SS) y estén para la celebración de la primera audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; conforme a la siguiente distribución:*
>
> *(…)*

1.4 El Juzgado 45 Laboral del Circuito de Bogotá, recibirá 589 procesos, que deberán ser entregados por los siguientes juzgados Laborales, así:

Juzgado de Origen	Procesos a Entregar
Juzgado 008 Laboral de Bogotá	15
Juzgado 035 Laboral de Bogotá	97
Juzgado 025 Laboral de Bogotá	97
Juzgado 006 Laboral de Bogotá	97
Juzgado 017 Laboral de Bogotá	82
Juzgado 024 Laboral de Bogotá	82
Juzgado 030 Laboral de Bogotá	82
Juzgado 026 Laboral de Bogotá	37

(…)"

***ARTICULO 2°**. Adicionalmente, cada uno de los Juzgados 042, 043, 044, 045, 046 y 047 Laborales del Circuito, recibirán, a partir de la posesión de los funcionarios judiciales (previa certificación de disponibilidad de infraestructura física y tecnológica expedida por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá), reparto de 589 nuevos procesos de la especialidad laboral. Una vez los despachos 042, 043, 044, 045, 046 y 047, cuenten en su inventario con 589 procesos, se reanudará el reparto para todos los Juzgados Laborales del Circuito.*

(…)".

De conformidad con las normas citadas, la redistribución de los procesos se planteó de forma tal que los nuevos juzgados recibirían procesos de los juzgados existentes que tuviesen contestación de la demanda y se hubiere hecho la calificación conforme al artículo 31 del C.P.T y S.S., es decir, que estuvieran listos para la realización de la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y S.S., de suerte que una vez se contara en el inventario con 589 procesos por cada uno de los nuevos juzgados se reanudaría el reparto para todos los Juzgados Laborales del Circuito.

En consecuencia, se observa que, si se determinó por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá D.C., un parámetro restrictivo para que los juzgados laborales existentes remitieran los procesos a los nuevos juzgados permanentes, sin que en este caso particular se cumpliera el mismo dado que ya se habían la audiencia de que trata el

artículo 77 del C.P.T y S.S., pues incluso ya se estaba adelantado la práctica de pruebas.

Por lo anterior, se tiene que el Juzgado Sexto Laboral del Circuito es el competente para conocer del presente asunto y a quien se le devolverán las diligencias para que les dé el trámite que corresponda de acuerdo con la ley.

DECISIÓN:

PRIMERO: DIRIMIR el conflicto de competencia suscitado entre el **JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.** Y EL **JUZGADO CUARENTA Y CINCO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.**, en el sentido de atribuirle la competencia a la primera autoridad judicial mencionada, para adelantar el trámite del proceso promovido por **SALUD TOTAL EPS** CONTRA **LA NACIÓN - MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y OTROS.**

SEGUNDO: Remitir inmediatamente la actuación al **JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C**, para lo de su cargo.

TERCERO: Informar lo resuelto al **JUZGADO CUARENTA Y CINCO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.**

CUARTO: Por Secretaría, procédase de conformidad con lo aquí resuelto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Los Magistrados,

LORENZO TORRES RUSSY

GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLON

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado Ponente

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR **CLAUDIA TERESA ACOSTA RUEDA** CONTRA **COLFONDOS S.A.** VINCULADO **CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES ACDAC - CAXDAC LLAMADO EN GARANTIA MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.**

RADICADO: 11001 3105 035 2018 00231 02

Bogotá D. C., Veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

PROVIDENCIA

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, procede a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte actora contra la providencia emitida por el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá D.C., en audiencia adelantada

el 30 de agosto de 2022, en donde se negó la nulidad propuesta.

El recurso de apelación tiene por objeto que se declare la nulidad y en consecuencia se declare probada la excepción de cosa juzgada.

En esta instancia se allegaron alegatos por el apoderado de Colfondos S.A., en los que indicó que no se podría considerar que la decisión proferida en la acción de tutela podría resolver de fondo las pretensiones de la parte demandante máxime cuando la acción de tutela correspondía a un mecanismo urgente y expedito de resolver situaciones jurídicas de manera transitoria, destacando además que a la actora se le estaba reconociendo y pagando su pensión de invalidez por parte de Colfondos, bajo la modalidad de retiro programado, ya que no había sido posible contratar una aseguradora que asuma el pago de la pensión de invalidez bajo la modalidad de renta vitalicia.

I. ANTECEDENTES

Para lo que interesa al recurso de apelación, en síntesis, debe indicarse que la actora presentó proceso ordinario laboral contra Colfondos S.A., el 24 de abril de 2018 (según acta de reparto obrante a fl. 297 del archivo 02 del expediente digital), a efectos de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a partir del 23 de diciembre de 2013, junto con las mesadas adicionales, la indexación de las sumas y los intereses moratorios. Posteriormente, mediante auto del

11 de diciembre de 2018, se ordenó la vinculación al proceso de Caxdac y se ordenó el llamamiento en garantía a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A.

Igualmente, debe indicarse que en los archivos 76 y 77 del expediente digital obran decisiones de tutela emitidas por el Juzgado 3 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple con Sede Desconcentrada en Suba, el 1 de julio de 2022, en donde tal despacho amparó los derechos fundamentales al mínimo vital, vida digna y seguridad social invocadas por la demandante contra Colfondos S.A., ordenando que en el término de 48 horas la AFP adelantara las gestiones tendientes a materializar el pago de la pensión de invalidez en la modalidad de renta vitalicia con la aseguradora con la cual contrato el seguro de invalidez y sobrevivientes y, la decisión expedida por el Juzgado 31 civil del Circuito, el 8 de agosto de 2022, confirmando el fallo de primera instancia.

Durante la audiencia adelantada el 30 de agosto de 2022, se presentó incidente de nulidad por el apoderado de la parte actora, aludiendo que en este asunto se presentaba una cosa juzgada y pese a ello se pretendía continuar con el proceso, invocando que la pensión y modalidad de pago ya estaban reconocidas en virtud de los fallos de tutela emitidos, por lo que lo único que estaba pendiente era materializar el pago de la pensión de invalidez en la modalidad de renta vitalicia, razón por la cual consideraba que no había lugar a seguir adelante con el proceso.

Efectuado el traslado del incidente a las demás partes del proceso, se indicó por Mapfre y Caxdac, que no habían sido vinculadas a la acción de tutela y por tanto no se configuraba la cosa juzgada.

El juzgado al resolver el incidente de nulidad propuesto indicó que negaba de plano el mismo, por cuanto las nulidades estaban contempladas en el artículo 133 del CGP y la cosa juzgada obedecía a un medio exceptivo que se podía plantear como previo o de fondo que estaba encaminado a enervar las pretensiones de la demanda por lo que no encontraba justificación en que fuera la misma parte quien propusiera una excepción contra la demanda, en ese sentido por no tener ningún tipo de asidero y no soportarse en ninguna causal de nulidad no accedió a lo pretendido.

Ante la anterior decisión, el apoderado de la parte actora presentó recurso de apelación señalando que aunque se trataba de una excepción, lo cierto era que el artículo 29 constitucional establecía claramente que los procesos debían ser respetados especialmente si había unas formalidades específicas para cada uno de ellos y evidentemente en este caso tanto Caxdac como la aseguradora no habían sido llamadas al proceso de tutela, porque no eran las responsables del pago de la prestación, ya que el responsable era el fondo y precisamente era en ello en lo que se fundaba la cosa juzgada constitucional y la viabilidad de su solicitud de sentencia anticipada.

Acto seguido, se indicó por el a quo que parecía que el demandante era el propio interesado en dilatar el proceso siendo que estaba dispuesto a proferir sentencia, aludiendo que no entendía lo que se pretendía con la solicitud de emitir sentencia anticipada y frente a la cosa juzgada ya se había pronunciado al respecto, procediendo a continuación a conceder el recurso de apelación.

II. CONSIDERACIONES

En primer lugar, el auto que decida sobre nulidades procesales es recurrible, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Para resolver, debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 135 del CGP, aplicable por remisión analógica del artículo 145 del C.P.T. y S.S., el cual consagra los requisitos para alegar una nulidad, en los siguientes términos:

> ***"ARTÍCULO 135. REQUISITOS PARA ALEGAR LA NULIDAD.*** *La parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.*
>
> *No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla.*
>
> *La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser alegada por la persona afectada.*
>
> *El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación."*

Así analizado lo expuesto en la norma y el fundamento de la nulidad, lo primero que se advierte es que no se aduce ninguna de las causales de nulidad enlistadas en el artículo 133 del C.G.P[1] y si bien se ha permitido que se invoque como causal de nulidad la violación del derecho al debido proceso dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política, tal y como se ha señalado por nuestro órgano de cierre en providencias como la AL2717-2023, lo cierto es que el proceso se ha adelantado atendiendo las diversas etapas procesales contempladas para un proceso tramitado en la jurisdicción ordinaria laboral.

De igual forma, tampoco puede perderse de vista que conforme a las preceptivas citadas no podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, resultando

---

[1] *"**ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD.** El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:*

1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.

2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.

4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.

5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.

6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.

7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.

PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece."

claro que en este asunto quien promovió la acción de tutela, habiendo promovido con anterioridad el presente proceso ordinario, razones suficientes que conducen a desestimar la nulidad propuesta, especialmente cuando además se tiene que la cosa juzgada constituye un medio exceptivo cuya invocación debe provenir de la pasiva, por lo que será en la sentencia en donde se deberá resolver lo pertinente.

Adicionalmente, no puede perderse de vista que la acción de tutela no altera la competencia en el trámite del proceso ordinario siendo que la misma fue segunda en oportunidad, es decir, en su presentación, siendo que la acción ordinaria se presentó en el año 2018, mientras que la acción constitucional se tramitó hasta el año 2022, razón por la cual no se configuran los presupuestos para dictar sentencia anticipada en los términos establecidos en el artículo 278 del CGP[2].

Bajo las anteriores consideraciones se procederá a confirmar la decisión de primera instancia.

Sin costas en esta instancia.

DECISIÓN:

---

[2] *"**ARTÍCULO 278. CLASES DE PROVIDENCIAS**. Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias.*

Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias.

En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:

1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.

2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.

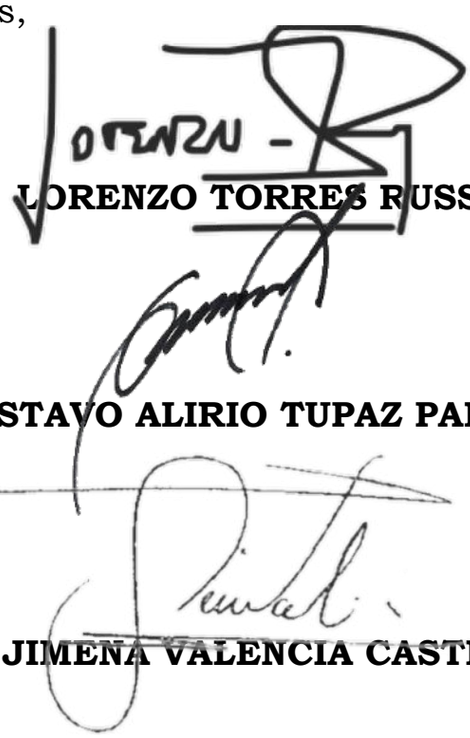
3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa."

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia proferida por el Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá D.C., de fecha 5 de septiembre 2022, de conformidad con las razones expuestas.

SEGUNDO: SIN COSTAS, en esta instancia.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Los Magistrados,



LORENZO TORRES RUSSY

GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

AUTO

El magistrado sustanciador fija en esta instancia las agencias en derecho por valor de $200.000, inclúyanse en la liquidación de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del C.G.P.

LORENZO TORRES RUSSY

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado Ponente

PROCESO EJECUTIVO PROMOVIDO POR **GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ TRIANA** CONTRA **MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA Y OTRO**

RADICADO: 11001 3105 021 2018 00114 02

Bogotá D. C., Veintidós de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

PROVIDENCIA

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, procede a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de Mansarovar Energy Colombia Ltda. contra el auto proferido por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 20 de septiembre de 2022, ante la desvinculación de las demandadas

Maren Fox S.A. y J.J. Empleos Temporales S.A.S., efectuada oficiosamente por el juzgado.

El recurso de apelación tiene por objeto que se revoque la decisión adoptada y en su lugar se mantenga la vinculación al proceso de tales empresas.

I. ANTECEDENTES

Para lo que interesa al recurso de apelación, en síntesis, se tiene que el señor Gustavo Adolfo González Triana promovió proceso ordinario laboral contra Mansarovar Energy Colombia Ltd y contra Misión Temporal Ltda., a efectos que en aplicación del contrato realidad se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre este y la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltd, durante el periodo comprendido entre octubre del año 2012 y el 14 de mayo de 2017, que prestó sus servicios por intermedio de la empresa Misión Temporal Ltda., a partir del mes de enero de 2015, así como que sufrió un accidente laboral el 28 de agosto de 2016 y que el acta de transacción suscrita con la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltd., era ineficaz, en consecuencia, se condenara a las demandadas al pago de los derechos convencionales reclamados, a la reliquidación de las prestaciones sociales, vacaciones y aportes al SGSS en pensiones, al reintegro definitivo a un cargo de igual o superior jerarquía junto al pago de salarios y prestaciones dejadas de recibir.

Como actuación procesal relevante, se tiene que mediante auto del 27 de febrero de 2018, se admitió el proceso contra Mansarovar Energy Colombia Ltd. y Misión Temporal Ltda.,

posteriormente, en providencia del 1° de octubre de 2018, se dispuso la vinculación como litisconsortes necesarios por pasiva de las empresas J.J. Temporales S.A.S. en liquidación Judicial y Marenfox S.A.

Subsiguientemente, mediante proveído del 20 de septiembre de 2022, el juzgado de conocimiento señaló que si bien la parte demandante aportó pruebas documentales de su vinculación como empleado en misión con Maren Fox S.A. y con J. J. Empleos Temporales S.A.S., de los hechos y del petitum de la demanda, se advirtió que la intención de la parte demandante era obtener la declaratoria de un contrato de trabajo con Mansarovar Energy Colombia LTD, así como la responsabilidad de Misión Temporal LTD al terminarle el contrato de trabajo teniendo conocimiento de la condición médica que padecía, por lo que al no pretenderse una declaratoria de un contrato de trabajo, ni la solidaridad con las entidades vinculadas, no resultaba necesaria su comparecencia para entrar a adoptar una decisión de fondo además que tratándose de la empresa J.J. Temporales S.A.S., se allegó escrito por la apoderada de Mansarovar, donde informó que tal empresa estaba liquidada por lo que tampoco podría comparecer al proceso, razones por las cuales dispuso desvincular oficiosamente a Maren Fox S.A. y J. J. Empleos Temporales S.A.S.

Ante la anterior decisión, la apoderada de Mansarovar Energy, formuló recurso de reposición y en subsidio el de apelación, solicitando que se tuvieran como litisconsortes necesarios a las empresas referidas siendo que se cumplían con los criterios del artículo 61 del C.G.P., pues a pesar que en la

demanda no se hubiere dispuesto una relación laboral con tales empresas en el evento en que se declarara el contrato de trabajo con Mansarovar Energy, ello conllevaría implícitamente a que las empresas respondieran solidariamente como simples intermediarias en los términos del artículo 35 del C.S.T.

El juzgado no accedió a reponer la decisión teniendo en cuenta para ello lo pretendido por el demandante señalando que si bien en los hechos y pruebas documentales se hacía alusión a que en un período determinado el demandante estuvo vinculado con las empresas Maren Fox S.A. y J.J. Empleos Temporales, lo cierto era que sin la presencia de estas últimas era posible definir el asunto planteado, ya que las pretensiones van dirigidas directamente en contra de las demandadas, sin que hubiese pregonado algún tipo de solidaridad entre esta y las empresas de servicios temporales de la que fuera posible deducir su intervención como necesaria. Acto seguido, concedió el recurso de apelación.

II. CONSIDERACIONES

En primer lugar, se tiene que el auto que rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros es recurrible de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Para resolver debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 del CGP, que contempla el litisconsorcio necesario en los siguientes términos:

> *"Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado."*

De la norma transcrita, se desprende que la vinculación al proceso de una persona bajo la modalidad del litisconsorcio necesario, no está condicionada por la pluralidad de sujetos que persigan un fin similar o por el de aquellas que tuvieron algún tipo de relación o vinculación, sino porque la cuestión a decidir, verse sobre relaciones, situaciones o actos jurídicos que por su naturaleza o mandato legal, no sea posible resolver de fondo sin su intervención, en cuanto es sujeto de esa relación o porque intervino en esa situación o acto.

Frente al tema, nuestro órgano de cierre en providencia AL2715-2023, señaló "*En suma, conforme con la norma procesal (…) para que opere la integración oficiosa del contradictorio o la citación forzosa es preciso que no sea posible decidir de mérito sobre la relación jurídica material y única objeto de la decisión judicial sin la comparecencia al proceso de todos los sujetos, bien obrando como demandante – formularse por todas-, o bien llamando como demandados a todos quienes lo integran -dirigirse contra todos-"* a renglón seguido explicó *"(…) no hay lugar a conformar un litisconsorcio necesario por pasiva al no requerir la intervención de otros sujetos procesales adicionales*

en el mismo proceso; además, es posible decidir la cuestión litigiosa, sin necesidad de su comparecencia."

En el presente asunto, considerando lo pretendido por el actor correspondiente a la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo con Mansarovar Energy bajo el principio de la primacía de la realidad sobre las formas y el reintegro por desconocimiento de la estabilidad laboral reforzada por razones de salud y dado que la solidaridad pretendida respecto de Misión Temporal Ltd., siendo que la prestación del servicio se efectuaba por intermedio de tal empresa cuando sufrió el accidente de trabajo, se tiene que la naturaleza del asunto permite la definición del mismo mediante sentencia de fondo, sin necesidad de vincular a las empresas Maren Fox S.A. y J. J. Empleos Temporales S.A.S.

Nótese como en este asunto pese a que en los hechos de la demanda se informa que durante todo el tiempo de la relación laboral prestó sus servicios en la empresa Mansarovar Energy mediante vinculaciones con diversas E.S.T., lo cierto es que solo se reclama solidaridad respecto de Misión Temporal Ltd., debiéndose en este punto destacar que no existe una disposición legal que imponga una responsabilidad solidaria cuando se contrate de forma ilícita con una E.S.T. o se excedan los límites temporales en los eventos permitidos bajo esta forma de vinculación, de suerte que para que este tipo de empresas respondan como solidarias ello debe ser solicitado y analizarse el nexo existente entre estas conforme a los artículos 34, 35 y 36 del C.S.T..

Así las cosas y como en este asunto no existe relación jurídica que exija la vinculación de las empresas aludidas, se tiene que no se configuran los presupuestos del artículo 61 del CGP y se procederá a confirmar la decisión de primera instancia.

Costas en esta instancia a cargo de la demandada Mansarovar Energy Colombia Ltd.

DECISIÓN:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia emitida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá en auto del 20 de septiembre de 2022, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la demandada Mansarovar Energy Colombia Ltd.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.

Los Magistrados,



LORENZO TORRES RUSSY

GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

AUTO

El magistrado sustanciador fija en esta instancia las agencias en derecho por valor de $200.000, inclúyanse en la liquidación de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del C.G.P.

LORENZO TORRES RUSSY

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado Ponente

PROCESO EJECUTIVO PROMOVIDO POR **ESTEBAN GÓMEZ ZAPATA** CONTRA **CANAL CAPITAL**

RADICADO: 11001 3105 014 2020 00006 01

Bogotá D. C., Veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

PROVIDENCIA

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, procede a resolver el recurso de apelación presentado por la apoderada del Canal Capital contra el auto proferido por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 20 de octubre de 2022, en donde se declararon no probadas las excepciones previas formuladas.

El recurso de apelación tiene por objeto que se revoque la decisión adoptada en cuanto declaro no probada la excepción de falta de jurisdicción y competencia.

I. ANTECEDENTES

Para lo que interesa al recurso de apelación, en síntesis, se tiene que el señor Esteban Gómez Zapata promovió proceso ordinario laboral contra Canal Capital a efectos que se determinara que la terminación del contrato de trabajo efectuada por el Canal Capital era ilegal por violar la ley de garantías (Par. art. 38 L.995/05) subsidiariamente se determinará que la terminación fue arbitraria, ilegal y contraria a la constitución política al no comprobarse de manera objetiva la falta de competencias mínimas para el ejercicio de la labor, en consecuencia, se condenara a la demandada a efectuar su reintegro al mismo cargo o uno de superior categoría al que desempeñaba para el 20 de enero de 2014, así como ordenara el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al SGSS.

En la contestación de demanda presentada por Canal Capital, propuso entre otras las excepciones previas de falta de jurisdicción y competencia e ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones fundamentadas en que si bien era cierto el Canal Capital estaba obligado como cualquier otra entidad pública al cumplimiento de la Ley 996 de 2005, la discusión planteada por el demandante la controversia no podía ser objeto de pronunciamiento de parte del juez laboral, ya que la misma se circunscribía a determinar si la terminación del contrato se

encontraba en apego al contrato mismo, el ordenamiento jurídico y los preceptos jurisprudenciales.

El juzgado, en audiencia adelantada el 20 de octubre de 2022, al resolver las excepciones señaló que se trataba de excepciones dilatorias siendo que al originarse el conflicto directamente en un contrato de trabajo, era competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de Seguridad Social conforme se colegía del artículo 2 del CPT y S.S. y que además el despacho había acogido la línea de la C.S.J., S.C.L. que establecía que para que el juez laboral asumiera la competencia en un juicio contra una entidad de Derecho público, al actor le bastaba a firmar la existencia del contrato de trabajo para asumir la competencia y dado que lo cuestionado era la ilegalidad de la terminación del contrato de trabajo era evidente que la competencia correspondía a la jurisdicción ordinaria laboral, especialmente cuando la infracción a la norma mencionada podía ser de conocimiento del despacho en la medida que la mencionada regulación estaba dirigida a todos los servidores públicos, incluidos los trabajadores oficiales por lo que la controversia no era ajena al contrato de trabajo.

Ante la anterior decisión, la apoderada del Canal Capital, presentó recurso de apelación señalando que las excepciones no se presentaron de manera dilatoria siendo que el actor ratificó la acumulación de pretensiones solicitando que se declarara que la terminación del contrato era ilegal ya que violaba la Ley de garantías situación que escapaba a la

Jurisdicción Ordinaria Laboral dado que pertenecía a la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

II. CONSIDERACIONES

En primer lugar, se tiene que el auto que decida las excepciones previas es recurrible de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Para resolver, lo primero que habría que señalar es que el Canal Capital es una sociedad pública organizada como empresa industrial y comercial del estado con carácter de entidad descentralizada indirecta perteneciente al orden distrital, de suerte que en los términos del inciso segundo del artículo 5[1] del Decreto 3135 de 1968, los trabajadores de este tipo de empresas son trabajadores oficiales siendo que solo algunas actividades de dirección o confianza serán desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos.

De igual forma, se tiene que la calidad de trabajador oficial del actor está acreditada en el plenario con el contrato de trabajo No. 097 – 2013 suscrito entre las partes, en donde

---

[1] *"**ARTICULO 5. EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES**. <Aparte entre paréntesis declarado INEXEQUIBLE> Las personas que prestan sus servicios en los Ministerios Departamentos Administrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. (En los estatutos de los establecimientos Públicos se precisará que actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo).*

Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos. (Subrayado fuera de texto)

(…)"

expresamente se indicó *"(…) declaramos haber celebrado el presente contrato de trabajo el cual está regido por las normas aplicables a los trabajadores oficiales (…)".*

Así mismo, conviene mencionar que la Corte Constitucional en sentencia C-090 de 2002, puntualizó "(…) Los servidores del Estado, dependiendo de la naturaleza de la vinculación que han establecido, discuten sus pretensiones en jurisdicciones distintas. Los trabajadores oficiales lo harán bajo la jurisdicción ordinaria laboral, mientras que los empleados públicos ante la contencioso administrativo (…)".

Precisado lo anterior y siendo clara la condición de trabajador oficial del demandante, resulta oportuno traer a colación el artículo 2° del C.P.T. y S.S. (modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001), que contempla la competencia general de la especialidad laboral en los siguientes términos:

> ***"ARTICULO 2o. COMPETENCIA GENERAL.*** *La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.*
>
> *(…)*
>
> *5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad."*

Como se advierte el juez competente para conocer los conflictos que se originen con ocasión al contrato de trabajo y la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo, es el juez laboral y como en este caso lo que se reclama es la ilegalidad de la terminación del contrato de trabajo,

resulta claro que la definición del asunto tramitado corresponde a esta especialidad.

De igual forma, debe mencionarse que pese a que se señala por la recurrente que la violación de la ley de garantías no era un asunto que pudiera ser de conocimiento del juez laboral lo cierto es que tal estudio ya han sido abordado por nuestro órgano de cierre, como se colige de lo expuesto en la sentencia SL530-2021, en donde el problema jurídico que se analizó correspondió a determinar si el Tribunal se equivocó al establecer que la prohibición contenida en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, en relación a la modificación de la nómina de las entidades públicas, se extendía a la terminación de los contratos de trabajo de los trabajadores oficiales.

Bajo las anteriores consideraciones se procederá a confirmar la decisión de primera instancia.

Costas en esta instancia a cargo de Canal Capital.

DECISIÓN:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia emitida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá en auto del 20 de septiembre de 2022, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

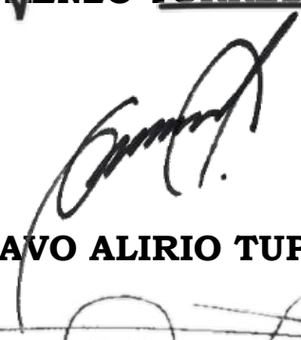
SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la demandada Canal Capital.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.

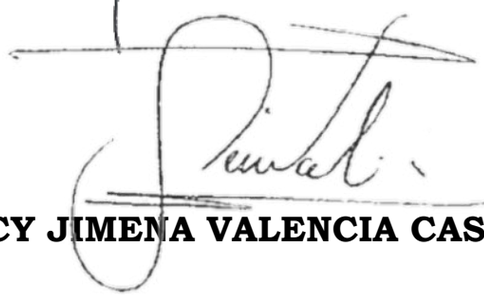
Los Magistrados,



LORENZO TORRES RUSSY



GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA



ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

AUTO

El magistrado sustanciador fija en esta instancia las agencias en derecho por valor de $200.000, inclúyanse en la liquidación de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del C.G.P.



LORENZO TORRES RUSSY

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado Ponente

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR **RICHARD EDUARDO GONZALEZ GIRALDO** CONTRA **PRO POSITIVOS S.A.S. Y LUIS MARINO RAMIREZ SERNA.**

RADICADO: 11001 3105 022 2021 00508 01

Bogotá D. C., Veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

PROVIDENCIA

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, procede a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte actora contra el auto proferido por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá D.C., en la audiencia adelantada el 30 de enero de 2023, en dónde no se decretó la prueba que pretendía la incorporación de unos audios de llamadas.

El recurso de apelación tiene por objeto se revoque la decisión y se acceda al decreto de esa prueba.

I. ANTECEDENTES

Para lo que interesa a la apelación se tiene que la parte actora presentó demanda con la finalidad que se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre el actor y la empresa Pro Positivos SAS y se ordenara el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, vacaciones y aportes al SGSS en pensiones teniendo en cuenta el salario realmente devengado junto con la indemnización reclamada.

De igual forma, se advierte que la demanda se acompañó de 4 archivos de audio (ver archivos 02, 03, 04 y 05 del expediente digital).

En audiencia adelantada el 30 de enero de 2023, estando en la etapa de decreto de pruebas no se accedió a incorporar los audios de llamadas como quiera que no se evidenció que estas hubiesen sido obtenidas con autorización o con el consentimiento de las personas que intervinieron en dichas llamadas; asimismo, se señaló que como tampoco las mismas fueron ordenadas por autoridad competente de acuerdo con la Constitución y la ley, constituían una prueba inconstitucional y nula de pleno derecho.

Ante la anterior decisión, el apoderado de la parte actora presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación, con fundamento en que tales audios no fueron reprochados,

ni desvirtuados y tampoco fueron tachados de falsos dentro del momento procesal oportuno esto era con la contestación de la demanda.

Al resolver el recurso, el juzgado indicó que los argumentos expuestos por el recurrente no eran suficientes para modificar la decisión inicialmente adoptada, ya que conforme a pronunciamientos de la Corte Constitucional las grabaciones que eran tomadas sin consentimiento expreso de las partes, eran nulas, puesto que no solamente violaban el debido proceso sino también el derecho fundamental a la intimidad de las personas.

II. CONSIDERACIONES

En primer lugar, se tiene que el auto que niegue el decreto o la práctica de una prueba es recurrible de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; por tal razón, se estudiará si es procedente decretar la prueba reclamada esto es la incorporación al proceso de los audios de llamadas.

Con el fin antes indicado, se debe tener en cuenta que el artículo 48 del citado Estatuto, dio al juez la facultad de director del proceso, al determinar que éste adoptará las medidas necesarias para garantizar el debido proceso, con el fin de lograr tanto el equilibrio entre las partes como la rapidez en los diferentes trámites a su cargo.

A pesar de las referidas facultades del juez como director del proceso, al momento de decretar las pruebas debe sujetarse a las previsiones que establece la Constitución Nacional, apreciándose que el inciso final del artículo 29 ibídem señala *"Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso".*

A su turno el artículo 168 del C.G.P., establece que el juez rechazara de plano *"(…) mediante providencia motivada,* ***las pruebas ilícitas****, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles."*

Sobre el particular, conviene recordar que la C.S.J., S.C.C., en sentencia STC4577-2021, explicó en qué consisten las pruebas ilícitas

> *"(…)*
>
> *3.- Conforme a lo anotado, resulta claro que dicha hermenéutica, como se anunció, desconoce las pautas que rigen las «pruebas ilícitas», si en cuenta se tiene que el artículo 29 de la Carta Magna consagró el «derecho a probar o a la prueba», garantizando a todas las personas la posibilidad de «presentar pruebas» y «controvertir la que se alleguen en su contra», pero limitándolo al prescribir que «[e]s nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso».*
>
> *Expresión esta última que ha evidenciado la necesidad de abordar el estudio del concepto y alcance de las «pruebas ilícitas», las cuales menoscaban y comprometen «derechos» de raigambre «fundamental» de quienes intervienen en el juicio (partes e intervinientes).*
>
> *Sobre la diferencia entre «pruebas ilícitas e ilegales» esta Sala ha sostenido*
>
> > *"Grosso modo, la prueba es 'ilícita', en efecto, cuando pretermite o conculca especificas garantías o derechos de estirpe fundamental. Como lo pone de presente la doctrina especializada, la prueba ilícita, más específicamente, '(...) es aquella cuya fuente probatoria está contaminada por la vulneración de un derecho fundamental o aquella cuyo medio probatorio ha sido practicado con idéntica infracción de un derecho fundamental. En consecuencia, (…) el concepto de prueba ilícita se asocia a la violación de los citados derechos fundamentales', hasta el punto, que algunos prefieren denominar a esta prueba como inconstitucional (Vid: Corte Constitucional, sentencia SU-159-02).*

"La prueba es ilegal o irregular, por el contrario, cuando no pretermite un precepto constitucional fundamental sino uno de índole legal, en sentido amplio, de suerte que será la tipología normativa objeto de infracción, en esta tesitura, la llamada a determinar si se está ante una u otra clase de prueba, sobre todo a partir de la noción de derechos o garantías fundamentales. Si es la Carta Política la quebrantada, particularmente uno o varios derechos de la mencionada estirpe, la prueba se tildará de ilícita, mientras que si la vulnerada es una norma legal relativa a otra temática o contenido, se calificará de ilegal o irregular.

"La diferencia reinante entre este tipo de probanzas, útil es relievarlo, no sólo es dogmática y referida a su fuente preceptiva y a su específico contenido, habida cuenta que tiene asignadas trascendentes y disímiles consecuencias en la órbita jurídico-probatoria, según autorizada opinión. Tanto que, ad exemplum, se señala que la prueba ilícita, en línea de principio, no es pasible de valoración judicial, como quiera que carece de eficacia demostrativa -desde luego, con algunas puntales excepciones a partir de la adopción del criterio o postulado de la proporcionalidad-, al paso que la ilegal o irregular si lo será, aspecto éste, por lo demás, no pacífico en el derecho comparado" (Cas. Civ., sent. 29 jun. 2007, exp. 2000-00751-01, reiterada el 16 de julio de 2008, exp. 2005-00286-01; se subraya).

Ahora bien, en punto al «derecho a la intimidad» consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política, la Corte Constitucional en sentencia T 233 de 2007, ha entendido

"(…)

De lo dicho precedentemente se tiene entonces que el derecho a la intimidad involucra aspectos diversos de la persona humana, que van desde el derecho a la proyección de la propia imagen hasta la reserva de espacios privados, adicionales al domicilio del individuo, en los que éste desarrolla actividades que sólo conciernen a sus intereses.

En esa medida, las grabaciones de imagen o de voz realizadas en ámbitos privados de la persona, con destino a ser publicadas o sin ese propósito, constituyen violación del derecho a la intimidad personal, si las mismas no han sido autorizadas directamente por el titular del derecho y, además, en caso extremo, si no han sido autorizadas expresa y previamente por autoridad judicial competente. El resultado de la recolección de la imagen o la voz sin la debida autorización del titular implica, sin más, el quebrantamiento de su órbita de privacidad y, por tanto, la vulneración del derecho a la intimidad del sujeto.

La Corte ha establecido el principio anotado en los siguientes términos:

"Teniendo en cuenta el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 15 de la Carta, la Sala, reiterando la doctrina contenida en la sentencia de esta Corporación T-530 del veintitrés (23) de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992), (magistrado ponente doctor Eduardo Cifuentes Muñoz), considera que toda persona tiene derecho a un contorno privado, en principio vedado a los demás, a menos que por su asentimiento o conformidad, el titular renuncie a su privilegio total o parcialmente. Entendido así el derecho a la intimidad, es claro que éste, fuera de garantizar a las personas el derecho de no ser

constreñidas a enterarse de lo que no les interesa, así como la garantía de no ser escuchadas o vistas si no lo quieren, impide también que las conversaciones íntimas puedan ser grabadas subrepticiamente, a espaldas de todos o algunos de los partícipes, especialmente si lo que se pretende es divulgarlas o convertirlas en pruebas judiciales". (Sentencia T-003 de 1997 M.P. Jorge Arango Mejía) (Subrayas fuera del original) (Subraya la Sala)

(…)"

En el caso objeto del recurso, resulta acertada la decisión de la juez de primera instancia, en cuanto se abstuvo de incorporar los audios solicitados puesto que los mismos fueron obtenidas sin autorización o consentimiento de todas las personas grabadas y sin que hubiesen sido ordenadas por autoridad competente, por lo que su decreto y práctica constituirían una vulneración del derecho fundamental a la intimidad ya que fueron obtenidas con desconocimiento del debido proceso.

Conforme a las consideraciones que se han dejado detalladas, se confirmará la decisión de primera instancia.

Sin costas en esta instancia.

DECISIÓN:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá D.C., de fecha 30 de enero de 2023, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Los Magistrados,

LORENZO TORRES RUSSY

GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado Ponente

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR **OBDULIO BENAVIDES RUBIANO** CONTRA **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES Y COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS S.A.**

RADICADO: 11001 3105 005 2020 00321 01

Bogotá D. C., veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

PROVIDENCIA

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, procede a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de Colpensiones contra el auto proferido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 20 de septiembre de 2021, en donde se tuvo por no contestada la demanda por parte de Colpensiones.

El recurso de apelación tiene por objeto que se revoque la decisión y en su lugar se tenga por contestada la demanda.

I. ANTECEDENTES

Mediante auto del 20 de septiembre de 2021, se tuvo por no contestada la demanda por parte de Colpensiones con fundamento en que Colpensiones no allegó escrito dentro del término legal.

El fundamento para haber tenido por no contestada la demanda de Colpensiones giró en torno a que la notificación se practicó de conformidad con el decreto 806 de 2020, el 14 de diciembre de 2020, al correo electrónico: notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co, advirtiendo que la notificación se entendía realizada transcurridos 2 días hábiles siguientes al envió del mensaje y que partir del día siguiente empezaría a correr el termino de 10 días, de suerte que el término de contestación vencía el día 22 de enero de 2021 y como el escrito de contestación se allegó al correo electrónico del juzgado el 25 de enero de 2021, se presentó fuera de término.

En escrito allegado vía electrónica, la apoderada de Colpensiones, propuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra el auto antes mencionado pues aludió que consideraba que la interpretación y alcance que se le venía dando al Decreto 806 de 2020 no resultaba acertado dado que desconocía lo dispuesto en el artículo 41 del C.P.T. y S.S.,

norma especial que regulaba lo concerniente al término legal para tener por notificada una entidad pública, señalado que era dable concluir que su representada dio respuesta a la demanda dentro del término legal, en atención, a lo siguiente:

"(…)

1. El termino de dos (2) días hábiles establecido en el Decreto 806 de 2020, termino el 16 de diciembre de 2020.
2. Periodo de vacancia judicial contemplada entre el 20 de diciembre de 2020 y el 10 de enero de 2021, tiempo durante el cual no corren términos judiciales.
3. El termino de cinco (5) días hábiles correspondiente al parágrafo del articulo 41 del C.P.L., finalizó el 13 de enero de 2021.
4. El termino de diez (10) días hábiles, dispuesto en el artículo 74 del C.P.L. se cumplía el 29 de enero de 2021.

(…)"

Mediante auto del 17 de mayo de 2022, se indicó por el juzgado que no accedería a reponer la decisión puesto que con la expedición del Decreto 806 de 2020, se facultó a la parte interesada o a los despachos judiciales, para optar por alguna de las formas de práctica de la notificación a la parte demandada, estableciendo claramente la notificación personal a través del envío de la providencia respectiva como mensaje de datos y precisando que el artículo 41 del CPT y S.S., prevé que en caso que no se puede notificar personalmente al representante legal, se puede acudir a la oficina de correspondencia de la respectiva entidad radicando copia de la demanda, auto admisorio y aviso, siendo claro entonces que si se optaba por acudir a la oficina de correspondencia, ya no se estaba frente a una notificación personal, sino a una notificación por aviso, siendo en esta última clase de notificación que operaba el aumento a 5 días para entenderse

surtida la misma. En esa medida señaló que la notificación por la que se optara sería la que se debería aplicar en su integridad. Acto seguido, concedió el recurso de apelación.

CONSIDERACIONES

En primer lugar, es preciso señalar que el auto que no dé por contestada la demanda es recurrible, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

En cuanto al punto de discusión, resulta relevante mencionar que el artículo 41 del CPT y SS con la reforma introducida por el artículo 20 de la Ley 712 de 2001, consagra las diferentes formas de notificación, entre ellas, la notificación personal, la cual se contempla entre otros, la notificación al demandado del auto admisorio de la demanda y/o la primera providencia que se dicte en el asunto, puntualizándose además que tratándose de entidades públicas, el auto admisorio de la demanda debe notificarse personalmente a sus representantes legales o a quienes estos deleguen y en el evento en que ello no fuera posible, la notificación podría hacerse con la entrega en correspondencia de la demanda, auto admisorio y aviso, caso en el cual, la notificación se entendería surtida transcurridos 5 días después de efectuada la radicación.

Igualmente, conviene recordar que la práctica de la notificación personal se llevaba a cabo conforme a las reglas establecidas en el artículo 291 (notificación personal) y 292

(notificación por aviso) del CGP, sin embargo, debe precisarse que aunque se contemplaba el uso de las tecnologías de la información en las actuaciones judiciales conforme se colige de lo dispuesto en el artículo 103 del CGP, con la expedición del Decreto 806 del 4 de junio de 2020 (convertido hoy en legislación permanente mediante la Ley 2213 de 2022), ello se vio potenciado y hoy en día es la forma convencional en que se realizan tales notificaciones.

En razón de lo anterior, se presentaron diversos cambios conforme se colige de lo expuesto en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, de donde se establece que la notificación personal también podrán efectuarse mediante el envío de la providencia "como mensaje de datos" a la dirección o sitio que suministre el interesado, sin necesidad de remisión previa de citación o aviso, para lo cual se podrán utilizar las direcciones que estuvieran informadas en páginas web o redes sociales" de las entidades públicas o privadas a notificar, debiéndose señalar que en este evento, la notificación se entenderá surtida transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos, esto siempre y cuando "*(…) el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje".*

Revisado el trámite de notificación adelantado en este caso, se observa que el juzgado remitió comunicación en los términos del Decreto 806 de 2020, a la dirección electrónica de notificaciones judiciales dispuesta por Colpensiones el 14 de diciembre de 2020, siendo recibida por tal administradora en esa fecha según se desprende de lo señalado por la misma apoderada en la alzada, razón por la cual la notificación se

entendió surtida el 17 de diciembre de 2020, de manera que los 10 días de traslado (artículo 74 del C.P.T y S.S.) iniciaron a contabilizarse el 17 de diciembre de 2020 y finalizaron el 21 de enero del año 2021, razón por la cual la contestación de la entidad presentada el 25 de enero de 2021 (archivo 6 del expediente digital) se encontraba por fuera del término legal y no era procedente tener por contestada la demanda.

En este punto conviene precisar que las normas analizadas en precedencia regulan formas alternativas de agotar la notificación, sin que sea posible como equivocadamente lo pretende el recurrente, tomar una parte de cada norma para adicionar los términos legales, razones por las cuales se procederá a confirmar la decisión de primera instancia, pues, tal como lo determinó el a quo, la contestación de la demanda fue presentada por Colpensiones de manera extemporánea.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia expedida el 20 de septiembre de 2021, por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá D.C., de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Los Magistrados,

LORENZO TORRES RUSSY

GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLON

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado Ponente

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR **LEANDRO JACINTO LOPEZ PEÑA, DILMAR RAMOS FERREIRA, SIMÓN AMADO JOAQUIN, HILTON ALMEIDA FLOREZ, WILMAR ALONSO LÓPEZ TABARES, ILDER MACEDO PUA, MARTA LUCIA COELLO AHUE Y ENNIO PINTO ARAUJO** CONTRA **CONSORCIO INGECO INTEGRADO POR VERTICE INGENIERIA SAS, ARCO CONSTRUCTORES S.A.S., FONDO DE PROMOCIÓN TURISTICA - FONTUR** LLAMADO EN GARANTÍA **COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.**

RADICADO: 11001 3105 038 2021 00564 01

Bogotá D. C., veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

PROVIDENCIA

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, procede a resolver el recurso de

apelación presentado por el apoderado de la parte actora contra la providencia emitida por el Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 21 de octubre de 2022, en donde se rechazó la demanda y se ordenó el archivo de las diligencias.

El objeto del recurso de apelación es que se revoque tal decisión y en su lugar se amita la demanda y se continúe con el trámite del proceso.

I. ANTECEDENTES

Para lo que interesa al recurso de apelación, en síntesis, se tiene que mediante auto del 12 de julio de 2022, se indicó que revisada la demanda, la misma no podía ser admitida por cuanto presentaba los defectos que a continuación se exponen, concediéndole 5 días hábiles para subsanar los mismos so pena de rechazo:

"(…)

- ✓ Las pretensiones de la demanda en la forma que se presentan no son claras, se proponen unas pretensiones generales derivada de un contrato FNT 002 – 2016 y otro FNT 078, cuyo nexo con una relacion contractual laboral no se plantea, correspondiendo la controversia a una jurisdicción diferente de la Laboral. Se reclama el cumplimiento de una póliza de responsabilidad civil extracontractual que no es de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral.
- ✓ Presenta una indebida acumulación de pretensiones, pues se reclaman acreencias laborales de una pluralidad de demandantes que no se advierten que provengan de la misma causa, como que derivan de nexos jurídicos individuales, no versan sobre el mismo objeto y no se observa que se sirvan de las mismas pruebas, debiéndose proponer demandas sobre derechos laborales individuales para que se tramiten en procesos igualmente individuales en donde se garantice el debido proceso y el derecho de defensa.
- ✓ Denota el despacho que los números relacionados en el acápite de pruebas no corresponden a los demandantes en el archivo "Excel" adjunto, por lo anterior, y en aras de garantizar la economía procesal, enumérese el mismo e indique con exactitud el número en que se relaciona cada uno de los accionantes.

- ✓ No se acreditó el envió por medio electrónico a los convocados a juicio del escrito demanda y de sus anexos, en los términos del inciso 4 del Artículo 6 del Decreto 806 de 2020, reiterado en el inciso 5º del artículo 6º de la ley 2213 de 2022.

(…)"

Acto seguido, el apoderado de la parte actora, dentro del término presentó escrito con la subsanación de la demanda, no obstante, mediante proveído del 21 de octubre de 2022, se señaló que a pesar de haberse allegado el escrito con la subsanación no se corrigieron las deficiencias advertidas en auto anterior, especialmente las contenidas en los ítems 1 – 3, por lo que dispuso el rechazo de la demanda.

Ante la anterior decisión, se presentó recurso de apelación fundamentado en que se presentaba una violación del debido proceso por falta de motivación del auto que rechazó la demanda, en tanto que no se hizo pronunciamiento respecto de la subsanación de la demanda ni considero los argumentos que tuvo para su inadmisión y en su lugar se dio por terminado el proceso.

Acto seguido, mediante auto del 14 de diciembre de 2022, el despacho procedió a conceder el recurso de apelación.

II. CONSIDERACIONES

En primer lugar, es preciso señalar que el auto que rechace la demanda o su reforma es recurrible, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 29 de la Ley 712 de

2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Al constituir la demanda el instrumento a través del cual se ejercita el derecho de acción y por ser el medio idóneo a través del cual se formulan las pretensiones ante el órgano jurisdiccional, la misma, debe cumplir con los requisitos que exige el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en su artículo 25 y 25A[1].

Es por ello, que la llamada a satisfacer dichas exigencias es la propia parte demandante, quien debe señalar, entre otros, los hechos y pretensiones en forma clara y precisa para así garantizar la eventual prosperidad de su demanda.

Sobre el particular, se tiene que verificado el escrito allegado por la parte actora a efectos de subsanar las deficiencias advertidas que generaron la inadmisión de la demanda, resulta pertinente destacar que aunque es evidente la falta de técnica para la presentación de la demanda, se tiene que en cumplimiento del deber de interpretar la demanda que

---

[1] ***ARTICULO 25-A. ACUMULACION DE PRETENSIONES***. *<Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:*

1. Que el juez sea competente para conocer de todas.

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.

3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

En la demanda sobre prestaciones periódicas, podrá pedirse que se condene al demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación de aquella y la sentencia de cada una de las instancias.

También podrá acumularse en una demanda pretensiones de varios demandantes contra el mismo o varios demandados cuando provengan de igual causa, o versen sobre el mismo objeto, o deban servirse de las mismas pruebas aunque sea diferente el interés jurídico.

En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas que persigan, total o parcialmente, unos mismos bienes del demandado.

Cuando se presente una indebida acumulación que no cumpla con los requisitos previstos en los incisos anteriores, pero sí con los tres numerales del inciso primero, se considerará subsanado el defecto cuando no se proponga oportunamente la respectiva excepción previa.

le corresponde al juez laboral, señalado entre otras por nuestro órgano de cierre en la sentencia SL14022-2015, encuentra esta Sala que es posible colegir que lo que se pretende en este caso es la declaratoria de la existencia de contratos de trabajo entre cada uno de los demandantes y el consorcio Ingeco, pretendiéndose que se declare solidariamente responsable de las condenas al Fondo de Promoción Turística – Fontur y se vincule como llamada en garantía a la Compañía Aseguradora De Fianzas S.A..

Lo anterior, con fundamento en el contrato No. FNT 002-2016, suscrito entre la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior Fiducoldex S.A. vocera del patrimonio autónomo – Fondo Nacional de Turismo Fontur(contratante) y el Consorcio Ingeco (contratista), que tenía como objeto la construcción del sendero turístico ecovía del municipio de Nariño a San Martín de Amacayacu, en el departamento de amazonas, proyecto en el que refieren los demandantes prestaron los servicios para el consorcio aludido y del que reclaman los acreencias e indemnizaciones solicitadas en este asunto.

Nótese además como lo que se cuestiona respecto a las pretensiones que se deducen del contrato No. FNT 002-2016, se desprenden es del llamamiento en garantía que se predica respecto de la Compañía Aseguradora De Fianzas S.A., si bien no se creó un acápite claro sobre el particular se observa que los pedimentos efectuados bajo la denominación *“PRETENSIONES GENERALES A FAVOR DE TODOS LOS DEMANDANTES”,* atienden a las solicitudes que se reclaman

de la compañía de seguros con ocasión de la póliza de cumplimiento allí mencionada.

Adicionalmente, el artículo 25A- señala que también se podrán acumular en una demanda pretensiones de varios demandantes contra el mismo o varios demandados cuando provengan de igual causa, o versen sobre el mismo objeto, o deban servirse de las mismas pruebas, aunque sea diferente el interés jurídico, evidenciándose que en este asunto lo que se reclama por todos los demandantes es la existencia de un contrato de trabajo con el consorcio mencionado para el proyecto Construcción Del Sendero Turístico Ecovia del Municipio Puerto Nariño a San Martin de Amacayacu y el pago de acreencias laborales e indemnizaciones.

Finalmente, en lo que tiene que ver con las pruebas, conviene recordar que si bien conforme a lo establecido en el artículo 25 y 26 del CPT y S.S., es un deber de las partes acompañar la demanda de las pruebas que estén en su poder y de solicitar las que se pretenden hacer valer, no obstante, no puede olvidarse que conforme al artículo 167 del CGP *"Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen"*, por lo que resultan claras las consecuencias de su no aportación, en todo caso se observa, que el cuestionamiento efectuado atendía a un asunto de organización de la prueba, que tampoco es susceptible de inadmisión.

Por lo expuesto, se revocará la providencia emitida por el Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá D.C., y en su lugar se dispondrá la admisión de la demanda.

Sin costas en esta instancia.

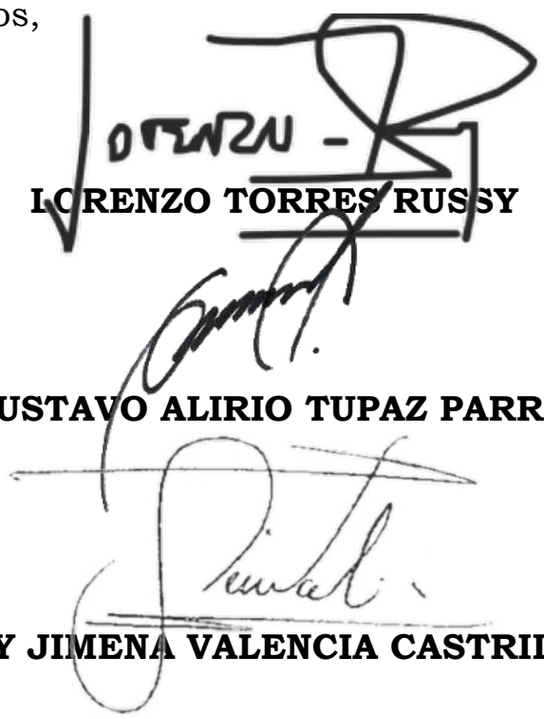
DECISIÓN:

PRIMERO: REVOCAR la providencia emitida el 21 de octubre de 2022, por el Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá D.C., para en su lugar admitir la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Los Magistrados,



LORENZO TORRES RUSSY

GUSTAVO ALIRIO TUPAZ PARRA

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

A U T O

REF:	Ordinario 07 2021 00089 01
R.I.:	S-3835-23
DE:	MELVA OCAMPO HOYOS.
CONTRA:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y OTROS.

Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 14 de marzo de 2024, la memorialista, deberá estarse a lo dispuesto por éste Despacho, en auto de fecha 26 de octubre de 2023, como al informe secretarial de fecha 01 de diciembre de 2023, encontrándose en turno el proceso, de acuerdo con el rigor del orden de entradas de procesos al despacho, a efectos de dictar la correspondiente sentencia, conforme a lo preceptuado en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

A U T O

REF:	Ordinario 08 2021 00158 01
R.I.:	S-3900-23
DE:	JULLY LORENA ATUESTA MENDOZA.
CONTRA:	ITAC CONSTRUCCIONES S.A.S y OTROS.

Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 14 de marzo de 2024, el memorialista, deberá estarse a lo dispuesto por éste Despacho, en auto de fecha 19 de octubre de 2023, como al informe secretarial de fecha 24 de noviembre de 2023, encontrándose en turno el proceso, de acuerdo con el rigor del orden de entradas de procesos al despacho, a efectos de dictar la correspondiente sentencia, conforme a lo preceptuado en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado ponente

Bogotá, D.C., seis (06) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

Procede la Sala a determinar la viabilidad del recurso extraordinario de casación interpuesto por la demandada, **AFP COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**[1], contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2023 y notificada por edicto del trece (13) de diciembre de la misma anualidad, dado su resultado adverso dentro del proceso ordinario laboral promovido por **LUZ MARINA SÁNCHEZ CÁRDENAS** en contra de la recurrente demandada y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** y la **AFP PORVENIR S.A.**

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Establece el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en su parte pertinente que: *«…sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda*

[1] Allegado vía correo electrónico memorial fechado el once (11) de diciembre de 2023.

de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente». Tal estimación debe efectuarse, teniendo en cuenta el monto del salario mínimo aplicable al tiempo en que se profiere la sentencia que se pretende acusar, en el caso en concreto la cuantía corresponde a la suma de $ 139'200.000,00. Tal cuantía se determina bajo el concepto de interés jurídico para recurrir, que de forma clara la Sala Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia lo ha interpretado como el perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada [2] , definiéndose para el demandante en las pretensiones que no hubieran sido acogidas en segunda instancia y para la demandada las condenas impuestas, en ambos casos teniendo en cuenta los recursos de apelación que hubieran sido interpuestos.

El *a quo* en sentencia de primera instancia, declaró la ineficacia del traslado que realizó el actor en el RAIS en la AFP Davivir hoy Protección S.A. y por contera los traslados horizontales realizados por este; ordenó a las AFP Protección y Skandia S.A., a devolver a Colpensiones, todos los descuentos realizados a los aportes pensionales de la demandante desde el año 1994 cuando ocurrió el traslado del régimen pensional, tales como el porcentaje correspondiente a los gastos de administración y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios

[2] Al respecto de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia ha manifestado y reiterado: «el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, que tratándose del demandado como el caso en estudio, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, el monto de las pretensiones que Radicación n° 730114 hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, teniendo en cuenta la conformidad o in conformidad del interesado respecto del fallo de primer grado» CSJ AL1514-2016. Magistrada Ponente: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.

recursos. Al momento de cumplirse lo anterior, deberán presentar un informe discriminado de los valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes, descuentos objeto de devolución, su indexación y demás información relevante que los justifiquen; ordenó a Colpensiones a recibir sin solución de continuidad como afiliado al RPMPD al demandante desde su afiliación inicial al ISS, decisión modificada en esta instancia para condenar en costas a las demandadas, se confirmó en lo demás la decisión del *a quo*. Pues bien, respecto al recurso de casación interpuesto la Sala de Casación Laboral precisó que la AFP Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías no tiene interés para recurrir en casación, en proveído AL4271-2022, Radicación No. 89652 del 17 de agosto de 2022, estimó lo siguiente:

> […] Al respecto cabe precisar, que no se equivocó el sentenciador en sus consideraciones, cuando claramente en el caso bajo examen, no se advierte un agravio a la recurrente, pues la carga del traslado a Colpensiones de la totalidad del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual del actor, con sus respectivos bonos pensionales, rendimientos, saldos, frutos, intereses, debidamente indexados, no genera un detrimento a la demandada Porvenir S.A., puesto que si bien tales recursos son administrados por dicha entidad, no forman parte de su peculio, y por el contrario, corresponden a un patrimonio autónomo de propiedad de los afiliados a dicho régimen, por lo que no es dable predicar que sufre un perjuicio económico con su traslado.
>
> Así las cosas, en dichos asuntos se debe entender, que el único agravio que se le puede ocasionar a la parte recurrente, es el hecho de habérsele privado de su función de administradora del régimen pensional del demandante, y que en ese sentido dejaría de percibir a futuro los rendimientos por su gestión, perjuicios estos que no se pueden tasar para efectos del recurso extraordinario, pues no se evidencia la forma en que ello afecta a la accionada y tampoco es posible determinarlos en la sentencia. […].

De igual manera, respecto de la devolución de gastos de administración y seguros previsionales, señaló:

> […] Ahora bien, en cuanto a lo pretendido por la recurrente, consistente en que se incluyan para efectos de establecer el interés económico las sumas correspondientes a los gastos de administración, para

> desestimar tal petición basta decir, que si bien podría pregonarse que la misma se constituye en una carga económica para el Fondo demandado, no se demostró que tal imposición superara la cuantía exigida para efectos de recurrir en casación, y en esa medida, por obvias razones, no pueden ser objeto de cuantificación para hallar el interés económico. […].

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta diáfano que no se acredita el interés jurídico para recurrir por la parte demandada, ello en tanto el traslado a Colpensiones de la totalidad del capital de la cuenta de ahorro individual y demás emolumentos, no genera un detrimento a la AFP demandada y, de otra parte, no se estableció la tasación de los montos de los gastos de administración y cuotas de seguros previsionales. En consecuencia, el recurso se negará.

Por último, en páginas 8 a 19[3] milita escritura pública otorgada a la AFP Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, donde se confiere poder general, amplio y suficiente a la sociedad MM Abogados y Asociados S.A.S., sociedad representada legalmente por Miguel Francisco Martínez Uribe quien a su vez otorgó poder a la doctora Margarita María Ferreira Henríquez en páginas 6 a 7[4], para que actúe como apoderada de la sociedad recurrente, por lo que habrá de reconocérsele personería a dicha profesional del derecho.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE:

[3] Cuaderno Segunda Instancia - (15PresentaRecursoCasacion.*pdf*).
[4] Cuaderno Segunda Instancia - (15PresentaRecursoCasacion.*pdf*).

PRIMERO: RECONOCER personería para actuar en representación de la parte demandada **AFP COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS** a la abogada **MARGARITA MARÍA FERREIRA HENRÍQUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía n.° 1.082.894.374 portadora de la T.P. n.°221.815 del Consejo Superior de la Judicatura en los términos y fines del poder obrante a página 6 y subsiguientes del plenario.

SEGUNDO: NO CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandada **AFP COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS.**

TERCERO: En firme el presente proveído, continúese con el trámite correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,

LUIS CARLOS GONZALEZ VELASQUEZ

JOSÉ WILLIAM GONZALEZ ZULUAGA

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

Proyectó: DR

MAGISTRADO DR. **LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ**

Al despacho el expediente de la referencia, informándole que la apoderada de la parte demandada **AFP COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**, allegó vía correo electrónico memorial fechado el once (11) de diciembre de 2023, dentro del término de ejecutoria, mediante el cual interpone recurso extraordinario de casación contra el fallo de segunda instancia dictada por esta Corporación el 30 de noviembre de 2023 y notificada por edicto del trece (13) de diciembre de la misma anualidad.

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá, D.C., seis (06) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).



DANIELA CAROLINA ROJAS LOZANO

Oficial Mayor

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado ponente

Bogotá, D.C., seis (06) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

Procede la Sala a determinar la viabilidad del recurso extraordinario de casación interpuesto por la demandada, **AFP COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**[1], contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2023 y notificada por edicto del nueve (09) de noviembre de la misma anualidad, dado su resultado adverso dentro del proceso ordinario laboral promovido por **LEONICIO QUINTERO ARIZA** en contra de la recurrente demandada y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.**

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Establece el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en su parte pertinente que: *«…sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente»*. Tal estimación debe efectuarse, teniendo en cuenta el monto del

[1] Allegado vía correo electrónico memorial fechado el veintitrés (23) de noviembre de 2023.

salario mínimo aplicable al tiempo en que se profiere la sentencia que se pretende acusar, en el caso en concreto la cuantía corresponde a la suma de $ 139'200.000,00.

Tal cuantía se determina bajo el concepto de interés jurídico para recurrir, que de forma clara la Sala Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia lo ha interpretado como el perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada [2] , definiéndose para el demandante en las pretensiones que no hubieran sido acogidas en segunda instancia y para la demandada las condenas impuestas, en ambos casos teniendo en cuenta los recursos de apelación que hubieran sido interpuestos.

El *a quo* en sentencia de primera instancia, declaró la ineficacia del traslado que realizó el actor en el RAIS en la AFP Colfondos S.A. el 01 de agosto de 1994; en consecuencia, declaró como afiliación válida la del RPMPD administrado por Colpensiones; condenó a la AFP Colfondos S.A. a trasladar a esta última la totalidad de los dineros que recibió por motivo del traslado de régimen del demandante tales como, aportes pensionales, cotizaciones, bonos pensionales, rendimientos, los dineros destinados para la garantía de la pensión mínima, gastos de administración, las comisiones y lo pagado por seguro previsional, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos y utilidades, sin deducción alguna. Al momento de cumplirse lo anterior, los conceptos deberán

[2] Al respecto de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia ha manifestado y reiterado: «el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, que tratándose del demandado como el caso en estudio, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, el monto de las pretensiones que Radicación n° 730114 hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, teniendo en cuenta la conformidad o in conformidad del interesado respecto del fallo de primer grado» CSJ AL1514-2016. Magistrada Ponente: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.

aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen; condenó a Colpensiones a activar la afiliación del demandante en el RPMPD y a actualizar su historia laboral, decisión confirmada en esta instancia.

Pues bien, respecto al recurso de casación interpuesto la Sala de Casación Laboral precisó que la AFP Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías no tiene interés para recurrir en casación, en proveído AL4271-2022, Radicación No. 89652 del 17 de agosto de 2022, estimó lo siguiente:

> […] Al respecto cabe precisar, que no se equivocó el sentenciador en sus consideraciones, cuando claramente en el caso bajo examen, no se advierte un agravio a la recurrente, pues la carga del traslado a Colpensiones de la totalidad del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual del actor, con sus respectivos bonos pensionales, rendimientos, saldos, frutos, intereses, debidamente indexados, no genera un detrimento a la demandada Porvenir S.A., puesto que si bien tales recursos son administrados por dicha entidad, no forman parte de su peculio, y por el contrario, corresponden a un patrimonio autónomo de propiedad de los afiliados a dicho régimen, por lo que no es dable predicar que sufre un perjuicio económico con su traslado.
>
> Así las cosas, en dichos asuntos se debe entender, que el único agravio que se le puede ocasionar a la parte recurrente, es el hecho de habérsele privado de su función de administradora del régimen pensional del demandante, y que en ese sentido dejaría de percibir a futuro los rendimientos por su gestión, perjuicios estos que no se pueden tasar para efectos del recurso extraordinario, pues no se evidencia la forma en que ello afecta a la accionada y tampoco es posible determinarlos en la sentencia. […].

De igual manera, respecto de la devolución de gastos de administración y seguros previsionales, señaló:

> […] Ahora bien, en cuanto a lo pretendido por la recurrente, consistente en que se incluyan para efectos de establecer el interés económico las sumas correspondientes a los gastos de administración, para desestimar tal petición basta decir, que si bien podría pregonarse que la misma se constituye en una carga económica para el Fondo demandado, no se demostró que tal imposición superara la cuantía exigida para efectos de recurrir en casación, y en esa medida, por

> obvias razones, no pueden ser objeto de cuantificación para hallar el interés económico. […].

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta diáfano que no se acredita el interés jurídico para recurrir por la parte demandada, ello en tanto el traslado a Colpensiones de la totalidad del capital de la cuenta de ahorro individual y demás emolumentos, no genera un detrimento a la AFP demandada y, de otra parte, no se estableció la tasación de los montos de los gastos de administración y cuotas de seguros previsionales. En consecuencia, el recurso se negará.

Por último, en páginas 6 a 17[3] milita escritura pública otorgada a la AFP Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, donde se confiere poder general a la sociedad Zam Abogados Consultores & Asociados S.A.S., sociedad representada legalmente por Paul David Zabala Aguilar quien sustituyó poder especial a la doctora Elizabeth Selene Lamby Cuello visible en página 5, para que actúe como apoderada de la sociedad recurrente, por lo que habrá de reconocérsele personería a dicha profesional del derecho.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE:

PRIMERO: RECONOCER personería para actuar en representación de la parte demandada **AFP COLFONDOS**

[3] Cuaderno Segunda Instancia – (11RecursoCasacion.*pdf*)

S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS a la abogada **ELIZABETH SELENE LAMBY CUELLO,** identificada con cédula de ciudadanía n.° 1.140.849.831 portadora de la T.P. n.° 266.692 del Consejo Superior de la Judicatura en los términos y fines del poder de sustitución conferido obrante a folio 5 y subsiguientes del plenario.

SEGUNDO: NO CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandada **AFP COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS.**

TERCERO: En firme el presente proveído, continúese con el trámite correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,

LUIS CARLOS GONZALEZ VELASQUEZ

Magistrado

JOSÉ WILLIAM GONZALEZ ZULUAGA

Magistrado

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

Magistrado

Proyectó: DR

MAGISTRADO DR. **LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ**

Al despacho el expediente de la referencia, informándole que la apoderada de la parte demandada **AFP COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**, allegó vía correo electrónico memorial fechado el veintitrés (23) de noviembre de 2023, dentro del término de ejecutoria, mediante el cual interpone recurso extraordinario de casación contra el fallo de segunda instancia dictada por esta Corporación el 31 de octubre de 2023 y notificada por edicto del nueve (09) de noviembre de la misma anualidad.

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá, D.C., seis (06) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

Daniela Rojas L.

DANIELA CAROLINA ROJAS LOZANO

Oficial Mayor

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA TERCERA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

PROCESO EJECUTIVO LABORAL 2015-00859 02 JUZ 20 DE: JORGE ALBERTO RUIZ CONTRA: COLOMBIANA DE SERVICIOS D & V LTDA Y MARÍA STELLA GARCÍA GARCÍA.

Bogotá D. C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Procede la Sala a resolver la solicitud de *adición* de la providencia proferida el 30 de noviembre de 2023, por ésta Sala de Decisión, a petición del apoderado de la ejecutada MARÍA STELLA GARCÍA GARCÍA, fundamentada en que se omitió hacer referencia a los efectos del pago efectuado por esa parte mediante depósito judicial del 28 de febrero de 2022 en la suma de $5.000.000, ya que en su consideración la condena impuesta en la sentencia del proceso ordinario en contra de esa ejecutada, se circunscribió al monto de sus aportes dentro de la sociedad limitada, los cuales equivalen al valor consignado (documento denominado *09SolicitudAdicionFallo* del expediente digital).

CONSIDERACIONES

El artículo 287 del Código General del Proceso, establece:

> *ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*
>
> *El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.*
>
> ***Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.***
>
> *Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal"*

De lo anterior se concluye que no es procedente la adición solicitada, pues una vez verificada la citada providencia, se encuentra que contrario a lo manifestado por el apoderado solicitante, en esa decisión se hizo referencia expresa a la consignación efectuada por la ejecutada en la suma de $5.000.000, haciendo la precisión de las

razones por las cuales no es posible dar por probado el pago de la obligación como consecuencia de tal consignación[1], por lo tanto es claro que no le asiste razón al apoderado de la ejecutada MARÍA STELLA GARCÍA GARCÍA en su petición, pues lo que busca de forma errada, es la modificación de situaciones ya consolidadas y que fueron objeto de estudio tanto por el Juez A quo como por este Tribunal, lo cual resulta abiertamente improcedente.

Las motivaciones anteriores son suficientes para negar la solicitud de adición de la providencia.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala de Decisión Laboral,

R E S U E L V E

PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD de adición elevada por el apoderado de la ejecutada MARÍA STELLA GARCÍA GARCÍA respecto de la providencia de fecha 30 de noviembre de 2023, en virtud a las razones expuestas en el presente proveído.

SEGUNDO: Remítase el expediente al juzgado de origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

[1] *"Siendo esto así, no puede darse por probado el pago de la obligación bajo el entendido de que la ejecutante consignó a órdenes del juzgado la suma de $5.000.000, que considera deber, pues con auto del 27 de octubre de 2021 el A – quo, dispuso la aprobación de la liquidación del crédito aportada por la parte ejecutante en cuantía de $70.057.799 al 27 de enero de 2020 (exp. Digital, archivo 01CuadernoPrincipal fl. 204), frente a cuya decisión no se interpuso recurso alguno, por lo que aquella se encuentra ejecutoriada."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUÍS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

PROCESO ORDINARIO LABORAL DE CARLOS EDUARDO NIETO FORERO CONTRA COLPENSIONES Y FONPRECON Rad. 2021 00139 01 Juz 23.

Bogotá D. C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Procede la Sala a resolver la solicitud de *adición* de la sentencia proferida el 30 de junio de 2023, por ésta Sala de Decisión, a petición del apoderado de la parte actora, fundamentada en que se omitió hacer referencia a los fundamentos de hecho y de derecho que argumentan la negativa al reconocimiento de las pretensiones subsidiarias consignadas en la demanda y en virtud de las cuales se solicitó que tanto Colpensiones como Fonprecon debían reembolsar los aportes que hiciera al sistema general de seguridad social en pensiones en el régimen de prima media con prestación definida, así como al pago de intereses moratorios (fls. 44 y 45 del expediente físico).

CONSIDERACIONES

El artículo 287 del Código General del Proceso, establece:

> *"ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.*
>
> *El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.*

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal"

De lo anterior se concluye que no es procedente la adición solicitada, pues una vez verificada la citada sentencia, se encuentra que en la misma expresamente se indicó que como consecuencia de que en primera instancia se declaró probada la excepción previa de Falta de Jurisdicción y Competencia propuesta por la demandada Fonprecon, el juez dispuso que el litigio continuaría únicamente frente a las pretensiones principales (fl. 17 del expediente físico), la cuales van dirigidas exclusivamente en contra de Colpensiones y tienen por finalidad el reconocimiento de la pensión de vejez conforme el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y que por lo tanto solo a estas pretensiones se limitaría esta Sala al estudiar el grado jurisdiccional de consulta concedido a favor del actor[1].

Decisión del A quo que valga la pena indicar no fue objeto de inconformidad por la parte actora y por tanto no puede ahora venir a alegar a su favor su desconocimiento, sumado al hecho que claramente no fue discutida dentro del trámite de primera instancia la procedencia de las pretensiones ahora invocadas, lo que hace aún más inviable acceder a su estudio en esta instancia, sin afectar el derecho de defensa y debido proceso de Colpensiones.

Las motivaciones anteriores son suficientes para negar la solicitud de adición de la sentencia proferida el 30 de junio de 2023.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala de Decisión Laboral,

R E S U E L V E

[1] "***Consideraciones previas Excepción de Falta de Jurisdicción y Competencia***

Debe indicar la Sala que, que el juzgado de primera instancia en la etapa respectiva declaró probada la excepción previa de Falta de Jurisdicción y Competencia propuesta por la demandada Fonprecon al considerar que todas las declaraciones y pretensiones elevadas en su contra debía ser tramitadas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y como consecuencia dispuso que el litigio continuaría únicamente frente a las pretensiones principales, la cuales van dirigidas únicamente en contra de Colpensiones y tienen por finalidad el reconocimiento de la pensión de vejez conforme el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, al cual también se limitará esta Sala al estudiar el grado jurisdiccional de consulta concedido a favor del actor."

PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD de adición elevada por el apoderado de la parte actora respecto de la providencia de fecha 30 de junio de 2023, en virtud a las razones expuestas en el presente proveído.

SEGUNDO: Remítase el expediente al juzgado de origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

PROCESO ORDINARIO LABORAL DE: VICTOR MANUEL GÓMEZ RIVERA CONTRA: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, e IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A. Rad. No. 2017 00624 02 Juz 31.

En Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023), siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), el Magistrado ponente en asocio de los restantes Magistrados con quienes integra la Sala de decisión declaró abierta la presente audiencia pública.

El Tribunal conforme a los términos acordados por la Sala de decisión procede a dictar la siguiente:

P R O V I D E N C I A

Revisa la Sala el auto proferido por el Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá, el día veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023), mediante el cual aprueba la liquidación de costas realizada por la secretaría del juzgado.

A N T E C E D E N T E S

VICTOR MANUEL GÓMEZ RIVERA demandó a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y a la sociedad IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A. en busca de que se declare la nulidad parcial del acuerdo conciliatorio suscrito el 6 de abril de 1983 entre el actor y la sociedad IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A., celebrada ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, en la que se

declaró a la empleadora a paz y salvo por concepto de pensión sanción, y en consecuencia se condene a esta demandada a pagar al demandante la pensión restringida de jubilación del artículo 8 de la Ley 171 de 1961, a partir del 15 de julio del año 2000 cuando llegó a los 60 años de edad, indexación de la primera mesada pensional, mesadas adicionales, intereses moratorios liquidados mes a mes desde la causación y hasta su pago, actualización anual de mesadas pensionales; que IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A. aporte a COLPENSIONES en su favor las cotizaciones correspondientes por los riesgos de invalidez, vejez y muerte de origen común, con base en el salario devengado entre el 1 de enero de 1967 al 31 de marzo de 1983, la compatibilidad entre la pensión reconocida por la administradora del régimen de prima media con prestación definida con la pensión restringida de jubilación. Que se condene a COLPENSIONES a reliquidar la pensión de vejez aplicando los artículos 12 y 20 del acuerdo 049 de 1990 teniendo en cuenta todos los factores salariales percibidos del 16 de abril de 1989 al 31 de marzo de 1983, a partir del 15 de julio de 2000, indexación, mesadas adicionales, intereses de mora, y actualización anual de mesadas. Como pretensiones subsidiarias, solicitó se condene a IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A. a aportar a COLPENSIONES las cuotas proporcionales al tiempo laborado del 16 de abril de 1959 al 31 de diciembre de 1966 y en consecuencia se orden a Colpensiones a reliquidar la pensión de vejez aplicando los artículos 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, e indexación.

El expediente digitalizado que se allegó al tribunal, no cuenta con las sentencias de primera y segunda instancia, no obstante, en el archivo *02Casación*, folios 19 a 22, se observa que en los antecedentes de la sentencia de la Sala de Descongestión de la Corte Suprema de Justicia en este proceso, se transcribió integralmente la parte resolutiva de las decisiones en estas instancias, de donde se puede advertir que la a-quo condenó en costas a IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A. en cuantía de medio S.M.L.M.V.; en esta segunda instancia se confirmó la condena en costas de la primera instancia y se dispuso que las de alzada estarían igualmente a cargo de IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A., y se fijó como agencias en derecho la suma de $200.000, finalmente la Corte en la sentencia SL2738-2022 radicación 87846, desató el recurso extraordinario, mediante el cual NO CASÓ la sentencia de este tribunal y condenó a Víctor Manuel Gómez Rivera a pagar a favor de IBM de Colombia & CIA CSA y Colpensiones la suma de $4.700.000 por concepto de costas, mientras que a

cargo de IBM De Colombia & CIA CSA y en favor del demandante, la suma de $9.400.000.

La secretaría del juzgado el 24 de abril de 2023 liquidó las costas del proceso ordinario, las cuales fueron aprobadas con auto del 2 de agosto de 2023, a través del cual se aclararon los numerales 1 y 2 del auto del 28 de abril de 2023, para aprobar las costas en suma de $9.990.621 a cargo de IBM COLOMBIA & CIA CSA a favor del demandante Víctor Manuel Gómez Rivera, y por la suma de $4.700.000 a cargo de Víctor Manuel Gómez Rivera y a favor de IBM COLOMBIA & CIA CSA y COLPENSIONES en forma proporcional.

RECURSO DE ALZADA

La decisión fue apelada por la parte demandante, para lo cual indicó que este proceso se trata de uno de mayor cuantía de conformidad con el artículo 5 del acuerdo PSAA16-10554 del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que las agencias en derecho oscilan entre el 3 y 7.5%, que el cumplimiento de pago de la sentencia asciende a la suma de $707.721.713, de cara a lo cual el juzgado estimó el valor de las agencias en derecho por $390.000. Que la condena impuesta por el tribunal a cargo de las demandadas, impone como agencias en derecho de segunda instancia en cuantía no inferior a un salario mínimo legal mensual vigente ni superior a seis, no obstante, el tribunal las fijó en suma de $200.000, en un proceso que desde la presentación de la demanda hasta el fallo de casación pasaron más de 10 años, favorable a las pretensiones de la demanda en las dos instancias, por lo que solicita se revoque el auto, y en su lugar se modifique la liquidación de costas, incluyendo agencias en derecho con base en los parámetros del numeral 1 del artículo 5 del acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016.

Alegatos ante este Tribunal (numeral 2 del artículo 13 Ley 2213 de 2022)

Dentro de la oportunidad la parte recurrente presentó alegatos conforme se verifica en el archivo denominado *05AlegatosDemandadoIBM*, del expediente digital, cuaderno de segunda instancia.

C O N S I D E R A C I O N E S

La tasación de la condena en costas está regulada por los artículos 361 y siguientes del Código General del Proceso, y en lo que hace referencia a la fijación de agencias en derecho, el artículo 366 a la letra establece: *"para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura…"*.

Por la fecha de radicación de la demanda, resulta aplicable al caso el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 *"Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho"*, el que señala:

> *"ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites."*

A su vez el artículo 5° sobre las tarifas de agencias en derecho, en los procesos declarativos en general, para la primera y segunda instancia estableció:

> *"En primera instancia.*
> *a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario:*
> *(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.*
> *(ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.*
> *b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.*
> *En segunda instancia.*
> *Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.*
> *(…)"*

Este proceso en efecto corresponde a un ordinario laboral de primera instancia, en el que en términos generales salieron avante las pretensiones de la demanda, en particular el condenar a la demandada IBM DE COLOMBIA & CIA SCA a pagar a Colpensiones un cálculo actuarial a favor del demandante por los periodos e IBL

determinado, con base en lo cual, procede la reliquidación de la pensión que disfruta el actor a cargo de Colpensiones.

Entonces, encuentra La Sala que si bien las pretensiones pueden traducirse en una suma determinable de dinero, lo cierto es que estas como las condenas resultan ser carentes de cuantía, por lo que de conformidad con el artículo 5, numeral 1. de los procesos declarativos en general, del acuerdo PSAA16-10554, las agencias en derecho en primera instancia se tasan entre 1 y 10 S.M.L.M.V. y en segunda instancia entre 1 y 6 S.M.L.M.V., de manera que como lo alega el recurrente, las agencias en derecho no se encuentran acorde a lo regido por el acuerdo en cita.

Por lo anterior, se revocará el auto del 28 de febrero de 2023, aclarado por el auto del 2 de agosto de 2023, en su lugar en atención a los artículos 365 y 366 del C.G.P., la liquidación de costas, deberá incluir como agencias en derecho una suma equivalente a 1 S.M.L.M.V. para el año 2024, en cada una de las instancias, esto es tanto en primera como en segunda instancia y a cargo de IBM DE COLOMBIA & CIA SCA.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., Sala Laboral:

RESUELVE

PRIMERO. – **REVOCAR** la providencia objeto de apelación, proferida por el Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá, el 28 de abril de 2023, el cual fue aclarado con auto del 2 de agosto de 2023, en su lugar en atención a los artículos 365 y 366 del C.G.P., la liquidación de costas, deberá incluir como agencias en derecho una suma equivalente a 1 S.M.L.M.V. para el año 2024, en cada una de las instancias, esto es tanto en primera como en segunda instancia y a cargo de IBM DE COLOMBIA & CIA SCA.

SEGUNDO. - Sin costas en esta instancia.

<u>TERCERO</u>. - REMITIR el expediente al A-quo para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



Magistrado



Magistrado



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado ponente

Bogotá, D.C., seis (06) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

Procede la Sala a determinar la viabilidad del recurso extraordinario de casación interpuesto por la demandada, **AFP COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**[1], contra la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2023 y notificada por edicto del once (11) de octubre de la misma anualidad, dado su resultado adverso dentro del proceso ordinario laboral promovido por **GILBERTO ABRIL AMADO** en contra de la recurrente demandada, la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** y la **AFP PORVENIR S.A.**

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Establece el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en su parte pertinente que: *«…sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente»*. Tal estimación debe efectuarse, teniendo en cuenta el monto del

[1] Allegado vía correo electrónico memorial fechado el treinta y uno (31) de octubre de 2023.

salario mínimo aplicable al tiempo en que se profiere la sentencia que se pretende acusar, en el caso en concreto la cuantía corresponde a la suma de $ 139'200.000,00.

Tal cuantía se determina bajo el concepto de interés jurídico para recurrir, que de forma clara la Sala Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia lo ha interpretado como el perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada [2] , definiéndose para el demandante en las pretensiones que no hubieran sido acogidas en segunda instancia y para la demandada las condenas impuestas, en ambos casos teniendo en cuenta los recursos de apelación que hubieran sido interpuestos.

El *a quo* en sentencia de primera instancia, declaró la ineficacia del traslado que realizó el actor en el RAIS en la AFP Colfondos S.A.; ordenó a la AFP Colfondos S.A. a trasladar a Colpensiones el valor de las cotizaciones efectuadas junto con los rendimientos, frutos e intereses, y a esta última a recibir los aportes del demandante, procediendo a actualizar su historia laboral, decisión confirmada en esta instancia.

Pues bien, respecto al recurso de casación interpuesto la Sala de Casación Laboral precisó que la AFP Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías no tiene interés para recurrir en

[2] Al respecto de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia ha manifestado y reiterado: «el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, que tratándose del demandado como el caso en estudio, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, el monto de las pretensiones que Radicación n° 730114 hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, teniendo en cuenta la conformidad o in conformidad del interesado respecto del fallo de primer grado» CSJ AL1514-2016. Magistrada Ponente: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.

casación, en proveído AL4271-2022, Radicación No. 89652 del 17 de agosto de 2022, estimó lo siguiente:

> […] Al respecto cabe precisar, que no se equivocó el sentenciador en sus consideraciones, cuando claramente en el caso bajo examen, no se advierte un agravio a la recurrente, pues la carga del traslado a Colpensiones de la totalidad del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual del actor, con sus respectivos bonos pensionales, rendimientos, saldos, frutos, intereses, debidamente indexados, no genera un detrimento a la demandada Porvenir S.A., puesto que si bien tales recursos son administrados por dicha entidad, no forman parte de su peculio, y por el contrario, corresponden a un patrimonio autónomo de propiedad de los afiliados a dicho régimen, por lo que no es dable predicar que sufre un perjuicio económico con su traslado.
>
> Así las cosas, en dichos asuntos se debe entender, que el único agravio que se le puede ocasionar a la parte recurrente, es el hecho de habérsele privado de su función de administradora del régimen pensional del demandante, y que en ese sentido dejaría de percibir a futuro los rendimientos por su gestión, perjuicios estos que no se pueden tasar para efectos del recurso extraordinario, pues no se evidencia la forma en que ello afecta a la accionada y tampoco es posible determinarlos en la sentencia. […].

De igual manera, respecto de la devolución de gastos de administración y seguros previsionales, señaló:

> […] Ahora bien, en cuanto a lo pretendido por la recurrente, consistente en que se incluyan para efectos de establecer el interés económico las sumas correspondientes a los gastos de administración, para desestimar tal petición basta decir, que si bien podría pregonarse que la misma se constituye en una carga económica para el Fondo demandado, no se demostró que tal imposición superara la cuantía exigida para efectos de recurrir en casación, y en esa medida, por obvias razones, no pueden ser objeto de cuantificación para hallar el interés económico. […].

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta diáfano que no se acredita el interés jurídico para recurrir por la parte demandada, ello en tanto el traslado a Colpensiones de la totalidad del capital de la cuenta de ahorro individual y demás emolumentos, no genera un detrimento a la AFP demandada y, de otra parte, no se estableció la tasación de los montos de los gastos de administración y cuotas de

seguros previsionales. En consecuencia, el recurso se negará.

Por último, en páginas 6 a 17[3] milita escritura pública otorgada a la AFP Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, donde se confiere poder general a la sociedad Gómez Meza & Asociados S.A.S., sociedad representada legalmente por Juan Felipe Cristóbal Gómez Angarita quien otorgó poder especial a la doctora Paola Andrea Orozco Arias visible a folio 5, para que actúe como apoderada de la sociedad recurrente, por lo que habrá de reconocérsele personería a dicha profesional del derecho.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE:

PRIMERO: RECONOCER personería para actuar en representación de la parte demandada **AFP COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS.** a la abogada **PAOLA ANDREA OROZCO ARIAS,** identificada con cédula de ciudadanía n.° 1.047.464.620 portadora de la T.P. n.°288.433 del Consejo Superior de la Judicatura en los términos y fines del poder conferido obrante a folio 5 y subsiguientes del plenario.

[3] Cuaderno Segunda Instancia - (16PresentaRecursoCasacion.*pdf*)

SEGUNDO: NO CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandada **AFP COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS.**

TERCERO: En firme el presente proveído, continúese con el trámite correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

Magistrado

JOSÉ WILLIAM GONZALEZ ZULUAGA

Magistrado

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

Magistrado

Proyectó: DR

MAGISTRADO DR. **LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ**

Al despacho el expediente de la referencia, informándole que la apoderada de la parte demandada **AFP COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**, allegó vía correo electrónico memorial fechado el treinta y uno (31) de octubre de 2023, dentro del término de ejecutoria, mediante el cual interpone recurso extraordinario de casación contra el fallo de segunda instancia dictada por esta Corporación el 29 de septiembre de 2023 y notificada por edicto del once (11) de octubre de la misma anualidad.

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá, D.C., seis (06) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).



DANIELA CAROLINA ROJAS LOZANO

Oficial Mayor

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.

LUZ MARINA IBÁÑEZ HERNÁNDEZ
Magistrada ponente

Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

La parte demandante **CAROLINA PINZÓN SANTOS**, interpuso recurso extraordinario de casación[1] contra la sentencia emitida en esta instancia el treinta (30) de noviembre del dos mil veintitrés (2023), dado su resultado adverso en el proceso ordinario laboral promovido en contra de **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.** *(09RecursoCasación.pdf)*

El día veintinueve (29) de febrero del año en curso la apoderada de la demandante, doctora Clara Inés Garzón Baquero[2], allega memorial vía correo electrónico donde manifiesta **DESISTE** del recurso impetrado. *(10CorreoDesistimiento.pdf)*

A efectos de resolver la Sala procede a dictar el siguiente,

AUTO

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 316 del Código General del Proceso, **SE ACEPTA EL DESISTIMIENTO** del recurso de casación interpuesto por la apoderada de la parte demandante

[1] Allegado vía correo electrónico memorial fechado el dieciocho (18) de diciembre del dos mil veintitrés (2023).
[2] En la página 28 obra poder amplio y suficiente otorgado por la demandante Carolina Pinzón Santos a la profesional del derecho, facultada para desistir. (*01ExpedienteFisicoMariaSantosVsColpensiones.pdf – Cuaderno Primera Instancia*).

CAROLINA PINZÓN SANTOS, conforme al poder otorgado y por tener facultad para ello.

Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo previsto en el numeral 2° del artículo 316 del CGP.

En firme el auto, continúese con el trámite procesal correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,



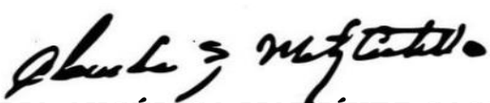
LUZ MARINA IBAÑEZ HERNANDEZ

Magistrada



RAFAEL ALBEIRO CHAVARRO POVEDA

Magistrado



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO

Magistrada

Proyectó: DR

MAGISTRADA DRA. **LUZ MARINA IBÁÑEZ HERNÁNDEZ**

Al despacho el expediente de la referencia, informándole que el apoderado de la parte demandante **CAROLINA PINZÓN SANTOS,** desistió del recurso extraordinario de casación interpuesto contra la decisión de segunda instancia dictada por esta Corporación treinta (30) de noviembre del dos mil veintitrés (2023).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá, D.C., once (11) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).



DANIELA CAROLINA ROJAS LOZANO

Oficial Mayor